

Alerta 2023! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2023!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Iván Navarro Milián

Josep Maria Royo Aspa

Jordi Urgell García

Pamela Urrutia Arestizábal

Ana Villellas Ariño

María Villellas Ariño

ISBN: 978-84-19200-96-9

Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:

Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa,
Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arestizábal,
Ana Villellas Ariño y María Villellas Ariño.

Con la colaboración de Marcel Didier von der Hundt.

Diseño: Lucas Wainer Mattosso

Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB

Imprenta: Ulzama

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*

Barcelona: Icaria, 2023.

Esta obra forma parte de la serie *Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz* que anualmente publica la Escola de Cultura de Pau y está sujeta a una licencia internacional de Creative Commons.



Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13

Carrer de la Vila Puig

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Espanya)

Tel: +34 93 581 14 14

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat

Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas _____	6
Resumen ejecutivo _____	7
Resumen de la conflictividad global en 2022 _____	19

Capítulos

1. Conflictos armados _____	21
1.1. Conflictos armados: definición _____	25
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2022 _____	25
1.2.1. Tendencias globales y regionales _____	25
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil _____	29
1.3. Conflictos armados: evolución anual _____	34
1.3.1. África _____	34
- África Austral _____	34
- África Occidental _____	36
- Cuerno de África _____	42
- Grandes Lagos y África Central _____	47
- Magreb - Norte de África _____	58
1.3.2. América _____	59
1.3.3. Asia y Pacífico _____	61
- Asia Meridional _____	61
- Sudeste Asiático y Oceanía _____	66
1.3.4. Europa _____	71
- Europa Oriental _____	71
- Sudeste de Europa _____	73
1.3.5. Oriente Medio _____	75
- Golfo _____	75
- Mashreq _____	77
2. Tensiones _____	85
2.1. Tensiones: definición _____	85
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2021 _____	92
2.2.1. Tendencias globales _____	92
2.2.2. Tendencias regionales _____	93
2.3. Tensiones: evolución anual _____	97
2.3.1. África _____	97
- África Occidental _____	97
- Cuerno de África _____	101
- Grandes Lagos y África Central _____	104
- Magreb - Norte de África _____	109
2.3.2. América _____	112
- América del Norte, Centroamérica y Caribe _____	112
- América del Sur _____	116
2.3.3. Asia y Pacífico _____	120
- Asia Central _____	120
- Asia Meridional _____	122
- Asia Oriental _____	125
- Sudeste Asiático _____	128
- Pacífico _____	129
2.3.4. Europa _____	130

- Europa oriental _____	130
- Rusia y Cáucaso _____	133
- Sudeste de Europa _____	134
2.3.5. Oriente Medio _____	135
- Golfo _____	135
- Mashreq _____	137

3. Género, paz y seguridad _____	143
3.1. Desigualdades de género _____	143
3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género _____	144
3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones _____	145
3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados _____	149
3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado _____	151
3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género _____	155
3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad _____	155
3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz _____	156
3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil _____	157
4. Oportunidades de paz _____	159
4.1. Etiopía, ante una nueva ventana de oportunidad para construir la paz _____	160
4.2. La “Paz Total”, una política de paz ambiciosa para Colombia _____	162
4.3. Un contexto doméstico, regional e internacional más propicio para una resolución negociada de la crisis en Venezuela _____	164
4.4. ¿Oportunidad decisiva? Retos para una paz sostenible e inclusiva en Yemen _____	167
4.5. La promoción del diálogo en tiempos de orden internacional multipolar _____	169
5. Escenarios de riesgo _____	171
5.1. Sudán-Sudán del Sur: el deterioro de las transiciones políticas amenaza la estabilidad de la región _____	172
5.2. Grandes Lagos: ¿a las puertas de una tercera guerra congoleña? _____	174
5.3. El incremento de la tensión militar en la península coreana _____	176
5.4. Desafíos entrecruzados en Moldova en tiempos de guerra en Europa _____	179
5.5. Derechos de las mujeres bajo amenaza: apartheid de género en Irán y Afganistán _____	181
Glosario _____	185
Escola de Cultura de Pau _____	191

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	20	Mapa 3.1.	Género, paz y seguridad _____	142
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2022 _____	22	Tabla 3.1.	Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género ____	144
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2022 _____	25	Tabla 3.2.	Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género _____	145
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _	29	Tabla 3.3.	Actores armados y violencia sexual en conflictos_____	146
Gráfico 1.3.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	29	Mapa 3.2.	Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+ _____	153
Gráfico 1.4.	Proporción de conflictos armados graves en la última década _____	29	Tabla 3.4.	Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+ _____	153
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada _____	30	Tabla 3.5.	Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz ____	156
Mapa 1.2.	Los diez países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflicto y violencia en 2022 _____	33	Mapa 4.1.	Oportunidades de paz _____	159
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	84	Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo _____	171
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2022 __	86			
Cuadro 2.1.	Tensiones de alta intensidad en 2022_	92			
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2022 _____	93			
Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	93			

Resumen ejecutivo

Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2022 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2023!* son las siguientes:

- Durante 2022 se registraron 33 conflictos armados, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno).
- Los conflictos armados de alta intensidad representaron más de la mitad (52%) del total de casos a nivel mundial.
- La invasión de Rusia a Ucrania incrementó el número de conflictos internacionales (9% del total) en 2022, aunque la mayoría de conflictos armados eran internos internacionalizados (79%).
- Un 30% de los conflictos armados en 2022 registraron mayores niveles de violencia respecto al año anterior.
- La invasión de Rusia a Ucrania desencadenó uno de los dos conflictos armados internacionales en el mundo en 2022, así como un escenario de violencia de alta intensidad, una grave crisis humanitaria y repercusiones globales en múltiples ámbitos, como alza global de precios de combustible y alimentos e inseguridad alimentaria.
- Siguiendo la tendencia registrada en períodos precedentes, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 16 casos, que representaron el 49% del total, aunque se redujo ligeramente el porcentaje de casos de conflicto armado de alta intensidad.
- Asia continuó siendo la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno, a excepción del conflicto de Etiopía (Oromiya) en África. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región.
- OCHA alertó del desarrollo de la mayor crisis alimentaria global de la historia moderna, causada por conflictos, shocks climáticos y la amenaza de recesión global, así como de una escalada de la inseguridad global.
- Durante el año 2022, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas.
- Durante 2022 se registraron 108 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia y Pacífico (33), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (16), Europa (12) y Oriente Medio (11).
- La mitad de los casos de tensión identificados en 2022 se agravaron respecto del año anterior.
- En 2022 no solamente se incrementó con claridad el número de tensiones, sino también su intensidad media respecto del año anterior.
- 23 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2022 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género y tres en países con un nivel medio-bajo de igualdad de género.
- 24 de los 33 conflictos armados activos transcurrieron en países en los que ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra población LGTBIQ+.
- Se denunció la utilización de la violencia sexual en Haití, en la región etíope de Tigré, en Sudán del Sur y en Ucrania en el marco de la invasión rusa.
- Dos misiones de mantenimiento de la paz, MONUSCO y MINUSCA, concentraron el 90% de las denuncias por abuso y explotación sexual.
- En 2021 fueron asesinadas 45.000 mujeres por su parejas o familiares, lo que representa el 56% del total de asesinatos de mujeres a nivel mundial.

- El informe *Alerta 2023!* identifica cinco oportunidades de paz en Etiopía; Venezuela; Colombia; Yemen; y con relación a la promoción de la prevención y el diálogo.
- El informe destaca cinco escenarios de riesgo incluyendo la tensión entre RDC y Rwanda la inestabilidad de los procesos transicionales de Sudán y Sudán del Sur; la discriminación de género extrema en Irán y Afganistán; Moldavia; y Corea del Norte y Corea del Sur

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Durante el año 2022 se registraron 33 conflictos armados

Conflictos armados

En el primer capítulo (Conflictos armados)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2022, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

En 2022 se registró un ligero aumento en el número de conflictos armados respecto al año anterior. En total se contabilizaron 33 casos, frente a los 32 conflictos de 2021 y los 34 en 2020, 2019 y 2018. La escalada de la violencia en la región de Oromiya (Etiopía) llevó a considerar este escenario como conflicto armado, en el que combatían fuerzas de seguridad federales apoyadas por las milicias amháricas Fano y el grupo armado oromo OLA. Otro cambio significativo en 2022 fue la

transformación del escenario de violencia en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022 desbordó la situación anterior de conflicto armado en el este del país dando paso a un conflicto internacional, con graves consecuencias multidimensionales.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, se mantuvo la tendencia de períodos precedentes y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (16) y Asia (nueve), seguido de Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno). El continente africano, por tanto, concentraba prácticamente la mitad de los casos (49%) a nivel global.

En cuanto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internacionales y, en su gran mayoría, internos internacionalizados. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2022 cuatro de los 33 casos (12%, 9% en 2021) eran conflictos armados internos y tres de esos cuatro transcurrían en Asia. Se trata de los casos de Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El otro caso de conflicto armado interno fue el de Etiopía (Oromiya), en África. Otros tres casos, que suponen un 9% (6% en 2021) del total de contextos, fueron de carácter internacional: el conflicto en la región africana del Sahel occidental, la disputa palestino-israelí en Oriente Medio y la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, la invasión de Rusia a Ucrania llevó a un incremento de la tipología de conflictos internacionales. Aunque las guerras interestatales continuaron siendo minoritarias, algunos análisis señalaron que la invasión había puesto fin a supuestos del orden internacional de la post-Guerra Fría, como la excepcionalidad de la guerra entre Estados. Los 26 casos restantes, que representan un 79% de los casos (85% en 2021), fueron internos internacionalizados. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

En cuanto a las causas de los conflictos armados en 2022, el panorama de conflictividad continuó marcado por la multicausalidad. Un 67% de los conflictos armados tuvo entre sus principales causas el

1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2022*

ÁFRICA (16)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (5)
Burundi -2015- Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018- Etiopía (Oromiya) -2022- Etiopía (Tigré) -2020- Libia -2011- Malí -2012- Mozambique (Norte) -2019- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- Región Sahel Occidental -2018- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este – ADF) -2014- Somalia -1988- Sudán (Darfur) -2003- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014- Iraq -2003- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen -2004-
		EUROPA (2)
		Turquía (sudeste) -1984- Rusia – Ucrania -2022-
		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado.

cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos. En todo caso, tuvo mayor relevancia la dimensión de disputa contra el sistema, aspecto presente junto a otras causas en 17 conflictos (52% de los casos), en gran parte vinculado a la elevada presencia de actores armados con una agenda de línea yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Fue el caso de conflictos como Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Malí, RDC (este-ADF), Somalia, Mozambique (norte), Libia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen. En otros tres casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con otro tipo de línea ideológica.

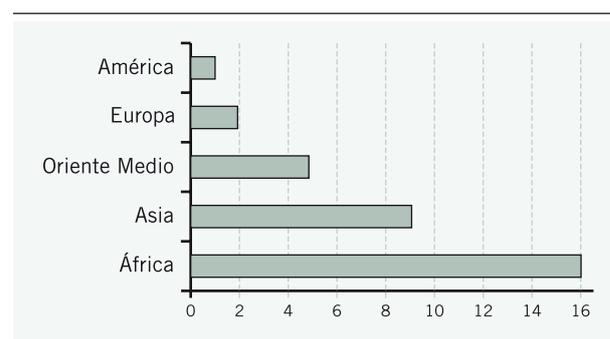
Adicionalmente, otro elemento a resaltar entre las motivaciones principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, que estuvieron –una de ellas o ambas– en 20 de los 33 de los casos (61%). De estas, tuvo mayor relevancia la dimensión de demandas identitarias (61%). Las disputas en torno a demandas de autogobierno estuvieron presentes en un 42% de los casos. Entre estos sobresalió en 2022 el caso de Etiopía (Oromiya), por la escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad etíopes –apoyados por las milicias amháricas Fano– y el grupo armado oromo OLA. Por último, también hubo numerosos conflictos armados que tuvieron entre sus causas principales el control de territorio y/o de recursos. Estos casos ascendieron a un 39% –13 de los 33– del total de conflictos. En este binomio, sobresalió la dimensión de disputa en torno a recursos (presente en el 33% del total de conflictos), mientras el elemento de control de territorio como una de las causas principales se evidenció en un menor

La invasión de Rusia a Ucrania llevó a un incremento de la tipología de conflictos internacionales

porcentaje (en el 6% de los conflictos armados). Los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

En materia de evolución, un 30% de los conflictos en 2022 presentaron un aumento de los niveles de violencia en comparación con el año anterior. Fue el caso de Etiopía (Oromiya), Malí, Región Sahel Occidental, RDC (este), Somalia, Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Rusia-Ucrania. Algunos de estos casos asistieron a graves dinámicas de escalada. Entre ellos, en Sahel Occidental el aumento de la violencia contra la población civil causó un 49% más de muertes que las registradas en 2021. En la región de Oromiya, el incremento de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el grupo armado OLA llevó a considerarlo como un conflicto armado en 2022. La invasión de Rusia a Ucrania llevó a un conflicto armado internacional de carácter interestatal de alta intensidad, causante de una grave

Distribución regional del número de conflictos armados en 2022



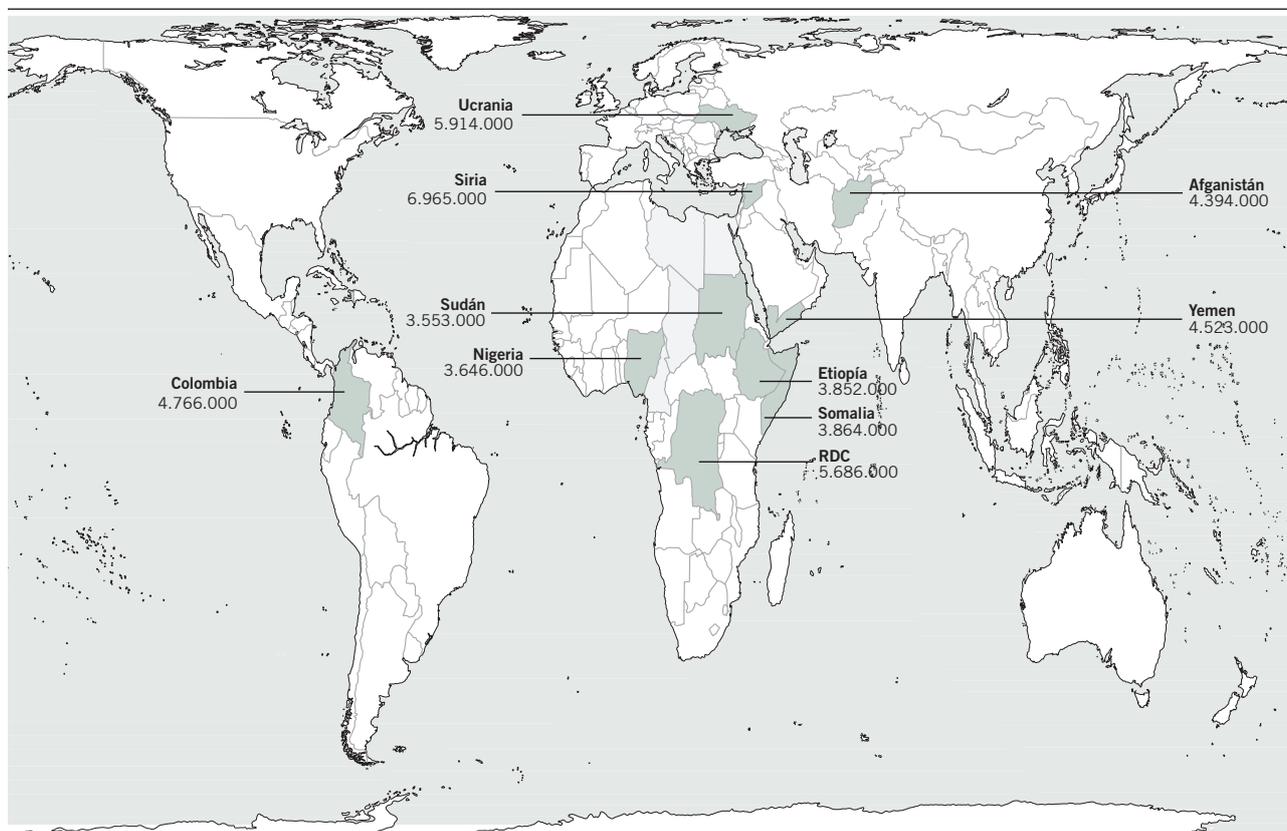
crisis humanitaria. Otros 15 conflictos armados –que representan un 46% del total de casos– se observaron niveles de violencia y confrontación similares a los registrados en 2021. En ocho contextos –24% de los conflictos armados a nivel mundial– se identificó una disminución en los niveles de violencia armada y sus impactos: Etiopía (Tigré), RCA, Colombia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), India (CPI-M), Tailandia (sur) y Yemen. En algunos de estos casos la reducción de los incidentes violentos estuvo relacionada con acuerdos de alto el fuego –Etiopía (Tigré), Yemen– en el marco de procesos de negociación, o a la evolución o perspectiva positiva de estos –Tailandia (sur), Colombia.

En cuanto a la intensidad de los conflictos armados, durante 2022 se acentuó la tendencia observada en los últimos diez años de incremento de casos graves. Es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas mortales anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si hace una década los conflictos armados de alta intensidad representaban en torno a un cuarto del total de casos, en los últimos años esta proporción se ha ido incrementando hasta representar la mitad de los contextos (ver gráfico 1.4). En el marco del último lustro, los conflictos armados graves supusieron un 40% en los años 2016 y 2017, descendieron entre 2018 y 2019 –a

27% y 32%, respectivamente–, y aumentaron de manera significativa en 2020, cuando alcanzaron el 47%. En 2021, la prevalencia de casos de alta intensidad fue incluso más elevada, llegando al 53% y superando la mitad de los casos por primera vez en la última década. En 2022 se mantuvo esta tendencia y fueron 17 los conflictos armados de alta intensidad (52% del total de casos). En línea con lo observado en 2021, durante 2022 el mayor porcentaje de casos graves se concentró en África, con 12 de los 17 conflictos armados de alta intensidad que se identificaron a nivel global, es decir, el 70% del total de casos de alta intensidad.

En 2022 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. Además, los impactos de los conflictos armados continuaron entrecruzándose con otras crisis, agravando la situación de seguridad humana y de vulneraciones de derechos en contextos de conflicto. La evolución de los diversos conflictos armados en 2022 permite confirmar la persistencia de este patrón de abusos sistemáticos contra la población civil. Sobresalieron casos como la invasión de Rusia contra Ucrania, que causó miles de víctimas mortales civiles y en que fuerzas militares rusas llevaron a cabo vulneraciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, deportaciones forzadas -incluyendo de menores-, desapariciones

Los diez países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflicto y violencia en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre, *Global Report on Internal Displacement 2023. Internal displacement and food security*, IDMC, 2023.

forzadas, tortura y malos tratos, entre otros impactos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició en marzo de 2022 la recopilación de pruebas para una investigación sobre alegaciones pasadas y presentes de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en Ucrania desde 2013.¹³ Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2022 una comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Ucrania. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron y documentaron graves vulneraciones de los derechos humanos por las fuerzas rusas, constitutivas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Otros muchos conflictos armados en 2022 fueron también escenario de graves ataques contra civiles. Entre otros casos, en Sahel Occidental se asistió a un incremento de los ataques contra civiles por parte de las fuerzas de seguridad, el Grupo Wagner y los dos principales grupos yihadistas y se registraron varias masacres. En el contexto de escalada en la región de Oromiya en Etiopía, tanto las Fuerzas Armadas apoyadas como las milicias Fano y el grupo armado OLA fueron acusados de ataques deliberados contra población civil, atrapada entre el fuego cruzado y objeto de ejecuciones extrajudiciales y en masa, detenciones arbitrarias y secuestros, entre otras formas de violencia en base a criterios étnicos o a opiniones políticas. Otros conflictos escenarios de masacres y matanzas de civiles fueron RDC (este), Colombia y Myanmar, entre otros.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o empeorando situaciones de crisis humanitarias, en un contexto agravado por otros condicionantes como la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, la crisis económica o la emergencia climática. Las necesidades humanitarias globales continuaron incrementándose, alcanzándose un umbral récord. Según el informe anual Panorama Global Humanitario 2023,¹⁶ de la agencia humanitaria de Naciones Unidas OCHA, una de cada 23 personas en el mundo necesita asistencia humanitaria y se preveía para 2023 una cifra récord de 339 millones de personas que necesitarán asistencia humanitaria, en contraste con los 274 millones de personas a inicios de 2022. Como parte del preocupante panorama humanitario, OCHA alertó de que se estaba desarrollando la mayor crisis alimentaria global de la historia moderna, causada por conflictos, shocks climáticos y la amenaza de recesión global.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En lo que respecta a los efectos en los niños y las niñas, el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado a mediados de 2022 documentó casi 23.982 violaciones graves contra

menores (de las cuales 22.645 correspondían a 2021 y otras 1.337 fueron cometidas previamente, pero solo se pudieron documentar en 2021).

En numerosos conflictos armados se perpetró violencia sexual. El informe anual de 2022 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales (37) y otros 12 eran actores armados gubernamentales, en un total de diez contextos (RCA, RDC, Iraq, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Nigeria). Según Naciones Unidas, el 70% de los actores en conflicto señalados eran considerados perpetradores persistentes.

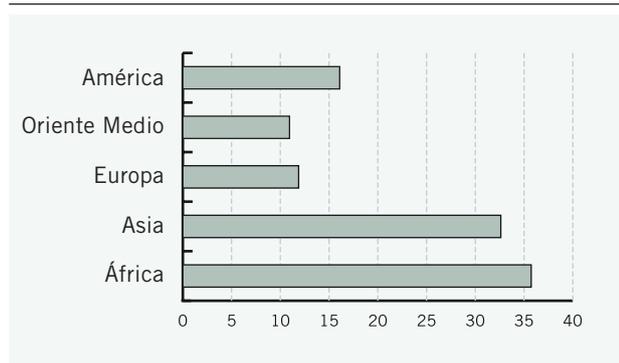
Entre las repercusiones de los conflictos armados también cabe mencionar el desplazamiento forzado. Según los datos de ACNUR, este fenómeno continuó intensificándose y batiendo cifras récord. El informe del primer semestre de 2022 de ACNUR cifraba en 32,5 millones de personas la población en situación de refugio y en 53,1 millones desplazadas internas (datos de IDMC referidos a finales de 2021). El 76% de la población refugiada y población en necesidad de protección internacional procedía de seis países: Siria (6,8 millones de personas), Venezuela (5,6), Ucrania (5,4), Afganistán (2,8), Sudán del Sur (2,4) y Myanmar (1,2); y el 69% vivía en países vecinos a sus países de origen, según datos de ACNUR. En ese primer semestre de 2022 se produjeron 1,1 millones de nuevas solicitudes de asilo. En todo caso, el cómputo total de 2022 arrojará una cifra mayor de desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Así, durante el año numerosos conflictos fueron escenario de graves situaciones de desplazamiento forzado. Entre otras, en relación a la crisis de Ucrania, a finales de 2022 se estimaba en 5,9 los millones de personas desplazadas internas, 7,9 millones las personas registradas como refugiadas en Europa y en 4,9 millones las personas refugiadas de Ucrania registradas para recibir protección temporal en Europa o en otros mecanismos de protección nacional similares.

Tensiones

En el segundo capítulo (Tensiones)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Distribución regional del número de tensiones en 2022



y regionales. Durante 2022 se identificaron 108 escenarios de tensión en todo el mundo, diez más que en 2021, en línea con la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (25 casos más desde el año 2018). África y Asia fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (36 y 33 respectivamente), seguidas de América (16), Europa (12) y Oriente Medio (11). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 15 nuevos casos y otros cinco dejaron de ser calificados como tensión, la mayoría en África: Gambia, Etiopía (Oromiya), que pasó a ser considerado conflicto armado, RDC-Uganda, Rwanda-Uganda y España (Cataluña). Los casos que, por distintos motivos, se incorporaron al listado de casos de tensión, se concentraron principalmente en Asia y América: Brasil; China-EEUU; Corea, RPD; Ecuador; EEUU; Fiji; Jamaica; Japón-Rusia (Islas Kuriles); Kirguistán-Tayikistán; Moldova; Papúa Nueva Guinea; Rusia; Sri Lanka; Tayikistán (Gorno-Badakhshan) y Uzbekistán (Karakalpakistán).

Uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones en 2022 es que, si bien en un 32% de los casos no se observaron cambios significativos y en un 18% la tensión se redujo respecto del 2021, la mitad de los casos identificados en 2022 se agravaron respecto del año anterior. Ello se tradujo, en parte, en un incremento sustancial de los casos de alta intensidad, que pasaron de 19 en 2021 a 28 en 2022: Burkina Faso; Chad; Etiopía; Kenia; Malí; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC-Rwanda; Somalia (Somalilandia-Puntlandia); Sudán; Ecuador; Haití; México; Perú; Venezuela; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; India-Pakistán; Indonesia (Papúa Occidental); Kazajstán; Kirguistán-Tayikistán; Papúa Nueva Guinea; Sri Lanka; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); Irán-EEUU, Israel; Irán; e Israel-Siria-Líbano. Además de los 28 casos de alta intensidad, que supusieron más de una cuarta parte del total, el 42% de los 108 casos de tensión fueron

de intensidad baja (en 2021 eran el 50%) y el 32% de intensidad media (31% en 2021). Por tanto, en 2022 no solamente se incrementó con claridad el número de tensiones, sino también su intensidad media respecto del año anterior. El incremento de la intensidad de las tensiones se concentró especialmente en Europa (donde el 92% de los casos escalaron) o en Asia (donde lo hizo un 56%).

En cuanto a los principales factores de causalidad, la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, estaba presente en un 71% de las tensiones analizadas; las demandas de autodeterminación y autogobierno, o las aspiraciones identitarias lo estaban en un 38%; y el control de los recursos o del territorio lo estaba en un 31%. Tales cifras mantienen una cierta continuidad respecto de las del año anterior, aunque aquellas tensiones asociadas al control del territorio o los recursos se incrementaron del 21% al 31%. En un análisis desagregado de factores, la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno fue la causa con mayor preponderancia y estuvo presente en el 64% de los 108 escenarios de tensión, exactamente el mismo porcentaje que el año anterior. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de aspiraciones de tipo identitario (36%), especialmente relevante en regiones como Europa (67%) u Oriente Medio (46%). A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las demandas de autodeterminación y autogobierno (24%), el control de los recursos (23%), la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto (22%) y el control del territorio (19%).

Dimensión de género en la construcción de paz

En el tercer capítulo (Género, paz y seguridad) se analizan los impactos de género de conflictos y tensiones, así como las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.³ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que

3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género

Nivel bajo de igualdad		
Afganistán Camerún (2) Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) Región Lago Chad Chad Región Lago Chad Egipto Etiopía (Sinaí) Iraq India (2) India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M)	Malí (2) Malí Región Sahel Occidental Níger (2) Región Lago Chad Región Sahel Occidental Nigeria Región Lago Chad Palestina Israel-Palestina Pakistán (2) Pakistán Pakistán (Baluchistán)	RCA RDC (2) RDC (este) RDC (este-ADF) Siria Sudán (2) Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur Yemen
Nivel medio-bajo de igualdad		
Etiopía (2) Etiopía (Oromiya) Etiopía (Tigré)	Burkina Faso Región Sahel	Mozambique Mozambique (norte)

*Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica el conflicto o conflictos armados en ese país en 2022. Entre paréntesis se señala el número de conflictos armados en ese país cuando hay más de uno.

Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género

Nivel bajo de igualdad		
Argelia Bangladesh Benín Chad Costa de Marfil Egipto (2) Egipto Etiopía – Egipto – Sudán Guinea Guinea Bissau Haití India (6) India India (Assam) India (Manipur) India (Nagalandia) India – China India – Pakistán	Irán (4) Irán Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Irán – EEUU, Israel Iraq Iraq (Kurdistán) Líbano Líbano Israel – Siria – Líbano Malí Marruecos Marruecos – Sáhara Occidental Níger Nigeria (3) Nigeria Nigeria (Biafra) Nigeria (Delta del Níger) Palestina	Pakistán (2) Pakistán India – Pakistán RCA (2) RCA África central (LRA) RDC (3) RDC RDC – Rwanda África central (LRA) Senegal Senegal (Casamance) Siria Israel – Siria – Líbano Sudán (5) Sudán Sudán – Sudán del Sur África central (LRA) Etiopía – Egipto – Sudán Etiopía-Sudán Sudán del Sur (2) Sudán – Sudán del Sur África central (LRA)
Nivel medio-bajo de igualdad		
Arabia Saudita Burkina Faso Guatemala	Etiopía (3) Etiopía – Egipto – Sudán Etiopía – Sudán Eritrea – Etiopía Mozambique	Tayikistán (3) Tayikistán Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Kirguistán – Tayikistán

respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Desarrollo de Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Desarrollo de Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

23 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2022 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género –Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, 5 RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Sudán del Sur, Afganistán, India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Egipto (Sinaí), Iraq, Israel-Palestina, Siria, Yemen– y nivel medio-bajo de igualdad de género –Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Mozambique (norte). No existían datos sobre Somalia, país en el que transcurre un conflicto armado. En cuanto a intensidad de los conflictos, 12 de los 17 conflictos armados de violencia de alta intensidad de 2022 (70% de los casos) transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad y en el caso de Somalia no había datos del IDG. Asimismo, en otros ocho países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles altos de igualdad (Libia, Colombia, Filipinas, Tailandia, Rusia, Ucrania, Israel) o medios (Myanmar), de acuerdo con el IDG. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, 47 de las 108 tensiones activas durante el año 2022 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajo de igualdad.

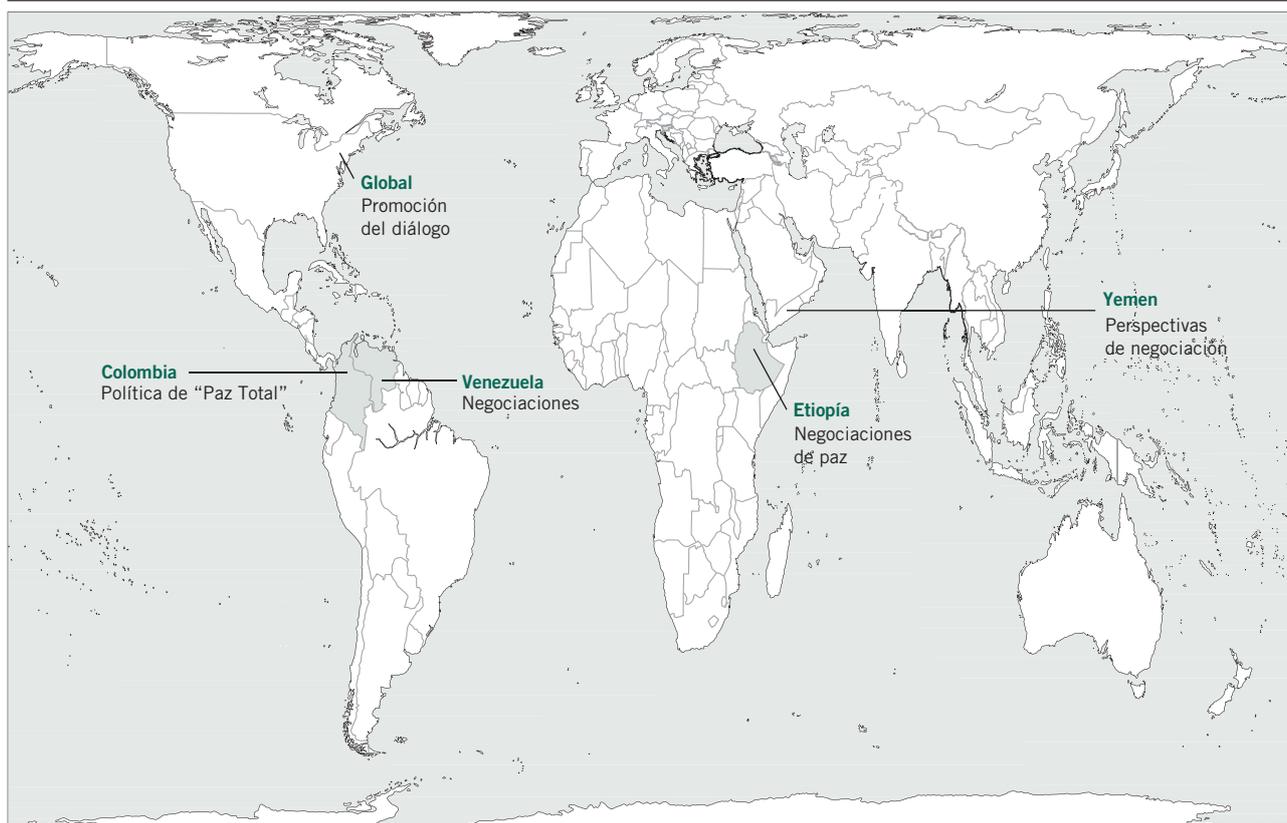
Al igual que en años anteriores, durante 2022 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales. El informe anual presentado en 2022 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales (37) y otros

12 eran actores armados gubernamentales, de un total de diez contextos (RCA, RDC, Iraq, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Nigeria). Según Naciones Unidas, el 70% de los actores en conflicto señalados eran considerados perpetradores persistentes, debido a su inclusión en el anexo de Naciones Unidas durante cinco o más años. Más allá del listado de actores perpetradores de violencia sexual, el informe del secretario general abordaba la evolución en 18 contextos. De los 18 contextos que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, 12 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad durante 2022 –Etiopía (Tigré), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este – ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. En seis de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2022 con respecto al año anterior –Etiopía (Oromiya), Malí, Región Sahel Occidental, RDC (este), Somalia y Myanmar. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

En 2022, 21 países que protagonizaban negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos. Nueve de estos países estaban en África (Camerún, Malí, Marruecos, Mozambique, RCA, RDC, Senegal, Sudán, Sudán del Sur); dos en Asia (Corea y Filipinas); ocho en Europa (Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Moldova, Serbia, Kosovo y Ucrania) y dos en Oriente Medio (Palestina y Yemen). Ninguno de los dos países en el continente americano con unas negociaciones en curso contaba con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325. Así, en 21 de las 39 negociaciones activas durante 2022 al menos uno de los actores gubernamentales negociadores contaba con un plan de acción que debía guiar su actuación en materia de inclusión de la perspectiva de género y de participación de las mujeres. Las 21 negociaciones y procesos de paz tuvieron lugar en Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Malí, Marruecos–Sáhara Occidental, Mozambique, RCA, RDC, Senegal, Sudán, Sudán del sur, Sudán-Sudán del Sur, Corea (Corea, RPD–Corea, Rep. De y Corea, RPD–EEUU), Filipinas (MILF), Filipinas (NDF), Armenia-Azerbaiyan (Nagorno-Karabaj), Chipre, Georgia (Abjasia, Osetia del Sur), Moldova (Transnistria), Serbia–Kosovo, Rusia–Ucrania, Palestina y Yemen. Sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, la mayoría de negociaciones de paz continuaron excluyendo a las mujeres y tampoco

**23 de los 33
conflictos armados
que tuvieron lugar en
2022 se dieron en
países donde existían
niveles bajos de
igualdad de género**

Oportunidades de paz



se incorporó la perspectiva de género en las dinámicas de los procesos de paz, poniendo en entredicho la eficacia de los planes de acción como herramientas de construcción de paz inclusiva.

Oportunidades de paz y escenarios de riesgo

En el cuarto capítulo (Oportunidades de Paz), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz de cara al futuro. Las oportunidades identificadas hacen referencia a diferentes regiones y temas.

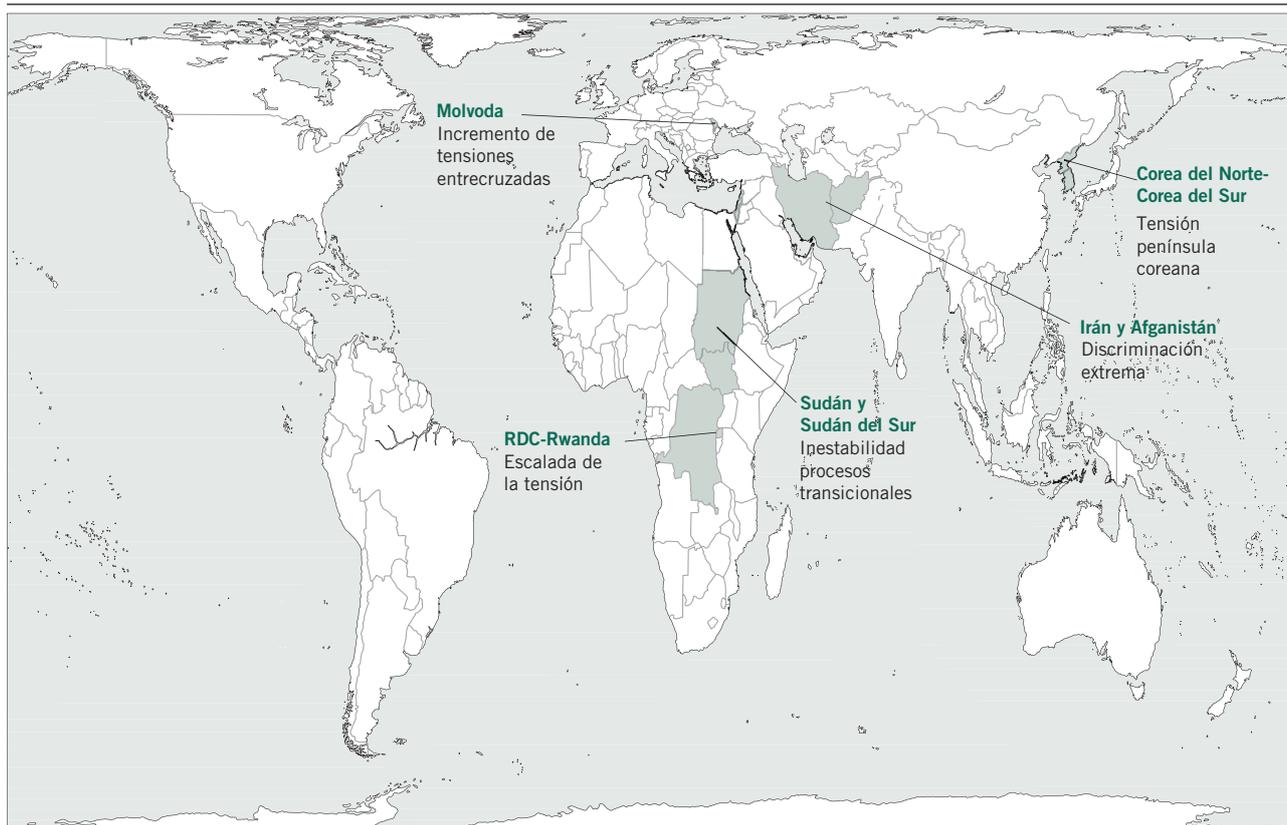
- **Etiopía:** Etiopía vive inmersa en un complejo abanico de retos, profundos cambios e inestabilidad agravados en los últimos años. A este clima de inestabilidad se sumó el inicio del conflicto armado en la región de Tigré en noviembre de 2020 y la grave escalada de la violencia en la región de Oromiya durante 2022, lo que parecía situar al país al borde del abismo. El cese permanente de hostilidades alcanzado entre el Gobierno Federal y las autoridades político-militares de Tigré, así como el inicio de las conversaciones

*El informe Alerta!
identifica y analiza
cinco contextos
propicios para que se
den pasos positivos
en términos de
construcción de paz*

de paz con el grupo armado Oromo Liberation Army (OLA) podría suponer una nueva oportunidad para que el país empiece a transitar hacia un nuevo escenario político, no exento de riesgos y fragilidad.

- **Colombia:** El Gobierno colombiano está impulsando una política pública de construcción de paz conocida como "Paz Total", mediante el diálogo con todos los actores armados activos en el país. Se trata un proyecto ambicioso en tanto busca resolver un conflicto multifacético, enquistado y protagonizado por múltiples y diversos actores armados. El Gobierno colombiano deberá ser capaz de sostener múltiples diálogos simultáneos para consolidar la paz en el país, en un escenario plagado de riesgos y obstáculos.
- **Venezuela:** La llegada al poder de nuevos gobiernos en América Latina y una cierta despolarización regional respecto de la crisis en Venezuela; el acercamiento de posiciones entre los Gobiernos de EEUU y Venezuela tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia; la adopción de posiciones más conciliadoras, pragmáticas y posibilistas por parte del Gobierno y oposición en Venezuela; la suscripción de un acuerdo entre ambas partes en noviembre de 2022; y la celebración de una conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá parecen indicar una mayor predisposición

Escenarios de riesgo



de las partes a superar la crisis del país a través del diálogo.

- **Yemen:** Después de ocho años de un conflicto armado de alta intensidad, el país se encuentra un escenario considerado como una oportunidad decisiva para intentar poner fin a las hostilidades. Esta expectativa responde a una confluencia de dinámicas: una tregua que ha reducido significativamente los niveles de violencia y que en la práctica se ha mantenido, pese a no ser renovada formalmente; el establecimiento de un canal de negociación entre Riad y los al-houthistas bajo la mediación de Omán; y el acercamiento y restauración de relaciones entre Arabia Saudita e Irán con posibilidades de repercutir en Yemen dado el papel de ambos países en el conflicto, entre otros factores. No obstante, existen aún importantes retos para consolidar las perspectivas de una paz sostenible e inclusiva en Yemen.
- **Promoción de la prevención y el diálogo:** El escenario internacional asiste a un grave deterioro de la seguridad humana de muchas poblaciones en contexto de conflicto, de la mano de procesos como el cambio climático, conflictos armados de mayor intensidad y rivalidad geoestratégica. Al mismo tiempo, la prevención de conflictos armados y la promoción de la resolución negociada de conflictos continúa teniendo vigencia y ha acogido en las últimas décadas expansión de actores, mecanismos y arquitecturas. El proceso de Nueva Agenda de Paz

impulsado por la ONU y el propio escenario global de conflictos incrementa la urgente necesidad y oportunidad de reimpulsar la prevención y el apoyo al diálogo.

En el quinto capítulo (Escenarios de riesgo), el informe identifica y analiza seis escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves.

- **Sudán-Sudán del Sur:** Los dos Estados enfrentan importantes crisis en sus procesos transicionales, marcados por la lucha de poder entre sus principales líderes, las dificultades en la construcción de un Ejército unificado y los tiempos y formas de devolución del poder a la ciudadanía. La última crisis abierta en Sudán en abril de 2023, que ha derivado en enfrentamientos armados entre el Ejército y los paramilitares, amenaza acabar con la frágil transición en el país, incrementar la crisis humanitaria en la región, así como generar un efecto contagio en los escenarios de inestabilidad de los países vecinos y, particularmente, en la vecina Sudán del Sur.
- **RDC - Rwanda:** En 2022 se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del

grupo armado M23 en Kivu Norte. Las diferentes iniciativas diplomáticas regionales han fracasado hasta el momento de cara a revertir la situación. Es imprescindible un análisis más profundo para comprender las dinámicas locales, regionales e internacionales que se encuentran en la génesis de este conflicto de cara a intentar promover su resolución.

- **Península coreana:** Tras un breve período de aproximación de posturas en las relaciones intercoreanas y de diálogo entre Corea del Norte y EEUU acerca de la desnuclearización de la península coreana (2018-19), en los últimos años, y muy claramente desde 2022, la tensión política y militar en la península coreana ha escalado ostensiblemente. Dicha escalada ha incluido, entre otras cuestiones, un aumento de la tensión militar y episodios bélicos entre Corea del Norte y Corea del Sur en la frontera terrestre y marítima, un incremento sin parangón en el número de lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, una creciente asertividad de Corea del Sur en la respuesta a los ensayos armamentísticos de Pyongyang, la reanudación del programa nuclear y la fabricación de nuevo armamento por parte de Corea del Norte, el incremento de la tensión entre Corea del Norte y Japón, y la creciente cooperación entre EEUU y Corea del Sur en materia nuclear.
- **Moldova:** El país es escenario de un incremento de tensiones multidimensionales y entrecruzadas, influidas por la invasión de Rusia a Ucrania. El deterioro de la situación ha tenido reflejo en ámbitos

El informe analiza cinco escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden agravarse de cara al futuro

como riesgos de extensión de la guerra a Moldova, denuncias de planes de golpe de Estado encubierto, riesgo de mayor polarización con expresión territorial y crisis socioeconómica. Moldova afronta a corto y medio plazo riesgos de incremento o cronificación de tensiones entrecruzadas, que requieren del fortalecimiento del apoyo internacional en ámbitos que contribuyan a la prevención de una extensión del conflicto en Ucrania, a la cohesión y fortalecimiento democrático y a la seguridad humana.

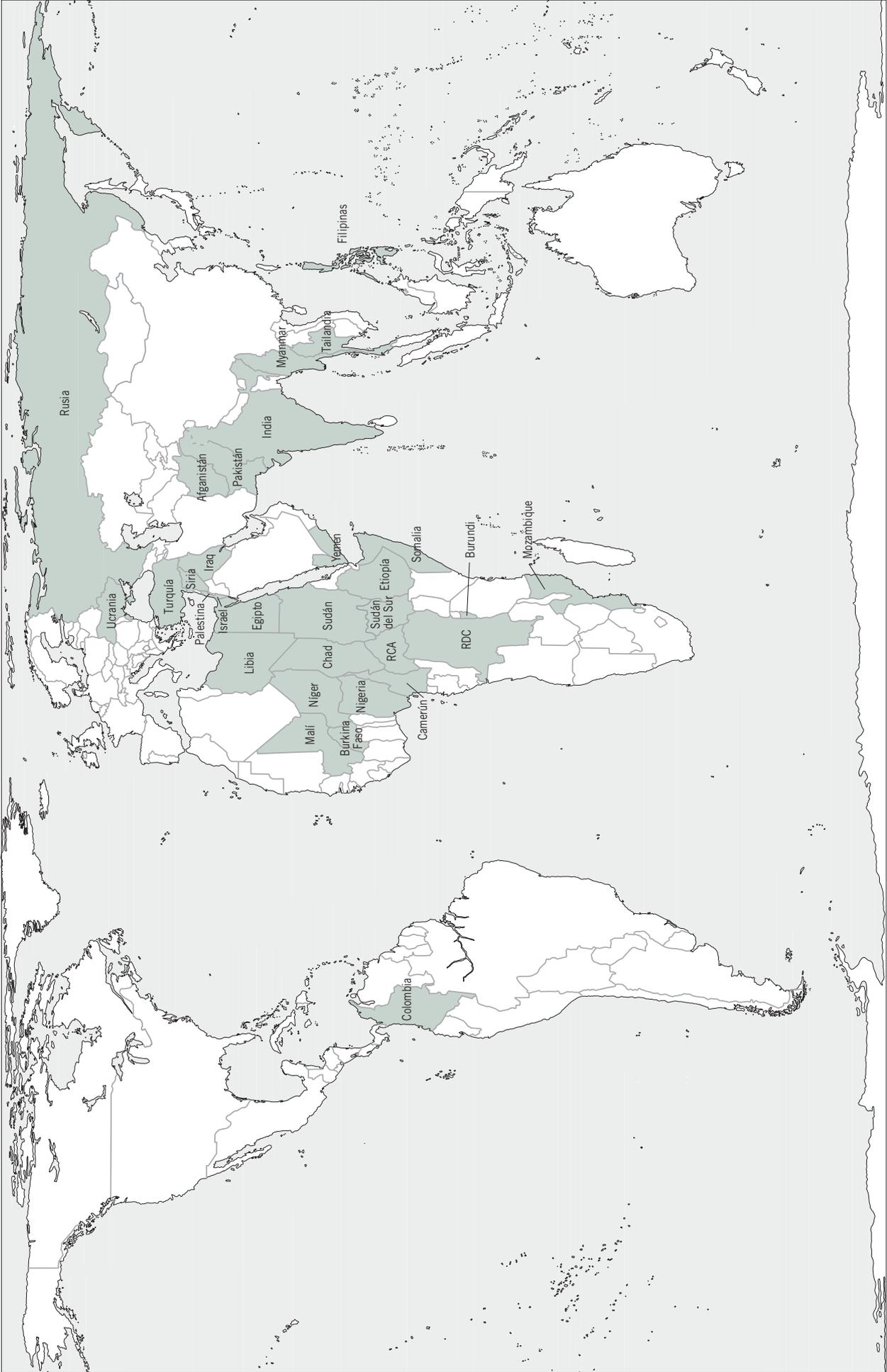
- **Irán y Afganistán:** El agravamiento de las políticas discriminatorias contra las mujeres y la intensificación de los intentos por controlar sus vidas y sus cuerpos en Irán y Afganistán han estado en el foco mediático, en parte por las manifestaciones de protesta y resistencia lideradas por las propias mujeres frente a la misoginia y las vulneraciones sistemáticas de sus derechos y libertades. Ante la discriminación extrema, sistemática y estructural contra las mujeres en ambos países incluso se ha articulado una propuesta de reconocimiento de la situación como un crimen de apartheid de género. Múltiples actores han denunciado esta deriva contra las mujeres y expresado su alarma ante la respuesta represiva de estos regímenes. Pese a la sonora reacción internacional, existe el riesgo de que tanto Teherán como Kabul persistan en sus políticas y que la situación de las mujeres en ambos países se agrave o perpetúe, de que la atención mediática vaya menguando y de que algunos actores de la comunidad internacional opten por una aproximación utilitarista de la defensa de los derechos de las mujeres, que los impulse o ignore en función de intereses coyunturales.

Resumen de la conflictividad global en 2022

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Camerún (Ambazonia/ Noroeste Suroeste)</i> Etiopía (Oromiya) <i>Etiopía (Tigré)</i> <i>Malí</i> Mozambique (norte) Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental <i>RDC (este)</i> <i>RDC (este-ADF)</i> <i>Somalia</i> <i>Sudán (Darfur)</i> <i>Sudán del Sur</i>	<i>RCA</i> <i>Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	Burundi <i>Libia</i>	Burkina Faso <i>Chad</i> Etiopía Kenia <i>Malí</i> Nigeria Nigeria (Biafra) <i>RDC – Rwanda</i> Somalia (Somalilandia-Puntlandia) <i>Sudán</i>	Argelia Benín Costa de Marfil Djibouti Etiopía – Egipto – Sudán Etiopía – Sudán Guinea Guinea-Bissau <i>Marruecos – Sáhara Occidental</i> RDC Túnez Uganda	África Central (LRA) Eritrea <i>Eritrea – Etiopía</i> Eswatini Guinea Ecuatorial <i>Mozambique</i> Níger Nigeria (Delta Níger) Rwanda Rwanda – Burundi <i>Senegal (Casamance)</i> <i>Sudán – Sudán del Sur</i> Tanzania Zimbabwe	
SUBTOTAL	12	2	2	10	12	14	52
América		<i>Colombia</i>		Ecuador <i>Haití</i> México Perú <i>Venezuela</i>	Brasil Chile El Salvador	Bolivia Colombia Cuba EEUU Guatemala Honduras Jamaica Nicaragua	
SUBTOTAL		1		5	3	8	17
Asia y Pacífico	<i>Myanmar</i>	Afganistán <i>Pakistán</i> Pakistán (Baluchistán)	Filipinas (Mindanao) <i>Filipinas (NPA)</i> India (CPI-M) India (Jammu y Cachemira) <i>Tailandia (sur)</i>	<i>Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea</i> <i>Corea, RPD – Rep. de Corea</i> India – China India – Pakistán Indonesia (Papúa Occidental) Kazajistán Kirguistán – Tayikistán Papúa Nueva Guinea Sri Lanka	Bangladesh China – Japón China – Taiwán Mar de la China Meridional Pakistán Tayikistán Tayikistán (Gorno-Badakhshan) Uzbekistán (Karakalpakistán)	China (Hong Kong) China (Tíbet) China (Xinjiang) China – EEUU Corea, RPD Fiji India <i>India (Assam)</i> India (Manipur) <i>India (Nagalandia)</i> Indonesia (Sulawesi) Japón – Rusia (Islas Kuriles) Kirguistán Lao, RPD Tailandia Uzbekistán	
SUBTOTAL	1	3	5	9	8	16	42
Europa	<i>Rusia – Ucrania</i>	Turquía (sudeste)		<i>Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)</i>	Belarús Bosnia y Herzegovina Moldova <i>Moldova, Rep. de (Transnistria)</i> Rusia <i>Serbia – Kosovo</i> Turquía Turquía - Grecia, Chipre	<i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> Rusia (norte del Cáucaso)	
SUBTOTAL	1	1		1	8	3	14
Oriente Medio	<i>Iraq</i> <i>Siria</i> <i>Yemen</i>		Egipto (Sinaí) Israel-Palestina	Irán <i>Irán-EEUU, Israel</i> Israel-Siria-Líbano	Egipto Irán (noroeste) Irán (Sistán) Baluchistán Líbano	Arabia Saudita Bahrein Iraq (Kurdistán) <i>Palestina</i>	
SUBTOTAL	3	0	2	3	4	4	16
TOTAL	17	7	9	28	35	45	141

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas.

Mapa 1.1 Conflictos armados



Países con conflicto armado

1. Conflictos armados

- Durante 2022 se registraron 33 conflictos armados, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno).
- Los conflictos armados de alta intensidad representaron más de la mitad (52%) del total de casos a nivel mundial.
- Durante 2022 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Etiopía apoyados por las milicias amhárnicas Fano y el grupo armado OLA con graves consecuencias contra la población civil en la región etíope de Oromiya. En paralelo, se redujo la violencia en la vecina región de Tigré a raíz de la firma del acuerdo de paz en noviembre, lo que podría poner fin a uno de los conflictos armados más graves de los últimos años.
- Los ataques de al-Shabaab y la ofensiva del Gobierno Federal de Somalia y de sus aliados locales e internacionales provocaron una escalada de la violencia en 2022 sin precedentes en años anteriores.
- En Malí se multiplicaron por cuatro los ataques contra civiles perpetrados por parte de los dos principales grupos yihadistas activos en la región: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS o ISWAP).
- La región de la Triple Frontera en el Sahel occidental (Malí, Burkina Faso y Níger) experimentó la mayor escalada de eventos violentos vinculados a grupos yihadistas que cualquier otra región de África, con un aumento del 36% con relación a 2021.
- Se intensificó la ofensiva en el este de RDC por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Rwanda, lo que a su vez agravó las relaciones entre ambos países.
- En Sudán del Sur persistieron las dinámicas de violencia debido a enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, entre las facciones Kitgwanj disidentes del SPLA-IO, y a la continuidad de episodios de violencia intercomunitaria que afectaron a múltiples regiones del país.
- En Pakistán se produjo un deterioro del conflicto, a pesar del intento de negociaciones, en un contexto de grave crisis política e impacto del cambio climático.
- El conflicto armado en Myanmar entre el Ejército de la Junta Militar y los grupos armados étnicos y las Fuerzas de Defensa Popular se intensificó, con graves consecuencias humanitarias.
- Rusia lanzó una invasión militar contra Ucrania en febrero de 2022, que llevó a un conflicto armado internacional, una grave crisis humanitaria e impactos multidimensionales globales.
- Iraq continuó siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, en un contexto caracterizado también por tensiones políticas que dificultaron durante meses la formación de un nuevo gobierno.
- Tras más de una década de conflicto armado, la crisis humanitaria en Siria estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra.
- En 2022 Yemen registró un significativo descenso en las hostilidades y el número de víctimas mortales de la violencia como resultado de la tregua que estuvo vigente durante seis meses

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2022. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2022, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2022.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2022

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	3
	Autogobierno, Identidad		=
Etiopía (Oromiya) -2022-	Interno	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia progubernamental amhárica Fano	3
	Autogobierno, Identidad, recursos		↑
Etiopía (Tigré) -2020-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↓
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli; gobierno con sede en Tobruk; grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner; Turquía	1
	Gobierno, Recursos, Sistema		=
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2022 con la del 2021, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2022 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales "Naparama"	3
	Sistema, Identidad		=
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Mali, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaissona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Rusia, Grupo Wagner	2
	Gobierno, Recursos		↓
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (EACRF)	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		=
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Turquía, AMISOM/ATMIS, EUNAVFOR Somalia, Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		↑
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, milicias comunitarias, UNITAMS	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		=
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony ("Agwalek"), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, grupos surgidos de las FARC, grupos paramilitares	2
	Sistema		↓
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno talibán, Frente Nacional de Resistencia (NRF)	2
	Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		=
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán (entre ellas, Tehrik-e Taliban Pakistan -TTP), insurgentes internacionales	2
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
EUROPA			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia – Ucrania -2022-	Internacional	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania	3
	Gobierno, Territorio		↑
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)	1
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes Unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional ⁶	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLF, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, Israel	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU)	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

6. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como "internacional" y no como "interno" por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

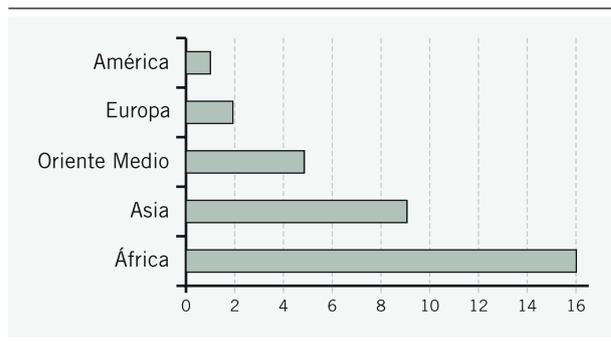
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2022

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2022, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

En 2022 se registró un ligero aumento en el número de conflictos armados respecto al año anterior. En total se contabilizaron 33 casos, frente a los 32 conflictos de 2021 y los 34 en 2020, 2019 y 2018. La escalada de la violencia en la región de Oromiya (Etiopía) llevó a considerar este escenario como conflicto armado, en el que combatían fuerzas de seguridad federales apoyadas por las milicias amháricas Fano y el grupo armado

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2022



oromo OLA. Otro cambio significativo en 2022 fue la transformación del escenario de violencia en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022 desbordó la situación anterior de conflicto armado en el este del país dando paso a un conflicto internacional, con graves consecuencias multidimensionales.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, se mantuvo la tendencia de períodos precedentes y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (16) y Asia (nueve), seguido de Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno). El continente africano, por tanto, concentraba prácticamente la mitad de los casos (49%) a nivel global.

En cuanto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internacionales y, en su gran mayoría, internos internacionalizados. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2022 cuatro de los 33 casos (12%, 9% en 2021) eran conflictos armados internos y tres de esos cuatro transcurrían en Asia. Se trata de los casos de Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El otro caso de conflicto armado interno fue el de Etiopía (Oromiya), en África. Otros tres casos, que suponen un 9% (6% en 2021) del total de contextos, fueron de carácter internacional: el conflicto en la región africana del Sahel occidental, la disputa palestino-israelí en Oriente Medio y la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, la invasión de Rusia a Ucrania llevó a un incremento de la tipología de conflictos internacionales. Aunque las guerras interestatales continuaron siendo minoritarias, algunos análisis señalaron que la invasión había puesto fin a supuestos del orden internacional de la post-Guerra Fría, como la excepcionalidad de la guerra entre Estados.⁷

Los 26 casos restantes, que representan un 79% de los casos (85% en 2021), fueron internos internacionalizados. Estos casos se caracterizan porque

7. Haas, Richard, "The Dangerous Decade. A Foreign Policy for a World in Crisis", *Foreign Affairs*, septiembre/octubre de 2022.

alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza –como ISIS, al-Qaeda o Boko Haram, entre otros.

En línea con lo observado en años previos, durante 2022 se mantuvo una presencia destacada de misiones internacionales de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, especialmente en el marco de conflictos armados en África. A lo largo del año la ONU continuó operando en contextos como RCA (MINUSCA), RDC (MONUSCO), Malí (MINUSMA) y Sudán del Sur (UNMISS). En algunos de estos escenarios participaron en confrontaciones con actores armados. El ámbito de las misiones internacionales y su participación en conflictos se vio afectado por las proyecciones de tensiones internacionales entre Rusia y actores occidentales. Así, en 2022 se extendió el mandato de la MINUSCA, aunque con abstención de Rusia, China y Gabón por desacuerdos que involucraban la presencia del Grupo Wagner en RCA. En Malí y la región del Sahel Occidental, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar y los aliados tradicionales, a causa del acercamiento del Gobierno militar maliense a Rusia y al Grupo Wagner, tuvo repercusiones en el complejo militar regional-internacional, como el bloqueo de Malí a las operaciones de la MINUSMA. Además, varios países retiraron sus tropas de esta misión (Alemania, Reino Unido, Costa de Marfil). Ese deterioro diplomático impactó también sobre otras misiones y operaciones de organizaciones regionales y países: la UE suspendió sus misiones EUCAP y EUTM Mali; varios países retiraron tropas de la operación europea Takouba; Francia finalizó su operación Barkhane; o Malí se retiró de la fuerza militar conjunta del G5 Sahel.

Organizaciones regionales continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Africana (UA) –con la misión AMISOM en Somalia, que en 2022 fue transformada en la Misión de Transición de la UA en Somalia, ATMIS– o la Unión Europea (UE) – EUNAVFOR en Somalia. Por otra parte, en 2022 países de la Comunidad Africana Oriental (EAC) aprobaron el despliegue de una misión militar en el este de RDC para combatir al grupo armado M23. Asimismo, la

Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y las autoridades de Mozambique acordaron extender el mandato de la misión SAMIM y aprobaron su transición a una misión multidimensional. En 2022, la SAMIM y tropas ruandesas desplegadas en Mozambique ampliaron sus acciones contra la insurgencia en la región de Cabo Delgado.

También continuaron operativas misiones híbridas, que involucran a organizaciones regionales y Estados, como la operación militar marítima en el Cuerno de África y el Océano Índico, la Combined Task Force 151,⁸ liderada por EEUU, en colaboración con EUNAVFOR. En esta misma línea se inscribe la coalición internacional contra el grupo armado ISIS (Daesh), formada en septiembre de 2014 bajo el liderazgo de EEUU, que desde entonces ha desplegado sus acciones en Iraq y Siria. En diciembre de 2021, ante la mayor actividad de grupos vinculados a ISIS en el continente, la coalición estableció un grupo especial de trabajo sobre África. Esta coalición cuenta con 85 integrantes, entre Estados y organizaciones, entre ellas la Liga Árabe y la UE.⁹

La invasión de Rusia a Ucrania incrementó el número de conflictos internacionales (9% del total) en 2022, aunque la mayoría de conflictos armados eran internos internacionalizados (79%)

Respecto a la implicación de terceros países, esta dimensión continuó presente en numerosos conflictos internos internacionalizados, lo que agravó su complejidad. En 2022 este aspecto estuvo presente en casos como RDC (este). Allí Rwanda apoyó al M23, insurgencia congoleña que reinició sus acciones tras casi una década inactiva. RDC y Rwanda llevaron a cabo incursiones militares recíprocas, lo que provocó una escalada de la tensión. También en RDC, en relación al conflicto en torno a la insurgencia yihadista de las ADF, Uganda dio a conocer en 2022 su participación militar en la Operación Shuja contra esa insurgencia e informes señalaron intereses económicos en ese involucramiento. Diversos escenarios de conflicto continuaron caracterizándose por una multiplicidad de terceros países involucrados militarmente en las dinámicas de violencia, como Yemen, Iraq y Siria. En 2022 Turquía intensificó sus acciones militares contra actores kurdos en Iraq (PKK) y Siria (YPG), con impactos también sobre poblaciones civiles. Además, en Siria continuaron las incursiones aéreas de Rusia; Israel prosiguió con ofensivas en distintos puntos del país; y también EEUU lanzó ataques contra milicias con supuestos vínculos con Irán y siguió con incursiones contra ISIS, como la que acabó con la vida del líder del grupo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi en febrero de 2022. Por otra parte, en numerosos conflictos, grupos armados no estatales llevaron a cabo acciones ofensivas transfronterizas. Fue el caso del conflicto de Yemen, entre muchos otros. En relación a este conflicto,

8. Existen cuatro operaciones internacionales operadas por las Combined Maritime Forces (coalición de 34 países liderada por EEUU). Véase [Combined Maritime Forces](#) [en línea, consultado el 15 de enero de 2023].

9. Más información en [The Global Coalition Against Daesh](#).

a principios de 2022 las fuerzas al-houthistas lanzaron ataques contra Arabia Saudita y EAU, que respondieron a estas ofensivas en una escalada que generó inquietud por su impacto regional. Grupos armados de RCA cruzaron con regularidad la frontera con Camerún y se involucraron en secuestros contra civiles. La insurgencia de al-Shabaab realizó ataques en Etiopía y Kenia durante el año, poniendo de manifiesto objetivos regionales. En la región del Sahel Occidental se siguieron registrando acciones armadas de grupos yihadistas que afectaron a países como Malí, Burkina Faso, Níger, Benín, Togo o Ghana.

En cuanto a las causas de los conflictos armados en 2022, el panorama de conflictividad continuó marcado por la multicausalidad. Un 67% de los conflictos armados tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos. En todo caso, tuvo mayor relevancia la dimensión de disputa contra el sistema, aspecto presente junto a otras causas en 17 conflictos (52% de los casos), en gran parte vinculado a la elevada presencia de actores armados con una agenda de línea yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos.

Fue el caso de conflictos como Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Malí, RDC (este-ADF), Somalia, Mozambique (norte), Libia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen. En otros tres casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con otro tipo de línea ideológica.

Adicionalmente, otro elemento a resaltar entre las motivaciones principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, que estuvieron –una de ellas o ambas– en 20 de los 33 de los casos (61%). De estas, tuvo mayor relevancia la dimensión de demandas identitarias (61%). Las disputas en torno a demandas de autogobierno estuvieron presentes en un 42% de los casos. Entre estos sobresalió en 2022 el caso de Etiopía (Oromiya), por la escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad etíopes –apoyados por las milicias amháricas Fano– y el grupo armado oromo OLA. Esta motivación también estuvo presente en otros casos como el conflicto que enfrenta al Gobierno de Camerún con los movimientos secesionistas político-militares en las regiones anglófonas del oeste del país (Ambazonia/Noroeste y Suroeste). También los conflictos de Etiopía (Tigré), Filipinas (Mindanao), Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Turquía (sudeste), por mencionar solo algunos, involucraron –entre otros elementos causales– aspectos de disputa en torno a la identidad y/o el autogobierno.

Los conflictos armados tenían naturaleza multicausal y un 61% de ellos tenían entre sus causas principales disputas en torno a demandas identitarias

Por último, también hubo numerosos conflictos armados que tuvieron entre sus causas principales el control de territorio y/o de recursos. Estos casos ascendieron a un 39% –13 de los 33– del total de conflictos. En este binomio, sobresalió la dimensión de disputa en torno a recursos (presente en el 33% del total de conflictos), mientras el elemento de control de territorio como una de las causas principales se evidenció en un menor porcentaje (en el 6% de los conflictos armados). Los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos, con numerosos enfrentamientos relacionados con la extracción de oro y coltán, entre otros minerales.

Zonas de actividad minera también fueron escenario de hechos de violencia en Pakistán (Baluchistán), otro conflicto armado en el que pesa la disputa por recursos como una de sus causas, y también en la India, en el marco del conflicto con la insurgencia naxalita. En Sudán y Sudán del Sur disputas intercomunitarias en torno al acceso de recursos se entrecruzaban con otras dinámicas de violencia. Las cuestiones vinculadas al control del territorio, en tanto, fueron especialmente significativas en el caso de Palestina-Israel. En todo caso, los conflictos se vieron sostenidos e influidos por las dinámicas de las economías de guerra. En el caso de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) fuentes locales advirtieron en 2022 que la dinámica de la violencia estaba cambiando, de la mano del crecimiento de una economía de guerra que involucraba secuestros y otras formas de extorsión de la población civil y que esa economía de la guerra reducía los incentivos para la búsqueda de arreglos negociados.

En materia de **evolución**, un 30% de los conflictos en 2022 presentaron un aumento de los niveles de violencia en comparación con el año anterior. Fue el caso de Etiopía (Oromiya), Malí, Región Sahel Occidental, RDC (este), Somalia, Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Rusia-Ucrania. Algunos de estos casos asistieron a graves dinámicas de escalada. Entre ellos, en Sahel Occidental el aumento de la violencia contra la población civil causó un 49% más de muertes que las registradas en 2021 y en el conflicto en Malí se multiplicaron por cuatro los ataques contra civiles por los dos principales grupos yihadistas. En Somalia se asistió a una escalada de la violencia sin precedentes en años anteriores. En la región de Oromiya, el incremento de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el grupo armado OLA llevó a considerarlo como un conflicto armado en 2022. La invasión de Rusia a Ucrania llevó a un conflicto armado internacional de carácter interestatal de alta

intensidad, causante de una grave crisis humanitaria. Otros 15 conflictos armados –que representan un 46% del total de casos– se observaron niveles de violencia y confrontación similares a los registrados en 2021. En ocho contextos –24% de los conflictos armados a nivel mundial– se identificó una disminución en los niveles de violencia armada y sus impactos: Etiopía (Tigré), RCA, Colombia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), India (CPI-M), Tailandia (sur) y Yemen. En algunos de estos casos la reducción de los incidentes violentos estuvo relacionada con acuerdos de alto el fuego –Etiopía (Tigré), Yemen– en el marco de procesos de negociación, o a la evolución o perspectiva positiva de estos –Tailandia (sur), Colombia.¹⁰ No obstante, en casos como Afganistán, pese a la reducción de la violencia armada directa, continuaron produciéndose graves vulneraciones de derechos humanos de la población.

En cuanto a la **intensidad de los conflictos armados**, durante 2022 se acentuó la tendencia observada en los últimos diez años de incremento de casos graves. Es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas mortales anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si hace una década los conflictos armados de alta intensidad representaban en torno a un cuarto del total de casos, en los últimos años esta proporción se ha ido incrementando hasta representar la mitad de los contextos (ver gráfico 1.4). En el marco del último lustro, los conflictos armados graves supusieron un 40% en los años 2016 y 2017, descendieron entre 2018 y 2019 –a 27% y 32%, respectivamente–, y aumentaron de manera significativa en 2020, cuando alcanzaron el 47%. En 2021, la prevalencia de casos de alta intensidad fue incluso más elevada, llegando al 53% y superando la mitad de los casos por primera vez en la última década. **En 2022 se mantuvo esta tendencia y fueron 17 los conflictos armados de alta intensidad (52% del total de casos).** En

línea con lo observado en 2021, durante 2022 el mayor porcentaje de casos graves se concentró en África. El continente albergó 12 de los 17 conflictos armados de alta intensidad que se identificaron a nivel global, es decir, el 70% del total de casos de alta intensidad. Respecto al número de casos del continente africano, 12 de sus 16 conflictos armados (75%) eran de alta intensidad, ligeramente inferior al 2021 (80%), pero un porcentaje muy superior al observado en años recientes –en 2019, solo un 44% de los conflictos armados africanos eran de intensidad elevada. Después de África, la segunda región en albergar el mayor número de casos de alta intensidad fue Oriente Medio,

Un 30% de los conflictos armados en 2022 registraron mayores niveles de violencia respecto al año anterior

En 2022 el 52% de los conflictos armados fueron de alta intensidad

con un total de tres contextos –6% del total global de casos de alta intensidad, pero 60% de los conflictos de la zona. En Asia y en Europa se identificó un conflicto armado de alta intensidad respectivamente, mientras que en América no se registró casos de este tipo. Los 17 casos de conflictos armados graves en 2022 fueron:

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este/ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Rusia-Ucrania, Iraq, Siria y Yemen.

Cabe destacar que en algunos de los conflictos armados de alta intensidad las hostilidades y múltiples dinámicas de violencia causaron unos niveles de letalidad muy superiores al umbral de mil víctimas mortales anuales. Solo en la invasión de Rusia a Ucrania, el Departamento de Defensa de EEUU estimaba a finales de 2022 en torno a 100.000 militares fallecidos o heridos en cada bando, cifras no verificables.¹¹ Respecto a las víctimas civiles, ACNUDH cifraba en al menos 6.884 personas fallecidas y 10.947 heridas entre el inicio de la invasión y finales de diciembre de 2022, aunque advertía que las cifras reales podían ser considerablemente más elevadas. En el conflicto del Sahel Occidental se incrementó la letalidad significativamente, con en torno a 9.700 víctimas mortales (frente a cerca de 5.300 en 2021). En cambio, en 2022 algunos conflictos que en años anteriores habían tenido niveles muy elevados de víctimas mortales, como Afganistán, Yemen y Siria, asistieron a una reducción de la letalidad, si bien mantuvieron graves niveles de impactos en otras dimensiones de seguridad humana. Así, en Afganistán hubo 3.970 víctimas mortales según datos de ACLED, niveles muy inferiores a las casi 42.000 víctimas mortales en 2021 (y a las 20.000 de 2020 y las 40.000 de 2019). No obstante, durante el año se produjeron múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo contra las mujeres, lo que llevó a defensoras a calificar la situación en Afganistán como apartheid de género. En Yemen el conflicto armado se cobró la vida de al menos 6.721 personas, según datos de ACLED (22.000 fallecidos en 2021, 20.000 en 2020, 23.000 en 2019), descenso debido principalmente a un acuerdo de alto el fuego que estuvo vigente durante parte importante del año. No obstante, más del 80% de la población yemení tenía problemas para satisfacer sus necesidades básicas. En Siria, en 2022 se mantuvo el nivel de letalidad de 2021, de entre 3.800 y 5.700 fallecidos, cifras significativamente más reducidas que en años precedentes (30.000 en 2018; más de 50.000 en 2016 y 2015, respectivamente; más de 70.000

10. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.
11. Lamothe, Dan, Liz Sly y Annabelle Timsit, “‘Well over’ 100,000 Russian troops killed or wounded in Ukraine, U.S. says,” *The Washington Post*, 10 de noviembre de 2022.

en 2014), pero la crisis humanitaria en el país estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra. Otros conflictos armados que destacaron por sus niveles de letalidad en 2022 fueron el de Somalia, con más de 6.400 víctimas mortales (en torno a 3.200 en 2021); Malí, donde se estimaban en torno a 4.842 víctimas mortales ese año (1.887 en 2021); Etiopía (Oromiya), con en torno a 4.500 fallecidos; RDC (este), con más de 5.600 personas fallecidas por la violencia; y la Región Lago Chad (Boko Haram), con 3.782 víctimas mortales, según diversos recuentos.

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2022

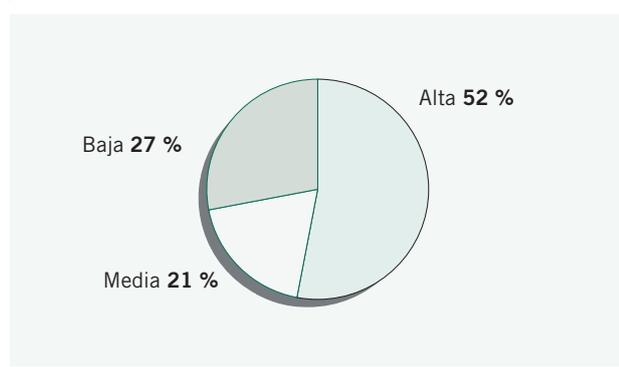


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones

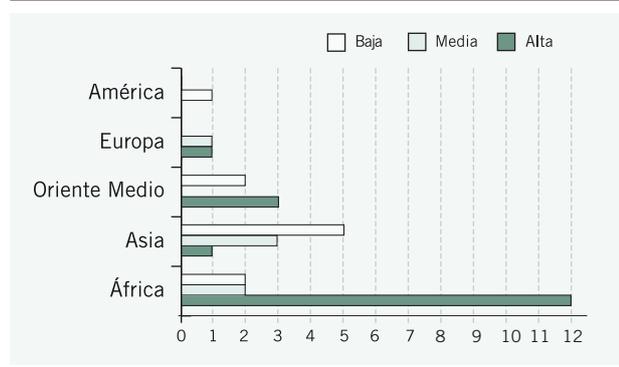


Gráfico 1.4. Proporción de conflictos armados graves en la última década



1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Siguiendo la tónica de años previos, y tal y como vienen denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, en 2022 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. Además, los impactos de los conflictos armados continuaron entrecruzándose con otras crisis, agravando la situación de seguridad humana y de vulneraciones de derechos en contextos de conflicto. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2022 y que analiza los hechos de 2021 -e inicios de 2022-, alertó de desafíos como el conflicto en Ucrania, causante de graves impactos en civiles en Ucrania –en víctimas, desplazamiento forzado, grave destrucción de infraestructura civil, entre otros efectos– e impactos globales, con interrupción de suministros globales y afectaciones sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en otros contextos de conflicto.¹² En su informe, el secretario general también señaló otros desafíos como la combinación entre pandemia de la COVID-19 y conflictos armados, así como también, en diversos países, intersecciones entre conflictos armados y violencia intercomunal, protestas de carácter violento, crimen organizado u otras formas de violencia y crecientes preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y abusos, que dificultaban las distinciones entre conflicto armado y otras formas de violencia. Otras amenazas a la protección de civiles señaladas en el informe incluían los impactos de la crisis climática en los conflictos, en forma de intensificación de inseguridad alimentaria y escalada de crisis humanitarias. El análisis del estado global de la protección de civiles en conflictos armados contenido en el informe pone de manifiesto que los conflictos armados han continuado caracterizándose por altísimos niveles de víctimas mortales civiles, además de numerosas personas heridas y seriamente afectadas por traumas psicológicos; torturas; desapariciones; violencia sexual; destrucción de viviendas, escuelas, mercados, hospitales y otras infraestructuras civiles esenciales como sistemas de agua potable y electricidad.

La evolución de los diversos conflictos armados en 2022 permite confirmar la persistencia de este patrón de abusos sistemáticos contra la población civil. Sobresalieron casos como la invasión de Rusia contra Ucrania, que causó miles de víctimas mortales civiles y en que fuerzas militares rusas llevaron a cabo vulneraciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, deportaciones forzadas -incluyendo de menores-, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, entre otros impactos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició en marzo de 2022 la recopilación de pruebas

12. Secretario general de la ONU, *Protection of civilians in armed conflicts*, S/2022/381, 10 de mayo de 2022.

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo la tendencia registrada en períodos precedentes, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 16 casos, que representan el 49% del total. • Se redujo ligeramente el porcentaje de casos de conflicto armado de alta intensidad en el continente, pasando de representar el 80% en 2021 (12 de los 15 casos de esa región en ese año) al 75% (12 de los 16 casos). Siguió siendo una cifra muy por encima del 44% que representaban en 2016 (siete de los 16 casos de entonces). • Solo dos casos asistieron a una reducción de las hostilidades, mientras que un 50% de los conflictos se mantuvieron en niveles similares y un 37,5% afrontaron una escalada de la violencia. Uno de esos dos casos de reducción de violencia fue el conflicto en Etiopía (Tigré), guerra que entre 2020 y 2021 fue escenario de graves vulneraciones de derechos humanos. • Todos los conflictos armados de África fueron internos internacionalizados, a excepción del que transcurre en la Región Sahel Occidental, que se considera de carácter internacional y del conflicto en Etiopía (Oromiya), de carácter interno. • En el trasfondo de los conflictos armados en África se identifican múltiples causas, entre las cuales destacan las disputas en torno a demandas identitarias, elemento presente en 10 de los 16 casos (63%). Sobresalió también la competencia por recursos, causa presente en nueve de los conflictos (56% del total de casos de la región).
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. • El inicio de negociaciones de paz con el ELN, así como acercamientos con otros grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro llevaron a una reducción de la violencia en el país. No obstante, se siguieron registrando enfrentamientos y otros actos de violencia, como asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, y se alertó de un deterioro de la situación humanitaria. • Si bien en América solo se contabilizó un conflicto armado, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Después de África, el continente concentró el mayor número de conflictos armados, albergando nueve casos, es decir 27% del total global. • En materia de intensidad, sobresalió el conflicto armado en Myanmar. En 2022 se intensificaron los enfrentamientos tanto entre el Ejército y varios grupos armados étnicos, como entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados surgidos tras el golpe de Estado militar de 2021, y se dobló el número de personas desplazadas internas. • En continuidad con el año anterior, los conflictos Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Myanmar evolucionaron hacia mayores niveles de violencia y hostilidades. El caso de Afganistán, que en 2021 fue escenario de una escalada de violencia, en 2022 se redujo la violencia armada, pero se asistió a la consolidación del poder talibán y de graves vulneraciones de derechos humanos, incluyendo de las mujeres. A excepción de América, Asia fue la región con mayor porcentaje regional de casos que asistieron a una reducción de la violencia (44% de los casos en la zona). • Asia continuó siendo la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno, a excepción del conflicto de Etiopía (Oromiya) en África. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región. • En términos de causas, en Asia se observaron porcentajes similares de presencia de causas relativas a disputas en torno al sistema, políticas del gobierno, demandas de autogobierno, o identidad, presentes alguna de ellas en el 56% de los casos.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó dos conflictos armados, que representaron un 6% de los casos a nivel mundial. • La invasión de Rusia a Ucrania desencadenó uno de los dos conflictos armados internacionales en el mundo en 2022 así como un escenario de violencia de alta intensidad, una grave crisis humanitaria y repercusiones globales en múltiples ámbitos, como alza global de precios de combustible y alimentos e inseguridad alimentaria. • Si bien en Europa solo se contabilizaron dos conflictos armados, la región asistió en 2022 a una mayor militarización y gasto militar, tendencia previa a la invasión rusa pero acentuada desde entonces.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la región se contabilizaron cinco conflictos armados, que representaron un 15% del total de casos a nivel mundial. En cifras totales la región se mantuvo en los mismos niveles que en 2021. • Oriente Medio fue la segunda zona del mundo, después de África, en la que se produjeron más conflictos armados de alta intensidad. Más de la mitad de los casos de la región –tres de cinco, equivalentes a 60%– fueron de intensidad elevada: Iraq, Siria y Yemen. En esos tres conflictos, los niveles de letalidad fueron significativamente más reducidos en 2022 que en años anteriores, pero fueron escenarios que continuaron afectados por graves impactos en seguridad humana. • La gran mayoría de conflictos en la región (un 80%) eran de naturaleza interna internacionalizada, con participación de actores externos, lo que incrementaba la complejidad de las disputas y las perspectivas de resolución, como en Siria y Yemen. • Los conflictos de la región fueron multicausales, con una presencia destacada de casos donde las motivaciones estaban vinculadas –junto a otros factores– a la búsqueda de un cambio de sistema (80%) o a demandas identitarias (80%). En tres de los casos (60%), las disputas en torno a políticas internas o internacionales eran una de las causas principales. En dos de los casos (40%) había motivaciones vinculadas al control de recursos y territorios.

para una investigación sobre alegaciones pasadas y presentes de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en Ucrania desde 2013.¹³ Por su parte,

el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2022 una comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario

13. En marzo de 2023 -fecha fuera del periodo de análisis de este capítulo-, la CPI emitió una orden internacional de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra por la deportación de menores.

en Ucrania. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron y documentaron graves vulneraciones de los derechos humanos por las fuerzas rusas, constitutivas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Muchos otros conflictos armados en 2022 fueron también escenario de graves ataques contra civiles. Entre otros casos, en Sahel Occidental se asistió a un incremento de los ataques contra civiles por parte de las fuerzas de seguridad, el Grupo Wagner y los dos principales grupos yihadistas y se registraron varias masacres. En el contexto de escalada en la región de Oromiya en Etiopía, tanto las Fuerzas Armadas apoyadas como las milicias Fano y el grupo armado OLA fueron acusados de ataques deliberados contra población civil, atrapada entre el fuego cruzado y objeto de ejecuciones extrajudiciales y en masa, detenciones arbitrarias y secuestros, entre otras formas de violencia en base a criterios étnicos o a opiniones políticas. Otros conflictos escenarios de masacres y matanzas de civiles fueron RDC (este), Colombia y Myanmar, entre otros.

El uso de armas explosivas tuvo un especial impacto en la población civil. Estudios recientes apuntan a que las víctimas civiles a causa del uso de este tipo de armamento en áreas pobladas representaron el 89% del total de víctimas de armas explosivas en 2020.¹⁴ Ejemplos de ello fueron los casos de Somalia y de RDC (este-ADF), donde los grupos armados incrementaron el uso de artefactos explosivos contra la población civil en entornos urbanos.

Como parte de los ataques contra población e infraestructural civil, durante 2022 continuaron las agresiones y amenazas contra personal médico, así como los ataques contra infraestructuras hospitalarias, prácticas que se consideran atentatorias contra el derecho internacional humanitario. Según datos de la coalición Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC), en 2022 se produjeron al menos 1.892 ataques en este ámbito en todo el mundo, que incluyeron 215 personas trabajadoras sanitarias fallecidas, 287 secuestradas y 628 instalaciones dañadas. Más de un tercio de los ataques al ámbito sanitario en 2022 se produjeron en Ucrania en el marco de la invasión rusa. A su vez, una investigación conjunta de diversas organizaciones identificó 707 ataques contra hospitales, trabajadores sanitarios y otras infraestructuras médicas en Ucrania entre el inicio de la invasión y finales de diciembre.¹⁵ La investigación señala una media de dos ataques diarios contra el ámbito sanitario en ese país y apunta a

ataques deliberados e indiscriminados de Rusia contra el sistema sanitario de Ucrania como parte de ataques más amplios contra la población e infraestructura civil.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o empeorando situaciones de crisis humanitarias, en un contexto agravado por otros condicionantes como la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, la crisis económica o la emergencia climática. Las necesidades humanitarias globales continuaron incrementándose, alcanzándose un umbral récord. Según el informe anual Panorama Global Humanitario 2023,¹⁶ de la agencia humanitaria de Naciones Unidas OCHA, una de cada 23 personas en el mundo necesita asistencia humanitaria y se preveía para 2023 una cifra récord de 339 millones de personas que necesitarán asistencia humanitaria, en contraste con los 274 millones de personas a inicios de 2022. Como parte del preocupante panorama humanitario, OCHA alertó de que se estaba desarrollando la mayor crisis alimentaria global de la historia moderna, causada por conflictos, shocks climáticos y la amenaza de recesión global. Según el informe, se asiste a una escalada de inseguridad global, con al menos 222 millones de personas en 53 países a finales de 2022 en situación de grave inseguridad alimentaria. OCHA advirtió de diferentes tendencias, incluyendo el impacto del

cambio climático en las crisis humanitarias. De los 15 países más vulnerables a la crisis climática, 12 eran escenario de respuestas humanitarias. Durante 2022 muchos escenarios de conflicto continuaron agravando situaciones de emergencia humanitaria. Uno de los contextos que sobresalió durante el año fue la región de Sahel Occidental, con impactos combinados de inestabilidad, violencia, desplazamientos forzados, pérdida de medios de subsistencia, inseguridad alimentaria, cambio climático y enfermedades. La OMS estimaba que 37,7 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2023 en esa región, y la considerada una de las crisis de más rápido crecimiento y la más olvidada. En Ucrania, se asistió a una crisis humanitaria de rápida escalada, con 3 millones de personas al inicio del año en situación de necesidad de asistencia humanitaria y protección y cerca de 17,7 millones de personas al finalizar el año. En Yemen, 17 millones de personas hacían frente a inseguridad alimentaria al finalizar el año y más del 80% de la población tenía problemas para satisfacer las necesidades básicas, incluyendo alimentación, agua potable y acceso a servicios de salud. En Siria, 12 millones de personas afrontaban inseguridad alimentaria a finales de 2022 y se estimaba que en 2023 el 70%

OCHA alertó del desarrollo de la mayor crisis alimentaria global de la historia moderna, causada por conflictos, shocks climáticos y la amenaza de recesión global, así como de una escalada de la inseguridad global

14. Dathan, Jennifer, *Explosive Violence Monitor 2020*, Action on Armed Violence, 2021.

15. De Vos, Christian et al., *Destruction and Devastation One Year of Russia's Assault on Ukraine's Health Care System*, eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Media Initiative for Human Rights, Physicians for Human Rights y Ukrainian Healthcare Center, febrero de 2023.

16. OCHA, *Global Humanitarian Overview 2023*, diciembre de 2022.

de la población del país necesitaría ayuda humanitaria y que el 90% de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza. En Pakistán, el impacto de las graves inundaciones provocadas por el cambio climático se sumó a las consecuencias de la violencia armada. En RDC, 26,4 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave en enero de 2023.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En lo que respecta a los efectos en los niños y las niñas, el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado a mediados de 2022 documentó casi 23.982 violaciones graves contra menores (de las cuales 22.645 correspondían a 2021 y otras 1.337 fueron cometidas previamente, pero solo se pudieron documentar en 2021).¹⁷ El informe alertó de que factores como el agravamiento de los conflictos armados, la proliferación de actores armados, el uso de minas, artefactos explosivos improvisados y armas explosivas en zonas pobladas, la intensificación de crisis humanitarias y vulneraciones del DIH y del derecho internacional de derechos humanos tuvieron impactos graves en la protección de menores. El informe, que cubre los hechos de 2021, señala en particular el impacto en menores de la violencia y conflictos de las regiones del Sahel central y cuenca del lago Chad, así como de los golpes de Estado y toma de poder por la fuerza en Afganistán, Burkina Faso, Malí, Myanmar y Sudán. Asimismo, afirma que los mayores niveles de violaciones graves tuvieron lugar en Afganistán, Israel y Palestina, Siria, RDC, Somalia y Yemen. Entre los indicadores preocupantes, señala el incremento de un 20% en el número de secuestros, el aumento del 20% de la violencia sexual contra menores y la subida de un 5% de ataques contra escuelas y hospitales. El 55% de las violaciones de derechos documentadas estuvieron perpetradas por grupos armados no estatales, un 25% por fuerzas estatales, mientras las restantes se debieron a fuego cruzado, artefactos explosivos improvisados, restos explosivos de guerra y minas terrestres o cometidas por autores no identificados. Los datos desagregados por género mostraban que la mayoría de menores afectados por violaciones graves de derechos eran varones (70%) y que estaban en descenso, mientras que se identificó un incremento en las violaciones contra niñas que implicaban fallecimiento o mutilación, secuestro y violencia sexual, con especial repercusión en la cuenca del lago Chad.

Los datos sobre los conflictos armados en 2022 del informe *Alerta 2023!* apuntan a una persistencia de estos abusos, con ejemplos en diversos contextos. En

Afganistán el régimen talibán fue responsable en 2022 de múltiples violaciones de derechos humanos de las niñas, como la prohibición del derecho a la educación. Durante el año la violencia armada en ese país continuó afectando a menores, incluyendo un atentado contra un centro educativo en un barrio de mayoría de población hazara en el que murieron 53 personas, la mayoría niñas y mujeres jóvenes estudiantes. En Camerún, el conflicto armado ha privado a unos 600.000 menores de la escolarización y durante 2022 actores armados secesionistas continuaron atacando escuelas, a estudiantes y a profesorado. Por otra parte, las políticas de Israel de expulsión de población de Palestina, demolición de viviendas y construcción de colonias siguieron impactando en menores palestinos, incluyendo en forma de desplazamiento forzado. En ese escenario, menores palestinos se vieron también afectados por prácticas de detención. Hasta mediados de diciembre de 2022, Israel había detenido a 452 menores palestinos. En Siria, aunque las cifras de letalidad en 2022 se redujeron de forma significativa, continuaron produciéndose víctimas mortales de menores, con 319 menores fallecidos en 2022 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, a lo que se añade una multiplicidad de vulneraciones de derechos humanos de niños y niñas en el país.

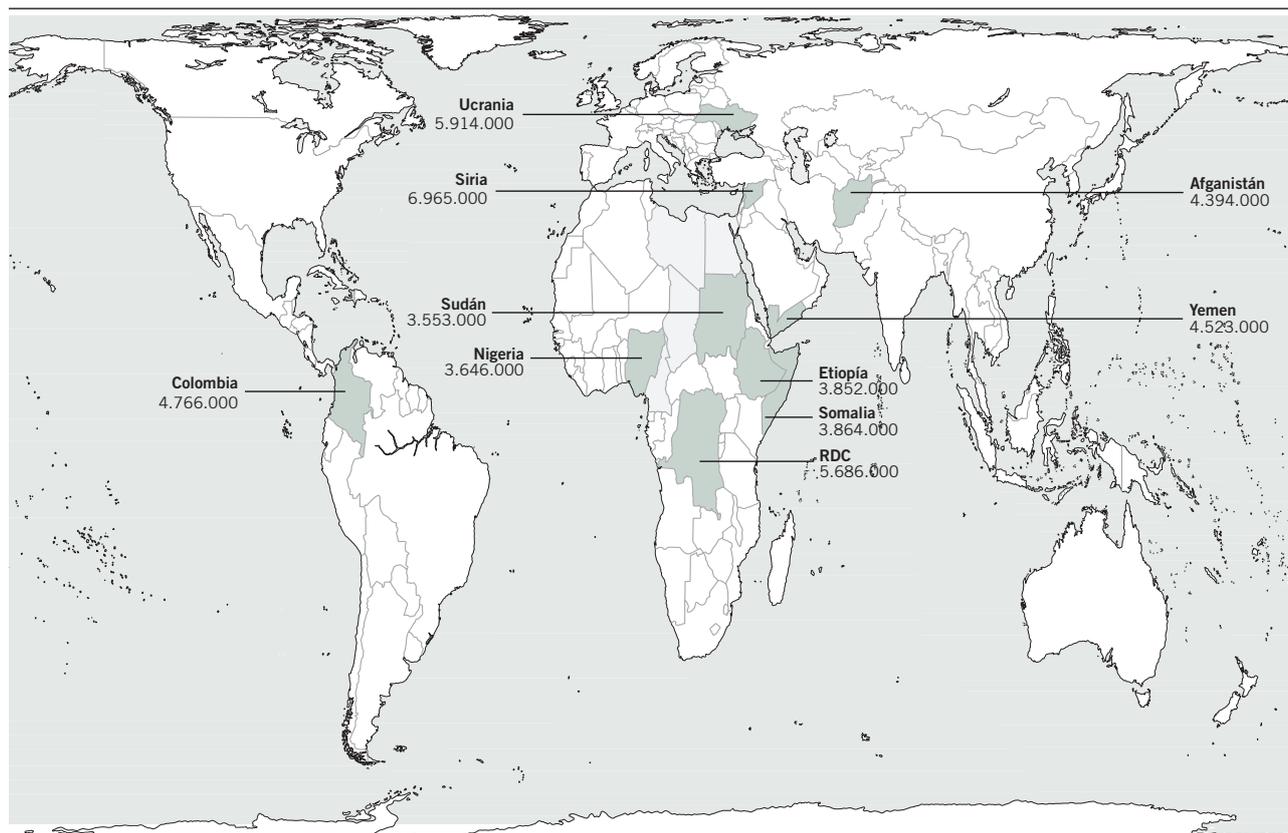
En numerosos conflictos armados se perpetró violencia sexual. El informe anual de 2022 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armado en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.¹⁸ La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales (37) y otros 12 eran actores armados gubernamentales, en un total de diez contextos (RCA, RDC, Iraq, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Nigeria). Según Naciones Unidas, el 70% de los actores en conflicto señalados eran considerados perpetradores persistentes, debido a su inclusión en el anexo de Naciones Unidas durante cinco o más años. Más allá del anexo, el informe anual analizaba también la evolución de la problemática del uso de violencia sexual en los escenarios de conflicto de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen; abordaba cuestiones relativas a crímenes de violencia sexual en los contextos posbélicos de Balcanes occidentales, Nepal y Sri Lanka; así como abordaba otros contextos de preocupación en relación a la violencia sexual (Etiopía y Nigeria). En conjunto, el informe señaló cómo la intersección de crisis humanitarias,

RDC, la Región de Sahel Occidental, Somalia, Pakistán, Ucrania, Yemen y Siria, entre muchos otros, fueron escenario de graves crisis humanitarias en 2022

17. Secretario general de la ONU, *Los niños y los conflictos armados*, A/76/871-S/2022/493, 23 de junio de 2022.

18. Secretario general de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos*, S/2022/272, 29 de marzo de 2022.

Mapa 1.2. Los diez países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflicto y violencia en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre, *Global Report on Internal Displacement 2023. Internal displacement and food security*, IDMC, 2023.

de seguridad y políticas intensificaba las causas de fondo de la violencia sexual vinculada a los conflictos armados, incluyendo la militarización, la proliferación de armas, la impunidad, el colapso institucional, la desigualdad de género estructural y las normas sociales dañinas. En cuanto al transcurso de los conflictos armados en 2022, se continuó cometiendo violencia sexual en diversos conflictos. Sobresalió el caso de Ucrania, donde las fuerzas rusas llevaron a cabo violencia sexual como arma de guerra en áreas bajo ocupación militar en el marco de la invasión. También en el conflicto en la región de Tigré la violencia sexual tuvo un impacto especialmente grave. En Camerún, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que tanto las fuerzas de seguridad como los combatientes secesionistas habían cometido graves abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, violaciones, secuestros y torturas.

Entre las repercusiones de los conflictos armados también cabe mencionar el desplazamiento forzado. Según los datos de ACNUR, este fenómeno continuó intensificándose y batiendo cifras récord. El informe del primer semestre de 2022 de ACNUR cifraba en

Durante el año 2022, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas

32,5 millones de personas la población en situación de refugio y en 53,1 millones desplazadas internas (datos de IDMC referidos a finales de 2021). El 76% de la población refugiada y población en necesidad de protección internacional procedía de seis países: Siria (6,8 millones de personas), Venezuela (5,6), Ucrania (5,4), Afganistán (2,8), Sudán del Sur (2,4) y Myanmar (1,2); y el 69% vivía en países vecinos a sus países de origen, según datos de ACNUR. En ese primer semestre de 2022 se produjeron 1,1 millones de nuevas solicitudes de asilo. En todo caso, el cómputo total de 2022 arrojará una cifra mayor de desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Así, durante el año numerosos conflictos fueron escenario de graves situaciones de desplazamiento forzado. Entre otras, en relación a la crisis de Ucrania, a finales de 2022 se estimaba en 5,9 los millones de personas desplazadas internas, 7,9 millones las personas registradas como refugiadas en Europa y en 4,9 millones las personas refugiadas de Ucrania registradas para recibir protección temporal en Europa o en otros mecanismos de protección nacional similares. Ucrania se situaría así como principal país emisor de población refugiada a nivel global, según los datos de ACNUR,

desplazando a Siria que ha ubicado esta posición en los últimos años. En la región de Sahel Occidental, 2,9 millones de personas estaban desplazadas por la violencia, incluyendo desplazamiento interno y externo. En Etiopía a comienzos de 2023 se cifraban en 2,7 millones de personas las desplazadas internas, cifra que no incluía la población desplazada de la región de Tigré ni tampoco zonas de la región de Afar, debido a los obstáculos de acceso. En el noreste de Nigeria, el país más afectado por las acciones de las facciones de Boko Haram, se estimaba en 2,2 millones las personas desplazadas internas por la violencia, cifra que en conjunto del país ascendía a 3,2 millones. En Somalia, la población desplazada interna como consecuencia del conflicto, la inseguridad y los efectos del cambio climático alcanzaba los tres millones de personas. En RDC había 5,76 millones de personas desplazadas internas en 2022, cifra ligeramente superior a los 5,6 de 2021 y que incluía a unos 3 millones de menores. En ese país, entre marzo y diciembre se desplazaron más de 510.000 personas dentro del país y otras 7.000 buscaron refugio en Uganda. En Sudán a mediados de 2022 se estimaba en más de 3 millones las personas desplazadas internas y en 844.260 las refugiadas fuera del país a causa de la violencia –a lo que habría que añadir el millón de personas refugiadas que el país acoge provenientes de las crisis en Sudán del Sur, RDC o Etiopía, entre otros. En el continente asiático sobresalieron, entre otros casos, Myanmar, donde a finales de 2022 había 1,5 millones de personas desplazadas internas, más del doble que en 2021. En Pakistán, al escenario de violencia y crisis política y económica se sumaron graves inundaciones causadas por el cambio climático que afectaron a millones de personas y que llevaron al desplazamiento a casi ocho millones de personas.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP)—anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

El año estuvo caracterizado por un aumento de los episodios violentos contra la población civil en la provincia de Cabo Delgado, aunque en términos comparativos con el año anterior se produjo un ligero descenso de la mortalidad provocada por la violencia armada. Según datos de ACLED, en 2022 se registraron

905 muertes en el norte del país, concentradas en la provincia de Cabo Delgado, lo que supone un ligero descenso frente a las muertes producidas por la violencia en 2021 (1.067).¹⁹ Sin embargo, el Africa Center for Strategic Studies (ACSS) destacó que el número de incidentes violentos vinculados a grupos yihadistas en la provincia aumentó en un 29% en 2022 (437), volviendo a los niveles de 2020 antes de la intervención de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) y las fuerzas de Rwanda. Estos episodios se distinguieron por los altos niveles de violencia contra la población civil, cuyas muertes aumentaron en un 57% en relación con el año anterior. La violencia contra civiles supuso el 66% de todos los eventos violentos en el norte de Mozambique, que según ACSS representó el mayor porcentaje registrado en el continente.²⁰ Desde el inicio de la violencia en la región a finales de 2017, se estima que el conflicto se ha cobrado la vida de unas 4.400 personas. Cabo Delgado sigue siendo uno de los cinco epicentros de la violencia perpetrada por grupos con agendas yihadistas en África, que también incluyen el Sahel, Somalia, la cuenca del Lago Chad y el norte de África. Como resultado del aumento y expansión de la violencia contra la población civil, a finales de 2022 más de un millón de personas se encontraban desplazadas internamente en las cuatro provincias norteñas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula y Zambézia.

Los escenarios más significativos registrados durante el año estuvieron caracterizados por las acciones armadas de grupos afiliados al Estado Islámico dirigidas contra la población civil y las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales desplegadas en el país desde mediados de 2021; las acciones contrainsurgentes llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas mozambiqueñas (FADM), las fuerzas desplegadas ruandesas y Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) en Cabo Delgado de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC); así como por las operaciones contrainsurgentes de las milicias locales de autodefensa, conocidas localmente como “Naparama”. En relación con las primeras, durante todo el año se mantuvieron las acciones armadas de grupos vinculados con el Estado Islámico en gran parte de la provincia de Cabo Delgado (distritos de Meluco, Maconia, Nangade, Namuno), que pusieron en entredicho la narrativa de “normalización” de la situación de seguridad del Gobierno. Si bien estas acciones habían sido reivindicadas por el autodenominado Estado Islámico en la Provincia de África Central (ISCAP) –una rama de ISIS que incluye

también a RDCongo y Uganda– en mayo ISIS reivindicó los ataques refiriéndose a Mozambique como una rama separada “Wilayah de Mozambique” (Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP), lo cual generó dudas sobre si se ha otorgado un estatus independiente, tal y como sucedió en marzo con su grupo afiliado del Sahel.

El Gobierno mozambiqueño mantuvo durante el año una narrativa de control de la situación en Cabo Delgado, pero muchos analistas locales e internacionales sostuvieron que se está lejos del final del conflicto

De manera paralela, durante el año las fuerzas ruandesas y de la SAMIM mantuvieron y ampliaron sus operaciones contra la insurgencia. El 12 de abril los jefes de Estado de la SADC, los representantes de los países que apoyan a SAMIM y el presidente mozambique Filipe Nyusi, acordaron extender el mandato de SAMIM y aprobaron la transición de la misión de “despliegue rápido” a una fuerza “multidimensional” que asume mayores responsabilidades de mantenimiento de la paz. Sudáfrica también extendió su propio mandato de tropas para la intervención de la SADC por 12 meses, mientras que Rwanda amplió sus tropas en el país, así como su área de operación en la provincia de Cabo Delgado. En agosto se acordó una nueva ampliación del mandato de SAMIM por 12 meses. A finales de año se contabilizaban en Cabo Delgado alrededor de 4.500 militares y policías extranjeros, de los cuales alrededor de 2.000 han sido desplegados por SAMIM –más de la mitad de ellos de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica– y el resto procede de Rwanda.

Finalmente, el año también se caracterizó por el surgimiento de un nuevo actor en el conflicto, las milicias locales conocidas como “Naparama”. El resurgimiento de estas milicias, que habían sido parte del conflicto armado en el país en la década de los ochenta, se produjo después de que la secretaría del FRELIMO en Cabo Delgado las animase a tomar un papel activo en el conflicto, instalando puestos de control en las principales vías de acceso y realizando operativos de patrullaje. Para posibilitar su operacionalización, el Gobierno mozambiqueño propuso su legalización como una fuerza temporal y de transición para ser utilizada en el contexto del conflicto de Cabo Delgado, aprobando en el Parlamento la modificación del artículo 7 de la Ley de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de Mozambique con el fin de incorporar las fuerzas locales a la estructura de las FADM. La aprobación de la ley no contó con el apoyo de los partidos de oposición RENAMO y Movimiento Democrático de Mozambique (MDM). La mayoría de los miembros de estas milicias están afiliados a Asociación de Combatientes de la Lucha de Liberación Nacional (ACLIN), una organización vinculada al FRELIMO que reúne a los veteranos de la guerra de liberación de Mozambique.

19. ACLED, [Dashboard](#). [Consultado el 6 de enero de 2023].

20. Africa Center for Strategic Studies, “Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent”, 6 de febrero de 2023.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

El conflicto armado que enfrenta a los cuerpos de seguridad del Estado y a los movimientos político-

militares secesionistas desde 2017 en las dos provincias anglófonas del suroeste del país continuó activo y, según el **International Crisis Group**, ya ha causado la muerte de unas 6.000 personas. Además, ha provocado el desplazamiento forzado de más de 710.000 personas, cifra que incluye más de 87.000 personas refugiadas en Nigeria, según datos de ACNUR de diciembre de 2022. Según la ONU, 2,2 millones de los cuatro millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitaban asistencia humanitaria durante 2022 mientras que unos 600.000 menores se han visto privados de la escolarización a causa del conflicto. Los grupos armados cometieron en 2022 algunos ataques en las provincias aledañas de Litoral, Centro y Oeste, con el objetivo de ampliar el conflicto más allá de las dos regiones secesionistas. Del balance del año, cabe destacar especialmente el incremento de la tensión y la violencia en vísperas del 20 de mayo –Día Nacional, considerado un aniversario clave que marca el inicio del conflicto cuando el referéndum constitucional derogó los estados federales de Camerún Occidental (anglófono) y Camerún Oriental (francófono) en 1972–, así como en vísperas del 1 de octubre – aniversario de la autoproclamada República Federal de Ambazonia. En esta última fecha los movimientos separatistas anglófonos realizaron marchas armadas en las provincias de Noroeste y Suroeste, y las fuerzas gubernamentales el 1 al 2 de octubre llevaron a cabo acciones punitivas tras las manifestaciones a favor de la independencia en diversas localidades, incendiando casas y arrestando a decenas de civiles.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que tanto las fuerzas de seguridad como los combatientes secesionistas habían cometido graves abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, violaciones, secuestros y torturas.²¹ Los movimientos secesionistas continuaron atacando escuelas, así como a estudiantes y profesorado, destruyendo edificios y privando a cientos de miles de menores de su derecho a la educación. En febrero, a raíz de un ataque al dormitorio de una escuela secundaria de niñas en Okoyong, Mamfe (provincia de Suroeste), diplomáticos internacionales condenaron conjuntamente el ataque y parte del liderazgo político-militar secesionista, el Ambazonian Governing Council (AGovC), pidió el mismo día que cesaran los ataques a las escuelas. Meses después el hospital del distrito de Mamfe fue destruido como consecuencia de un ataque de las milicias secesionistas. Una de las pocas organizaciones humanitarias todavía presentes en el territorio, Médicos Sin Fronteras, confirmó el 29 de marzo que abandonaba la región Suroeste, citando acoso del Gobierno. Fuentes locales advirtieron, además, que la dinámica de la violencia estaba cambiando en los últimos tiempos con el crecimiento de una lucrativa economía de guerra,

21. Human Rights Watch, “Cameroon, Events of 2022”, *World Report 2023*, HRW, 13 de enero de 2023.

que generalmente involucra secuestros y otras formas de extorsión de la población civil. El botín político y económico de la guerra ha reducido el incentivo para encontrar un arreglo negociado, según destacaban análisis.²² En paralelo, aumentaron las deserciones entre las fuerzas de seguridad; en particular, la policía anunció el 5 y el 16 de febrero que un total de doce funcionarios no se presentaron en diferentes partes de la provincia de Noroeste. Como en años anteriores, diversos líderes insurgentes y comandantes de milicias fueron ejecutados durante el año, como el general Ebube en febrero en la aldea de Alabukam (Noroeste), o el “Mariscal de campo” Lekeaka Olivier Fongunueh en julio, que fue exhibido por los cuerpos de seguridad en la ciudad de Kumba. Cabe destacar también la muerte en julio del comandante del batallón de intervención rápida de las fuerzas especiales, mayor Eyenga Essama, durante enfrentamientos en Kumba. Essama es el oficial militar de mayor rango que ha muerto en batalla desde el comienzo del conflicto en 2017. El ministro de Defensa, Joseph Beti Assomo, el 19 de julio condenó los abusos de los militares contra los civiles anglófonos y ordenó a los soldados que cesaran las violaciones de los derechos humanos.

En el ámbito político, cabe destacar que continuaron las especulaciones en torno a la salud y a la sucesión del octogenario Paul Biya, que en mayo realizó un viaje privado de cinco días a Suiza. En medio del 89º aniversario de Biya el 13 de febrero, surgieron especulaciones sobre los planes de sucesión, incluido el creciente poder de la primera dama Chantal Biya. En paralelo, se realizaron celebraciones y ceremonias oficiales en noviembre en conmemoración de los 40 años de Biya en el poder, actos en los que se puso de manifiesto los planes para que su hijo Franck Biya le sucediera. Las autoridades tradicionales, los funcionarios del partido gobernante y los residentes de la región norte, un bastión del partido gobernante, recibieron con honores el 6 de noviembre a su hijo Franck.

En noviembre el grupo de trabajo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias pidió la liberación “inmediata e incondicional” del líder separatista Sisiku Julius Ayuk Tabe y otros nueve prisioneros, afirmando que su arresto en Nigeria en 2018 fue arbitrario. Como muestra de reconocimiento de la grave situación que padecen las regiones anglófonas, y después de años de campañas de activistas y decenas de grupos de la sociedad civil, el 15 de abril la administración estadounidense otorgó el Estatus de Protección Temporal a todos los inmigrantes cameruneses, permitiéndoles una estadía de 18 meses hasta que se determine el estatus individual.

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendida las dinámicas de la misma a la región central del país (Mopti).

Durante el año Malí padeció un nuevo deterioro de la situación de seguridad en medio del incremento de las tensiones entre la Junta Militar maliense y el complejo militar regional-internacional de seguridad desplegado

22. R. Maxwell Bonne, “Why the spoils of war may outweigh incentives for peace in Cameroon”, *The New Humanitarian*, 19 de julio de 2022.

en el país y conformado por misiones encabezadas por Francia, ONU, UE o el Sahel G-5. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el 2022 se registraron 1.340 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) en todo el país, concentrados en las regiones norte y centro, que dejaron un balance de 4.842 personas fallecidas.²³ Estos datos representan un aumento significativo de la violencia con relación al año anterior (2021) cuando se registraron 1.887 muertes, situando el año como uno de los más intensos desde el origen del conflicto en 2012. El aumento de las víctimas mortales se debió a dos factores. Por un lado, aumentaron los ataques mortales contra civiles perpetrados por las fuerzas de seguridad malienses, junto con miembros del Grupo Wagner, como parte de una campaña antiterrorista sin precedentes. Por otro, también hubo un aumento de casi cuatro veces de los ataques contra civiles por parte de los dos principales grupos yihadistas activos en la región: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS o ISWAP). Estos hechos generaron que Malí pasara del séptimo al segundo lugar en la lista de países con los niveles más altos de ataques contra civiles, solo detrás de la República Democrática del Congo.²⁴

Malí se convirtió en el segundo país del mundo con los niveles más altos de ataques dirigidos contra población civil

El aumento de la inestabilidad y la inseguridad siguió forzando el desplazamiento de miles de personas e incrementando la crisis humanitaria. Según datos del secretario general de la ONU sobre la situación humanitaria en el país, el número de personas desplazadas internas se situó en octubre en las 442.620; 1.950 escuelas permanecieron cerradas, afectando a más de 587.000 niños y niñas, particularmente en la región de Mopti; 5,3 millones de personas necesitaban atención humanitaria y solo se había logrado el 34% de la financiación necesaria; y más de 2 millones de menores de 5 años padecían malnutrición aguda. En relación a la población refugiada en los países vecinos, ACNUR cifró a mediados de 2022 en 200.471 el número de personas que habían buscado refugio fuera del país, principalmente en Burkina Faso y Mauritania.

Con relación al desarrollo de **los escenarios de conflictividad armada, la situación siguió siendo compleja especialmente en el norte y centro del país, así como en la zona de la triple frontera que comparte con Burkina Faso y Níger.**²⁵ Entre los eventos más destacados del año, en el norte de Malí, en las regiones de Ménaka y Gao, en los primeros meses de 2022 organizaciones yihadistas provocaron más asesinatos de civiles que en cualquier año anterior del conflicto. En respuesta, el Ejército maliense, juntamente con organizaciones signatarias del acuerdo

de paz de 2015, lanzaron entre el 4 y 5 de junio una ofensiva en Ménaka para tratar de recuperar la ciudad estratégica de Andéramboukane en manos del ISGS. Los enfrentamientos dejaron al menos 115 personas asesinadas, entre ellos 90 presuntos yihadistas. El 12 de junio las fuerzas francesas de Barkhane arrestaron al líder del ISGS, Oumeya Ould Albakaye, en el distrito de Ansongo de la región de Gao. El 7 de agosto un ataque del ISGS en la ciudad de Tessit (región de Gao) dejó 42 soldados malienses muertos, en lo que fue el ataque más mortífero contra militares desde 2019. En julio, grupos afiliados a JNIM extendieron sus operaciones lanzando diversos ataques cerca de la capital Bamako. En la región central de Malí (Mopti y Ségou) los grupos yihadistas siguieron aprovechando los conflictos intercomunitarios para ampliar su influencia y lograr nuevos reclutamientos. El 4 de marzo se registró el ataque más mortífero contra militares en meses, con al menos 27 soldados asesinados en una base militar en la ciudad de Mondoro, cerca de la frontera con Burkina Faso. Durante el año también se registraron diversas masacres contra la población civil, entre las cuales destacaron la registrada a finales de marzo en la ciudad de Morra (Mopti), donde el Ejército afirmó haber matado a más de 200 yihadistas en una operación conjunta con fuerzas rusas –hecho que fue desmentido por organizaciones de derechos humanos, que acusaron al Gobierno de haber ejecutado sumariamente a 300 civiles–; o la producida el 18 de junio en Diallassagou (Mopti), donde 132 personas fueron asesinadas en un ataque atribuido a Katiba Macina.

La crisis de seguridad volvió a coincidir con el **deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus aliados tradicionales de seguridad**, en parte motivado por la decisión de asociarse con la empresa rusa de seguridad privada Grupo Wagner.²⁶ Estas desavenencias impactaron profundamente en el complejo de seguridad internacional, traducándose, por ejemplo, en la finalización de la misión antiterrorista Barkhane en el país; el anuncio de la retirada de diferentes países europeos de sus tropas en la operación europea Takouba y de la suspensión por parte de la UE de las misiones EUCAP y EUTM en Malí tras la masacre de Mopti atribuida al Ejército y fuerzas rusas en abril; el bloqueo por parte de las autoridades malienses a las operaciones de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y la retira de tropas de diferentes países de la misma (Costa de Marfil, Alemania o Reino Unido); o la retirada de Malí de todos los órganos e instancias del G5 Sahel, incluida la fuerza militar conjunta. En respuesta a estos desafíos, y particularmente a los

23. ACLED, *Dashboard*. [Consultado el 6 de febrero de 2023].

24. ACLED, "Year in Review. Global Disorder in 2022. Escalating Violence and the Worsening Civilian Burden", ACLED, enero de 2023.

25. Véase resumen de Sahel Occidental en este capítulo.

26. Véase resumen de Malí en el capítulo 2 (Tensiones)

que atañen al mandato de la MINUSMA, el secretario general de la ONU presentó al Consejo de Seguridad -que el 29 de junio había prorrogado su mandato un año más (resolución 2640)- diversas opciones para su reconfiguración: 1) aumentar el personal uniformado -actualmente fijado en 13.289 militares y 1.920 policías- con entre 3.680 o 2.000 efectivos adicionales; 2) consolidar la presencia de la misión para optimizar el uso de sus recursos en la implementación más efectiva de las prioridades estratégicas de MINUSMA, centrándose principalmente en apoyar la implementación del acuerdo de paz concentrando sus fuerzas en el norte de Malí, reduciendo el personal en el centro; 3) retirar al personal uniformado y convertir a la MINUSMA en una misión política especial con sede en Bamako.²⁷

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo -cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”- se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la cuenca del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto

de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province (ISWAP), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

Durante el año continuaron las actividades de las diferentes facciones de Boko Haram (BH) en la región de la cuenca del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria, la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad, a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos desplazamientos de población y violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados implicados, tal y como señalaron diferentes organismos de defensa de los derechos humanos. **Además, se constataron diferentes enfrentamientos y acciones de represalia entre actores armados insurgentes.** En paralelo, cabe destacar, en el caso de Nigeria, **la ampliación del radio de acción de los grupos insurgentes más allá de los estados del noreste de Nigeria, hacia otros estados del centro-norte y noroeste del país.** En el noreste de Nigeria, el país más afectado por las actividades de las facciones de BH, se estima que había 2,2 millones de personas desplazadas por la violencia, y 8,3 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria a finales de 2022, según OCHA. En el conjunto del país, el IDMC elevaba la cifra de desplazamiento interno a finales de 2021 a 3,2 millones de personas.²⁸

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)²⁹ señaló que durante el año 2022 se estabilizó la violencia por parte de los grupos armados islamistas después de una marcada disminución del 32% entre 2020 y 2021. De acuerdo con el centro de investigación ACLED, en 2022 se registraron 3.782 víctimas mortales en la región de la cuenca del Lago Chad (los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa; la región de Extrême Nord en Camerún; Diffa en Níger; y la provincia de Lac en Chad), cifra ligeramente inferior a las víctimas del año 2021 (4.163). Durante 2022 se produjeron 1.002 eventos violentos, cifra muy similar a los 982 del año 2021. ACSS señaló que la región de la cuenca del lago Chad sigue siendo la tercera más mortífera del continente, y comprende el 20% de todas las muertes vinculadas a militantes islamistas. Cabe destacar, además, que la región experimentó el resurgimiento de JAS³⁰ en 2022.

27. Secretario general de la ONU, *La situación en Malí*, S/2023/21, 6 de enero de 2023.

28. IDMC, *Figures Analysis 2021- Nigeria*, 19 de mayo de 2022.

29. Africa Center for Strategic Studies, “Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent”, 6 de febrero de 2023.

30. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

Desde 2017, JAS había estado disminuyendo en su amenaza relativa frente a ISWAP, que se intensificó tras la muerte del histórico líder Abubakar Shekau en 2021. Sin embargo, durante el año 2022, BH estuvo relacionado con un aumento del 57% en eventos violentos y un aumento del 70% en muertes. Si bien ISWAP continúa asociándose con más violencia en la región, los niveles ahora son comparables. Estos cambios coinciden con una expansión geográfica de los ataques de la insurgencia fuera de los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en el noreste de Nigeria.³¹ Según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST), el número de víctimas mortales en los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa aumentó ligeramente respecto a años anteriores (2.078 en 2022, frente a 1.810 en 2021, 2.603 en 2020, 2.607 en 2019, 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017).³²

Los grupos armados de corte yihadista ampliaron su radio de acción geográfica más allá de los estados del noreste de Nigeria y de la región de la cuenca del Lago Chad hacia otros estados del centro-norte y del noroeste de Nigeria

Además, cabe remarcar la escalada de enfrentamientos entre los grupos armados de corte yihadista durante el año, principalmente entre ISWAP y JAS, especialmente en diciembre, destacando la muerte de un comandante de JAS, Aboubakar Munzir a manos de ISWAP en diciembre, así como de otros 200 combatientes, en enfrentamientos entre ambas facciones en ese mismo mes. Fuentes señalaron que tras la muerte en 2021 del líder de JAS, Abubakar Shekau, y el debilitamiento de JAS,³³ durante 2022 el grupo se reorganizó y consiguió amenazar la preeminencia de ISWAP en la región. Además, se señaló que JAS estaría actuando bajo el liderazgo de Ibrahim Bakura Doron (alias Abu Umayah), el histórico líder de la facción Bakura, grupo que actuaría en alianza con JAS.

El año 2022 hubo ataques vinculados a ISWAP en los estados de Kano, Kogi, Níger y Taraba, en el centro-norte del país. También fue responsable del bombardeo de una iglesia en el estado de Ondo (región suroeste), ataques contra un cuartel militar y una prisión en las afueras de Abuja, y un intento de ataque contra un cuartel militar cerca de la frontera de Benin en el estado de Níger en el oeste. Asimismo, se vinculó a JAS e ISWAP con hechos violentos en diversos estados del noroeste de Nigeria, como Kaduna, Katsina y Zamfara, entre otros. En paralelo, en octubre diversos países occidentales, inicialmente EEUU y Reino Unido, alertaron de posibles ataques de grupos armados de corte yihadista en la capital, Abuja, lo que provocó una escalada de la tensión y un despliegue sin precedentes de cuerpos de seguridad que derivó en la detención de decenas de sospechosos en lo que fue descrito como la más importante operación de contrainteligencia desarrollada en Abuja. El presidente Buhari intentó rebajar el clima de pánico desatado, aunque fuentes locales alertaron de la salida del país de “oleadas” de extranjeros. Medios locales citando a fuentes militares alertaron de posibles células durmientes de grupos armados instaladas en Abuja y alrededores ocultas entre la población civil. La violencia de JAS e ISWAP también se vinculó con escaladas relativas de violencia en Chad y el sureste de Níger. En paralelo, las fuerzas de seguridad fueron responsables de la muerte de diversos comandantes de JAS y de ISWAP, entre ellos de Abubakar Sarki, comandante de JAS, en mayo, y de Alhaji Modu, comandante de ISWAP, en agosto.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la

31. Por la complejidad para diferenciar los actos de violencia cometidos por JAS, ISWA y otras facciones de grupos armados de agenda yihadista respecto a otros tipos de violencia, no se han incluido en los recuentos de víctimas mortales los cometidos en otros estados del país, por lo que las cifras reales serían superiores a las anteriormente citadas. Estos datos sirven para identificar tendencias respecto al grado creciente de expansión geográfica de los grupos armados con agenda yihadista.

32. Nigeria Security Tracker, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

33. Véase el resumen de región Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2022.

región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011³⁴. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

Un año más la situación de inseguridad en la región de la triple frontera (Malí, Burkina Faso y Níger) continuó deteriorándose debido a la persistencia de los episodios de violencia, las crisis de gobernanza en la región y las tensiones en el complejo militar regional-internacional de seguridad. Durante el año, según datos facilitados por ACLED, se registraron 3.357 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que causaron la muerte a 9.702 personas en la región (casi el doble de las muertes registradas en 2021, 5.279). Por país, en Burkina Faso se registraron 1.640 episodios de violencia que dejaron un balance de 4.214 muertes frente a las 2.290 víctimas mortales registradas en 2021; en Malí se produjeron 1.340 eventos violentos concentrados en las regiones norte centro y sur del país que costaron la vida a 4.842, casi el tripe que las registradas en 2021, cuando se contabilizaron 1.887 muertes; mientras que en Níger, en la zona suroeste del país, en las regiones de Tillaberi –principal zona afectada por la violencia– Dosso y Tahoua, se habrían registrado 289 eventos violentos, ocasionando 649 muertes, representando en este caso un descenso de la letalidad frente a las 1.102 víctimas mortales de 2021.³⁵

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)³⁶ señaló que la región del Sahel occidental experimentó la mayor escalada de eventos violentos vinculados a grupos yihadistas (2.737 eventos violentos) que cualquier otra región de África, con un aumento del 36% con relación a 2021. En total, la región acumuló el 40% de todos los episodios violentos reportados en África en 2022, concentrándose el 90% de ellos en Burkina Faso

y Malí. Detrás de este incremento de la violencia se encuentran principalmente los grupos vinculados a la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), mientras que el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS), siguiendo la tendencia de 2021, siguió teniendo un impacto menor. Del total de muertes registradas, 7.899 se asociaron a este tipo de grupos, principalmente al JNIM, responsable del 67% de las muertes. Ello representa un 63% más de letalidad provocada por estos grupos que el año anterior. Una tendencia preocupante es el aumento de la violencia contra la población civil, que durante el año generó un 49% más de muertes que las registradas en 2021. El 60% de todas las muertes dirigidas contra población no combatiente relacionadas con el extremismo violento en África, que incluye, además, los escenarios de Lago Chad, Somalia, Mozambique norte y el norte de África, se produjeron en la zona de la triple frontera. En este sentido, el ACSS subrayó que la presencia del Grupo Wagner intensificó más la violencia contra los civiles, estando vinculado con 726 muertes de civiles reportadas. Asimismo, si bien los episodios de violencia perpetrados por estos actores irregulares se concentraron en Burkina Faso y Malí, el año también registró un aumento en los Estados litorales: Benín registró 37 eventos (frente a los 5 de 2021), mientras que en Togo se pasó de 1 evento en 2021 a 17 en 2022. En el oeste de Níger se registró un aumento del 43% de este tipo de eventos (214) pero, sin embargo, ocasionaron la mitad de las muertes que el año anterior (539).

Como consecuencia del aumento de la violencia **se mantuvo la tendencia del desplazamiento forzado de personas, registrando más de 2,9 millones de personas desplazadas de sus hogares. Burkina Faso siguió concentrando la mayor parte del desplazamiento**, con más de 1,8 millones de personas desplazadas. La situación humanitaria en toda la región siguió siendo muy preocupante debido a los impactos combinados de la inestabilidad, la violencia, los desplazamientos forzados, la pérdida de medios de subsistencia, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud denunció que la crisis del Sahel es una de las crisis de más rápido crecimiento y, sin embargo, la más olvidada del mundo. Según sus estimaciones, en 2023, más de 37,7 millones de personas en Burkina Faso, Malí, Níger, el extremo norte de Camerún, Chad y el noreste de Nigeria necesitarán asistencia humanitaria. En Burkina Faso un total de 2,8 millones de personas necesitarán atención médica urgente; en Malí el nivel de necesidad se encuentra en su punto más alto desde que comenzó la crisis del conflicto en 2012, con 7,5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria (frente a los 3,8 millones de 2017); y en Níger la combinación de crisis en 2022 llevó al país a experimentar cuatro

34. Véase resumen de Malí en este capítulo.

35. ACLED, *Dashboard* [Consultado el 06/01/2023].

36. Africa Center for Strategic Studies, "Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent", 6 de febrero de 2023.

crisis de salud relacionadas con epidemias (meningitis, sarampión, poliomielitis y cólera).³⁷

Este periodo de incremento de la inseguridad coincidió con la llegada al poder mediante **golpes de Estado** de sendas juntas militares en Malí (agosto de 2020) y Burkina Faso (enero y octubre de 2022), justificadas en ambos casos con el fin de abordar la amenaza de seguridad en ambos países.³⁸ Sin embargo, en lugar de disminuir, la tendencia de la violencia se ha acelerado en ambos Estados. Por ejemplo, en Burkina Faso, en los cinco meses desde que el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba asumió el poder (enero 2022) se registró un aumento del 23% de los ataques perpetrados por grupos armados en comparación con los cinco meses anteriores al golpe. En respuesta al aumento de la violencia, la asamblea de transición burkinesa otorgó el 6 de junio poderes de intervención rápida a la Junta militar, decretando esta la creación de dos zonas militares en las regiones del este y el Sahel -las más afectadas- obligando a la población civil a desalojar sus hogares para permitir las acciones de las fuerzas de seguridad.

La presencia de las juntas castrenses, así como el despliegue de fuerzas rusas vinculadas a la compañía privada de seguridad Wagner Group, volvió a marcar el deterioro de las relaciones en el **complejo de seguridad internacional en la región**.³⁹ A mediados de agosto Francia anunció la retirada definitiva de las últimas tropas francesas en Malí, poniendo fin a la operación Barkhane en el país tras nueve años de misión. Anteriormente, el 1 de julio París ya había anunciado el final de su participación en la fuerza europea Takouba Task Force, de la cual otros países europeos también anunciaron retirada de sus fuerzas. Las tropas francesas seguirán en la región con un contingente reducido a la mitad (2.500 soldados), pero operando desde Níger, gracias a que el Parlamento nigerino aprobó en abril, no sin movilizaciones populares en contra, el proyecto de ley que autoriza el despliegue de fuerzas francesas para ayudar a combatir a los grupos armados en el país. Durante el año también se produjeron continuas tensiones y desencuentros entre la Junta militar maliense y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Malí (MINUSMA). Entre los episodios más destacados resaltaron el bloqueo por parte de las autoridades malienses a las operaciones de la MINUSMA, la retira de tropas de diferentes países de esta (Costa de Marfil, Alemania o Reino Unido) o la crisis desatada entre Malí y Costa de Marfil debido a la detención de 49 soldados costamarfileños de la misión bajo acusación de ser mercenarios. En el mes de mayo la junta militar maliense anunció la retira del país de

La llegada de las juntas militares a Malí y Burkina Faso significó un aumento de la inseguridad y violencia en ambos Estados

todos los órganos e instancias del G5 Sahel, incluida la fuerza militar conjunta. En agosto, Níger y Burkina Faso firmaron un acuerdo de cooperación militar destinado a incrementar las operaciones conjuntas sobre el terreno, y solicitaron al Gobierno de Malí que volviera a la cooperación militar en el marco de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. El deterioro de la situación de seguridad en Níger obligó al Gobierno a extender el estado de emergencia en partes de las regiones de Tillabery, Tahoua y Diffa a finales de julio, y motivó que el Ministerio de Defensa nigerino anunciara planes para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas de 33.000 a 100.000 soldados para 2030.

Cuerno de África

Etiopía (Oromiya)	
Inicio:	2022
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia progubernamental amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Etiopía es escenario de movimientos secesionistas desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surgió entre 1973 y 1974 en la región de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participaron junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, en 1992 el OLF se desmarcó del Gobierno de coalición del EPRDF e inició una rebelión contra este y contra otros movimientos nacionalistas oromos exigiendo la independencia de la región. En paralelo, Oromiya ha vivido un ciclo de protestas –iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo– que fueron fuertemente reprimidas y que causaron miles de víctimas mortales. La movilización contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018 y la designación de Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, quien emprendió una serie de reformas políticas encaminadas a la unidad y la reconciliación nacional, alcanzando un acuerdo de paz con el OLF y otros grupos político-militares lo que facilitó su retorno del exilio. Además, el nacionalismo oromo asumió que la llegada al poder de Abiy Ahmed, de su misma comunidad, significaría un impulso a la autonomía de la región; no obstante, Abiy se ha decantado por un Estado más centralizado en lugar de promover el federalismo

37. WHO, *Appel-Sahel*, febrero de 2023.

38. Véase resumen de Malí y Burkina Faso en el capítulo 2 (Tensiones).

39. Véase resumen de Malí en este capítulo.

étnico. Además, aunque el OLF se convirtió en partido político, su ala militar, el Oromo Liberation Army (OLA), rechazó el acuerdo e inició una nueva rebelión, lo que llevó al Gobierno a designarle en mayo de 2021 como grupo terrorista. Desde entonces la violencia ha ido en aumento. También cabe destacar los recurrentes enfrentamientos entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo en las zonas fronterizas entre Oromiya y Somalí por la competencia de recursos y la demarcación de los territorios de ambas comunidades, donde la emergencia climática y la intervención represiva del cuerpo policial gubernamental Liyu contribuye a exacerbar la situación.

La situación en la región etíope de Oromiya se agravó significativamente durante el año 2022, constatándose una escalada de los enfrentamientos y de acciones de contrainsurgencia de los cuerpos de seguridad federales apoyados por las milicias progubernamentales de la región vecina de Amhara, las milicias Fano, contra el grupo armado OLA. A la vez, se produjeron numerosos actos de violencia por parte de los cuerpos de seguridad y milicias progubernamentales contra la población civil de la comunidad oromo, que se aceleraron a finales de año al calor del acuerdo de paz entre el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré, negociaciones que habrían centrado la atención de la comunidad internacional en detrimento de la situación en Oromiya, según diversos análisis.

En 2022 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales apoyados por las milicias amháricas Fano y el grupo armado OLA con graves consecuencias contra la población civil en la región etíope de Oromiya

Según datos de ACLED,⁴⁰ durante el 2022 se registraron 707 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Oromiya que costaron la vida a 4.533 personas. Esta cifra debe tomarse con cautela ya que combina violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil. En esta cifra también se incluyen actos de violencia contra la minoría de la comunidad amhara presente en la región de Oromiya perpetrados por elementos del gobierno regional de Oromiya y del OLA, así como enfrentamientos entre milicias de carácter comunitario de las comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo que cada año se cobran cientos de víctimas mortales. El Gobierno lanzó una operación militar en abril para expulsar al grupo armado OLA que estaba operando en el oeste, el centro y el sur de la región. La escalada de los enfrentamientos se intensificó en octubre, coincidiendo con las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz en noviembre entre el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré.⁴¹

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, condenaron la escalada de la violencia y las campañas de contrainsurgencia, que incluían cortes y bloqueo de telecomunicaciones, y señalaron cómo los enfrentamientos habían conducido a graves abusos cometidos por parte de los cuerpos de seguridad gubernamentales, que incluían ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias. HRW también denunció que los grupos armados habían secuestrado o ejecutado a miembros de comunidades minoritarias de la región y representantes del Gobierno. Además, destacaron que el conflicto armado y las negociaciones de paz de en relación con la región de Tigré habrían eclipsado el conflicto en la región vecina y la necesidad de negociaciones de paz para reducir esta escalada de la tensión y el clima de creciente violencia.⁴² Un informe de la organización gubernamental independiente Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) publicado en diciembre alertó que la población civil en la región se habría encontrado atrapada entre el fuego cruzado y sujeta a alarmantes delitos, como ejecuciones extrajudiciales y en masa que constituirían violaciones graves de los derechos humanos en el transcurso de los ataques por parte de los grupos armados, las fuerzas gubernamentales y la milicia amhárca Fano. Las acciones del OLA incluyeron la destrucción de localidades e insumos agrícolas, infraestructuras civiles y saqueo de propiedades del Estado, así como la interrupción de servicios esenciales. Los

enfrentamientos habrían causado centenares de víctimas mortales y heridos. El informe, relativo al periodo entre agosto y diciembre, señaló que la población civil se habría convertido en objetivo de forma deliberada en base a criterios étnicos o a opiniones políticas, y que los enfrentamientos y acciones de limpieza étnica habrían causado el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas que se encontrarían en condiciones deplorables y sin acceso a la asistencia humanitaria.⁴³ El portavoz del OLA señaló que los cuerpos de seguridad federales llevaron a cabo ataques con drones en zonas pobladas que causaron la muerte de más de 300 civiles entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, coincidiendo con las negociaciones en Sudáfrica. Un recuento de ACLED en cinco de esos días identificaba la muerte de más de 55 civiles en bombardeos en tres localidades.⁴⁴ Las negociaciones de paz facilitadas por la UA en relación al conflicto armado en la región etíope de Tigré habrían centrado la atención de la comunidad internacional desviando la atención de las acciones bélicas en Oromiya, según estos análisis. La organización con sede en EEUU, Amhara Association of America, declaró haber recibido informaciones de

40. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

41. Gbadamosi, Nosmot, "Ethiopia's Other War", *Foreign Policy*, 16 de noviembre de 2022.

42. Bader, Laetitia, "Ethiopia's Other Conflict. Ethiopia's Tigray War Overshadows Ongoing Cycles of Violence in Oromia", *HRW*, 4 de julio de 2022.

43. Ethiopia Observer, "Serious human rights violations in Oromia region: EHRC report", 8 de December de 2022.

44. ACLED, *EPO Weekly, 29 October - 4 November 2022*, ACLED, 8 de noviembre de 2022, en Gbadamosi, Nosmot, "Ethiopia's Other War", *Foreign Policy*, 16 de noviembre de 2022.

que en Oromiya, donde la comunidad amhara es un grupo étnico minoritario, se habría llevado a cabo un esfuerzo deliberado y concertado por parte del OLA y elementos dentro del gobierno regional de Oromiya para cometer un proceso de limpieza étnica de la población amhara de la región.

Etiopía (Tigré)	
Inicio:	2020
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope desembocaron en su debilitamiento. Dieron un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente llevaron al poder a Abiy Ahmed, así como fuertes resistencias de actores clave como el partido Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF, por sus siglas en inglés), otrora principal partido de la coalición que ha gobernado en Etiopía desde 1991, la Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus siglas en inglés), que estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder. El liderazgo de la comunidad tigré percibió una pérdida de poder y privilegios en los cambios promulgados por Abiy Ahmed. El TPLF se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP), lo que implicaría diluirse en un nuevo partido. Estas tensiones se intensificaron bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF redujo su estricto control, surgieron nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. Esta situación desencadenó una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré. La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación de Eritrea, así como de milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara.

Dos años después del inicio de uno de los conflictos armados más graves de los últimos años en el continente africano, el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré alcanzaron un acuerdo

de paz que podría poner fin al grave clima de violencia y violaciones de los derechos humanos cometidos en la región por todas las partes contendientes y que ha causado una de las principales crisis de desplazamiento en el Cuerno de África de los últimos años. Las graves vulneraciones de los derechos humanos identificadas –ejecuciones extrajudiciales, graves atrocidades como violencia sexual de forma generalizada y utilizada como arma de guerra, esclavitud sexual y violaciones en masa, actos de limpieza étnica según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y HRW– podrían ser consideradas crímenes de guerra y contra la humanidad cometidas por todos los actores implicados en el conflicto, según diversos análisis. Además del cese de hostilidades, el acuerdo de paz alcanzado el 2 de noviembre incluyó importantes concesiones por parte del TPLF, como un desarme sistemático y coordinado de sus cuerpos de seguridad. El Gobierno federal aceptó retirar al TPLF de la lista de organizaciones terroristas e iniciar (artículo 10.2) un diálogo político sobre el futuro político de Tigré, sin que el acuerdo defina algún tipo de supervisión o monitoreo del diálogo.⁴⁵

Según datos de ACLED,⁴⁶ durante el 2022 se registraron 145 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Tigré, que costaron la vida a 698 personas. Si se incluyen las regiones de Amhara y Afar, donde también se protagonizaron graves enfrentamientos entre el TPLF y la coalición de cuerpos de seguridad federales, fuerzas de seguridad y las milicias regionales de ambas provincias y las Fuerzas Armadas eritreas desplegadas en el país, la cifra asciende a 388 eventos violentos que costaron la vida a 1.359 personas. Estas cifras son sensiblemente inferiores a las registradas desde el inicio del conflicto en noviembre de 2020 y finales de 2021, cuando se contabilizaron más de 800 episodios de violencia y 4.075 víctimas mortales solo en la región de Tigré. Si se incluyen las provincias adyacentes de Amhara y Afar, la cifra de episodios de violencia en ese periodo asciende a 1.473 y 8.436 víctimas mortales, aunque estas cifras deben ser tomadas con cautela debido a las dificultades para disponer de registros de víctimas mortales fiables ante las restricciones de acceso a personal humanitario y a medios de comunicación y fuentes independientes.

Según ACNUR había más de 2,7 millones de personas desplazadas internas en el país a inicios de 2023, cifra que no incluye la población desplazada en Tigré, debido a las dificultades para operar en la región, ni incluye la cifra de partes de la región de Afar, que también continuaban inaccesibles como consecuencia del conflicto y la inseguridad.⁴⁷ UNFPA señalaba en enero de 2023 que más de 26 millones de personas, más de un 20% de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave y

45. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

46. ACLED, *en línea*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

47. UNHCR, Operational Data Portal - Ethiopia, 31 de enero de 2023.

dependía de la ayuda humanitaria, cifra que incluye a 20 millones de personas afectadas por la sequía y otros desastres climáticos en las regiones del este y el sur del país. La conflictividad y el desplazamiento, la severa sequía, las enfermedades y los impactos socio-económicos derivados de la pandemia de la COVID-19 son los principales detonantes de esta situación. A raíz del acuerdo alcanzado en noviembre, los actores humanitarios pudieron aumentar la respuesta ante las mejoras relativas al acceso a las poblaciones afectadas por el conflicto. Los vuelos comerciales entre Mekelle y Shire, la electricidad, telecomunicaciones y servicios bancarios fueron restaurados en diversas partes de Tigré lo que supuso un positivo impacto.⁴⁸

El acuerdo de paz alcanzado en noviembre estuvo precedido por una ruptura de la tregua humanitaria vigente entre marzo y agosto de 2022, tras la que se produjo una grave escalada de la violencia entre las partes. En octubre la mediación liderada por la UA consiguió que las partes aceptaran su invitación para desplazarse a Sudáfrica para discutir en torno a un cese de hostilidades, pero se pospuso por motivos logísticos. Este retraso pudo haber sido utilizado por Etiopía para acelerar la ofensiva militar junto a Eritrea de cara a acceder a la mesa de negociación en una posición de fuerza, según algunos análisis.

Tras dos años del estallido de un conflicto armado que ha causado miles de víctimas mortales en la región, más de dos millones de personas desplazadas y que abocó a prácticamente un millón de personas de los seis que habitan Tigré a una situación de hambruna, a finales de agosto se desencadenó una nueva escalada de los enfrentamientos entre las milicias y cuerpos de seguridad de la región de Tigré y las tropas federales etíopes apoyadas por Eritrea y los cuerpos de seguridad de la región de Amhara. El incremento de violencia activó todas las alarmas por las graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil y comportó una intensificación de las iniciativas diplomáticas para convencer a las partes de la necesidad de alcanzar un alto el fuego. No obstante, desde marzo hasta finales de agosto había estado vigente una tregua humanitaria de cuya ruptura ambas partes se acusaron mutuamente, lo que reabrió los enfrentamientos y el bloqueo humanitario. Tras la firma del acuerdo de cese de hostilidades de noviembre, se produjeron algunos enfrentamientos esporádicos y continuaron los abusos por parte de las tropas eritreas, así como actos de saqueo y ataques contra la población civil. En este sentido, las autoridades de Tigré acusaron a los cuerpos de seguridad federales de haber llevado a cabo ataques contra civiles en la localidad de Maychew desde la firma del acuerdo. No obstante, en general las partes respetaron el acuerdo y a finales de diciembre Eritrea inició la retirada de sus tropas de diversas localidades de la región, incluidas las estratégicas localidades de Shire y Axum, coincidiendo con la llegada

de la misión de monitoreo de la UA incluida en el acuerdo. Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la región de Tigré iniciaron la entrega de armamento pesado en cumplimiento del acuerdo.⁴⁹ A su vez, los enfrentamientos registrados durante 2021 en la zona fronteriza entre los Ejércitos de Etiopía y Sudán y milicias sudanesas, que dificultaron los desplazamientos de población que huía del conflicto, también remitieron durante el año y Etiopía y Sudán en diciembre de 2022 alcanzaron un acuerdo de cooperación sobre paz y seguridad.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna al Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM/ATMIS, EUNAVFOR Somalia, Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia registró una intensidad muy superior a la del período anterior. El año se vio

48. UNFPA, *UNFPA Ethiopia Humanitarian Response Situation Report*, 31 de diciembre de 2022.

49. BBC, "Ethiopia's Tigray conflict: TPLF forces hand over weapons in peace move", BBC, 11 de enero de 2023.

marcado por el incremento de los ataques por parte del grupo armado al-Shabaab, por las operaciones de la misión africana en el país (AMISOM, transformada en la Misión de Transición de la UA en Somalia, ATMIS, en abril) y del Ejército Nacional Somalí así como de sus aliados internacionales y por la culminación del proceso electoral. Las fuerzas de seguridad somalíes y la ATMIS seguían siendo el blanco principal de los atentados, que se perpetraban sobre todo con artefactos explosivos improvisados. Los estados más afectados por la actividad de al-Shabaab y las operaciones contrainsurgentes del Gobierno Federal y sus aliados fueron las zonas rurales y núcleos urbanos centrales y del sur del país, en especial en el estado de Hirshabelle (especialmente las regiones de Hiraan y Middle Shabelle); el estado de Galmudug (la región de Galgudug); el estado del Suroeste (especialmente las regiones de Benadir, que incluye la capital, Mogadiscio, y también Lower Shabelle, Bay y Bakool); y Jubalandia (en especial, la región de Gedo, fronteriza con Etiopía). El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)⁵⁰ señaló que durante el año 2022 se produjo un aumento del 133% en el nivel de muertes vinculadas a la violencia de grupos islamistas militantes, principalmente al-Shabaab. Hubo 6.484 muertes violentas reportadas en Somalia en 2022, según datos de ACLED, un aumento con respecto a las 3.181 del año anterior. Este es un nivel récord de muertes y supera el total de 2020 (3.232) y 2021 (3.181) combinados.⁵¹ Esto se reflejó en un aumento en la actividad armada con respecto al año anterior, con un total de 2.936 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), respecto a los 2.545 eventos del año anterior, pero la leve diferencia pone de manifiesto que las acciones en 2022 fueron mucho más letales.

La escalada de los enfrentamientos y acciones de combate gubernamentales se incrementaron tras la elección del presidente Hassan Sheikh Mohamud en mayo y su llamamiento a una ofensiva total contra al-Shabaab. Esta ofensiva expulsó a al-Shabaab de las principales ciudades que anteriormente controlaba, lo que provocó ataques de represalia. La ofensiva gubernamental contra al-Shabaab provocó un incremento de acciones por parte del grupo en la retaguardia perpetrando actos de respuesta persiguiendo objetivos fáciles, como los atentados de octubre en Mogadiscio que causaron un centenar de víctimas mortales e hirieron a cientos más.

El conflicto también estuvo marcado por un aumento del 34% en los ataques con artefactos explosivos improvisados en 2022 y una duplicación de las muertes

Los ataques de al-Shabaab y las operaciones contrainsurgentes del Gobierno Federal y de sus aliados locales e internacionales provocaron una escalada de la violencia en 2022 sin precedentes en años anteriores

resultantes de los artefactos explosivos improvisados. La ONU informó que 613 civiles murieron y 948 resultaron heridos ese año, la mayoría por artefactos explosivos improvisados colocados por al-Shabaab, lo que exacerbó la ya de por sí grave situación humanitaria y de derechos humanos de la población civil, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.⁵² Las fuerzas de seguridad del Estado, las milicias de clanes y otros actores no identificados también fueron responsables de víctimas civiles. Cabe destacar también las operaciones aéreas con drones de EEUU y Turquía.

En términos humanitarios el ACSS destacó que Somalia en 2022 experimentó su quinta temporada de lluvias escasas y se esperaba que vea una sexta temporada de lluvias por debajo del promedio en marzo-junio de 2023, que podría afectar a 8,3 millones de personas. Gran parte del área que enfrenta la inseguridad alimentaria más extrema, incluida la posible hambruna, se encuentra en territorio que al-Shabaab controla o disputa. Esto subraya los desafíos del acceso humanitario y, en ocasiones, el sabotaje total de las entregas de ayuda alimentaria. ACNUR informó que había 3 millones de personas desplazadas internas en el país como consecuencia del conflicto, la inseguridad y los efectos del cambio climático.⁵³

En paralelo a las actividades de al-Shabaab y a la grave sequía y la hambruna que afecta al país, cabe destacar la culminación de las elecciones legislativas y presidenciales en el marco de la implementación del acuerdo electoral alcanzado el 27 de mayo de 2021. Los comicios dieron como resultado la elección de Hassan Sheikh Mohamud como nuevo presidente del país y pusieron fin al grave clima de tensión entre sectores del Gobierno y de los estados federados y sectores opositores, que habían desencadenado múltiples negociaciones para superar el contencioso.⁵⁴ En paralelo, la misión de la UA en Somalia finalizó su mandato el 31 de marzo de 2022, y fue sustituida por la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS), establecida el 1 de abril. La misión tiene el mandato de fortalecer la autonomía tanto militar como institucional del Gobierno somalí a medida que proceda a su retirada del país. Su mandato finalizará a finales de 2024, cuando se espera que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Somalia asuman plenamente las responsabilidades de seguridad del país, guiadas por el Plan de Transición de Somalia. La primera reducción de tropas de la ATMIS tuvo lugar en diciembre de 2022.

El proceso electoral concluyó también con la formación del Parlamento.⁵⁵ El presidente saliente, Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo", reconoció su derrota y

50. Africa Center for Strategic Studies, "Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent", 6 de febrero de 2023.

51. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

52. OHCHR, "Somalia: Türk decries steep rise in civilian casualties amid surge in Al-Shabaab attacks", OHCHR, 14 de noviembre de 2022.

53. UNHCR, Operational Data Portal, Somalia, 31 de enero de 2023.

54. Véase Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

55. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre Somalia*, S/2022/665, 31 de agosto de 2022.

el presidente Mohamud juró inmediatamente el cargo. El proceso de elección presidencial fue considerado transparente y tuvo gran aceptación entre las partes interesadas del país. Mohamud asumió plenos poderes presidenciales el 23 de mayo y fue investido el 9 de junio. Desde su nombramiento, el presidente intensificó los contactos con los líderes de los estados federados, con el objetivo de mejorar las relaciones entre el Gobierno Federal y los estados federados. El presidente Mohammed destacó que pretendía debilitar a al-Shabaab en la dimensión militar, económica e ideológica. En línea con la determinación presidencial de combatir a al-Shabaab más allá de los métodos militares, un nombramiento destacado del nuevo Gobierno fue el del antiguo número 2 de al-Shabaab, Mukhtar “Abu Mansour” Robow Ali, desertor de al-Shabaab en 2017, como nuevo ministro de Asuntos Religiosos. Abu Mansour estaba amenazado por ser considerado miembro del sector crítico en el seno de la organización que abogaba por entablar negociaciones de paz con el Gobierno, y fue detenido en diciembre de 2018 cuando optaba a la presidencia del estado del Suroeste, y privado de libertad sin juicio hasta su nombramiento. Previamente, a diferencia de declaraciones públicas anteriores, el número 2 de al-Shabaab y líder de los servicios de inteligencia de la insurgencia, Mahad Karate, afirmó en el medio británico Channel 4, el 15 de junio, que el grupo podría considerar negociaciones con el Gobierno cuando fuera el momento adecuado.⁵⁶ El presidente Mohamud, en una entrevista con The Economist publicada días antes, afirmó su intención de hacer retroceder a al-Shabaab y luego entablar conversaciones de paz.

Según el informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Somalia publicado en octubre,⁵⁷ a pesar de los esfuerzos que realizan fuerzas somalíes e internacionales para reducir la capacidad de al-Shabaab, este seguía mostrándose capaz de llevar a cabo ataques complejos y asimétricos en Somalia, y las ofensivas transfronterizas del grupo en Etiopía y Kenya durante el año ponían de relieve su interés en ampliar su capacidad de ataque en el exterior y revelaban sus ambiciones regionales. Al-Shabaab mantenía bajo su control amplias zonas del centro y el sur de Somalia y seguía ejerciendo su influencia sobre zonas en que se han desplegado fuerzas de seguridad, por lo que el grupo insurgente conservaba su libertad de circulación, lo que le permitía organizar emboscadas y colocar artefactos explosivos improvisados que obstaculizaban el despliegue de la administración. Las investigaciones del Grupo de Expertos sobre las finanzas de al-Shabaab -economía basada en la extorsión en varios sectores, como la ganadería y la propiedad- ponían de manifiesto una

sólida posición financiera, capaz de sostener su campaña insurgente, con capacidad de generar ingresos y ejercer control sobre empresas y particulares en zonas que no controla físicamente, especialmente en grandes centros urbanos como Mogadiscio. Ello se veía facilitado por las amenazas de violencia contra personas o comunidades, así como por la ausencia de una presión constante sobre su aparato financiero. Además, el Grupo de Expertos no ha observado suficientes indicios de que el Gobierno Federal haya intentado frenar la estrategia de extorsión de al-Shabaab al margen de operaciones militares tradicionales por sus fuerzas de seguridad.⁵⁸

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder Pierre Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Évariste Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

Como en años anteriores, el clima de violencia política y los ataques esporádicos por parte de actores armados

56. Jamal Osman, “Inside Al Shabaab: The extremist group trying to seize Somalia”, *Channel 4*, 15 de junio de 2022.

57. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 10 de octubre de 2022 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia por el Grupo de Expertos sobre Somalia, Naciones Unidas, S/2022/754*, 10 de octubre de 2022.

58. Op, cit, 10 de octubre de 2022.

y las acciones de contrainsurgencia gubernamentales continuaron en 2022, así como actos de represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de miembros de la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). El centro de investigación ACLED dio un balance de 245 víctimas mortales durante el año 2022 en el país como consecuencia de estas acciones.⁵⁹ Estos datos muestran una ligera mejora en comparación con 2021, cuando se registraron 285 muertes. Entre las principales acciones armadas del año cabe destacar la ofensiva perpetrada a finales de septiembre por los cuerpos de seguridad contra el grupo FNL en el bosque de Kibira (provincia de Cibitoke), de la que a mediados de octubre se informó de la muerte de 42 rebeldes y de una decena de soldados. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento forzado de centenares de personas. Como muestra del clima de represión y silenciamiento de la oposición política, el Gobierno prohibió a diversos candidatos opositores concurrir a las elecciones locales e irrumpió en reuniones y mítines electorales de la oposición. Además, en el marco de las elecciones locales, el ala juvenil del CNDD-FDD, las Imbonerakure, perpetraron ataques violentos de motivación política. En agosto, el secretario general del partido en el poder, el CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, ratificó que ejecutar a cualquiera que amenazara la seguridad nacional era legítimo, e instó a las Imbonerakure a continuar llevando a cabo patrullas nocturnas, lo que dio alas a las acciones de intimidación y represión de la oposición por parte de las Imbonerakure con total impunidad. Al finalizar 2022 había 259.279 personas burundesas refugiadas, sobre todo en RDC, Rwanda, Tanzania y Uganda, según ACNUR.⁶⁰ Más de 206.000 refugiados burundeses han regresado a su país de origen desde septiembre de 2017, entre ellos 20.348 de enero a octubre de 2022. Otra consecuencia vinculada al conflicto armado que generó un grave clima de tensión y movilizaciones fueron las expropiaciones de tierras por la fuerza que llevaron a cabo grupos de Imbonerakure en octubre para entregar estas tierras a miembros del partido en el poder y también para construir una base militar (proceso iniciado en agosto contra más de 5.000 familias).

Cabe añadir que el Gobierno llevó a cabo una campaña nacional de entrenamiento en la que grupos de miembros de las Imbonerakure recibieron formación militar en septiembre para posteriormente, según fuentes militares, unirse a la ofensiva contra el grupo armado RED-Tabara en la provincia congoleesa de Kivu

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi afirmó que el historial de derechos humanos del país no había mejorado significativamente desde 2015

Sur. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Fortuné Gaétan Zongo, dijo a mediados de septiembre que el historial de derechos humanos del país no había mejorado significativamente desde 2015. A pesar de ello, a finales de octubre la UE anunció el levantamiento de sanciones contra tres altos funcionarios, incluido el nuevo primer ministro, Gervais Ndirakobuca, y el asesor presidencial principal, el general Godefroid Bizimana, tras un “diálogo intensificado” con Bujumbura sobre el historial de derechos humanos. En febrero, tanto Bruselas como Washington restablecieron los flujos de ayuda a la nación después de levantar las sanciones de 2015, citando el progreso político bajo Ndayishimiye. En su decisión de reestablecer las ayudas, ambas capitales señalaron que los grupos de la sociedad civil habían regresado. Por otra parte, durante el año la BBC recibió autorización para transmitir de nuevo desde el país. Finalmente, la UE, el mayor donante extranjero de Burundi, elogió los esfuerzos para combatir la corrupción.⁶¹

Burundi continuó profundizando en la mejora de las relaciones con los países vecinos y las organizaciones regionales con el objetivo de acabar con el aislamiento internacional y mejorar su imagen en relación a la situación de violencia e inseguridad que padece el país. El 22 de julio, el presidente, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente de la Comunidad de África del Este (EAC) para un mandato de un año. El 15 de agosto, Burundi anunció el despliegue de al menos 600 militares en el este de la RDC como parte de un acuerdo bilateral entre los dos países. La ONG Burundi Human Rights Initiative afirmó el 27 de julio que Burundi había enviado secretamente centenares de soldados e Imbonerakure a combatir al grupo RED-Tabara en Kivu Sur desde finales de 2021. Fuentes congoleesas afirmaron que los contingentes militares burundeses llevaban a cabo sus operaciones en el marco de la fuerza regional de la EAC, aunque fuentes militares burundesas remarcaron la existencia de un acuerdo bilateral. Además, se produjeron cambios en varios puestos claves del Gobierno, en el marco de la lucha por el poder entre el presidente Évariste Ndayishimiye y el secretario general del CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo. En septiembre se produjo una escalada de la tensión como consecuencia de una importante purga derivada del anuncio del presidente de un supuesto intento de golpe de Estado. El primer ministro, Alain Guillaume Bunyoni, hasta el momento importante aliado del presidente, fue sustituido por el entonces ministro del Interior, Gervais Ndirakobuca, y otros cinco ministros también fueron apartados de su cargo. Ndayishimiye también sustituyó al general Gabriel Nizigama, su

59. ACLED, [en línea](#). [Consultado el 10 de enero de 2023]. ACLED, [Dashboard](#). [Consultado el 31 de enero de 2023].

60. UNHCR, [Operational Data Portal, Burundi](#), 31 de enero de 2023.

61. Kuwait Times, “Burundi president sacks PM after warning of coup plot”, *Kuwait Times*, 7 de septiembre de 2022.

jefe de gabinete presidencial –puesto que en el país se describe como un superprimer ministro– por el coronel Aloys Sindayihebura, quien estaba a cargo de la inteligencia interna dentro del Servicio Nacional de Inteligencia, y también apartó de su cargo o redesplicó a 54 comisarios provinciales de policía.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Grupo Wagner, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los 10 años anteriores había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“antibalaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada, forzando un gobierno de transición que condujo a las elecciones de 2015-2016. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos (que apenas controlaban Bangui) ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación, por lo que se promovieron nuevos contactos de la mano de la UA y de la CEEAC, que contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019.

Durante el año 2022 persistió la ofensiva por parte de los grupos armados que retiraron en diciembre de 2020 su firma del acuerdo de paz de 2019 y se deterioró la situación política en el país debido a la polarización derivada del proceso para intentar reformar la Constitución. Según el centro de investigación ACLED, en 2022 se produjeron 256 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 837 personas. Esta cifra es sensiblemente inferior a la del año 2021, que se elevó a 1.700 víctimas mortales, coincidiendo con el intento de golpe de Estado y la ofensiva rebelde que cobró un fuerte impulso a finales de 2020 y principios de 2021. Según datos de ACNUR, a finales de 2022 más de 739.134 personas se encontraban refugiadas en los países vecinos, y más de 515.665 estaban desplazadas en el interior del país.⁶²

La situación de seguridad en todo el país siguió siendo muy inestable, con continuos ataques por parte de los grupos armados que forman parte de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), así como por acciones perpetradas por los mercenarios del grupo de seguridad privada ruso Wagner y los cuerpos de seguridad centroafricanos, denunciados por cometer graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil. La CPC consolidó su presencia en la prefectura de Vakaga, en el noreste del país, convirtiendo la comuna de Ouandja en su feudo. La escasez de combustible a raíz de las restricciones de las cadenas mundiales de suministro, especialmente en junio, limitaron las operaciones de los cuerpos de seguridad estatales y de la MINUSCA, lo que fue aprovechado por los grupos armados para atacar las zonas donde la autoridad del Estado estaba menos presente o completamente ausente, según destacó el informe del secretario general de la ONU de octubre. Los grupos recuperaron el control de algunas zonas de extracción, cometieron abusos contra civiles e impusieron una tributación ilegal. Además, cabe añadir que rebeldes de RCA habrían cruzado con regularidad la frontera con Camerún con el fin de secuestrar a civiles para pedir rescate. El 22 de junio, funcionarios de Camerún y de RCA se reunieron para examinar la situación de la seguridad en su frontera común y poner freno a las actividades de bandas delictivas, grupos armados y salteadores de caminos implicados en el tráfico de armas y recursos naturales.

El 14 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la MINUSCA por un año, aunque con la abstención de Rusia, China y Gabón, por el desacuerdo en relación al levantamiento de la prohibición a los vuelos nocturnos de la MINUSCA, cuestión incluida en la resolución. Bangui había ordenado esta medida años atrás para limitar las interacciones con los vuelos operados por Wagner, pero el 3 de octubre tres soldados heridos de la MINUSCA no pudieron ser evacuados de noche y murieron como consecuencia de sus heridas, lo

62. UNHCR, Operational Data Portal - CAR Situation. [Consultado el 31 de enero de 2023].

que fue recogido por el informe del secretario general de la ONU de octubre como un obstáculo a la labor de las fuerzas de la ONU. Así, los dos miembros permanentes se abstuvieron en el voto de la resolución al no conseguir quitar la referencia a la prohibición gubernamental, lo que pone de manifiesto las tensiones entre los países occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia, que cuenta con el apoyo chino. Las tensiones entre Francia y RCA se incrementaron a finales de noviembre cuando se produjo un ataque aéreo a una base militar en Bossangoa del que una organización local progubernamental responsabilizó a Francia, y Rusia señaló que RCA estaba bajo la amenaza de algún actor externo y acusó a la comunidad internacional de apoyar a la rebelión. El 16 de diciembre el jefe del centro cultural ruso de Bangui recibió un paquete bomba que le causó heridas y del que el propietario del grupo Wagner responsabilizó a Francia, como promotor de acciones terroristas, acusación calificada por Francia de propaganda. En este sentido, cabe destacar la retirada a mediados de diciembre del último contingente de la operación francesa Sangaris. Las últimas tropas francesas desplegadas en RCA partieron tras el enfriamiento de las relaciones provocado por el estrechamiento de los lazos entre Bangui y Moscú. Francia, la antigua potencia colonial, envió a RCA hasta 1.600 soldados con el mandato de contribuir a estabilizar el país después de que un golpe de estado en 2013 desatara el conflicto armado que aún sufre el país en la actualidad. La operación Sangaris era la séptima intervención militar de Francia en RCA desde que el país obtuvo su independencia en 1960. Terminó en octubre de 2016 después de las elecciones, dejando una presencia francesa residual.

Tras múltiples retrasos, el proceso de diálogo nacional conocido como Diálogo Republicano anunciado tras el intento de golpe de Estado de enero de 2021 se celebró entre el 21 y el 27 de marzo de 2022, aunque con la ausencia de la oposición política y de los grupos armados que se retiraron en diciembre de 2020 del acuerdo de paz de 2019. Tras la conclusión del Diálogo Republicano, el Gobierno creó en 2022 el comité de seguimiento, formado por representantes de la mayoría presidencial, partidos de la oposición, incluido Gabriel Jean-Edouard Koyambounou como coordinador para dirigir el comité, organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos.⁶³ A partir de la celebración del diálogo, la polarización entre el Gobierno, los partidos progubernamentales y la oposición política y social fue creciente, debido al intento de los primeros de promover un referéndum para reformar la Constitución que permitiera al actual presidente presentarse a un tercer mandato. En julio se creó una plataforma amplia en contra de la reforma constitucional, conocida como el Grupo de Acción de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Defensa de la Constitución del 30 de Marzo de 2016. Se creó también el Bloque Republicano para la

Defensa de la Constitución, que incluía a figuras clave de la oposición, que pidieron la movilización contra la reforma constitucional. En agosto organizaciones y partidos políticos progubernamentales organizaron manifestaciones de apoyo a la reforma y la Mesa de la Asamblea Nacional solicitó al Gobierno que iniciara el proceso de referendo constitucional y estableciera una asamblea constituyente inclusiva para redactar una nueva constitución. El Gobierno respondió creando un comité de redacción que debía presentar a la presidencia un proyecto de propuesta para una nueva constitución en un plazo de tres meses tras su establecimiento, y nombró a sus miembros. Varios actores políticos y de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica, rechazaron un puesto en el comité. El partido PATRI, el Bloque Republicano y el Grupo de Acción de la Sociedad Civil presentaron ante el Tribunal Constitucional recursos contra el decreto presidencial para emprender la reforma constitucional. El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los procesos emprendidos para redactar una nueva constitución, lo que le supuso amenazas por parte de partidarios de la reforma. La emisora independiente Ndeke Lukae también sufrió amenazas por informar sobre la cuestión. Aunque el Gobierno aceptó el dictamen constitucional, en diciembre la Asamblea Nacional aprobó una ley para regular la celebración de referéndums en el país, abriendo la puerta a la celebración de un referéndum para impulsar nuevamente la reforma constitucional.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (EACRF)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas

63. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

extranjerías y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP de origen tutsi integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

Durante el año se agravó la situación en el este del país como consecuencia de la ofensiva por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Desde noviembre de 2021 este grupo reinició sus actividades tras prácticamente una década inactivo y a partir de mayo de 2022 a llevó a cabo una fuerte ofensiva ampliando su presencia y control del territorio en la provincia de Kivu Norte. **Esta escalada y las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y otros grupos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur contribuyeron aún más a un deterioro general de la situación de la seguridad.** A esta situación se unió el incremento de la tensión entre RDC y Rwanda. Según datos de ACLED,⁶⁴ durante el 2022 se registraron 2.660 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en las cinco provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika) que costaron la vida a 5.681 personas. En el conjunto del país, fueron 6.145 las víctimas mortales consecuencia de la violencia. Estas cifras son superiores a las registradas en 2021, cuando se contabilizaron más de 2.300 episodios de violencia y 4.723 víctimas mortales solo en estas cinco provincias, y 4.865 personas en el conjunto del país.

Según ACNUR había 5,76 millones de personas desplazadas internas en 2022, cifra ligeramente superior a los 5,6 millones de personas desplazadas internas de 2021, lo que pone de manifiesto la persistencia de la situación de inseguridad y violencia que impide a la población retornar a sus lugares de origen. Esta cifra incluye unos 3 millones de menores. Además había 1.016.000 personas refugiadas en los países vecinos en 2022, cifra superior a las 942.000 de 2021, lo que sigue situando a RDC en la mayor crisis de desplazamiento en África de los últimos años. RDC acogía también a más de medio millón de personas refugiadas y demandantes de asilo de los países vecinos. El Programa Mundial de los Alimentos (PMA) señalaba en enero de 2023 que 26,4 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave.⁶⁵

Durante el año se agravó la ofensiva por parte del Movimiento 23 de Marzo (M23) con la toma de

diferentes localidades, y en especial de Rumangabo, la principal base militar congoleña de Kivu Norte en mayo. Ante la ofensiva, el Ejército se retiró, calificándola de retirada estratégica. Además, el M23 tomó la ciudad de Bunagana, en la frontera con Uganda, en el territorio de Rutshuru (Kivu Norte) el 12 de junio. Desde entonces, el grupo operó el puesto fronterizo con Uganda y fue ampliando la toma de localidades vecinas en el territorio de Rutshuru. Esta escalada del M23 y las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y otros grupos armados en las provincias de Ituri y Kivu Norte (como las facciones Nyatura, milicias Mai Mai, el grupo APCLS, el grupo Nduma Défense du Congo-Rénové, el grupo de origen ruandés FDLR, de entre los 120 grupos armados presentes en el este del país) contribuyeron aún más a un deterioro general de la situación de la seguridad. OCHA estimó que más de 510.000 personas se habrían desplazado desde marzo hasta finales de año y otras 7.000 habrían buscado refugio en Uganda como consecuencia de los ataques del M23. La ofensiva del M23, iniciada a finales de 2021, habría contado con el apoyo de Rwanda, según señaló en agosto la ONU, y junto a los bombardeos transfronterizos e incursiones de soldados de RDC en Rwanda y de Rwanda en RDC, provocó una escalada de la tensión entre ambos países. La crisis llevó a esfuerzos regionales para intentar desescalar el conflicto y para promover contactos que condujeran a negociaciones de paz entre RDC y el M23 y entre RDC y Rwanda. En agosto el Grupo de Expertos de la ONU señaló que disponía de sólidas evidencias sobre el apoyo de Rwanda al M23. El informe, rechazado por Rwanda, destacaba que el Ejército ruandés habría lanzado intervenciones militares en territorio congolés desde noviembre de 2021 proporcionando apoyo militar a acciones específicas del M23.

En abril los países de la EAC, incluido RDC (que se incorporó a la organización en marzo) aprobaron el despliegue a partir de agosto de una misión militar en el este de RDC para combatir al grupo armado M23 y apoyar al Gobierno a poner fin al clima de violencia como consecuencia del reinicio de las hostilidades por parte del M23, decisión ratificada en junio. Sin embargo, además del retraso en el despliegue –que se hizo parcialmente efectivo en noviembre– siguieron abiertas algunas incógnitas, como la financiación de la misión, la protección de la población civil y la coordinación con la MONUSCO. Burundi, en agosto, se convirtió en el primer país en enviar tropas a la RDC, que formarán parte de la fuerza regional de la EAC, aunque fuentes expertas manifestaron su preocupación ya que Burundi, como otros vecinos de la RDC, tiene sus propios intereses y agenda de seguridad, y Uganda y Rwanda han sido acusados de dar apoyo al M23. Solo Tanzania, Sudán del Sur y Kenia no tienen conflictos de intereses en RDC. RDC vetó la participación de Rwanda en la misión.

64. ACLED, *en línea*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

65. WFP, *Democratic Republic of the Congo. December Situation Report #44*, 17 de enero de 2023.

Ante la escalada de la ofensiva en octubre –con nuevas victorias territoriales con la toma de las localidades de Kiwanja y Rutshuru y el corte de la RN2, la principal arteria que comunica la capital provincial, Goma, con la zona norte de la provincia y con Uganda–, el Gobierno congolés expulsó al embajador ruandés. El 31 de octubre se produjo una movilización de miles de personas en Goma contra Rwanda, pidiendo armas para combatir ante la preocupación de que el grupo armado pudiera ocupar la capital, tal y como hizo en 2012, manifestando su rechazo y frustración ante la pasividad internacional y exigiendo a la comunidad internacional sanciones contra Rwanda por el apoyo al M23 evidenciado por los informes de la ONU. El 30 de octubre la UA hizo un llamamiento a un alto el fuego y a entablar negociaciones durante la tercera ronda del diálogo intercongolés que debía celebrarse en Kenya entre el 4 y el 13 de noviembre, que se pospuso a diciembre y en la que no participó el M23.⁶⁶ El 23 de noviembre los líderes de RDC, Rwanda (a través de su ministro de Exteriores), Burundi y Angola, reunidos en Angola, acordaron establecer un alto el fuego a partir del 25 de noviembre, exigieron al M23 la retirada a sus posiciones iniciales y alertaron que si el M23 rechazaba frenar los enfrentamientos, la fuerza de la EAC desplegada en Goma utilizaría todos los medios a su alcance para desarticular al grupo. Sin embargo, en la reunión no estuvo presente ningún representante del M23. Su líder, Bertrand Bisimwa, realizó un comunicado ese mismo día agradeciendo a los líderes regionales su contribución a promover una solución pacífica al conflicto, y aunque inicialmente anunció que respetaría el alto el fuego, horas más tarde el grupo señaló que dicho acuerdo no le incumbía ya que no estuvieron presentes en la reunión. El M23 exige un diálogo directo con el Gobierno congolés mientras que este rechaza este diálogo directo, por mandato de la Asamblea Nacional, y considera al M23 un grupo terrorista y exige su retirada de territorio congolés antes de entablar un diálogo. Entre el 29 y el 30 de noviembre se produjo una matanza por parte del M23 en las localidades de Kishishe y Bambo, en el territorio de Rutshuru, que el grupo intentó minimizar atribuyéndose una decena de víctimas mortales, mientras que el Gobierno congolés anunció la muerte de unos 50 civiles. Dicha masacre recibió la condena unánime de la comunidad internacional, y numerosos países exigieron a Rwanda poner fin al apoyo al grupo armado. Una investigación preliminar de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) determinó la muerte de 131 personas (102 hombres, 17 mujeres y 12 menores), además de saqueos, violaciones y secuestros como represalia a acciones previas de milicias de la zona. La UNJHRO posteriormente elevó la cifra a 171 personas. Desde entonces, persistieron los enfrentamientos entre el grupo y las fuerzas congoleesas. A la vez, algunos grupos armados y milicias Mai Mai y coaliciones de grupos, como el CODECO, el Nduma Défense du Congo-Rénové, el APCLS o el Coalition of Movements for Change (CMC)

firieron acuerdos con el Gobierno para unirse en su lucha contra el M23, en el marco de la política de alianzas e instrumentalización de apoyos que caracteriza la volátil situación de seguridad y crisis de gobernanza que afecta el este del país.

En paralelo, la situación en la provincia de Ituri, al norte de Kivu Norte, continuó siendo muy volátil, con acciones armadas durante el año de las milicias CODECO y Zaire contra la población civil para ejercer el control de recursos mineros, y de otras milicias Mai Mai. Se produjeron también operaciones militares de las Fuerzas Armadas ugandesas y congoleesas contra las ADF, entre los actores más destacados. Por último, en la provincia de Kivu Sur, actores armados locales y extranjeros continuaron llevando a cabo ataques contra la población civil y los cuerpos de seguridad, principalmente en los territorios de Fizi, Mwenga y Uvira, en paralelo a las operaciones militares de las Fuerzas Armadas burundesas en la provincia en persecución de los grupos armados burundeses que tienen sus bases en ella.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolees que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleesa, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congoleesas en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

66. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

Tras un año desde el inicio de la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) en territorio congolés contra el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en represalia por las explosiones perpetradas en la capital ugandesa y reivindicadas por las ADF el 16 de noviembre de 2021, persistieron las operaciones militares de las UPDF y la ofensiva conjunta de estas y las Fuerzas Armadas congoleesas contra las ADF. Este operativo militar ugandés, conocido como Operación Shuja, continuó sus actividades aunque diferentes análisis cuestionaron el éxito de la operación. En abril, el presidente ugandés Yoweri Museveni reveló que 4.000 soldados de las UPDF formaban parte de la Operación Shuja. Las tropas ugandesas pertenecían a la Fuerza Especializada de la División de Montaña que había sido entrenada por las Fuerzas Especiales francesas “en la guerra de montaña” desde 2016. En 2019, se inauguró oficialmente la División de Montaña.

Diferentes análisis cuestionaron la operación militar ugandesa en territorio congolés y evidenciaron la expansión territorial del grupo armado ADF

En la dirección de la operación se produjeron diversos cambios en 2022. En octubre hubo cambios en la estructura de mando de la Operación Shujaa. Su comandante, el teniente general Kayanja Muhanga, fue trasladado al cuartel general del ejército como comandante de las fuerzas terrestres de las UPDF. Su predecesor, el general Muhoozi Kainerugaba, hijo de Yoweri Museveni, promocionó el éxito de la operación, volvió a su puesto predeterminado como asesor presidencial principal sobre operaciones especiales. Reemplazando a Kayanja estaba en 2022 el mayor general Dick Olum, que había sido agregado de defensa en la embajada de Uganda en Kinshasa, y también había comandado operaciones contra Joseph Kony en la RCA, y al igual que Kayanja, Olum se desempeñó como comandante del contingente de las UPDF en la lucha contra los militantes de al-Shabaab en Somalia.

No obstante, a pesar de los cambios en la dirección de la operación, las ADF continuaron perpetrando ataques contra la población civil en la provincia de Kivu Norte y profundizaron su **expansión en la provincia de Ituri, donde cometieron múltiples ataques en los territorios de Mambasa y de Irumu**, territorios donde se enfrentaron a las UPDF y las Fuerzas Armadas congoleesas. En febrero las UPDF anunciaron que habían desalojado a las ADF del conocido como “Triángulo de la Muerte” en Mukakati, Erigeti, Kainama, Tchabi, River Semliki Bridge y Burasi. En junio, la organización Congo Research Group y el instituto congolés Ebuteli⁶⁷ publicaron un informe en el que señalaban la posibilidad de que las UPDF estuvieran impulsadas por fines de lucro en lugar del cometido inicial de su intervención, desarticular al grupo armado ADF, responsable de acciones insurgentes y de captación de seguidores no solo en territorio congolés

sino también en Uganda. Este informe también cuestionó los logros militares del Ejército de Uganda, y señaló cómo la operación militar probablemente también tuvo como objetivo promover los intereses económicos de Uganda, y en concreto, proteger los depósitos de petróleo y la infraestructura de Uganda alrededor del Lago Alberto y la construcción de carreteras para ampliar el mercado de mercancías de Uganda. Dott Services, una empresa de construcción de Uganda, y Total Energies, la multinacional petrolera francesa, estaban directamente implicadas en el desarrollo de sus intereses alrededor del Lago. Análisis habían señalado que Rwanda era reticente a la presencia de Uganda en territorio congolés y también habían situado a Uganda como actor que había prestado apoyo al resurgimiento del M23. No obstante, la ofensiva del grupo armado M23 sí evidenció la retirada de efectivos congoleeses hacia el territorio de Rutshuru, en el sur de la provincia de Kivu Norte, para hacer frente a este nuevo frente militar que debilitó las actividades contra el grupo armado ADF.

Según el informe del Grupo de Expertos de RDC publicado en diciembre,⁶⁸ a pesar de la Operación Shuja, las ADF continuaron su expansión territorial y llevaron a cabo ataques contra la población civil en el territorio de Beni y Lubero, en Kivu Norte y en el sur de Ituri. Las ADF siguieron operando en pequeños grupos, lanzando ataques simultáneos en varios frentes. Además, utilizaron artefactos explosivos improvisados en entornos urbanos, optando por realizar ataques más visibles a través de redes bien establecidas. Sus ataques y movimientos tenían como objetivo principal el reabastecimiento, la búsqueda de emplazamientos adecuados para la instalación de nuevos campamentos, apartar la atención de las ADF como objetivo principal de las operaciones militares o las acciones de represalia por esas operaciones, entre otras cosas, con el fin de socavar el apoyo popular a la Operación Shuja.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, milicias comunitarias, UNITAMS
Intensidad:	3
Evolución:	=

67. Congo Research Group y Ebuteli, *Uganda's Operation Shujaa in the DRC, Fighting the ADF or Securing Economic Interests?*, junio de 2022.

68. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 16 de diciembre de 2022 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2022/967, 16 de diciembre de 2022.

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario, concluyendo su despliegue a finales de 2020.

La región de Darfur continuó siendo el epicentro de la violencia armada en el país. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año se registraron en Darfur 409 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 951 personas. Estos datos muestran una ligera disminución en comparación con el año anterior, cuando se registraron 1.027 muertes, pero siguen lejos de años previos: 555 muertes en 2020 y 268 en 2019.⁶⁹ Los enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de distintas comunidades árabes y no árabes –principalmente debido a disputas por la propiedad de las tierras o el acceso a los recursos–, las acciones de las milicias progubernamentales Janjaweed integradas en las Rapid Support Forces (RSF) –grupo paramilitar liderado por el general Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti)–, o los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sudanesas y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al Nur (SLM/A-AW), siguieron concentrando las causas principales del mantenimiento de la violencia en la región, que se añade a la situación de desprotección derivada de la retirada definitiva de la UNAMID.

Estas dinámicas de violencia mantuvieron la tendencia del año anterior con relación al desplazamiento forzado en Sudán. Según los datos de ACNUR, **a mediados**

de 2022 más de 844.260 personas se encontraban refugiadas fuera del país debido a la violencia, la mayoría provenientes de la región de Darfur, y 3.036.593 se hallaban desplazadas internas.⁷⁰ Estas cifras colocan al país en el octavo puesto a nivel global, y el tercero en África en relación al número de personas que han abandonado el país por la violencia, por detrás de Sudán del Sur y RDC; y en el noveno a nivel global en cuanto a mayor número de personas desplazadas internas. Asimismo, **Sudán se mantenía entre los diez principales países del mundo en relación con el número de personas acogidas como refugiadas, con 1.112.300 personas procedentes principalmente de las crisis de Sudán del Sur, RCA, RDC o Etiopía**–, siendo el segundo en África por detrás de Uganda (1.489.600 personas acogidas).⁷¹ ACNUR también denunció la persistencia de la crisis humanitaria en el país, que afecta principalmente a las personas desplazadas, debido a los efectos combinados de la violencia en Darfur y Kordofán Sur y Nilo Azul, el aumento del coste de vida debido al efecto dominó de la guerra en Ucrania, el persistente impacto de la pandemia de COVID-19 y la crisis climática. Según datos de OCHA, 15,8 millones de personas se encuentran en situación de necesidad, lo cual representa un tercio de la población del país.⁷²

La retirada definitiva de la misión de mantenimiento de la paz de la UA y la ONU en Darfur (UNAMID) a principios de 2021, cuyo mandato –proteger de la población civil, facilitar el acceso a la asistencia humanitaria y garantizar la seguridad– fue transferido a una fuerza conjunta para Darfur desplegada por el Gobierno en septiembre de 2021 –compuesta por unos 20.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, el Servicio General de Inteligencia, las RSF, las fuerzas policiales, así como miembros de los grupos armados signatarios del acuerdo de paz de octubre de 2020–, no logró reducir las dinámicas de violencia. En el mes de enero, estas fuerzas fueron acusadas de saquear el antiguo cuartel general de la UNAMID en la capital de Darfur del Norte, El Fasher, robando vehículos y equipos. Días antes, hombres armados habían saqueado en la misma ciudad los almacenes del Programa Mundial de Alimentos, lo que llevó a la agencia a suspender las operaciones en Darfur del Norte. Estos incidentes se saldaron con nuevos enfrentamientos armados entre las fuerzas militares y los grupos armados alrededor de la antigua sede de la UNAMID en El Fasher en el mes de febrero. Posteriormente, en abril enfrentamientos armados entre pastores árabes y miembros de tribus massalit no árabes en la zona de Kreinik, Darfur Occidental,

Sudán se situó como el octavo país a nivel global, y el tercero en África, con mayor número de personas que han abandonado el país por la violencia, siendo a su vez el octavo del mundo en relación con el número de personas acogidas como refugiadas, el segundo en África por detrás de Uganda

69. ACLED, *Dashboard*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

70. UNHCR, *Refugee Data Finger*. [Consultado 31 de enero de 2023].

71. UNHCR, *Mid-Year Trends. 2022*, octubre de 2022.

72. OCHA, *Sudan Situation Report*, 12 de febrero de 2023.

dejaron un balance de al menos 200 personas asesinadas, en lo que representó el peor evento del año. Los enfrentamientos se extendieron posteriormente a la capital regional El Geneina, entre las milicias progubernamentales Janjaweed integradas en las RSF y una milicia local conocida como la coalición de fuerzas sudanesas, liderada por Khamis Abdullah Abakar, gobernador de Darfur Occidental y antiguo líder rebelde. La violencia provocó que más de 37.000 personas tuvieran que huir hacia la frontera con Chad. Si bien la violencia disminuyó en el mes de mayo, en junio se volvió a registrar un rebrote debido a enfrentamientos por la disputa de tierras entre las comunidades no árabe gimir y árabe rizeigat que dejaron al menos 126 muertes, en su mayoría gimir, en el distrito de Kulbus, y dejó alrededor de 50.000 desplazados. En medio de la oleada de violencia, representantes de los grupos rizeigat y misseriya, por un lado, y de grupos árabes y massalit, firmaron entre junio y julio diversos acuerdos de reconciliación en la capital del estado, El Geneina. Estos acuerdos lograron contener en los siguientes meses la violencia en Darfur Occidental y Meridional, contribuyendo a aumentar la estabilidad en la zona. Por otro lado, en Darfur Central, en la zona de Jebel Marra, se registraron enfrentamientos entre facciones del grupo armado no signatario del acuerdo de paz, SLA/AW y las RSF durante todo el año.

Finalmente, en otros aspectos destacados en la región, en el mes de abril se inició el **juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman**, también conocido como “Ali Kushayb”—primer procesamiento que inicia la CPI a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. Abd-Al-Rahman está acusado de 31 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de Darfur que comenzó en 2003, enfrentando a las fuerzas del Gobierno sudanés, respaldadas por las milicias Janjaweed, contra los movimientos rebeldes.

La región meridional sudanesa de Nilo Azul se convirtió en el epicentro de la violencia en la región con 484 muertes producidas por el incremento de la violencia intercomunitaria

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Durante el año se intensificó la violencia y la inestabilidad en la región, principalmente en la región de Nilo Azul, debido a enfrentamientos intercomunitarios.

En 2022 ACLED registró 562 muertes provocadas por enfrentamientos armados en Kordofán Sur y Nilo Azul, la mayoría registrados en el segundo semestre del año que tuvieron como epicentro la región de Nilo Azul con 484 muertes producidas, mientras que en Kordofán Sur se contabilizaron 78 muertes. Estos datos representan un aumento significativo de la inestabilidad con relación al año anterior, cuando se registraron 193 muertes asociadas al conflicto armado, la mayoría de ellas en la región de Kordofán Sur (182). Este incremento de la violencia, que produjo miles de nuevos desplazamientos forzados, se debió al aumento de disputas intercomunitarias, que también se trasladaron a la región de Kordofán Occidental, que registró durante el año 214 muertes, casi la mitad de ellas producidas en el mes de octubre.

Entre los episodios más destacados del año, en **Kordofán Sur** se registraron diversos incidentes debidos, principalmente, a disputas intercomunitarias, aunque de menor intensidad que los producidos en 2021. Entre ellos, destacó el enfrentamiento producido en junio entre miembros de los grupos kenana y hawazma que dejó al menos 19 muertos en la localidad de Abu Jubayhah. El SPLM-N anunció el 18 de agosto la separación del grupo en dos facciones encabezadas por Malik Agar y Yasir Arman. Días después se anunció la creación del Movimiento Revolucionario Democrático del SPLM-N, dirigido por Yasir Arman. Por otro lado, la crisis nacional en el país y el diálogo abierto para lograr la vuelta a la democracia entre la Junta Militar y los partidos opositores bloqueó durante el año el proceso de negociación que mantenía SPLM-N al-Hilu —uno de los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de octubre de 2020— con el Gobierno de Transición, sin que se produjeran avances durante el año.⁷³

73. Véase resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

También la vecina **Kordofán Occidental** se vio afectada por el incremento de las dinámicas de violencia intercomunitaria en el último periodo del año. El 12 de septiembre estallaron enfrentamientos por la demarcación de la tierra en la ciudad de Abu Zabad entre miembros de los grupos hamar y misseriya.

El 19 de septiembre, representantes de ambos grupos firmaron un acuerdo de cese de las hostilidades. Posteriormente miembros de la comunidad hamar organizaron bloqueos de carreteras para exigir la secesión de Kordofán Occidental y la formación de un nuevo estado de “Kordofán Central”. En el mes de octubre se registraron nuevos enfrentamientos entre miembros de grupos misseriya y nuba por disputas territoriales, que dejaron un balance de al menos 19 personas muertas y 34 heridas, y provocaron el desplazamiento de unas 65.000 personas. En diciembre, enfrentamientos protagonizados entre miembros de grupos hamar y misseriya debido al robo de ganado causaron al menos 30 muertes en el área de Abu Koa.

Finalmente, la región de **Nilo Azul** se convirtió en el epicentro de la violencia en la zona después del estallido de la violencia intercomunitaria a mediados de año. En el mes de julio, enfrentamientos ocasionados por disputas de tierras entre miembros de comunidades berti y hausa dejaron al menos 105 personas asesinadas y 30.000 desplazadas, obligando a declarar el estado de emergencia, la imposición del toque de queda y el despliegue de tropas adicionales. Si bien el 3 de agosto se logró la firma de un acuerdo de cese de las hostilidades entre las comunidades implicadas, en septiembre se volvieron a registrar importantes enfrentamientos en la zona. Las tensiones se intensificaron hasta convertirse en otro importante episodio de violencia el 19 de octubre, cuando miembros de la comunidad hausa lanzaron un ataque contra comunidades hamar, funj, berti y gumuz en la localidad de Wad al-Mahi, dejando más de 257 personas asesinadas y 570 heridos. Estos hechos hicieron que el Gobernador del estado de Nilo Azul declarase el estado de emergencia en toda la región por 30 días, y el Ejército nombró un nuevo comandante en el estado con el objeto de contener la violencia.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony (“Agwalek”), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNANA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyo a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Al igual que años anteriores, persistieron las mismas dinámicas de violencia debido a enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, entre las facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO y también debido a la continuidad de episodios de violencia

intercomunitaria que afectaron a múltiples regiones del país. Según datos de ACLED, durante el 2022 se registraron 597 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 1.898 personas (cifras muy similares a las registradas en 2021, cuando se contabilizaron 699 episodios y 1.936 muertes asociadas).⁷⁴ En el último trimestre del año, según denunció la misión de la ONU en el país (UNMISS), se padeció un importante incremento de la violencia en el país que afectó principalmente a población civil, aumentando en un 87% el número de personas heridas en comparación con el mismo período en 2021. **La persistencia de la violencia, los efectos ocasionados por las graves inundaciones que afectaron al país en 2022, las tensiones comunitarias preexistentes, la inseguridad alimentaria, la interrupción de los medios de vida y la crisis económica, incidieron, un año más, en la situación de emergencia humanitaria que padece el país.** El Programa Mundial de Alimentos (PMA) cifró en 6,6 millones de personas –más de la mitad de la población del país– las que se encuentran afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, la desnutrición, el hambre y la violencia, alertando de que las cifras podrían ascender hasta los 7,8 millones de personas durante el primer semestre de 2023.⁷⁵ Anteriormente, el 14 de junio, el PMA había anunciado una reducción de casi un tercio de la ayuda alimentaria al país a pesar de las crecientes necesidades debido a la escasez de fondos y al aumento de los costes. Por otro lado, OCHA también denunció que Sudán del Sur sigue siendo el contexto más violento para los cooperantes, seguido de Afganistán y Siria. En 2022, nueve trabajadores humanitarios fueron asesinados en el país en el desarrollo de sus tareas de asistencia. Además, según los datos de UNHCR, a mediados de 2022 2.362.756 millones de personas se encontraban refugiadas debido a la violencia.⁷⁶

Más de la mitad de la población de Sudán del Sur se encuentra afectada por la inseguridad alimentaria aguda, la desnutrición, el hambre y la violencia

Si bien durante el año se siguió avanzando lentamente en la aplicación del acuerdo de paz de 2018 entre el Gobierno y el SPLA-IO, y se retomaron brevemente las conversaciones de paz de Roma con los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de 2018,⁷⁷ estos espacios fueron **insuficientes para contener la violencia en el país, que estuvo caracterizada por diversos escenarios:** enfrentamientos durante todo el año entre el Ejército de Sudán del Sur (SSPDF) y las fuerzas del Frente de Salvación Nacional (NAS) liderado por el general Thomas Cirillo en la región de Ecuatoria; episodios de violencia intercomunitaria,

principalmente concentrados en los estados de Jonglei, Alto Nilo, Warrap, Lagos, Unidad, Ecuatoria Central, Ecuatoria Occidental, Área administrativa de Abyei y Área Administrativa del Gran Pibor, motivados por tensiones por el acceso a recursos y por robo de ganado; así como enfrentamientos que implicaron al Gobierno, las fuerzas del SPLA-IO leales al vicepresidente Riek Machar y a las distintas facciones surgidas del SPLA-IO. En relación a estas últimas, que fueron en aumento a lo largo del año, en enero se había producido el anuncio de la adhesión de la facción del SPLA-IO Kitgwang, liderada por el general Simon Gatwech Dual –separada del SPLA-IO encabezado por el vicepresidente Machar en agosto de 2021– al Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) firmado en 2018.⁷⁸

Este acuerdo incluía el cese al fuego permanente y generó que Machar ordenase a sus fuerzas del SPLA-IO detener las hostilidades con las fuerzas de Kitgwang. Sin embargo, el cese al fuego no tuvo recorrido, y en el mes de febrero se empezaron a registrar enfrentamientos entre las fuerzas del SPLA-IO leales a Machar y la facción Kitgwang y tropas gubernamentales en los estados de Alto Nilo y Unidad. Estos enfrentamientos motivaron que el SPLA-IO anunciara a finales de marzo su retirada del mecanismo de monitoreo de la paz, mientras que el SSPDF declaró que se encontraba “oficialmente en guerra” contra el SPLA-IO. Posteriormente, en julio, la facción de Kitgwang volvió a padecer una nueva división cuando su líder adjunto, el general Johnson Olony, intentó reemplazar al general Simon Gatwech como líder de la facción. La crisis abierta, que generó una nueva división de Kitgwang en dos grupos encabezados por Gatwech y Olony respectivamente, motivó una nueva escalada de violencia entre las dos facciones en los estados del Alto Nilo y Jonglei, desplazando a miles de personas. Como en otras ocasiones en la guerra en el país, las disputas fueron instrumentalizadas adquiriendo una dimensión étnica-identitaria, motivando enfrentamientos entre miembros de la etnia nuer, a la que pertenece Gatwech, y de la etnia shilluk (agwalek), origen de Olony. La UNMISS desplegó tropas adicionales para disuadir ataques contra civiles y expresó su profunda preocupación por la violencia, instando a las partes a detener los combates. El Gobierno también reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas que combatieron con las tropas agwalek para detener la ofensiva dirigida por el general Gatwech. Sin embargo, a finales de año se mantenían los enfrentamientos armados.

74. ACLED, *Dashboard*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

75. OCHA, *Violent clashes in South Sudan intensify the humanitarian situation*, 29 de diciembre de 2022.

76. UNHCR, *Refugee Data Finger*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

77. Véase resumen sobre Sudán del Sur en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

78. Véase en línea.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli; gobierno con sede en Tobruk; grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner; Turquía
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

La situación en Libia durante 2022 se caracterizó por una **creciente polarización y una nueva fractura institucional, en un contexto de dificultades y bloqueo de las negociaciones sobre el futuro del país.**⁷⁹ Este clima de tensión e *impasse* -que se mantuvo hasta finalizar el año y que se evidenció en el establecimiento de dos gobiernos paralelos-, junto con los choques intermitentes entre actores armados en el país, alentaron preocupaciones sobre el devenir político y la situación de seguridad de Libia. **No obstante, en términos generales los niveles de violencia se mantuvieron similares a los del año anterior y muy por debajo de lo observado en períodos previos.** Siguiendo la tendencia registrada desde el acuerdo de alto el fuego suscrito en octubre de 2020, en 2022 se contabilizó la muerte de 157

personas a causa del conflicto armado, según el centro de estudios ACLED. Esta cifra es ligeramente superior a la de 2021, en la que se registraron 115 muertes; pero significativamente inferior a las de 2020 o 2019, años en los que la cifra anual de personas fallecidas a causa de las hostilidades superaba el millar (1.500 y 2.000, respectivamente). Como en años previos, los protagonistas de la violencia fueron grupos armados alineados con los principales bandos en pugna en el país, grupos armados organizados dedicados a actividades ilícitas, y, en menor medida, la filial de Estado Islámico, involucrada en algunas acciones esporádicas. Su líder, considerado responsable del secuestro y decapitación de 21 ciudadanos egipcios en Sirte en 2015, murió en septiembre a manos de grupos armados que controlan el este del país. Durante 2022 Naciones Unidas y grupos de derechos humanos continuaron alertando sobre el impacto de las hostilidades en civiles, el acoso a actores de la sociedad civil por parte de actores armados y los múltiples riesgos que afronta la población migrante y refugiada en el país, sometida a abusos, malos tratos y detenciones arbitrarias.

La incertidumbre respecto a la evolución del conflicto en Libia se había intensificado ya a finales de 2021, tras la suspensión de las elecciones generales previstas para el 24 de diciembre. Ante la no realización de los comicios, algunos sectores pusieron en entredicho la legitimidad del Gobierno de Unidad encabezado por Abdul Hamid Mohamed Dbeibah, escogido en febrero de 2021 en el marco del proceso de paz liderado por la ONU y con el mandato de liderar al país hasta la votación. Así, en febrero, la Cámara de Representantes con sede en Tobruk (este del país) decidió nombrar a Fathi Bashagha como primer ministro interino. Horas antes de esta votación, el convoy de Dbeibah fue atacado por hombres armados. El dirigente resultó ileso en estos hechos, calificados como intento de asesinato. En marzo, Bashagha -al que se atribuyen acuerdos y vínculos con un antiguo rival, el general Khalifa Haftar, figura de referencia en el este del país- designó su propio gobierno, en un proceso contestado y que no contó con reconocimiento de Naciones Unidas. Tanto Dbeibah como Bashagha anunciaron fórmulas y hojas de ruta dispares para celebrar elecciones y resolver la crisis. En los meses siguientes hubo intentos de mediación para acercar las posiciones entre los diferentes bandos, pero en la práctica la fecha límite de junio de 2022 para poner fin a la fase de transición -establecida en el acuerdo de 2020- venció sin que se consiguiera llegar a acuerdos. Paralelamente, los principales actores optaron por una retórica amenazante y belicista y se produjeron varios incidentes que elevaron la tensión. En abril, fuerzas pro Haftar y Bashagha forzaron el cierre de campos de petróleo y gas y terminales de exportación en un intento por debilitar el acceso de Dbeibah a recursos derivados de la venta de hidrocarburos (la producción no se

79. Véase el resumen sobre Libia en *Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2022: Análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona: 2023.

restableció hasta julio). En mayo, Bashagha intentó sin éxito instalar su gobierno en Trípoli y tras enfrentamientos en la capital sus fuerzas acabaron siendo expulsadas de la ciudad por grupos armados leales a Dbeibah. En julio se produjeron una serie de protestas en Trípoli, Benghazi y Tobruk -incluyendo el asalto e incendio de la sede del parlamento en esta última ciudad- que evidenciaron la frustración de la población ante la incapacidad de los dirigentes políticos para llegar a acuerdos y los problemas en las condiciones de vida. **Los hechos de violencia más graves se produjeron en agosto, cuando los peores enfrentamientos en varios años en la capital libia provocaron la muerte de una treintena de personas y heridas a más de 150.** Dos días de choques entre fuerzas alineadas con Dbeibah y Bashagha concluyeron sin que este último consiguiera expulsar al primero de la capital. Durante el segundo semestre Dbeibah consolidó su control sobre Trípoli, aunque se informó de hechos de violencia entre facciones armadas rivales. En los últimos meses del año las principales partes contendientes hicieron demostraciones de fuerza -a través de desfiles militares-, exhibieron una retórica agresiva y algunas informaciones apuntaban a reclutamientos intensivos por parte de ambos bandos. Al finalizar el año la ONU informó de progresos mínimos en torno a una nueva hoja de ruta para sortear la crisis y se hicieron patentes los obstáculos en las conversaciones encabezadas por representantes de los dos parlamentos rivales.

Aunque a nivel general el acuerdo de cese del fuego se mantuvo en vigor, a lo largo de todo el año el clima de confrontación influyó en la evolución de las negociaciones promovidas por la ONU y otros actores internacionales, incluyendo en el ámbito de la seguridad. La crisis política repercutió en el trabajo de la Comisión Militar Conjunta 5+5, integrada por representantes de las principales coaliciones militares rivales -cinco delegados del Gobierno de Acuerdo Nacional, predecesor del Gobierno de Unidad Nacional, y otros cinco vinculados al grupo armado Ejército Nacional Libio, rebautizado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (conocido como LNA o LAAF, por sus siglas en inglés) del general Haftar. En abril, los miembros de la comisión leales a Haftar anunciaron que suspendían su participación en este espacio e hicieron llamamientos a revertir medidas de confianza establecidas en el marco del acuerdo de cese del fuego. La medida se atribuyó a problemas en el pago de salarios a los miembros de LAAF por parte del Gobierno de Unidad Nacional, pero también fue interpretada como un intento por presionar la entrega del poder de Dbeibah a Bashagha. Las reuniones de la Comisión Militar Conjunta se reanudaron a finales de octubre, en Sirte, tras la designación del nuevo representante especial y jefe de la misión de la ONU en el país (UNSMIL), Abdoluaye Bathily, y desembocaron en el establecimiento de un subcomité de DDR. Paralelamente, se continuó trabajando en un plan para el repliegue de mercenarios y combatientes

foráneos, otro de los puntos relevantes que establece el acuerdo de tregua, dada la proliferación de fuerzas extranjeras en el país en los últimos años en apoyo a uno u otro bando y la proyección de intereses de múltiples actores regionales e internacionales en la contienda. Durante el año se informó de la retirada de algunos centenares de mercenarios de diversas zonas del país. Cerca de 300 mercenarios chadianos abandonaron el este de Libia en enero; mientras que en abril un millar de mercenarios sirios pro-Moscú y otros 200 integrantes de la organización paramilitar rusa Grupo Wagner habrían dejado el país. Este último movimiento se atribuyó a las repercusiones de la guerra en Ucrania. Según medios de prensa, en abril unos 5.000 mercenarios pro-rusos permanecían en el país en apoyo a las fuerzas de Haftar. Cabe destacar que durante 2022 también se generaron tensiones por acuerdos económicos y marítimos entre el Gobierno libio con base en Trípoli y Turquía que abren la puerta a la exploración conjunta de petróleo y gas en una zona del Mediterráneo disputada con Grecia y Egipto. Estos acuerdos entre Trípoli y Ankara -que también suscribieron pactos para fortalecer su cooperación en el ámbito militar- motivaron el rechazo de El Cairo, Atenas y la UE.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, grupos surgidos de las FARC, grupos paramilitares
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del *statu quo* mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

En Colombia continuó activo el conflicto armado, aunque el inicio de negociaciones de paz con el ELN, así como

acercamientos con otros grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro llevaron a una reducción de la violencia en el país.⁸⁰

Tras su victoria en las elecciones presidenciales de junio y ser proclamado presidente en agosto, Gustavo Petro señaló como una de sus principales prioridades políticas el diálogo con los diferentes actores armados del país, para poner fin a los diferentes conflictos. No obstante, se siguieron registrando enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones insurgentes, entre las propias organizaciones insurgentes y otros actos de violencia, como persecución y asesinatos de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y activistas ambientales y ataques contra la población civil. La organización Indepaz registró 94 masacres en el 2022, que causaron 300 víctimas mortales. Especialmente grave fue la masacre que tuvo lugar en marzo en Puerto Leguizamo, en Putumayo, en la que murieron 11 personas. El Ejército señaló que se trató de un operativo contra disidentes de las FARC, pero diversas investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos revelaron que entre las personas muertas había civiles, incluyendo un menor y varios líderes sociales. Además, Indepaz señaló que en 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 42 excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz, lo que eleva a 1.413 líderes y defensores asesinados desde septiembre de 2016 -año en que se firmó el acuerdo de paz- y 348 excombatientes asesinados. Por su parte, la defensoría del pueblo señaló que la cifra de asesinatos de personas defensoras y líderes había sido muy superior a la de 2021, ya que en 2022 se produjeron 199 asesinatos y en 2021, 136.

Por otra parte, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia alertaba en agosto del deterioro en la situación humanitaria en el país, con fenómenos como el desplazamiento, confinamiento, uso de artefactos explosivos y desaparición de personas como consecuencia del conflicto. Este deterioro se producía fundamentalmente en algunas regiones del país como Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Sur de Bolívar, la frontera con Venezuela en Norte de Santander y Arauca. Además, el CICR señaló que durante 2022 hubo activos seis conflictos en el país: el conflicto entre el Gobierno de Colombia y el ELN; entre el Gobierno y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); entre el Gobierno y las estructuras de las antiguas FARC-EP no acogidas al proceso de paz, las de Iván Mordisco; entre las AGC y el ELN; entre la disidencia Segunda Marquetalia y las estructuras de las antiguas FARC; y entre esas estructuras y el grupo disidente Comando de Frontera.⁸¹ El centro de investigación CERAC señaló que, si bien los eventos de violencia armada atribuidos

al ELN habían aumentado en su conjunto durante el año, esto se debió a que durante el mes de febrero se produjo una alta concentración de estos eventos. No obstante, excluyendo este periodo, la actividad violenta del ELN se había reducido con respecto al año anterior. Además, también se produjo una reducción en el número de muertes como consecuencia de acciones en las que el ELN tuvo implicación directa. Así, 53 personas murieron en eventos con participación del ELN, un 22% menos que en 2021, cuando murieron 68 personas. Además, OCHA señaló que, si bien se había registrado una tendencia a la baja en los desplazamientos masivos de población, los grupos armados no estatales estaban optando por otras formas de control social de la población civil, como los confinamientos, las restricciones a la movilidad o los desplazamientos individuales.⁸²

Durante todo el año tuvieron lugar enfrentamientos y acciones armadas, pero tras la toma de posesión del nuevo Gobierno se produjeron diferentes anuncios por parte de los actores armados y del Gobierno respecto a posibles acercamientos y diálogos. Sin embargo, coincidiendo con estos anuncios, los grupos armados también incrementaron su actividad violenta, en lo que podrían ser intentos de consolidar su poder territorial para iniciar las negociaciones desde posiciones de mayor fortaleza. A lo largo del año se anunciaron diferentes altos el fuego. El ELN llevó a cabo un alto el fuego entre el 10 y el 15 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas, situación que no se repitió en las jornadas electorales presidenciales, en las que sí se produjeron algunos incidentes violentos. Tras la proclamación de Petro como presidente, el ministro de Defensa anunció que se suspendían los bombardeos aéreos contra los grupos insurgentes. El 19 de diciembre el ELN decretó un alto el fuego entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. El 31 de diciembre el presidente Petro anunció un acuerdo bilateral de cese al fuego con varios grupos insurgentes de seis meses, pero dos días después el ELN negó que se hubiera alcanzado un acuerdo de forma bilateral.

Por otra parte, cabe destacar que el conflicto armado continuó teniendo Venezuela como uno de sus escenarios, y se repitieron los enfrentamientos armados en zonas fronterizas de ambos países, con ataques por parte del ELN y de otros grupos armados insurgentes y criminales y operativos de las fuerzas de seguridad de los dos países. Human Rights Watch (HRW) denunció que había constancia de operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad venezolanas con el ELN. Las zonas de Arauca en Colombia y Apure en Venezuela fueron escenario de múltiples enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente, disidencia de las antiguas FARC. Gentil Duarte, uno de los líderes de las disidencias murió en Venezuela en enfrentamientos. No

80. Véase el resumen sobre Colombia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

81. Catalina Oquendo, La Cruz Roja Internacional: "En Colombia hay seis conflictos armados", *El País*, 9 de agosto de 2022.

82. OCHA, *Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022. Enero - Noviembre de 2022*, 19 de diciembre de 2022.

obstante, tras el cambio de Gobierno y la nominación de Petro como presidente, se produjo un acercamiento entre los dos países, dando fin a la crisis diplomática que se había vivido en los últimos años.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno talibán, Frente Nacional de Resistencia (NRF)
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión "Resolute Support", con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión "Freedom Sentinel". En 2021, tras una importante intensificación de la violencia, los talibanes ascendieron de nuevo al poder y se produjo la retirada de todas las tropas internacionales en el país.

Durante 2022 se produjo la consolidación del poder talibán en Afganistán y aunque persistió la violencia en el país, la situación de conflictividad cambió completamente con respecto a los años anteriores. El conflicto armado en Afganistán pasó a estar centrado en los enfrentamientos entre el Gobierno talibán y la oposición armada protagonizada fundamentalmente por el National Resistance Front (NRF). Además, también se registraron múltiples atentados por parte de ISIS-KP, la rama local de ISIS que actúa en Afganistán y

Pakistán, así como en algunas zonas de la India. Aunque se registraron enfrentamientos, atentados y operaciones militares, **la intensidad de la violencia armada disminuyó considerablemente con respecto a la fase anterior del conflicto** en la que se enfrentaba la entonces insurgencia talibán contra las Fuerzas Armadas afganas y las tropas internacionales desplegadas en el país asiático. Durante el año se produjeron múltiples violaciones a los derechos de las mujeres, como la prohibición del derecho a la educación para las niñas y la prohibición de la participación de las mujeres en todos los ámbitos públicos del país, en una situación que defensoras de los derechos de las mujeres calificaron de apartheid de género. ACLED señaló que durante 2022 se registraron 3.970 muertes como consecuencia de la violencia en el país, muy por debajo de las casi 42.000 personas que murieron en 2021. No obstante, a lo largo de 2022 la situación de seguridad del país se deterioró con respecto a los primeros meses tras la toma del poder por los talibanes y así lo recogió el Secretario General de la ONU en sus informes sobre el país. Naciones Unidas señaló que tenía constancia de la existencia de 23 grupos armados de oposición en el país y que el NRF, el Afghanistan Freedom Front (AFF) y el Afghanistan Liberation Movement (AFL) habían reivindicado acciones armadas en las provincias de Helmand, Kabul, Kandahar, Kapisa, Nangarhar, Nuristan y Panjshir. La actividad del NRF, principal grupo armado de oposición activo en el país, se concentró fundamentalmente en las provincias de Panjshir y Baghlan y el grupo afirmó haber tomado el control de algunos distritos y zonas del país. Aunque los líderes del grupo, establecidos en Tayikistán, demandaron apoyo externo y provisión de armas, la negativa de Rusia a que se transfieran armas a Afganistán imposibilitaría cualquier apoyo por parte de otros Gobiernos. Ahmad Massoud, dirigente del grupo armado, participó en septiembre en Viena en un encuentro con diversos dirigentes de la oposición política al régimen talibán, organizado por el Austrian Institute for International Affairs. El grupo armado señaló que contaba con 3.000 combatientes. Los enfrentamientos armados se intensificaron con la finalización del invierno y en septiembre las fuerzas talibanes iniciaron una gran ofensiva contra el NRF, en la que afirmaron haber matado a 40 integrantes del grupo armado en la provincia de Panjshir, incluyendo cuatro comandantes, aunque el NRF negó haber sufrido tantas bajas. En octubre y noviembre se produjeron nuevos enfrentamientos incluyendo en zonas cercanas a la frontera con Tayikistán, lo que llevó a un incremento de las tensiones entre ambos países.

Además, aunque Naciones Unidas señaló que se había constatado una reducción en la actividad armada del ISIS-KP y se produjeron menos atentados, esta organización expandió sus acciones a más provincias y se registraron algunos atentados de importancia. En septiembre se produjo uno de los atentados más graves del año, con una explosión suicida en un colegio de Kabul. Se trataba de un centro educativo situado en un barrio habitado mayoritariamente por población hazara,

que ha sido objeto de persecución constante por parte de la organización armada. Naciones Unidas señaló que 53 personas murieron como consecuencia del atentado, la mayoría de ellas, niñas y mujeres jóvenes que estudiaban en el colegio. El atacante hizo detonar los explosivos en un aula ocupada por centenares de estudiantes que preparaban los exámenes de ingreso a la universidad, en la zona en la que se situaban las mujeres. Tras el atentado, decenas de mujeres hazara se manifestaron en las calles en protesta por la persecución que sufren. Seis integrantes del ISKP murieron posteriormente en un operativo de las fuerzas de seguridad afganas contra un escondite del grupo armado en Kabul en el que se produjo un tiroteo. Además, el ISIS-KP también llevó a cabo un atentado contra la embajada rusa en Kabul, en el que murieron seis personas, incluyendo dos diplomáticos rusos y posteriormente, un atentado también en Kabul contra la mezquita Wazir Akbar Khan, en la conocida como *green zone*, barrio donde se sitúan las embajadas, causó la muerte a siete personas y dejó más de 20 heridos.

En Afganistán se produjeron múltiples violaciones a los derechos de las mujeres, en una situación que defensoras de los derechos de las mujeres calificaron de apartheid de género

de seguridad indias y grupos insurgentes durante todo el año y los niveles de mortalidad asociados al conflicto fueron muy similares a los del año anterior, con una ligera disminución. De acuerdo con los datos recopilados por el South Asia Terrorism Portal, un total de 253 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos armados en el estado indio de Jammu y Cachemira, mientras que en 2021 murieron 274 personas. Según los datos de este centro de investigación, la mayoría eran insurgentes, 193. Además, también murieron 30 integrantes de las fuerzas de seguridad indias y 30 civiles. El centro de investigación ACLED registró cifras de mortalidad asociadas al conflicto armado muy similares, señalando que

en 2022 murieron 287 personas, frente a 290 en 2021. Así pues, el conflicto armado se mantuvo en bajos niveles de intensidad. El Gobierno señaló que desde la retirada de la condición de estado a Jammu y Cachemira se había registrado una reducción de la violencia. Sin embargo, los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición fueron constantes a lo largo de todo el año, con numerosas operaciones por parte de las fuerzas indias, que continuaron señalando las infiltraciones en territorio administrado por la India por parte de grupos acusados de proceder de Pakistán. Se produjeron enfrentamientos a lo largo de todo el año y persistió la actividad armada de grupos como LeT –que continuó siendo la organización insurgente más activa–, Hizb-ul-Mujahideen o Jaish-e-Muhammad. No obstante, International Crisis Group (ICG) advirtió de la emergencia de nuevos grupos como The Resistance Front, Kashmir Tigers, People’s Anti-Fascist Front y United Liberation Front of Kashmir. Las fuerzas de seguridad indias señalaron que se trataba de escisiones de LeT y que tenían como principal objetivo eludir la legislación sobre blanqueo de dinero.⁸³ En agosto, tres soldados y dos insurgentes murieron como consecuencia del tiroteo que se produjo después de que un grupo de insurgentes atacara instalaciones de las Fuerzas Armadas indias en el distrito de Rajouri en vísperas de la celebración del Día de la Independencia de la India. En octubre, durante una visita del ministro del Interior indio a la región se produjo la explosión de dos bombas cuya autoría fue atribuida por la policía a LeT.

Además, cabe destacar que el asesinato de cerca de 20 trabajadores hindúes durante los meses de mayo y junio, varios de ellos trabajadores públicos, en el valle de Cachemira, desembocó en protestas por parte de los trabajadores públicos, que exigieron ser reubicados fuera de esta zona hasta que se pudiera garantizar su seguridad. Durante la década de 1990, miles de cachemires hindúes –conocidos como pandits–, abandonaron la zona como consecuencia de la violencia

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

Persistió la situación de conflicto armado en Jammu y Cachemira con enfrentamientos entre las fuerzas

83. International Crisis Group, *Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend* Q&A/Asia, 28 de junio de 2022.

que los grupos armados dirigieron contra este grupo de población. Desde 2010 se produjo el retorno de algunas personas a la zona, pero durante 2022 cientos de pandits abandonaron sus lugares de residencia por temor a nuevos ataques y organizaciones como Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti hicieron un llamamiento a que toda la población pandit abandonara Cachemira. También persistieron las tensiones en torno a la nueva legislación electoral que el Gobierno presentó y que estaba pendiente de aprobación desde la retirada de la condición de estado a Jammu y Cachemira. Esta legislación conllevaría una reordenación de los distritos electorales favorable al BJP, partido en el Gobierno, y permitiría que cualquier persona que resida en la región pudiera participar en las elecciones aun sin ser residente permanente, lo que fue interpretado como una maniobra electoral para favorecer al Gobierno. En mayo también se produjeron numerosas protestas después de que un tribunal condenara a cadena perpetua a Yasin Malik, líder del grupo armado de oposición JKLF, que había sido detenido en 2019. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando la situación de represión en la región. El International Press Institute (IPI) señaló que la libertad de prensa se hallaba en grave peligro y denunció las graves restricciones y el acoso a los profesionales de la comunicación desde la retirada del estatus de estado a Jammu y Cachemira. Human Rights Watch (HRW) también denunció las graves restricciones a la libertad de prensa y a la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, así como la impunidad en la que permanecen graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indias y la insurgencia continuó activo, pero se redujo la intensidad de los enfrentamientos, así como la mortalidad como consecuencia de la violencia.

De acuerdo con los datos registrados por el South Asia Terrorism Portal, durante el año 2022 se produjeron 136 muertes en el marco del conflicto armado, casi la mitad de las registradas en los dos años anteriores, cuando murieron 237 (2021) y 239 (2020). No obstante, el conflicto continuó teniendo un importante impacto en la población civil, ya que, del total de personas fallecidas a consecuencia de la violencia en 108 incidentes letales, 53 eran civiles, 15 eran miembros de las fuerzas de seguridad y 68 eran integrantes del grupo armado CPI-M. No obstante, cabe señalar que más de la mitad de las víctimas mortales se produjeron en el estado de Chhattisgarh, donde también se produjeron la mayoría de enfrentamientos, con 62 incidentes violentos durante 2022. Por otra parte, según datos ofrecidos por el Ministerio de Interior indio, los incidentes de violencia naxalita se redujeron en el país un 77% entre 2009 y 2021.

Los datos oficiales también mostraban una reducción del 85% de las muertes en el periodo comprendido entre 2010 y 2021. En este sentido, el director general de la policía, Kuldiep Singh, señaló que se había puesto fin a la presencia naxalita en el estado de Bihar y que las fuerzas de seguridad estaban accediendo a zonas del estado de Jharkhand que anteriormente eran inaccesibles debido a la presencia de la insurgencia. El Gobierno también señaló que la actividad naxalita se había reducido de 96 distritos en 2010 a 46 en 2021. Durante todo el año se repitieron enfrentamientos esporádicos en diferentes estados entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado. Además, persistieron las detenciones de naxalitas, así como los ataques contra civiles acusados de ser informantes de las fuerzas de seguridad y también las muertes de civiles acusados de pertenecer al grupo insurgente. Cabe destacar que en mayo, el ministro jefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, señaló que estarían dispuestos a iniciar un diálogo con la insurgencia naxalita siempre que el grupo armado estuviera dispuesto a entregar las armas y expresar lealtad a la Constitución india.

El grupo armado respondió señalando que podrían iniciar un diálogo siempre que se dieran varias condiciones: la retirada de las fuerzas de seguridad desplegadas en las zonas de conflicto, la puesta en libertad de los líderes del grupo armado detenidos y la revocación de la ilegalización del CPI-M. El Gobierno señaló que el diálogo tendría que ser incondicional.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán (entre ellas, Tehrik-e Taliban Pakistan -TTP), insurgentes internacionales
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno pakistaní con la insurgencia talibán empeoró en 2022 a pesar de las negociaciones entre Gobierno y talibanes y el alto el fuego vigente durante unos meses. Este deterioro se produjo en un contexto de agravamiento de la crisis política y económica que atraviesa el país, con un accidentado cambio de Gobierno fruto de una moción de censura en abril contra el primer ministro Imran Khan y un atentado contra Khan meses después de haber sido depuesto. A esta situación se sumaron las graves inundaciones que sufrió el país como consecuencia del cambio climático y que afectaron a millones de personas. Según las cifras de Naciones Unidas al menos 1.700 personas murieron, cerca de 13.000 resultaron heridas –entre ellas al menos 4.000 menores– y casi 8 millones de personas tuvieron que desplazarse. Con respecto al conflicto armado, de acuerdo con las cifras recogidas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2022 murieron 1.714

El conflicto armado se deterioró en Pakistán a pesar del intento de negociaciones, en un contexto de grave crisis política e impacto del cambio climático

personas como consecuencia de la violencia y los diferentes conflictos en el país. Este balance representa un repunte con respecto a las cifras de mortalidad por la violencia armada con respecto al año anterior. El centro de investigación ACLED constató un aumento de los eventos violentos durante el año, especialmente los enfrentamientos armados, así como un incremento en las cifras de mortalidad, que fueron de 2.995 personas muertas en 2022 en el conjunto del país y 1.241 en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, frente a las 457 muertes registradas en esta zona en 2021. Las zonas fronterizas con Afganistán, y especialmente Khyber Pakhtunkhwa, fueron las más afectadas por la violencia, y epicentro de la acción armada de la insurgencia talibán y de las operaciones por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Les siguió la provincia de Baluchistán, donde se registró violencia tanto por parte de los talibanes como de la insurgencia baluchi.

El año se iniciaba con una escalada de la violencia en el país como consecuencia del fortalecimiento de la insurgencia talibán después del ascenso de nuevo al poder de los talibanes afganos en 2021. Pakistán acusaba a Afganistán de servir de base para las operaciones del TTP en suelo pakistaní y se incrementaron las tensiones entre ambos países por la construcción de una valla en la frontera por parte de Pakistán. Los distritos de Dera Ismail Khan y Waziristán Sur fueron escenario de atentados y enfrentamientos en enero en los que resultaron muertos policías, soldados e insurgentes. En febrero prosiguieron las acusaciones de Pakistán a Afganistán y cinco soldados resultaron muertos en el distrito de Kurram después de un ataque por insurgentes que habían llegado a Pakistán desde Afganistán. En abril se constató una importante escalada en el conflicto cuando drones de las fuerzas de seguridad pakistaníes llevaron a cabo ataques contra emplazamientos que servían de refugio al TTP en las provincias de Khost y Kunar en Afganistán. Estos ataques pakistaníes en territorio afgano se habrían producido ante la intensificación de la ofensiva talibán contra objetivos militares pakistaníes y en los días previos siete soldados pakistaníes murieron como consecuencia de un ataque talibán en Waziristán Norte. Los ataques de los drones pakistaníes habrían provocado la muerte de al menos 47 civiles. Tras esta escalada de la violencia se produjo un anuncio de alto el fuego de diez días en el marco de la festividad religiosa de Eid. En junio Gobierno y TTP, con la mediación del Gobierno afgano, acordaron convertir en indefinido el alto el fuego. No obstante, a lo largo de los siguientes meses persistieron las operaciones de seguridad contra la insurgencia, así como los enfrentamientos y ataques contra las fuerzas de seguridad por parte de los talibanes. Khyber Pakhtunkhwa fue escenario de numerosos episodios de violencia en los que resultaron muertos insurgentes e integrantes de las fuerzas de seguridad.

Después de que el TTP anunciara el 28 de noviembre que ponía fin al acuerdo de alto el fuego que había acordado con el Gobierno, se recrudeció la violencia. Tras el anuncio de reinicio del conflicto, se produjeron diferentes atentados en varias zonas del país que causaron decenas de víctimas mortales y algunos de ellos fueron atribuidos al TTP. El grupo apuntó a las operaciones militares por parte de las fuerzas de seguridad como motivo principal para poner fin al alto el fuego y en el comunicado en el que se produjo el anuncio hizo un llamamiento a los insurgentes a llevar a cabo atentados siempre que pudieran y donde pudieran. No obstante, el 6 de noviembre el TTP había llevado a cabo uno de los ataques más mortíferos de los últimos meses, cuando seis policías murieron en el transcurso de una emboscada talibán en el distrito de Lakki Marwat en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Previamente a este atentado se habían producido otros de menor gravedad y la población local había denunciado un incremento en las extorsiones y que la insurgencia talibán se estaba reagrupando en las antiguas áreas tribales. Tras la ruptura del alto el fuego se incrementó también la violencia en la provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán y que durante décadas sirvió de refugio para los talibanes afganos, además de ser escenario de otro conflicto entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y la insurgencia nacionalista baluchi.

Con respecto a la actividad de ISIS en el país, en marzo tuvo lugar el mayor atentado perpetrado por esta organización en Pakistán, cuando un ataque suicida llevado a cabo por ISIS-KP (rama de ISIS que opera en la denominada provincia de Khorasan) contra una mezquita chií causó la muerte de 63 personas en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, e hirió a otras 200. En diciembre, las fuerzas de seguridad afirmaron que habían matado a cuatro integrantes del ISIS-KP cuando trataban de infiltrarse desde Afganistán. El enfrentamiento se produjo días después de un atentado contra la embajada pakistaní en Kabul que fue atribuido al ISIS-KP, dirigido contra el Embajador y en el que una persona resultó herida.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Síntesis:	Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948,

1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Continuó activo el conflicto armado en la provincia de Baluchistán, que enfrentó a las fuerzas de seguridad pakistaníes con la insurgencia nacionalista baluchi. Durante el año se registró una intensificación del conflicto, con numerosos enfrentamientos que se repitieron durante todo el año y el uso de armamento pesado. Nuevamente la presencia en la provincia de actores económicos chinos fue uno de los ejes del conflicto y se produjeron ataques contra personal e instalaciones chinas en Pakistán. Además, persistieron las denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en la provincia, así como de impunidad por parte de actores criminales e inacción de las fuerzas de seguridad frente a esta criminalidad. Asimismo, los actores insurgentes baluchis estarían teniendo acceso al armamento que las fuerzas de seguridad afganas abandonaron tras la toma del poder por los talibanes, lo que habría incrementado su capacidad operativa. Por otra parte, Baluchistán resultó especialmente afectada por las graves inundaciones que se produjeron en el país en agosto, como consecuencia del impacto del cambio climático y más del 60% de las viviendas destruidas en el país se hallaban en esta provincia. De acuerdo con las cifras registradas por ACLED, durante 2022 se produjeron 705 muertes en la provincia de Baluchistán como consecuencia de la violencia. Por su parte, el Center for Research and Security Studies de Pakistán, señaló que durante 2022 hubo 254 víctimas mortales en Baluchistán como consecuencia de la violencia. No obstante, cabe señalar que parte de los eventos violentos que tuvieron lugar en Baluchistán fueron obra de actores armados como el grupo armado talibán TTP, que también opera en esta provincia. El grupo armado baluchi BLA continuó siendo la organización insurgente más activa de la provincia y durante 2022 llevó a cabo varias acciones destacadas que provocaron numerosas víctimas, fundamentalmente entre las filas de las fuerzas de seguridad pakistaníes. El año comenzaba con varios ataques simultáneos perpetrados por el BLA en varios distritos. Así, el 2 de febrero el grupo atacó un campamento militar en el distrito de Panigur, dando lugar a un enfrentamiento en el que murieron seis insurgentes y tres soldados y también llevó a cabo un ataque contra un puesto de control en el distrito de Nushki en el que murieron nueve insurgentes y cuatro soldados. En abril se

produjo el primer ataque suicida por parte de una mujer reivindicado por el BLA contra un centro cultural chino en la universidad de Karachi, en el que resultaron muertos tres profesores chinos. También en abril el BLA llevó a cabo otro atentado con bomba contra un convoy militar en Baluchistán en el que resultaron muertos cuatro soldados. El BLF se enfrentó a las fuerzas de seguridad en el distrito de Panjgur y afirmó haber causado la muerte a nueve soldados. Según recogió ACLED en el enfrentamiento se había usado misiles y otras armas pesadas. De nuevo se utilizaron misiles en otros ataques que llevó a cabo el BLA en mayo, contra un puesto de control y las oficinas de los servicios de inteligencia pakistaníes en la ciudad de Kharan en los que resultaron muertos cinco miembros de las fuerzas de seguridad. En julio el BLA secuestró a un teniente coronel y un familiar suyo y posteriormente ejecutaron al militar mientras se llevaba a cabo una operación para rescatarlo, en la que murieron nueve insurgentes y un soldado. En agosto se produjo un nuevo atentado que evidenció la intensificación del conflicto, cuando la coalición de grupos armados BRAS reivindicó haber derribado un helicóptero militar utilizando armamento antiaéreo en el distrito de Las Bela. No obstante, las Fuerzas Armadas negaron que se tratara de un ataque y señalaron que el helicóptero había tenido un accidente debido al mal tiempo. Seis miembros de las fuerzas de seguridad murieron como consecuencia del incidente.

En Filipinas, a finales de año murió por enfermedad Jose Maria Sison, el líder y fundador del Partido Comunista de Filipinas y del grupo armado NPA

Los numerosos enfrentamientos que siguieron registrándose en varias provincias del país entre las fuerzas de seguridad del Estado y el NPA provocaron la muerte de como mínimo 160 personas, pero a finales de 2022 el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas declararon la victoria estratégica del Estado sobre el movimiento insurgente comunista. Tal afirmación se basa en los datos difundidos en noviembre por parte del Gobierno, según los cuales el número de frentes militares activos del NPA se habría reducido en más de un 75% desde el año 2016. Así, si en julio de 2016 el NPA tenía -según el Gobierno- 89 frentes activos en todo el país, en septiembre de 2022 tenía solamente cinco efectivamente activos (principalmente en Northern Samat y South Cotobato), habiendo otros 19 frentes que el Estado consideraba sumamente debilitados y en proceso de ser desmantelados. Según estos mismos datos gubernamentales, el número de combatientes activos del NPA se había reducido hasta los 2.112, una cantidad claramente inferior a la de los últimos años y a la del cénit del movimiento comunista en los años ochenta, en los que se estima que el NPA tenía alrededor de 25.000 combatientes. Las Fuerzas Armadas declararon que en los últimos cinco años se había dado muerte, capturado o rendido 10.608 combatientes regulares del NPA y que más de 41.000 personas pertenecientes al movimiento, incluyendo algunas en la clandestinidad, habían dejado de prestar su apoyo al Partido Comunista de Filipinas y al NDF. En el mismo período (2016-2022), según Manila, se habrían “liberado” 2.890 municipios afectados por la violencia y 31.254 pueblos y 1.386 ciudades habrían declarado al NPA persona non grata. En la misma línea, a finales del año el Eastmincom (la estructura del Ejército en Mindanao oriental, una de las regiones con mayor presencia histórica del NPA), declaró que desde 2016 se han “neutralizado” a 4.797 miembros del NPA (rendición de 3.579; captura de 524 y muerte de 403), incluyendo 101 líderes de grupo. En la misma línea, el Eastmincom anunció en diciembre el desmantelamiento oficial de seis frentes guerrilleros del NPA, la mayoría en Davao y Bukidnon.

Por su parte, el Partido Comunista de Filipinas (PCF) negó con rotundidad los datos oficiales y las declaraciones del Gobierno sobre la derrota o el colapso inminente del movimiento insurgente comunista, aunque se negó a dar datos sobre la membresía actual del NPA. Así, durante la celebración del 53º aniversario de la fundación del partido a finales de marzo, el PCF celebró que el Estado no hubiera podido derrotar al movimiento antes de la finalización del mandato de Duterte, tal y como habían asegurado en varias ocasiones las Fuerzas Armadas y el Gobierno durante los últimos años, y a la vez instó al NPA a incrementar el reclutamiento de nuevos efectivos y a aumentar la actividad en las zonas urbanas. El PCF reconoció haber sufrido algunos reveses importantes últimamente y señaló que el Estado había

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

incrementado notablemente sus esfuerzos y operaciones de contrainsurgencia en los últimos años, incluyendo la neutralización de combatientes a través de las llamadas negociaciones de paz localizadas y el ofrecimiento de paquetes de ayudas a la reinserción. En este sentido, en mayo el Departamento de Defensa Nacional declaró que como mínimo 26.414 combatientes del NPA (que el Gobierno denomina oficialmente Grupo Terrorista Comunista) se habían rendido o entregado. En la misma línea, a mediados de año, el Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC, por sus siglas en inglés) recomendó al Gobierno la concesión de una amnistía a combatientes del NPA, una medida que podría beneficiar a entre 8.000 y 10.000 combatientes del NPA. Por su parte, tanto el NDF como el PCF se opusieron tajantemente a las negociaciones de paz localizadas por considerarlas una estrategia de contrainsurgencia destinada a dividir al movimiento revolucionario, a promover la guerra psicológica, a obtener información de inteligencia y a tener un mayor control sobre personas, familiares o comunidades con vínculos con el grupo insurgente. Finalmente, cabe señalar que a finales de año murió por enfermedad Jose Maria Sison, el líder y fundador del PCF y del NPA. Previamente, en el mes de agosto, un enfrentamiento bélico entre las Fuerzas Armadas y el NPA en la provincia de Samar podría haber provocado la muerte de Benito Tiamzon y Wilma Austria, líderes históricos del PCF y del NPA. Según algunas fuentes, en la actualidad ambos ocupaban la máxima dirección del PCF y del grupo armado. Tiamzon y Austria habían sido capturados en 2014, pero habían sido liberados por Duterte para incorporarse a la delegación negociadora del NDF, y tras el colapso de las mismas en 2017 volvieron a la clandestinidad. Sin embargo, a finales de año las Fuerzas Armadas reconocieron no haber podido corroborar la muerte de Tiamzon y Austria.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansar Khilafa, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF

con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

No trascendieron cifras de mortalidad sobre el conflicto que enfrenta al Estado filipino con varias insurgencias de signo islamista en Mindanao, pero varios análisis sugieren que la intensidad y letalidad de los enfrentamientos se redujo en comparación con el año anterior. En el mes de mayo, las Fuerzas Armadas declararon que desde principios de año habían muerto 41 combatientes del BIFF y otros cuatro de Abu Sayyaf. Los principales episodios de violencia se registraron en los meses de marzo, mayo y septiembre. En marzo, después de que el BIFF atacara varios destacamentos militares en Maguindanao, las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva de gran envergadura en 10 municipios que provocaron la muerte de 24 combatientes y el desplazamiento de más de 66.000 personas en la región de Datu Saudi Ampatuan. En mayo, cinco miembros del BIFF murieron durante la contraofensiva del Ejército para recuperar el mercado público de la localidad de Datu Paglas (provincia de Maguindanao), que el grupo ocupó durante varias horas poco después de que el presidente Rodrigo Duterte hubiera visitado un campamento militar cercano. Después de los enfrentamientos, que provocaron la evacuación temporal de parte de la población de Datu Paglas, el presidente instó a la Autoridad Transicional de Bangsamoro (el gobierno provisional de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada por el MILF) a controlar y combatir a los grupos armados que operan en la región para evitar la declaración de una ofensiva de alta intensidad por parte de las Fuerzas Armadas. En fechas parecidas, tres combatientes de Abu Sayyaf fueron abatidos por el Ejército en la localidad de Sumisip, en la isla de Basilan. En el mes de septiembre, 16 combatientes del BIFF (además de un soldado) murieron en varios enfrentamientos en la localidad de Shariff Saydona Mustapha, en la provincia de Maguindanao. Los combatientes formaban parte de la facción del BIFF liderada por Ustadz Karialan, una de las tres principales del grupo. Las otras dos facciones del grupo, lideradas respectivamente por Ismail Abubakar y Abu Turaiife, sí declararon su lealtad a Estado Islámico,

pero Karialan hasta el momento no lo ha hecho. El Ejército declaró que no estaba claro si el comandante Karialan se hallaba entre las personas que murieron. En este sentido, cabe señalar que durante el año murieron dos de los principales líderes del grupo Daula Islamiyah (también conocido como Grupo Maute), Usop Nasif – en abril, cerca de la ciudad de Marawi– y Salahuddin Hassan –en octubre, en la provincia de Maguindanao.

A pesar de todo lo mencionado, tanto el Gobierno como algunos analistas señalaron en varias ocasiones que los distintos grupos armados de signo islamista que operan en Mindanao cada vez están más debilitados. Según el Gobierno, tras los graves enfrentamientos entre el Estado y varios grupos armados que tomaron durante varios meses la ciudad de Marawi en 2017, el Estado ha incrementado de manera drástica y sostenida su presión militar contra dichos grupos, lo que habría comportado, entre otras cosas, el debilitamiento de sus fuentes de apoyo y financiación internacional, la reducción de las áreas de control o influencia de estos grupos, o el incremento en el número de desertiones, rendiciones o capturas de combatientes, lo que a su vez habría proporcionado valiosos datos de inteligencia sobre la actividad de los grupos. A finales de septiembre, el Gobierno declaró que unos 300 combatientes del BIFF se habían rendido desde principios de año. Además, en 2021 las Fuerzas Armadas tomaron algunos de los principales campamentos del BIFF o Abu Sayyaf. Según algunos medios de comunicación, en 2021 el BIFF atacó un mercado para abastecerse de alimentos, mientras que Abu Sayyaf habría atacado a población civil también para conseguir comida, un *modus operandi* que no era habitual tiempo atrás. Según estas mismas fuentes, el incremento de los ataques suicidas que se registró en la región desde el año 2019 podría guardar relación con este creciente debilitamiento de dichos grupos, al ser considerada una estrategia militar mucho más barata y efectiva que tratar de confrontar militarmente a las Fuerzas Armadas en pie de igualdad. En este sentido, en diciembre de 2021 el Gobierno detuvo a nueve mujeres presuntamente vinculadas a Abu Sayyaf (entre ellas tres hijas de Hatib Hajan Sawadjaan, líder de Abu Sayyaf que murió en julio de 2020) acusadas de querer perpetrar atentados suicidas. Además, otras fuentes sugieren que las medidas de restricción de la pandemia de la COVID-19 estarían dificultando la llegada de combatientes extranjeros a Mindanao, un flujo que se habría incrementado tras el debilitamiento de ISIS en Siria e Iraq.

Finalmente, algunos análisis señalan que el establecimiento de la Región Autónoma de Bagsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada de manera transitoria hasta 2025 por el líder del MILF, Ebrahim Murad, habría erosionado también la legitimidad y membresía de los grupos armados que se oponen al acuerdo de paz de 2014. De hecho, en febrero el propio Ebrahim Murad declaró públicamente estar en conversaciones

con dos de las tres principales facciones del BIFF para que unos 900 combatientes se unan nuevamente al MILF y apoyen los esfuerzos del gobierno de transición. El BIFF se escindió del MILF por su oposición a las conversaciones de paz que desembocaron en el acuerdo de paz de 2014. En mayo, sin embargo, la Autoridad de Transición de Bangsamoro declaró que el Gobierno no entablará negociaciones con las facciones del BIFF, Abu Sayyaf o Daula Islamiyah que ya han rechazado cualquier posibilidad de diálogo o cooperación con el Gobierno de Bangsamoro.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado se agudizó en Myanmar durante el año y se intensificaron los enfrentamientos tanto entre el Ejército y varios grupos armados étnicos, como entre las fuerzas armadas y las Fuerzas de Defensa Popular (PDF por sus siglas en inglés, grupos armados surgidos tras el golpe de Estado militar de 2021). Según ACLED, a lo largo del año murieron 19.324 personas como consecuencia de la violencia armada, una cifra considerablemente superior a la de 2021, cuando murieron 10.362 personas. Además, el número de eventos violentos pasó de 6.800 en 2021 a 9.282 en 2022. Naciones Unidas alertaba del grave deterioro en

la situación humanitaria del país como consecuencia de los desplazamientos forzados y la inseguridad alimentaria.⁸⁴ A finales de diciembre de 2022, la cifra de personas desplazadas internas en el país era de 1,5 millones de personas, lo que representaba más del doble del número de personas desplazadas un año antes, cuando había 660.000 personas desplazadas. Esta cifra incluía 330.400 personas que vivían en una situación de desplazamiento prolongado como consecuencia de conflictos anteriores, la mayoría de ellas en el estado Rakhine. El conflicto y la inflación tuvieron un importante impacto en la población civil, con más de 15 millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria moderada y severa, 13 millones más que el año anterior. Además, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar afirmó que desde el golpe de Estado las fuerzas de seguridad habían matado a más de 2.000 civiles y detenido a más de 14.000, incluyendo 1.400 niños y niñas.

El año se iniciaba con una escalada de la violencia en el estado Kayah, después de la masacre que había tenido lugar el 24 de diciembre de 2021 y en la que las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a más de 30 civiles. Los enfrentamientos entre el grupo armado KNDF y el Tatmadaw (Fuerzas Armadas del país) forzaron el desplazamiento de 60.000 personas (algunas fuentes señalaron que podrían haberse desplazado hasta 170.000 personas). También se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el KNDF en alianza con grupos de PDF (Fuerza de Defensa Popular, grupos armados surgidos tras el golpe de Estado militar). Estos enfrentamientos se repitieron durante todo el año. Otra de las zonas más afectadas por el conflicto y en la que se produjeron intensos enfrentamientos armados fue la región de Sagaing, epicentro de los enfrentamientos entre el Tatmadaw y las PDF con apoyo de grupos armados étnicos como el KNU. Miles de personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de las operaciones militares, que en muchas ocasiones provocaron la destrucción de hogares debido a los bombardeos aéreos y al fuego de mortero. Además, en esta zona – igual que en otras del noreste del país– se produjeron importantes restricciones de la movilidad, con puntos de control y bloqueos de carretera, que dificultaron en gran medida el acceso de ayuda humanitaria a la población afectada por la violencia armada, provocando situaciones de vulnerabilidad y aislamiento de la población civil. En el estado Rakhine y el sur del estado Chin se intensificaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición AA a partir del mes de agosto, tras la ruptura de un alto el fuego que se había alcanzado en 2020 después

Se intensificó el conflicto armado en Myanmar, con enfrentamientos armados entre el Ejército de la Junta Militar y los grupos armados étnicos y las Fuerzas de Defensa Popular, con graves consecuencias humanitarias

de años de intensos enfrentamientos. En esas áreas se produjeron intensos enfrentamientos que provocaron el desplazamiento de miles de personas –23.000 entre agosto y noviembre según los datos recogidos por OCHA– y el Tatmadaw llevó a cabo bombardeos aéreos en diversas zonas de los dos estados. Además, se desplegaron miles de efectivos militares adicionales en la zona, provocando grave inseguridad entre la población civil. No obstante, a finales de noviembre se logró alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego de carácter informal, que se mantenía vigente al finalizar el año, aunque su situación era de enorme fragilidad. La negativa del AA a unirse a las conversaciones con los grupos armados étnicos propuestas por la Junta militar, así como los contactos mantenidos con el Gobierno de Unidad Nacional –gobierno conformado por la oposición al régimen militar tras el golpe de Estado–, habrían motivado la escalada militar en agosto, tras meses de tensiones entre AA y Tatmadaw. El estado Kachin también se vio gravemente afectado por la violencia y desde el mes de octubre se produjo una importante escalada en los enfrentamientos, después de que un bombardeo del Tatmadaw en Hpakant causara la muerte de al menos 60 personas, gran parte de ellas integrantes del grupo armado de oposición KIA, incluyendo varios de sus dirigentes. El ataque contra el grupo armado se produjo mientras este celebraba el 62º aniversario de su fundación y desembocó en una escalada de la violencia en los meses posteriores. Además, también se registraron enfrentamientos armados en los estados Kayin, Shan y Mon, que ocasionaron destrucción de infraestructuras básicas y desplazamiento de población civil.

En lo que respecta a la situación de derechos humanos y política en el país, **continuó la represión de la oposición política al régimen militar con miles de detenidos**. Al finalizar 2022 más de 13.000 presos políticos seguían detenidos en el país y 2.688 activistas y opositores políticos habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad, según los datos proporcionados por la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP). Se produjo el traslado a prisión y el confinamiento en aislamiento de Aung San Suu Kyi, que permanecía bajo arresto domiciliario tras su detención después del golpe de Estado perpetrado en febrero de 2021. Al finalizar el año, un tribunal militar amplió siete años más la pena impuesta a la dirigente birmana por cinco cargos de corrupción adicionales, lo que elevó a 33 años de prisión la condena total que cumple en la cárcel de Naypyitaw. El régimen militar anunció también la prórroga del estado emergencia hasta 2023. Tras el golpe de Estado de 2021, las autoridades militares impusieron el estado de emergencia y anunciaron elecciones para 2023, que podrían celebrarse en

84. OCHA, *Myanmar Humanitarian Update No.25*, 30 de diciembre de 2022.

agosto, sin que se concretase la fecha. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre el país con el voto favorable de 12 miembros y la abstención de China, Rusia e India. La resolución 2669 efectuaba un llamamiento al cese de la violencia en el país al tiempo que expresaba la preocupación de los integrantes del Consejo por las acciones del régimen militar de Myanmar. Se trata de la primera resolución sobre el país desde 1948, ya que el veto de China y Rusia había impedido en anteriores ocasiones que el Consejo de Seguridad se pronunciara sobre la situación en el país asiático. La resolución demandaba la puesta en libertad de todas las personas detenidas de forma arbitraria en el país.

Aunque el Gobierno tailandés sostiene que la notable reducción de la violencia en los últimos años se debe a su gestión del conflicto, algunas voces señalan que hay otros factores explicativos, como el impacto de la COVID-19 o las negociaciones de paz con el BRN

los que 7.344 personas murieron y 13.641 resultaron heridas en las tres provincias de Yala, Pattani y Narathiwat y en cuatro distritos de la provincia de Songkhla. El 52% de las víctimas eran budistas y el 45% musulmanas, y el 15% de las mismas eran mujeres. En términos comparativos, los niveles de violencia en el sur del país se han reducido drásticamente desde 2007, año en el que esta alcanzó su cénit (892 víctimas mortales y 1.670 heridos). En la última década, la violencia también ha experimentado un marcado descenso. Así, en 2012 se registraron 1.850 episodios de violencia (una media de más de 5 al día) en los que 507 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas. El descenso de la violencia se hizo todavía más pronunciado

desde el año 2020, en el que 116 personas murieron (en comparación con las 180 que lo hicieron a lo largo de 2019). Aunque el Gobierno sostiene que la evolución descendente de la violencia se debe principalmente a su gestión del conflicto, varios medios de comunicación también señalan que hay otros factores explicativos, como el impacto de la pandemia de la COVID-19 o bien el inicio de las negociaciones de paz directas entre el Gobierno y el BRN a principios de 2020. A lo largo de dicha negociación, una de las principales demandas del Ejecutivo al BRN habría sido la reducción de la violencia y la demostración de que las personas que representaban al grupo en la mesa de negociación tenían una incidencia real sobre las decisiones militares del grupo y sobre los niveles de violencia en el terreno. En este sentido, uno de los hechos más importantes del año 2022 en cuanto a las dinámicas del conflicto fue la tregua (denominada Iniciativa de Paz de Ramadán) que el Gobierno y el BRN acordaron del 3 de abril al 14 de mayo, y que en términos generales no observó violaciones significativas del alto el fuego. Posteriormente, en una nueva ronda de negociación a principios de agosto, el Gobierno propuso una nueva tregua de tres meses y medio (del 15 de agosto al 30 de noviembre), pero esta propuesta fue rechazada por el BRN.

Otro de los aspectos del conflicto armado más relevantes del año fue la reaparición del grupo armado PULO, una de las insurgencias históricas en el sur de Tailandia pero que no había protagonizado ninguna acción armada desde el 2016. El 15 de abril, precisamente cuando expiraba la tregua acordada entre Bangkok y el BRN, una persona murió y tres policías resultaron heridos tras estallar dos artefactos explosivos de manera simultánea en el distrito de Sai Buri (provincia de Pattani). Kasturi Mahkota, uno de los líderes del grupo, declaró que el atentado buscaba reivindicar que las conversaciones de paz deberían llevarse a cabo con otros grupos armados y no solamente con el BRN. PULO era uno de los grupos insurgentes que participó en MARA Patani, la organización paraguas de distintos grupos en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana que entre mediados de 2015 y finales de 2019 entabló

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En paralelo a la evolución positiva de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el BRN, y en paralelo a la reducción clara y sostenida de la violencia que ha experimentado el sur de Tailandia en los últimos años, en 2022 se redujeron sustancialmente el número de ataques y episodios armados. Aunque el Gobierno no ofreció cifras oficiales sobre las víctimas mortales derivadas del conflicto armado, el centro de investigación Deep South Watch señaló que entre enero y finales de marzo habían muerto 30 personas y otras 57 habían resultado heridas. Según datos de este mismo centro, desde enero de 2004 hasta marzo de 2022 se han registrado 21.485 incidentes violentos en

negociaciones con el Gobierno tailandés. Posteriormente, a principios de julio, las Fuerzas Armadas mataron en la provincia de Yala a dos combatientes y detuvieron a otros cinco miembros del PULO, que según Mahkota cuenta con cinco unidades en el sur de Tailandia. En cuanto al BRN, uno de los episodios de violencia que tuvo mayor repercusión política y mediática fue el ataque simultáneo a mediados de agosto contra 17 objetivos de las tres provincias sureñas fronterizas con Malasia -principalmente tiendas y gasolineras-, en el que una persona murió y otras siete resultaron heridas. El BRN reivindicó la autoría de los atentados, lamentó la pérdida de una vida y señaló que los comercios que habían sido atacados, que según algunos medios podrían ser regentados por sectores cercanos al Gobierno, dañaban a la economía local. Aunque algunos medios de comunicación calificaron los hechos como el ataque coordinado más importante de los últimos años en el sur de Tailandia, el jefe del panel negociador del Gobierno lamentó los hechos, pero señaló que estos no provocarían la interrupción de las negociaciones. A finales de noviembre, un policía murió y entre 31 y 45 personas resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo improvisado en un bloque de apartamentos que albergaba a policías y sus familias en el distrito de Muang (provincia de Narathiwat). Tras este atentado, el Gobierno renovó el decreto de emergencia en la mayor parte de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Rusia - Ucrania	
Inicio:	2022
Tipología:	Gobierno, Territorio Internacional
Actores:	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Rusia bajo liderazgo de Vladimir Putin inició en febrero de 2022 una invasión militar contra Ucrania, que resultó en la ocupación militar de áreas del sur y este del país, y afectó a otras zonas también con bombardeos y ataques, y generó graves impactos en seguridad humana, como desplazamiento forzado masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violencia sexual, inseguridad alimentaria y energética, entre otros. La invasión de estuvo precedida de ciclos anteriores de conflicto y de diálogo fallidos: protestas antigubernamentales entre finales de 2013 y principios de 2014 que llevaron a la caída del gobierno del presidente Víktor Yanukóvich; anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014 y guerra en el este de Ucrania desde abril de 2014 entre milicias locales apoyadas por Rusia y el Ejército ucraniano. La invasión de 2022 y guerra interestatal transcurrió en torno a la soberanía e

integridad territorial de Ucrania, puesta en cuestión por Rusia con una invasión, contraria a derecho internacional. El antagonismo entre EEUU, la UE y la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro, y la fallida arquitectura de seguridad continental influían también sobre el contexto del conflicto y las perspectivas de resolución. Entre finales de febrero y abril de 2022 Rusia y Ucrania mantuvieron negociaciones político-militares, que resultaron fallidas. La invasión tuvo repercusiones globales multidimensionales, incluyendo entre otros en seguridad alimentaria de países de la región MENA y de África, así como en un orden internacional tensionado y mayor militarización del continente europeo.

Rusia lanzó una invasión militar contra Ucrania en febrero de 2022, que llevó a un conflicto armado interestatal y que causó una grave crisis humanitaria e impactos multidimensionales globales.

La agresión, contraria a derecho internacional, desbordó el conflicto armado previo en el este de Ucrania -activo desde 2014- y desmanteló el proceso negociador anterior. Estuvo precedida del despliegue militar masivo de tropas rusas junto a la frontera con Ucrania, incluyendo en Belarús, en los últimos meses de 2021, así como de contactos diplomáticos entre finales de 2021 y principios de 2022 para abordar la crisis, pero que no lograron reconducirla.⁸⁵ El 21 de febrero Rusia decretó el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, acompañado de un discurso presidencial en que Vladimir Putin cuestionó la legitimidad histórica de Ucrania como país independiente. El 24 de febrero Rusia inició la invasión, con el anuncio de Putin de una “operación especial” y de perseguir objetivos de “desmilitarización” y “desnazificación” de Ucrania. Se dio paso a una invasión, guerra y ocupación militar, que al finalizar el 2022 seguía activa y sin perspectivas de resolución a corto plazo. La invasión pivotó en torno al cuestionamiento de Rusia de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Se añadía un contexto de disputa internacional entre Rusia y Occidente, entre otros elementos. En términos de actores, del lado de Rusia combatieron sus fuerzas armadas, incluyendo reservistas movilizadas por decreto, así como mercenarios de la organización rusa paramilitar Grupo Wagner. Ucrania desplegó a su Ejército, ampliado con la activación de las fuerzas de defensa territorial. La declaración de ley marcial por decreto presidencial en Ucrania prohibió la salida del país de los hombres entre 18 y 60 años. La invasión militar causó grave devastación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que entre el inicio de la invasión y el 18 de diciembre de 2022, al menos 8.231 civiles murieron y otros 13.734 resultaron heridos, y que las cifras reales podían ser significativamente más altas. Según ACNUDH, la mayoría de las víctimas civiles se debieron al uso de armas explosivas con efectos en zonas extensas, incluyendo ataques de artillería pesada, sistemas de lanzacohetes múltiples, misiles y ataques aéreos.⁸⁶ Algunas estimaciones situaron en decenas de miles los combatientes fallecidos o heridos en cada

85. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2023.

86. OHCHR, “Ukraine: civilian casualty update 19 December 2022”, OHCHR, 19 de diciembre de 2022.

una de las partes, o incluso superando el umbral de las 100.000 víctimas militares mortales o heridas en cada parte.⁸⁷ A mediados de diciembre, había 5,59 millones de personas desplazadas internas, 7,83 millones de personas refugiadas y 17,7 millones de personas requerían asistencia humanitaria, según datos de OCHA. Las consecuencias en seguridad humana incluían también trauma psicosocial, uso de la violencia sexual como arma de guerra bajo ocupación, incremento de los riesgos de violencia de género y más dificultades para hacerle frente, destrucción de infraestructura civil, como viviendas, la red energética o instalaciones médicas, entre otros impactos.

La invasión rusa se inició el 24 de febrero desde el norte, noreste, este y sur, por tierra, mar y aire. Ucrania respondió a la invasión con la defensa militar. Al inicio de la invasión, tropas rusas asediaron la capital, Kiev, así como otros núcleos, como Chernihiv, Járkov, Jersón y Mariúpol, y tomaron territorio en zonas del norte, este y sur, incluyendo la toma de la ciudad portuaria de Jersón el 2 de marzo. En esta y otras localidades se produjeron protestas ciudadanas contra la ocupación. Entre finales de marzo y principios de abril Rusia retiró sus tropas de la región de Kiev y de otras zonas del norte. Tras la retirada rusa del norte emergieron evidencias de graves vulneraciones de derechos humanos en localidades anteriormente ocupadas como Bucha e Irpin, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de civiles y tortura. En los meses siguientes, los frentes de guerra estuvieron focalizados en el este y sur, si bien Rusia llevó a cabo bombardeos también en otras zonas de Ucrania. En mayo las fuerzas rusas tomaron la ciudad portuaria de Mariúpol (sudeste), bajo asedio ruso desde el inicio de la invasión y que causó una grave crisis humanitaria. Según las autoridades ucranianas, 25.000 personas murieron durante el largo asedio y el 90% de los edificios quedaron destruidos. Su captura implicó para Rusia la conexión de los territorios ocupados del sur y este del país. Ese mes y tras la toma también de Lisichansk (Lugansk), Moscú afirmó tener el control sobre la provincia de Lugansk. En verano tropas rusas ampliaron, aunque de forma limitada, la toma de zonas del Donbás, y se produjeron ataques aéreos de Rusia en áreas alejadas de los frentes de guerra.

El Ejército ucraniano retomó en septiembre el control de la región de Járkov (noreste) en el marco de una contraofensiva militar que forzó la retirada de las tropas rusas de las áreas ocupadas, incluyendo de las localidades de Iziium y Kupiansk, localidades ejes de comunicación. Emergieron en la región nuevos testimonios y evidencias de ejecuciones y tortura de civiles bajo la ocupación y se halló una fosa común en Iziium con al menos 440 cuerpos, incluyendo personas con signos de tortura y

Rusia lanzó una invasión militar contra Ucrania en febrero de 2022, que llevó a un conflicto armado interestatal y que causó una grave crisis humanitaria e impactos multidimensionales globales

menores. Rusia decretó en septiembre la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporíyia y Jersón, tras la celebración de referéndums de independencia a finales de ese mes en las áreas de esas provincias bajo ocupación militar rusa. Además, ese mes anunció el reclutamiento parcial obligatorio de hombres rusos, lo que generó la salida de Rusia de miles de ciudadanos –centenares de miles, según Reuters– para evitar la medida. En octubre una explosión causó daños graves en parte del único puente que conecta la península de Crimea con Rusia, en una acción atribuida a Ucrania, y que fue seguida de ataques de Rusia con misiles contra la capital y localidades de al menos 12 provincias, incluyendo del centro y oeste, contra objetivos civiles como viviendas, oficinas y red energética, con una decena de fallecidos y un centenar de heridos. En noviembre el Ejército ucraniano retomó el control de la ciudad de Jersón. En los últimos meses del año se incrementaron las hostilidades en áreas de Lugansk y Donetsk, incluyendo en la localidad de Bajmut. Un ataque de Ucrania contra una escuela reconvertida en base militar rusa en Makiivka (Donetsk) en la madrugada del 1 de enero de 2023 causó la muerte de decenas de soldados rusos –89 según

Rusia, varios cientos según fuentes ucranianas. A lo largo de la invasión en 2022 Rusia llevó a cabo ataques con cifras elevadas de víctimas civiles, como un ataque en marzo contra un hospital maternoinfantil en Mariúpol, con tres personas fallecidas y 17 heridas, incluyendo menores; un ataque con misil contra la estación de tren de Kramatorsk (Donetsk) en abril, con 60 civiles fallecidos y un centenar de heridos; un ataque contra un centro comercial en Kremenchuk (Poltava) en junio, con al menos 20 civiles fallecidos y medio centenar de heridos; un ataque ruso con misiles a mediados de julio en Vinnitsia, que mató a 23 personas, incluyendo tres menores; un ataque ruso con misiles en septiembre contra un convoy civil cerca de la ciudad de Zaporíyia causó 31 víctimas mortales y más de 80 heridos, entre otros. Además, Rusia intensificó en el último trimestre del año los ataques aéreos contra la red energética, lo que agravó la situación de emergencia energética y humanitaria.

La guerra escaló en diversos momentos en torno a las amenazas de Rusia de uso de todos los medios a su alcance, aludiendo al uso de armas nucleares. Además, las hostilidades en torno a la central nuclear de Zaporíyia –la más grande de Europa y ocupada por Rusia al inicio de la invasión– generaron también riesgos de seguridad. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desplegó una misión permanente en la central y se involucró en diálogo con Rusia y con Ucrania para el establecimiento de una zona de seguridad en torno a la planta, sin que se lograra acuerdo. Por otra parte, Rusia

87. BBC, “Ukraine war: US estimates 200,000 military casualties on all sides”, BBC, 10 de noviembre de 2022.

y Ucrania mantuvieron negociaciones en el ámbito político-militar con apoyo de terceras partes desde el inicio de la invasión y hasta su bloqueo en abril de 2022. Desde entonces, Moscú y Kiev solo mantuvieron abierto el diálogo en el ámbito humanitario, de exportación de cereales y de protección de infraestructura nuclear, con apoyo de terceras partes. Entre los escasos logros, la consecución de un acuerdo en julio de exportaciones de cereales, con participación de la ONU y Turquía.⁸⁸

La invasión y guerra tuvieron dimensión internacionalizada, con la participación de actores internacionales en el suministro de armamento. Países occidentales proporcionaron apoyo militar masivo a Ucrania, incluyendo sistemas de lanzamisiles HIMARS y MLRS, sistemas antitanque Javelin, Stinger y NLAW, misiles antiaéreos, cañones, entre otros, y a finales de año EEUU anunció el envío de una batería de misiles antiaéreos Patriot. Por su parte, Ucrania acusó a Irán de suministrar armamento a Rusia durante la invasión, incluyendo drones de diversos modelos, usados ampliamente en ataques rusos, mientras Irán solo admitió suministros previos a la invasión. En conjunto la invasión fue acompañada de un incremento del militarismo en el escenario global y, específicamente, en países occidentales. En reacción a la invasión, Finlandia y Suecia solicitaron su ingreso en la OTAN -cuestión que a finales de año requería aún de la ratificación por parte de dos miembros de la OTAN, Hungría y Turquía. Ya en 2021 el gasto militar mundial había superado los dos billones de dólares por vez primera, y con una subida del 0,7% respecto al 2020, y las cien principales empresas de armas habían seguido creciendo.⁸⁹ En 2022 gobiernos occidentales anunciaron nuevas medidas de incremento de presupuestos militares y de militarización del continente, denunciadas por organizaciones de la sociedad civil.

La invasión fue respondida con la activación de sucesivos paquetes de sanciones por EEUU, la UE, Reino Unido y otros actores, que incluyeron sanciones selectivas –incluyendo, entre otros, contra Putin y otros altos cargos, empresarios, propietario y comandantes del Grupo Wagner, y también contra entidades como bancos y financieras, empresas militares y aviación-, así como sanciones económicas y de suspensión del acuerdo de facilitación de visados. Entre las sanciones económicas y comerciales se incluía la prohibición en la UE de importación de petróleo crudo ruso por vía marítima y prohibición a navieras y aseguradoras de transportar el crudo si su venta superaba un precio límite impuesto por la UE y el G7. No obstante, el año finalizó sin que las sanciones llevaran a Rusia a finalizar la invasión y sin que generasen impactos económicos de grave envergadura en el país, que se benefició del alza de precios de la energía y de mercados alternativos al occidental, si bien análisis apuntaron a posibles

escenarios de mayores impactos en la economía rusa en fases posteriores. La invasión y sus impactos globales de alza de precios de la energía y los alimentos, entre otros, tuvieron repercusiones en todo el mundo incluyendo en países de la región MENA y de África, agravando situaciones de desigualdad y falta de seguridad humana.

Desde el inicio de la invasión se produjeron iniciativas de respuesta a la crisis humanitaria, llamamientos al fin de la invasión, así como acción en el ámbito de la justicia internacional. La población ucraniana se movilizó masivamente en la respuesta social ante la invasión, involucrándose en el apoyo mutuo, asistencia en acceso a bienes básicos, evacuaciones, búsqueda de personas desaparecidas, entre muchas otras esferas. Activistas de derechos humanos y ciudadanía contraria a la guerra de Rusia y Belarús llevaron a cabo iniciativas contra la invasión y en denuncia de las políticas internas de vulneración de derechos humanos. En el ámbito de la justicia internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició en marzo de 2022 la recopilación de pruebas para una investigación sobre alegaciones pasadas y presentes de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en Ucrania desde 2013. En el ámbito multilateral, la Asamblea General de la ONU condenó la invasión y reclamó la retirada de tropas rusas con una resolución en marzo de 2022 (141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, Resolución A/ES-11/L.1). En otra resolución en noviembre, con menor apoyo, instó a Rusia a pagar reparaciones de guerra a Ucrania (94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones, A/RES/ES-11/1). Actores como China, India, Irán, Pakistán y Sudáfrica se abstuvieron. La invasión tuvo repercusiones en las relaciones internacionales en múltiples ámbitos, incluyendo mayor acercamiento y dependencia de Rusia hacia China y un orden internacional poliédrico más tensionado.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis:	El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad

88. Véase Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

89. SIPRI, *Resumen del Anuario SIPRI 2022*, Fundipau y SIPRI, 18 de octubre de 2022.

territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto armado entre Turquía y el PKK continuó activo en el sudeste de Turquía y, principalmente, en el norte de Iraq, donde el Ejército turco lanzó nuevas operaciones militares contra el grupo armado kurdo.

International Crisis Group cifró en 434 las víctimas mortales por el conflicto Turquía-PKK en territorio de Turquía y del norte de Iraq (323 miembros del PKK, 92 fuerzas de seguridad y 19 civiles), balance similar al del 2021 (420 fallecidos). **En Turquía, las provincias de Hakkari (77 fallecidos) y Sirnak (43), fueron las más afectadas en términos de víctimas mortales (con 77 y 43, respectivamente), seguidas Diyarbakir (12) y Mardin (11).** En esas y otras provincias (Tunceli, Sanliurfa, Bingöl, Mus, Hatay, Elazig) el Ejército llevó a cabo operaciones militares. Un ataque el 20 de abril con explosivo accionado por control remoto contra un autobús que transportaba guardias de prisión en Bursa (noroeste, cuarta ciudad más grande del país) causó la muerte de un guardia y heridas a otros cuatro. El ataque no fue reivindicado. Días antes Turquía había iniciado una nueva operación militar terrestre y área de Turquía contra el PKK en el norte de Iraq (Operación Garra de Bloqueo). También en esas fechas, Duran Kalkan, miembro del comité ejecutivo del PKK amenazó con una extensión de la guerra a las ciudades de Turquía. Durante el resto de año continuaron produciéndose algunos incidentes armados en áreas principalmente rurales. En diciembre, un atentado con coche bomba contra un minibús de la policía en la provincia de Diyarbakir hirió a ocho policías y a un civil. El ataque no fue reivindicado, mientras el Gobierno acusó al PKK. Por otra parte, durante el año las YPS y YPS-JIN (organizaciones vinculadas al PKK, cuya estrategia es de guerrilla urbana) se atribuyeron diversos ataques.

La mayor parte de los ataques del Ejército contra el PKK se produjeron en el norte de Iraq. En esa región se produjeron 389 de las 434 víctimas mortales de 2022 asociadas al conflicto Turquía-PKK, según ICG. Turquía llevó a cabo diversas ofensivas como la Operación Águila

de Invierno en febrero contra fuerzas kurdas tanto en Iraq (Sinjar y Majmur) y también en el norte de Siria; así como una ofensiva aérea y terrestre en abril contra el PKK en la gobernación de Duhok en el norte de Iraq (Operación Garra de Bloqueo) y que a finales de 2022 seguía activa. En el marco de esa operación, nueve turistas iraquíes murieron y una veintena resultaron heridos, incluyendo un menor fallecido y varios heridos, en un ataque con proyectiles de artillería de Turquía contra una zona vacacional en el distrito de Zakho. El Gobierno de Iraq condenó el ataque y acusó a Turquía de violación de la soberanía iraquí.⁴⁷ También las autoridades kurdas de Iraq criticaron el ataque e instaron al cese de los enfrentamientos entre Turquía y el PKK. Durante el año también se produjeron hostilidades entre el Ejército turco y las fuerzas kurdas de Siria, YPG, con frecuentes ataques de Turquía en el norte de Siria, así como ataques de las YPG contra objetivos de Turquía en provincias turcas fronterizas con Siria. En noviembre Turquía acusó al PKK y a las YPG de un atentado que tuvo lugar en noviembre en Estambul en una céntrica avenida de la ciudad, que causó seis víctimas mortales y 81 heridos y en días posteriores llevó a cabo bombardeos contra áreas kurdas de Siria, incluyendo cerca de un complejo que alberga fuerzas estadounidenses. Tanto el PKK como las YPG negaron cualquier participación en el atentado de Estambul. En los últimos meses del año Turquía amenazó con una invasión terrestre contra áreas bajo control kurdo en Siria para establecer una franja de separación de 30 kilómetros. Turquía mantuvo sus ataques aéreos, pero no llegó a desplegar la invasión terrestre.⁹⁰

Por otra parte, Turquía mantuvo la persecución policial y judicial contra actores civiles kurdos, incluyendo políticos, periodistas y activistas kurdos, así como contra otros sectores de la oposición política y social y defensores de derechos humanos, con decenas de detenciones. En abril un tribunal condenó a cadena perpetua agravada al filántropo turco y defensor de la democracia y los derechos humanos Osman Kavala y a 18 años de cárcel a otras siete personas, sentencia fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos por considerarla motivada políticamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en junio a Turquía por no garantizar el cumplimiento del dictamen que el TEDH emitió en 2019 requiriendo la puesta en libertad inmediata de Kavala. Durante 2022, otros factores de crisis incluyeron el deterioro económico en el país y la tensión política preelectoral (elecciones parlamentarias y presidenciales en 2023), entre otros. Se produjeron movimientos geopolíticos, como el acercamiento de Turquía a actores rivales como Siria, Israel y Armenia. La guerra en Ucrania proporcionó mayor peso político internacional a Turquía, como actor mediador entre Rusia y Ucrania, así como por su capacidad de veto a la demanda de entrada a la OTAN de Suecia y Finlandia, a las que exigió medidas de mayor persecución contra actores kurdos.

90. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	<p>El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). A partir de 2014 el grupo ha aprovechado el clima de inestabilidad en el país para avanzar en sus objetivos y sus milicianos se han visto involucrados en choques con los al-houthistas, con las fuerzas gubernamentales, con tropas</p>

de EAU y milicias tribales. Desde el ataque de al-Qaeda al USS Cole en 2000, EEUU se ha visto implicado en periódicos ataques contra el grupo. El escenario de conflicto en Yemen también ha favorecido la actividad de ISIS en el territorio.

Durante 2022 **Yemen continuó afectado por un conflicto armado de alta intensidad, que se cobró la vida de al menos 6.721 personas, según los datos de la base de datos ACLED. Esta cifra de letalidad es, sin embargo, significativamente inferior a la observada en los últimos años**, en los que se contabilizaban más de 20.000 víctimas mortales anuales -22.000 en 2021, 20.000 en 2020 y 23.000 en 2019. El descenso en el número de muertes a causa de la violencia en el país se debió principalmente a las consecuencias del acuerdo de alto el fuego entre los principales actores en disputa. La tregua estuvo vigente durante seis meses (2 de abril a 2 de octubre de 2022) y supuso una significativa reducción en las hostilidades, una mayor libertad de movimientos para la población y mejoras en el acceso de combustibles y ayuda humanitaria. El conflicto armado continuó teniendo un gran impacto en la población civil. Según el recuento de la iniciativa Civilian Impact Monitoring Project, desde enero y hasta noviembre de 2022 al menos 716 civiles habían muerto a causa del conflicto armado, mientras que otras 1.602 personas habían resultado heridas. Durante los meses de vigencia de la tregua se observó una importante reducción en las bajas civiles, aunque se produjeron diversos incidentes relacionados con la presencia de armas explosivas en distintas zonas del país. A principios de 2022 se registraron los mayores niveles de violencia en el país. Las hostilidades ya se habían intensificado en los últimos meses de 2021, en el marco de la intensificación de la campaña de los al-houthistas para controlar la zona de Maarib (centro) y los consiguientes enfrentamientos con fuerzas alineadas con el gobierno yemení internacionalmente reconocido y grupos armados que cuentan con el apoyo principal de Emiratos Árabes Unidos (EAU).⁹¹ En enero de 2022, en represalia por los retrocesos en Maarib, los al-houthistas lanzaron ataques armados contra Arabia Saudita y EAU, que generaron una serie de ataques recíprocos, incluyendo numerosas ofensivas aéreas en territorio yemení. Estos hechos fueron interpretados como una señal de los riesgos de expansión regional del conflicto armado y volvieron a alentar duras críticas contra los actores armados involucrados en la contienda por las afectaciones de la violencia en población e infraestructuras civiles. De hecho, **enero fue el mes con mayor número de víctimas civiles en tres años** (234 personas muertas y 432 heridas) y las hostilidades causaron el desplazamiento de miles de personas. Uno de los ataques más cruentos fue

91. En 2022 se observó un mayor protagonismo de grupos como Giant Brigades, que forma parte de las Joint Forces respaldadas por EAU, con acciones en la zona de Hodeidah y Maarib. Durante el año también estuvieron activos grupos de reciente creación, como Happy Yemen Brigades, integradas por combatientes de tribus y salafistas que lanzaron operaciones contra los al-houthistas en las provincias septentrionales de Hajjah y Saada.

perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudita y afectó a un centro de detención en la capital yemení, Sanaa, causando la muerte de 91 detenidos y 236 heridos. En este contexto, en febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó -con las abstenciones de Brasil, Irlanda, México y Noruega- la resolución 2624, renovando las sanciones financieras y de viaje contra actores yemeníes, incluyendo a los al-houthistas como objeto de embargo de armas. EAU, que a partir de enero se incorporó como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, hizo lobby con diversos actores con la intención de designar a los al-houthistas como grupo terrorista.

En paralelo a las hostilidades, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, continuó con sus gestiones diplomáticas con diversos actores para intentar favorecer una salida política al conflicto.⁹² Fruto de esta iniciativa, a finales de marzo las principales partes contendientes acordaron iniciar un alto el fuego de alcance nacional -por primera vez desde 2016- a partir del 2 de abril, coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán. El pacto estableció cinco puntos, incluyendo un alto en todo tipo de ofensivas militares -terrestres, aéreas y marítimas- dentro y fuera de Yemen. Además, los actores armados se comprometían a mantenerse en sus posiciones hasta esa fecha. Así, en los meses siguientes no se produjeron ataques aéreos ni operaciones de gran escala, aunque continuaron registrándose algunos incidentes en las líneas de contacto de los diversos frentes de batalla.

En paralelo, se pusieron en marcha otros aspectos del acuerdo, como la entrada de combustible a través del puerto de Hodeidah, la reanudación de vuelos desde el aeropuerto de Sanaa con dos destinos específicos (Egipto y Jordania) y la continuación de los contactos con el enviado especial para intentar poner fin a la guerra. No se registraron mayores avances en uno de los puntos: las conversaciones para reabrir carreteras, incluyendo la de Taiz, objeto de años de asedio por parte de los al-houthistas. El acuerdo de alto el fuego fue suscrito inicialmente por dos meses y renovado en dos ocasiones, en junio y agosto, pero no en septiembre. El enviado especial de la ONU pretendía entonces que la tregua se extendiera por un plazo de seis meses e incluir una serie de medidas adicionales, incluyendo la liberación urgente de prisioneros y el fortalecimiento de los mecanismos de desescalada del Comité de Coordinación Militar (establecido tras el acuerdo de abril). Los al-houthistas fueron responsabilizados de

la no reedición del alto el fuego por incluir demandas adicionales para su renovación, en especial su pretensión de que sus fuerzas militares fueran incluidas en el pago a los funcionarios públicos. **Diversas voces lamentaron el fin formal de la tregua y destacaron sus impactos positivos**, como la reducción (en torno a un 60%) en el número de muertes por la violencia, la disminución en los niveles de desplazamiento forzado (a la mitad) y una reducción parcial de las personas afectadas por inseguridad alimentaria. Las consecuencias de la guerra de Ucrania y el aumento de precios a nivel global también afectaron a Yemen, importador de combustibles y de alimentos -el país compraba casi 50% del trigo a Ucrania y Rusia. Según OCHA, 17 millones de personas afrontaban inseguridad alimentaria al finalizar el año y más del 80% de la población tenía problemas para satisfacer necesidades básicas, incluyendo alimentación, agua potable y acceso a servicios de salud.

Pese al fin oficial de la tregua, hasta finales de 2022 no se habían reanudado los enfrentamientos de gran escala entre las partes y se seguían cumpliendo diversos aspectos del acuerdo. No obstante, se observaban crecientes hechos de violencia en diferentes frentes, como Maarib, Taiz, Al-Jawf, Lahj y Shabwa. Persistía un clima de incertidumbre por las posibilidades de una nueva escalada, en medio de informaciones sobre la preparación de las partes para nuevas hostilidades y señales de una mayor confrontación en otros ámbitos, como la guerra económica, que se materializó por ejemplo en ataques al-houthistas a infraestructuras petroleras bajo control gubernamental. Si bien las negociaciones auspiciadas por la ONU permanecieron mayormente bloqueadas en el último trimestre, hasta finalizar el año seguía activo el diálogo entre los al-houthistas y Arabia Saudita con facilitación de Omán. Los al-houthistas prefieren a Riad como interlocutor, mientras que Riad desearía encontrar una salida a un conflicto que le está suponiendo altos costes. En el plano político, cabe destacar que, durante 2022, tras el acuerdo de tregua, renunció el presidente yemení Abdo Rabbo Mansour Hadi. El hasta entonces mandatario transfirió sus poderes a un Consejo Presidencial de ocho miembros, representantes de distintas fuerzas que integran el bando anti al-houthista y que habrían sido seleccionados principalmente por Arabia Saudita y EAU.

Durante 2022, continuó en funciones la misión de la ONU en el país, UNMHA, que supervisa específicamente el cese el fuego en el puerto de Hodeidah tras el Acuerdo de Estocolmo de 2018.

En 2022 Yemen registró un significativo descenso en las hostilidades y el número de víctimas mortales de la violencia como resultado de la tregua que estuvo vigente durante seis meses

92. Para más información, véase el resumen sobre Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado que se concentra principalmente en el área del Sinaí en Egipto continuó desarrollándose con niveles de violencia de baja intensidad, similares a los registrados el año anterior. Como en períodos previos, persistieron las dificultades para establecer un balance de personas fallecidas a causa del conflicto debido a informaciones no precisas o contradictorias sobre el número de bajas en las hostilidades. Pese a ello, la base de datos ACLED registró **un total de 272 personas fallecidas en enfrentamientos, como resultado de detonaciones y ataques explosivos y en acciones contra civiles**. La disputa siguió estando protagonizada por miembros de la filial de Estado Islámico (ISIS) en la zona, autodenominada Provincia Sinaí y por efectivos de las fuerzas de seguridad egipcias apoyados por milicias progubernamentales. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos destacaron que estas **milicias integradas por clanes locales, como la Unión Tribal del Sinaí (UTS), se vieron crecientemente involucradas en las hostilidades en 2022**. A pesar de

que el presidente egipcio anunció en abril que las operaciones militares contra la insurgencia en el Sinaí estaban llegando a su fin, los incidentes persistieron a lo largo de todo el año. Las hostilidades se concentraron en el área norte y central del Sinaí, en localidades como Arish, Bir al-Abd, Sheikh Zuweid, Rafah, Al-Gafgafa, Maghara y en Jilbana, un área muy próxima al canal de Suez. A finales de año, en una acción fuera de lo habitual, ISIS también reivindicó un ataque contra policías en Ismailia, al oeste del canal de Suez.

Siguiendo el patrón de años previos, los hechos de violencia se materializaron en ofensivas aéreas, enfrentamientos, emboscadas, ataques con explosivos, atentados suicidas, asesinatos y secuestros, entre otros. **ISIS secuestró a varios civiles y asesinó a personas por su presunta colaboración con el Ejército**. Uno de los ataques más letales del grupo armado se produjo en mayo, cuando una ofensiva contra un puesto militar en la localidad de Qantara, al oeste de Bir al-Abd, acabó con la muerte de entre 11 y 17 soldados, la acción más cruenta reivindicada por ISIS en la zona en dos años. En septiembre, la filial de ISIS sufrió uno de sus mayores reveses del año, después de que una operación militar en colaboración con milicias tribales resultó en el fallecimiento de una decena de combatientes del grupo armado y, días después, en la muerte de dos altos cargos de la organización. Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) confirmó la autenticidad de videos que circulaban en las redes sociales en los que se mostraban al menos tres ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas a manos de milicias y miembros de las fuerzas de seguridad. HRW también denunció que, si bien las autoridades permitieron el retorno de algunas familias expulsadas de la zona en 2021 y 2022, Egipto continuaba incumpliendo sus obligaciones respecto a las personas desplazadas forzosamente del norte del Sinaí en el marco de una campaña masiva de demoliciones de viviendas entre 2013 y 2020, sin que se demostrara la necesidad militar de esta acción ni se estableciesen compensaciones para las familias desarraigadas. En octubre, el Parlamento extendió por otros seis meses el estado de emergencia en el norte del Sinaí.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes Unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

Durante 2022 Iraq continuó siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, con niveles de violencia ligeramente superiores a los observados el año anterior, aunque alejados de los períodos con los peores balances de letalidad a causa de las hostilidades (2003-2008 y 2014-2017). **Según los datos de Iraqi Body Count (IBC), en 2022 perdieron la vida 2.013 personas a causa de múltiples hechos de violencia, incluyendo 740 civiles** (74 menores de edad). La mayor parte de estas víctimas murieron en incidentes atribuidos a ISIS, pero otro grupo falleció en enfrentamientos y disputas entre clanes -un fenómeno creciente- y otra parte en acciones de fuerzas de seguridad y grupos armados afiliados. Según IBC, el total de combatientes fallecidos en 2022 fue de 1.273, incluyendo integrantes de ISIS, miembros del PKK y grupos afines, soldados iraquíes y turcos, miembros de las milicias shiíes Fuerzas o Unidades de Movilización Popular (UMP) y policías, entre otros. **La base de datos ACLED, en tanto, contabilizó un total de 4.477 personas fallecidas en 2022** en enfrentamientos, ataques explosivos, hechos de violencia contra civiles y manifestaciones violentas. El balance de víctimas mortales de 2021 fue de 1.610 y 2.511 según IBC y ACLED, respectivamente. Como en años previos, la violencia en el país estuvo protagonizada por múltiples actores y se vio influida por las tensiones políticas y luchas de poder a nivel interno y por dinámicas regionales e internacionales, que convirtieron al territorio iraquí en escenario de

las disputas entre Irán – EEUU/Israel y de incursiones constantes de Turquía e Irán contra grupos kurdos con bases en el norte del país.

ISIS continuó siendo un actor armado activo en Iraq y perpetró numerosos ataques contra soldados iraquíes, policías, fuerzas de seguridad kurdas (peshmergas) y civiles en diversos puntos del país, incluyendo Anbar, Bagdad, Kirkuk, Diyala, Nínive y Salah al-Din. Las fuerzas de EEUU -que formalmente acabaron su misión de combate en el país, pero que se mantienen con un rol de “asesoría” a fuerzas iraquíes y peshmergas, en especial en la lucha contra ISIS- fueron objeto de ataques con drones en enero, coincidiendo con el segundo aniversario del asesinato en Iraq del comandante iraní de la Fuerza Al-Quds, Qassem Soleimani, en una acción de EEUU. En marzo se produjeron nuevas ofensivas atribuidas a Irán contra instalaciones vinculadas a EEUU e Israel en Erbil, presuntamente como represalia de un ataque israelí en Siria. En mayo, nuevos ataques en Erbil fueron atribuidos a las milicias shiíes UMP. Durante el año también se produjeron enfrentamientos entre fuerzas iraquíes y la milicia yazidí Unidades de Resistencia de Sinjar (conocidas por la sigla YBS), a la que se atribuyen vínculos con el PKK. En lo que respecta a las acciones de Turquía en Iraq, en abril el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan anunció que ponía en marcha una nueva operación contra las posiciones del PKK en el norte de Iraq (denominada “Claw-Lock”). En julio, una ofensiva atribuida a Turquía en un recinto turístico de Duhok, en el Kurdistán iraquí, causó la muerte de nueve personas, hirió a otras treinta y derivó en tensiones diplomáticas entre Bagdad y Ankara. Turquía negó la autoría del ataque y lo atribuyó al PKK, mientras que el gobierno iraquí y el KRG denunciaron este y otros hechos como reiteradas violaciones a la soberanía del país y la región. En noviembre, tras un atentado en Estambul que Turquía atribuyó al PKK, el Gobierno de Erdogan lanzó una nueva ofensiva contra posiciones kurdas en el norte de Iraq y Siria -en el marco de una campaña bautizada como “Claw Sword”) y amenazó con una incursión terrestre.⁹³ En 2022 Teherán también intensificó sus acciones contra fuerzas kurdas iraníes ubicadas en el norte de Iraq, en especial tras el inicio de las protestas en Irán por la muerte en custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini. Los ataques se dirigieron principalmente contra el PDKI y Komala y causaron decenas de víctimas mortales.⁹⁴ EEUU derribó en septiembre uno de los aviones tripulados usados en estos ataques, asegurando que suponía una amenaza para las fuerzas estadounidenses ubicadas en la zona.

La violencia en el país también escaló, sobre todo a partir de mediados de año, como resultado del persistente bloqueo político y las luchas de poder que dificultaron durante meses la formación de un nuevo gobierno. Tras las elecciones de octubre de 2021, resultó vencedora la formación del clérigo shií Muqtada al-Sadr, que inició

93. Véase los resúmenes de Turquía (sudeste) y Siria en este capítulo.

94. Véase el resumen sobre Irán e Irán (noroeste) en el capítulo 2 (Tensiones).

gestiones para conformar un gobierno liderado por su partido. Las negociaciones en 2022 derivaron en una creciente fractura entre las fuerzas shiíes del país, ya que la coalición Shiite Coordination Framework (SCF), que aglutina a diversas fuerzas pro-iraníes y al partido del ex primer ministro Nouri al-Maliki, impulsó la formación de un gobierno alternativo. El cronograma para la designación de presidente, portavoz parlamentario y primer ministro, encargado de la formación del gobierno, se venció durante el primer trimestre sin que hubiera acuerdo en el nombramiento de los cargos. El hecho de que, por convención política, estos puestos se reparten tradicionalmente entre los diferentes grupos étnicos del país, añadió dificultades por las luchas de poder en torno a las designaciones.⁹⁵ Tras la formación de nuevas coaliciones -el bloque de al-Sadr se unió a otros grupos en la Coalition for Saving the Homeland-, varias votaciones fallidas por falta de quórum, e iniciativas de políticos independientes que no prosperaron, la crisis se agudizó. En junio al-Sadr ordenó a los más de 70 parlamentarios de su partido que renunciaran, siendo reemplazados por los segundos candidatos con más votos en la elección, la mayoría de ellos miembros de la SCF. Esta coalición propuso entonces el nombramiento como primer ministro de Mohamed Shia al-Sudani, considerado una figura próxima a al-Maliki, histórico rival de al-Sadr. A finales de julio, seguidores del clérigo shií iniciaron manifestaciones, asaltaron la fortificada Zona Verde de Bagdad y ocuparon el Parlamento para evitar la votación que ratificaría a al-Sudani. La movilización, que luego se trasladó a las afueras del edificio del Legislativo, se prolongó durante un mes, mientras al-Sadr exigía al Poder Judicial la disolución del Parlamento y una nueva convocatoria a elecciones. Esta demostración de fuerza coincidió con la difusión de informaciones que indicaban que al-Maliki estaba armando a grupos en el sur de Iraq para una confrontación con al-Sadr.

El primer ministro en funciones, Mustafá al-Kadhimi, convocó a un diálogo político en el que al-Sadr se negó a participar. Finalmente, tras unas declaraciones críticas del mentor espiritual de al-Sadr -en un movimiento supuestamente orquestado por Teherán- al-Sadr comunicó a finales de agosto su retiro de la política y el cierre de todas las entidades políticas vinculadas a su movimiento. El anuncio motivó nuevas protestas de sus seguidores y una escalada de violencia. **Los enfrentamientos entre las UMP y grupos alineados con la SCF, el ala militar del movimiento de al-Sadr (Saraya Salam) y las fuerzas de seguridad iraquíes, dejaron 30 personas muertas y más de 700 heridas, en los hechos de violencia más graves en Bagdad en varios años.** Grupos armados iraquíes se enfrentaron también en otras localidades del sur del país. La violencia se frenó (después de que al-Sadr instara a sus partidarios

a abandonar las calles. Según trascendió, el influyente clérigo chií iraquí Alí al-Sistani habría intervenido de forma discreta para que al-Sadr llamara públicamente a un cese de la violencia. Así, **un año después de los comicios, se conformó el nuevo gobierno**, con la designación del político kurdo Abdul Rashid como presidente -horas antes de su elección el Parlamento volvió a ser atacado con cohetes- y al-Sudani como primer ministro (el suní Mohamed al-Habousi, líder del partido Taqaddum, ya había sido elegido como portavoz parlamentario en enero). La representante especial de la ONU en Iraq y jefa de la misión en el país (UNAMI), que intentó facilitar el diálogo entre las partes, fue abiertamente crítica con los dirigentes iraquíes de todo el espectro político por su falta de voluntad política para poner por delante el interés nacional y por implicarse en luchas de poder que prolongaron el impasse. En noviembre, el nuevo primer ministro iraquí se reunió con el presidente de Irán en Teherán y anunciaron un compromiso para fortalecer la cooperación en seguridad. Al-Sudani también se mostró partidario del mantenimiento de las tropas de EEUU en el país para continuar la lucha contra ISIS.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁹⁶
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

95. Según esta convención política, el presidente es tradicionalmente un político kurdo; el portavoz parlamentario, un suní; y el primer ministro, un shií.

96. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como "internacional" y no como "interno" por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

A lo largo de 2022 la violencia asociada a las políticas de ocupación israelí, enfrentamientos entre israelíes y palestinos y ataques vinculados al conflicto provocaron la muerte de al menos 211 personas, según los datos de OCHA. La letalidad registrada en el último año es relativamente inferior a la de 2021, en el que se contabilizaron 350 muertes. Del total de muertes en 2022, siguiendo la tendencia de años precedentes, la gran mayoría de las personas fallecidas eran palestinas, 190, frente a 21 israelíes en el mismo período. Entre las personas heridas 10.345 eran palestinas y 251 eran israelíes. A diferencia de períodos previos en los que la mayor parte de víctimas mortales se registraba en Gaza, en el último año el mayor número de personas muertas y heridas se concentró en Cisjordania. De hecho, **Naciones Unidas destacó que 2022 se había convertido en el año con más víctimas mortales palestinas en Cisjordania** desde que inició un registro sistemático de las cifras de letalidad en 2005 (152 muertes y 9.909 personas heridas en 2022). Según los datos de la ONU, 2022 también fue el año con más víctimas civiles israelíes desde 2015. Entre las 16 muertes civiles israelíes en 2022 OCHA precisa que cuatro eran colonos, mientras que otras cinco eran integrantes de las fuerzas de seguridad.

El aumento de la violencia en Cisjordania se observó en un contexto de intensificación de las operaciones militares israelíes, prácticamente diarias y caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, y de crecientes acciones de los colonos. Durante 2022, y por sexto año consecutivo, se observó un nuevo incremento en los ataques perpetrados por colonos israelíes y **expertos de la ONU subrayaron que las evidencias de que las fuerzas israelíes facilitan, apoyan y participan en estos ataques dificultan discernir entre la violencia de los colonos y la del Estado israelí.**⁹⁷ La mayor parte de los palestinos y palestinas muertos por las fuerzas israelíes en 2022 se produjo en el marco de incursiones militares israelíes y enfrentamientos en las localidades de Jenín y Nablus (norte), en un contexto en que **también se ha observado un resurgimiento de la resistencia armada palestina.** La campaña militar que Israel ha bautizado como “Break the Wave / Breakwater” se intensificó a partir de marzo, tras una serie de ataques de palestinos en Israel, y ha estado orientada a perseguir a presuntos miembros de grupos armados como las Brigadas al-Quds, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y la Brigada de los Mártires de al-Aqsa, pero también de otras de formación más reciente (2021). Entre ellas las Brigadas de Jenín, que contarían con apoyo de PIJ, las Brigadas de Nablus y Tubas y el grupo denominado Lion’s Den (Nablus), que cobró notoriedad en 2022 y durante el año también protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad palestinas. **En Gaza los hechos de violencia letal más destacados se produjeron en agosto** como resultado de tres días de una ofensiva israelí que formaba parte de

esta misma campaña. 51 palestinos murieron en esta incursión, incluyendo 17 menores de edad. A lo largo del año también se produjeron reiterados incidentes en Jerusalén y Hebrón. En esta última ciudad, en noviembre, miles de colonos que celebraban un festival religioso accedieron a la zona de la ciudad bajo control palestino protagonizando ataques y daños. A finales de noviembre, un ataque en una parada de autobús en Jerusalén provocó la muerte de dos israelíes y dejó una veintena de personas heridas, en el primer ataque de este tipo desde 2016, según informaciones de prensa.

Cabe destacar que durante 2022 causó especial impacto internacional la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh mientras cubría una ofensiva militar israelí en un campo de refugiados de Jenín en mayo. Diversas investigaciones concluyeron que la periodista -de dilatada trayectoria y muy reconocida en Palestina- fue tiroteada en la cabeza por un soldado israelí a pesar de estar claramente identificada como reportera. Tras negar inicialmente cualquier responsabilidad en los hechos, Israel atribuyó la muerte de la periodista a un accidente y descartó iniciar una investigación criminal. La represión de las fuerzas israelíes durante el funeral de la periodista provocó consternación. **Durante el año también continuó la persecución a las organizaciones de derechos humanos palestinas que fueron declaradas como “terroristas” en 2021 por Israel** por sus presuntos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). En agosto, las oficinas de estas entidades fueron objeto de operaciones de rastreo y clausuradas. Expertos en derechos humanos de la ONU y varios países europeos denunciaron la criminalización de estas ONG alertando que Israel no había presentado evidencias creíbles que sustenten sus acusaciones.⁹⁸ Personas vinculadas a estas organizaciones también fueron objeto de persecución. Así, por ejemplo, el abogado franco-palestino Salah Hamouri de la ONG Adameer -especializada en la asistencia a prisioneros palestinos- fue encarcelado en marzo y expulsado a Francia en diciembre. En otro ámbito, y pese a que en 2016 la ONU aprobó una resolución orientada específicamente a detener los asentamientos israelíes en el territorio ocupado palestino (considerados contrarios al derecho internacional), durante 2022 **las autoridades israelíes también continuaron con su política de expansión y anunciaron nuevos planes de construcción de colonias. Israel también persistió en políticas de expulsión de población palestina y demoliciones de viviendas.** En uno de los casos más emblemáticos de 2022, en mayo la Corte de Justicia israelí rechazó las apelaciones contra las órdenes de expulsión de los residentes de la localidad palestina Masafer Yatta, designada a fines de la década de 1980 como zona de tiro por las fuerzas israelíes. La medida amenaza con expulsar a alrededor de 1.200 palestinos y palestinas, la mitad menores, en el que sería el mayor desplazamiento forzado en décadas desde una sola localidad. El enviado especial de la ONU

97. OHCHR, “Israel: UN experts condemn record year of Israeli violence in the occupied West Bank”, *OHCHR*; 15 de diciembre de 2022.

98. OHCHR, “Israel/Palestine: UN experts call on governments to resume funding for six Palestinian CSOs designated by Israel as ‘terrorist organisations’”, *OHCHR*, 25 de abril de 2022; RFI, “EU resumes funding for six Palestinian NGOs branded as terrorists by Israel”, *RFI*, 7 de agosto de 2022.

para Oriente Medio también insistió en su preocupación por las severas restricciones de movimiento impuestas por Israel a la población palestina. Durante el año Naciones Unidas también alertó sobre la situación de las personas detenidas. Hasta mediados de diciembre Israel había detenido a más de 6.000 palestinos, incluyendo 452 menores. Se trata del mayor número de personas arrestadas desde 2008, mientras que el número de personas que se encontraba en situación de detención administrativa se ha doblado en los últimos dos años.

Cabe destacar que a principios de año **Amnistía Internacional publicó un informe denunciando las políticas de apartheid de Israel contra la población palestina**, sumándose así a denuncias previas de organizaciones palestinas, entidades de derechos humanos israelíes y de Human Rights Watch.⁹⁹ A finales de año, la Asamblea General de la ONU (resolución 77/400) decidió solicitar opinión a la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí del territorio palestino, sus políticas de asentamientos y anexión, medidas para alterar la composición demográfica y leyes discriminatorias. Finalmente, cabe destacar que en 2022 los acontecimientos también estuvieron marcados por la disolución del gobierno israelí a mediados de año y una nueva convocatoria a elecciones, la quinta desde abril de 2019. La coalición de ocho partidos liderada por el primer ministro Neftalí Benet y el ministro de Exteriores Yair Lapid colapsó en junio, disolvió el Parlamento (Knesset) y convocó a comicios que se celebraron el 1 de noviembre y en los que resultó vencedor el partido Likud. **El retorno al poder de Benjamin Netanyahu derivó a finales de 2022 en la toma de posesión del gobierno más ultraderechista de la historia de Israel.** El nuevo gobierno incluye grupos nacionalistas judíos abiertamente supremacistas y que han incitado a una mayor violencia contra la población palestina. Netanyahu señaló que la expansión de los asentamientos sería la principal prioridad de su gobierno.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

99. Amnistía Internacional, *"Israel's Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity"*, AI, 1 de febrero de 2022.

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Aunque los niveles de letalidad del conflicto se han ido reduciendo en los últimos años, el país sigue siendo escenario de enfrentamientos que involucran a numerosos actores locales, regionales e internacionales y el balance de personas fallecidas a causa de la violencia continúa ubicando a Siria entre los conflictos armados de mayor intensidad a nivel mundial. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), **2022 fue el año con el balance de víctimas mortales más bajo desde el inicio del conflicto armado hace más de una década, con un total de 3.825 personas.** De este total, 1.627 eran civiles -incluyendo 321 menores y 159 mujeres- y 2.198 eran combatientes de los distintos grupos armados que operan en el país, entre ellos integrantes de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, de ISIS, de grupos armados opositores y/o islamistas, de milicias apoyadas por el gobierno, de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) lideradas por grupos kurdos, de milicias apoyadas por Irán, soldados turcos y miembros de Hezbollah, entre otros actores. **El recuento de la base de datos ACLED, en tanto, contabilizó un total de 5.649 personas muertas en Siria en 2022** a causa de diversos hechos de violencia, entre ellos enfrentamientos, explosiones y ataques contra población civil. En 2021 las cifras de letalidad del conflicto fueron muy similares -3.882 según SOHR y 5.737 de acuerdo con ACLED-, frente a cifras muy superiores observadas en períodos previos -cerca de 8.000 personas fallecidas en 2020, 15.000 en 2019, 30.000 en 2018.

Al finalizar 2022 el país continuaba dividido en varias zonas de influencia y seguía siendo objeto de incursiones aéreas continuas por parte de actores foráneos, principalmente de Rusia, Turquía e Israel. Entre los hechos de violencia más destacados, cabe mencionar que en enero ISIS protagonizó su mayor ataque desde

la derrota territorial que sufrió en 2019. **Miembros de ISIS lanzaron una ofensiva en el noreste del país, en la prisión de al-Sina'a, controlada por fuerzas kurdas, en un intento por liberar a combatientes detenidos. En los días siguientes, los enfrentamientos con miembros de las FDS y de la coalición internacional contra ISIS liderada por EEUU provocaron la muerte de más de 500 personas.** Estas hostilidades causaron también el desplazamiento forzado de más de 45.000 civiles. Durante el año, células de ISIS continuaron atacando, principalmente en Deraa, Dayr-al-Zawr, Hassakah, Homs y Hama, confirmando la resiliencia del grupo armado y su capacidad para actuar a través de distintas líneas divisorias.¹⁰⁰ A lo largo del año se mantuvo formalmente el alto el fuego en Idlib acordado en 2020, aunque se informó de periódicas vulneraciones y al finalizar 2022 la ONU alertaba de una escalada de hostilidades en todo el norte del país. Tanto en Idlib como el Aleppo continuaron los enfrentamientos entre fuerzas pro-gubernamentales y grupos armados de la oposición, incluyendo Hay'at Tahrir al-Sham y siguieron registrándose ataques aéreos rusos y del régimen con resultado de víctimas civiles. Turquía también prosiguió con sus periódicas intervenciones en el norte del país. Cabe destacar que, en noviembre, Ankara intensificó sus ofensivas contra fuerzas kurdas en el norte de Siria y de Iraq en el marco de una operación que bautizó como Claw Sword. Los ataques aéreos, acompañados de amenazas sobre una nueva incursión terrestre -que sería la cuarta en el norte de Siria- se incrementaron después de que un ataque explosivo en Estambul causara la muerte de seis personas. El gobierno turco responsabilizó del atentado al PKK y a las YPG, que descartaron la autoría. En el sur de Siria, a lo largo del año los incidentes se concentraron principalmente en las provincias de Deraa, Quneitra y Suwayda. En esta zona, controlada por el gobierno, continuaron registrándose numerosos asesinatos. Paralelamente, Israel prosiguió con sus ofensivas en distintos puntos de Siria, incluyendo un ataque contra el aeropuerto de Damasco que presuntamente pretendió evitar la entrega de armas a milicias apoyadas por Irán, entre ellas Hezbollah. EEUU también lanzó ataques contra milicias con presuntos vínculos con Teherán y siguió con incursiones contra ISIS, como la que acabó con la vida del líder del grupo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en febrero.

Durante 2022 la crisis humanitaria en Siria estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra, con elevadísimos índices de pobreza e inseguridad alimentaria

La población civil siria continuó viéndose gravemente afectada por el conflicto armado. En sus investigaciones e informes sobre Siria, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU subrayó que las partes contendientes no estaban adoptando las medidas necesarias para

evitar o minimizar las pérdidas de vidas civiles en ataques y enfrentamientos, que continuaron afectando zonas residenciales y destruyendo deliberadamente infraestructuras civiles. Las hostilidades también siguieron provocando una grave contaminación con explosivos por todo el territorio. La investigación de la comisión de investigación independiente sobre Siria de la ONU reiteró las denuncias sobre el uso sistemático de torturas y malos tratos en centros de detención. Al finalizar el año, el enviado especial de la ONU constataba que, en lo referente a las personas detenidas y desaparecidas, no había novedades tras la amnistía presidencial decretada por al-Assad el 30 de abril de 2022. El decreto, que llevó entonces a la liberación de unos cuantos centenares de presos, fue criticado por falta de transparencia. Familias de personas detenidas continuaban buscando noticias del paradero de sus familiares y, según informaciones de prensa, a fines de 2022 más de 136.000 personas permanecían en cárceles del régimen. **Durante 2022 se constató que la crisis humanitaria en el país estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra. La ONU alertaba en diciembre que los niveles de inseguridad alimentaria habían alcanzado cifras récord: 12 millones de personas. Las estimaciones apuntaban a que 15,3 millones de personas, equivalentes al 70% de la población, necesitaría ayuda humanitaria en 2023 y que el 90% de la población se encontraba por debajo**

del umbral de pobreza. El deterioro de la situación económica y humanitaria también se vio condicionada por el aumento en el precio de los alimentos y alentó protestas contra el régimen, especialmente en el sur del país. A esto se sumó una creciente preocupación por la expansión de una epidemia de cólera, con miles de casos registrados en todas las provincias del país. Los retos eran especialmente graves en el norte de Siria, debido a las dificultades de acceso a agua potable y a servicios de salud. En 2022, la ONU y organizaciones de derechos humanos también continuaron denunciando la preocupante situación de miles de personas detenidas en los campos de al-Hawl y al-Raj, que albergan principalmente a familias de combatientes de ISIS, incluyendo a unos 38.000 menores de edad. Junto al hacinamiento y la precariedad, llamó la atención la situación de inseguridad, con 42 asesinatos solo en al-Hawl en el último año, incluyendo 22 mujeres y cuatro menores.

En paralelo a la evolución del conflicto, cabe destacar que continuaron en marcha los esquemas diplomáticos formales para abordar la crisis, aunque sin que se produjeran progresos en la búsqueda de una salida política. El proceso de Ginebra auspiciado por la ONU quedó bloqueado a partir de mediados de año por las

100. International Crisis Group, *Containing a Resilient ISIS in Central and North-eastern Syria*, Middle East and North Africa Report No.236, 18 de julio de 2022.

reticencias de Rusia y Siria a continuar las conversaciones en esta ciudad, debido a que ya no consideraban a Suiza como un actor imparcial. Las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania también motivaron un mayor acercamiento entre Moscú y Teherán, que ampliaron su colaboración más allá de Siria -Irán transfirió aviones no tripulados a Rusia para sus operaciones en Ucrania. Informaciones de prensa también informaron del reclutamiento de fuerzas sirias para apoyar a las fuerzas rusas en Ucrania. Durante 2022 también se observó un acercamiento entre Turquía y Siria. El Gobierno de Ankara, principal apoyo de grupos armados y políticos de la oposición siria, se mostró dispuesto a un diálogo con Damasco y en diciembre se reunieron en Moscú los

ministros de Defensa y jefes de inteligencia de ambos países, en el primer encuentro de este tipo desde el inicio de la guerra. **El acercamiento entre Turquía y Siria que sería una prioridad para Moscú, causó preocupación en sectores de la oposición siria, en las fuerzas kurdas y en la población refugiada siria.** De cara a 2023 se temía una intensificación de los retornos forzados de población refugiada siria, un tema relevante para los cálculos electorales del presidente turco, que afrontaría comicios generales en mayo. Un informe de Human Rights Watch denunció que las autoridades turcas habían arrestado arbitrariamente, detenido y retornado forzosamente a cientos de hombres y niños refugiados sirios entre febrero y julio de 2022.¹⁰¹

101. Human Rights Watch, “Turkey: Hundreds of Refugees Deported to Syria”, *HRW*, 24 de octubre de 2022.

2. Tensiones

- Durante 2022 se registraron 108 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia y Pacífico (33), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (16), Europa (12) y Oriente Medio (11).
- En Burkina Faso se acentuó la crisis política en el país durante el año padeciendo dos golpes de Estado.
- El diálogo nacional en Chad concluyó con la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición, lo que ratificó la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021 por Mahamat Déby y su junta militar.
- Se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países y de las acusaciones hacia Rwanda de apoyar al grupo M23.
- A finales de año se logró un acuerdo marco transicional en Sudán en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político, aunque permanecieron las tensiones por la conformación de un Ejército unificado.
- El Gobierno haitiano solicitó el despliegue inmediato de una fuerza internacional que pudiera revertir la violencia ejercida por numerosos grupos armados y mitigar sus consecuencias humanitarias.
- En Ecuador se incrementaron dramáticamente la violencia y los homicidios relacionados con el narcotráfico y se registraron protestas de gran alcance y un intento de destitución del presidente.
- La destitución y detención del presidente Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado, motivaron unas de las protestas más importantes de los últimos años en Perú.
- Se incrementó la tensión fronteriza entre Kirguistán y Tayikistán, con incidentes durante el año y una escalada militar que causó un centenar de fallecidos.
- La tensión política en Sri Lanka como consecuencia de la crisis económica escaló hasta provocar la caída del presidente y el primer ministro.
- Se agravó la preocupación internacional por el drástico incremento del número de lanzamiento de misiles de Corea del Norte y por la reanudación de su programa nuclear.
- La situación entre Armenia y Azerbaiyán y en torno al enclave en disputa de Nagorno-Karabaj fue de fragilidad, y una ofensiva militar de Azerbaiyán causó más de 280 víctimas mortales y medio millar de heridos.
- Las movilizaciones en Irán fueron consideradas como uno de los mayores desafíos al régimen desde 1979 y la respuesta represiva de las autoridades había causado la muerte de unas 500 personas hasta finales de año.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2022. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2022. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2022.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2022

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
ÁFRICA			
África Central (LRA)	Internacional	LRA, Fuerzas Armadas de Sudán, Sudán del Sur, RDC, RCA y Uganda, milicias comunitarias y grupos armados de los países de la región	1
	Recursos		↓
Argelia ⁵	Interno	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados AQMI (ex GSPC), Jund al-Khilafa (filial ISIS)	2
	Gobierno, Sistema		=
Benín	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército	3
	Gobierno		↑
Chad	Interna internacionalizada	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (52 grupos, entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas	3
	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad		↑
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↓
Djibouti	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupo armado FRUD-armé	2
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		=
Eswatini	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↑
Etiopía – Egipto – Sudán	Internacional	Etiopía, Egipto, Sudán	2
	Recursos		=
Etiopía – Sudán	Internacional	Etiopía, Sudán, milicias comunitarias	2
	Recursos		↓
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	2
	Gobierno		↓
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	2
	Gobierno		↑

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2022 con la del año 2021 apareciendo el símbolo (↑) si la situación general durante 2022 es más grave que la del año anterior, (↓) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.
5. Desde la pasada edición del informe Alerta! la tensión denominada "Argelia" incluye también las actividades de grupos yihadistas (en particular de AQMI) que en el pasado se analizaban por separado.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenia	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Mali	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, CEDEAO	3
	Gobierno		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁶	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Mozambique	Interna	Gobierno, RENAMO	1
	Gobierno, sistema		=
Niger	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Biafra)	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)	3
	Identidad, Autogobierno		=
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social	2
	Gobierno		=
RDC – Rwanda	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR, grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP)	3
	Identidad, Gobierno, Recursos		↑
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Rwanda - Burundi	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	1
	Gobierno		↓
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		↓
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	3
	Territorio		↑
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↓
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur, milicias comunitarias	1
	Recursos, Identidad		↑
Tanzania	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna		↓

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↑
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
AMÉRICA			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Brasil	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
	Gobierno		↑
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Colombia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Cuba	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		↓
Ecuador	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno, Recursos		↑
EEUU	Interna	Gobierno, oposición política y social, milicias ciudadanas	1
	Gobierno, Sistema		↑
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno		=
Haití	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
	Gobierno		↑
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno		=
Jamaica	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Gobierno		↑
México	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	3
	Gobierno, Recursos		↑
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↓

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	2
	Gobierno		↑
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China – Japón	Internacional	China, Japón, EEUU	2
	Territorio, Recursos		↑
China – Taiwán	Internacional	China, Taiwán, EEUU	2
	Territorio, Recursos, Sistema		↑
China - EEUU	Internacional	China, EEUU	1
	Sistema, Gobierno, Territorio		↑
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea⁷	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	3
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	3
	Sistema		↑
Corea, RPD	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Sistema		↑
Fiji	Interna	Gobierno, oposición política	1
	Gobierno		↑
India	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Sistema, Gobierno		=
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), ADF, RNLF, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		=
India – China	Internacional	India, China	3
	Territorio		↑
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↓
Indonesia (Sulawesi)	Interna	Gobierno, grupo armado MIT	1
	Identidad, Sistema		↓
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑

7. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Japón - Rusia (Islas Kuriles)	Internacional	Japón, Rusia	1
	Territorio, Recursos		↑
Kazajistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	3
	Sistema, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Kirguistán - Tayikistán ⁸	Internacional	Kirguistán, Tayikistán	3
	Territorio, recursos		↑
Lao, RDP	Interna	Gobierno, oposición política y social, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	2
	Territorio, Recursos		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Papúa Nueva Guinea	Interna	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville	3
	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno		↑
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Tayikistán (Gorno-Badakhshan)	Interna	Gobierno, oposición social de la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO)	2
	Identidad		↑
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		=
Uzbekistán (Karakalpakistán)	Interna	Gobierno, oposición social en la región autónoma de Karakalpakistán	2
	Autogobierno		↑
EUROPA			
Armenia-Azerbaiján (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiján, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Belarús	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, EEUU, Rusia	2
	Gobierno		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑

8. En años anteriores esta tensión se analizaba dentro del resumen de Kirguistán de este capítulo.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
EUROPA			
Moldova	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, Rusia	2
	Gobierno		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Rusia	Interna	Gobierno, oposición política y social, actores armados de oposición	2
	Gobierno		↑
Rusia (norte del Cáucaso)	Interna	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		=
Serbia – Kosovo	Internacional ⁹	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		↑
Turquía - Grecia, Chipre	Internacional	Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Egipto, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia	2
	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad		↑
ORIENTE MEDIO			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán – EEUU, Israel¹⁰	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria – Libano	Internacional	Israel, Siria, Libano, Hezbollah (partido y milicia), Irán	3
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Libano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

9. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.
 10. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2022

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2022, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2022 se identificaron 108 escenarios de tensión en todo el mundo, diez más que en 2021, en línea con la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (25 casos más desde el año 2018). África y Asia fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (36 y 33 respectivamente), seguidas de América (16), Europa (12) y Oriente Medio (11). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 15 nuevos casos y otros cinco dejaron de ser calificados como tensión, la mayoría en África: Gambia, Etiopía (Oromiya), que pasó a ser considerado conflicto armado, RDC-Uganda, Rwanda-Uganda y España (Cataluña). Los casos que, por distintos motivos, se incorporaron al listado de casos de tensión, se concentraron principalmente en Asia y América: Brasil; China-EEUU; Corea, RPD; Ecuador;

La mitad de los casos identificados en 2022 se agravaron respecto del año anterior

EEUU; Fiji; Jamaica; Japón-Rusia (Islas Kuriles); Kirguistán-Tayikistán; Moldova; Papúa Nueva Guinea; Rusia; Sri Lanka; Tayikistán (Gorno-Badakhshan) y Uzbekistán (Karakalpakistán).

Uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones en 2022 es que, si bien en un 32% de los casos no se observaron cambios significativos y en un 18% la tensión se redujo respecto del 2021, **la mitad de los casos identificados en 2022 se agravaron respecto del año anterior**. Ello se tradujo, en parte, en un **incremento sustancial de los casos de alta intensidad, que pasaron de 19 en 2021 a 28 en 2022**: Burkina Faso; Chad; Etiopía; Kenia; Malí; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC-Rwanda; Somalia (Somalilandia-Puntlandia); Sudán; Ecuador; Haití; México; Perú; Venezuela; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; India-Pakistán; Indonesia (Papúa Occidental); Kazajstán; Kirguistán-Tayikistán; Papúa Nueva Guinea; Sri Lanka; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); Irán-EEUU, Israel; Irán; e Israel-Siria-Líbano. Además de los 28 casos de alta intensidad, que supusieron más de una cuarta parte del total, el 42% de los 108 casos de tensión fueron de intensidad baja (en 2021 eran el 50%) y el 32% de intensidad media (31% en 2021). Por tanto, **en 2022 no solamente se incrementó con claridad el número de tensiones, sino también su intensidad media respecto del año anterior**. El incremento de la intensidad de las tensiones se concentró especialmente en Europa (donde el 92% de los casos escalaron) o en Asia (donde lo hizo un 56%).

En cuanto a los principales **factores de causalidad**, la oposición al **sistema político**, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un **Gobierno**, estaba presente en un 71% de las tensiones analizadas; las demandas de autodeterminación y **autogobierno**, o las aspiraciones **identitarias** lo estaban en un 38%; y el control de los **recursos** o del **territorio** lo estaba en un 31%. Tales cifras mantienen una cierta continuidad respecto de las

Cuadro 2.1. Tensiones de alta intensidad en 2022

ÁFRICA (10)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (3)
Burkina Faso	Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur	Irán-EEUU, Israel
Chad	Corea del Norte-Corea del Sur	Irán
Etiopía	India-China	Israel-Siria-Líbano
Kenia	India-Pakistán	
Malí	Indonesia (Papúa Occidental)	AMÉRICA (5)
Nigeria	Kazajstán	Ecuador
Nigeria (Biafra)	Kirguistán-Tayikistán	Haití
RDC-Rwanda	Papúa Nueva Guinea	México
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Sri Lanka	Perú
Sudán		Venezuela
		EUROPA (1)
		Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj)

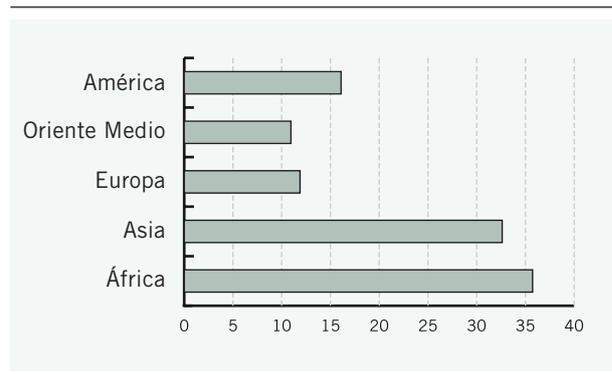
del año anterior, aunque aquellas tensiones asociadas al control del territorio o los recursos se incrementaron del 21% al 31%. En un análisis desagregado de factores, la oposición a las políticas internas o internacionales del **gobierno** fue la causa con mayor preponderancia y estuvo presente en el 64% de los 108 escenarios de tensión, exactamente el mismo porcentaje que el año anterior. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de **aspiraciones de tipo identitario (36%)**, especialmente relevante en regiones como Europa (67%) u Oriente Medio (46%). A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las **demandas de autodeterminación y autogobierno (24%)**, el **control de los recursos (23%)**, la **oposición al sistema** político, social o ideológico del Estado en su conjunto (22%) y el control del **territorio** (19%). Los distintos factores de causalidad asociados a las tensiones también observan una gran oscilación entre regiones. A modo de ejemplo, la oposición al Gobierno está presente en el 100% de las tensiones en América, pero solamente en un 39% de los casos en Asia. En cambio, la oposición al sistema o al Estado en su conjunto está presente en un 45% de las tensiones en Asia, pero solamente en un 6% de las que se ubican en América. Las demandas de autodeterminación y/o autogobierno estaban asociadas a un 58% de los casos en Europa, pero solamente a un 13% y un 14% de los casos en América y África respectivamente; mientras que las reivindicaciones relacionadas con la identidad estaban presentes en un 67% de los casos en Europa y en un 25% de los casos en África o América.

Durante 2022 se identificaron 108 escenarios de tensión, 36 en África, 33 en Asia y Pacífico, 16 en América, 12 en Europa y 11 en Oriente Medio

En consonancia con la tendencia observada en 2021 y en años anteriores, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvieron un **carácter interno (52%)**, aunque con una pronunciada variabilidad geográfica (100% de los casos en América y 17% en Europa). Aproximadamente una quinta parte de las tensiones (21%) fueron **internacionales**, pero algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo RDC-Rwanda; India-China; India-Pakistán; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Kirguistán-Tayikistán; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), Irán-EEUU, Israel o Israel-Siria-Líbano. Finalmente, más de una cuarta parte (27%) de las tensiones fueron **internas internacionalizadas** –aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos–, pero, nuevamente, se observaron importantes variaciones entre regiones (en Asia el 58% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina no se registró ninguno).

En un análisis geográfico más pormenorizado, algunas de las **subregiones** con un mayor número de casos fueron, por este orden, África Central y Grandes Lagos (12 casos), Asia Oriental y África Occidental (11 cada una); Asia Meridional (8); América del Sur; Asia

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2022

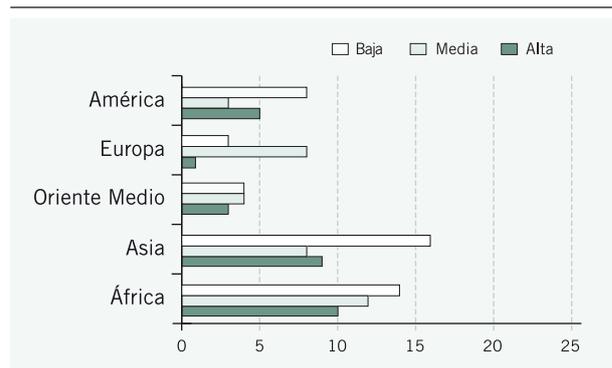


Central; Cuerno de África; y el Golfo (7 cada una); Rusia y Cáucaso (5); y Centroamérica; Mashreq; Sudeste de Europa y Sudeste Asiático (4 cada una). Los **países** que padecieron más tensiones en su territorio o cuyos gobiernos fueron actores relevantes en un mayor número de disputas foráneas fueron, por este orden, Rusia (9 casos); China (8); EEUU (7); India e Irán (6); Etiopía, Sudán y Tayikistán (5); Turquía y Uzbekistán (4); o Etiopía, Nigeria, RDC, Rwanda, Indonesia, Japón y Corea del Norte (3).

2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, **África** fue la región que concentró un mayor número de tensiones (36), aunque su porcentaje sobre el total de casos (33%) disminuyó significativamente respecto del año anterior (41%), tanto por la identificación de un menor número de casos en el continente –dejaron de ser considerados como tales Gambia, Etiopía (Oromiya), RDC-Uganda, Rwanda-Uganda– como por el incremento de casos que se registró en regiones como América o Asia. Por subregiones, África Central y Grandes Lagos fue, con 12 casos, la zona de África (y del mundo) con un mayor número de casos –África Central (LRA); Chad; Guinea Ecuatorial; RDC; RDC-Rwanda; Kenia; Rwanda; Rwanda-Burundi; Sudán; Sudán-Sudán del

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



Sur; Tanzania; Uganda—, seguida de África Occidental (11) —Benín; Burkina Faso; Costa de Marfil; Guinea; Guinea-Bissau; Malí; Níger; Nigeria; Nigeria (Biafra); Nigeria (Delta Níger); Senegal (Casamance)—; el Cuerno de África (7) —Djibouti; Eritrea; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Etiopía-Egipto-Sudán; Etiopía-Sudán; Somalia (Somalilandia-Puntlandia)—; África del Sur (3) —Eswatini; Mozambique y Zimbabwe—y el Norte de África-Magreb (3) —Argelia; Marruecos-Sáhara Occidental; y Túnez. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que estaban involucrados en varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos), Sudán y Rwanda (cuatro casos), o RDC, Nigeria y Uganda (tres casos).

Aunque África fue el continente en el que se registraron un mayor número de casos de alta intensidad, su porcentaje sobre el total de casos en 2022 (36%) también disminuyó claramente en comparación con el de 2021 (53%)

Aunque África fue el continente en el que se registraron un mayor número de casos de alta intensidad (10 de 28), su porcentaje sobre el total de casos en 2022 (36%) también disminuyó claramente en comparación con el de 2021 (53%). En su conjunto, el 39% de las tensiones fueron de intensidad baja, el 33% de intensidad media y el 28% de intensidad alta, concretamente 10 casos: Burkina Faso; Chad; Etiopía; Kenia; Malí; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC-Rwanda; Somalia (Somalilandia-Puntlandia); y Sudán. En cuanto a la evolución de las tensiones, el 36% de las mismas en el continente se agravaron, el 39% no registraron cambios fundamentales, y el 25% restante se redujo. Cabe señalar que en 2021 el número de tensiones que se agravaron en África había sido claramente superior (50%), así como su porcentaje sobre el total de tensiones que escalaron (54% en 2021 y 24% en 2022). Cabe destacar especialmente aquellas tensiones que en 2022 dejaron de ser consideradas como tal —Gambia, RDC-Uganda, Rwanda-Uganda— y aquellas que en 2021 habían sido de intensidad alta pero que durante el 2022 registraron una reducción en los niveles de violencia respecto al año anterior: Guinea y Marruecos-Sáhara Occidental.

En el sentido inverso, hubo tres tensiones que en 2022 escalaron significativamente y que pasaron a ser consideradas de máxima intensidad —Burkina Faso, RDC-Rwanda y Somalia (Somalilandia y Puntlandia)— y otra —Etiopía (Oromiya)— que se agravó notablemente y pasó a ser considerada como un conflicto armado. En Burkina Faso en un contexto de violencia e inestabilidad política, se produjeron dos golpes de Estado, en enero y en septiembre. La tensión entre RDC y Rwanda se deterioró gravemente como consecuencia de los enfrentamientos ocasionales entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones de RDC a Rwanda de apoyar militarmente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. En lo concerniente al contencioso entre la autoproclamada república de Somalilandia y la administración de Puntlandia (que

forma parte del Estado federal de Somalia), en diciembre se produjo una escalada de los enfrentamientos en la localidad de Las Anod entre activistas de Puntlandia y los cuerpos de seguridad de Somalilandia, que desde 2007 ocupan la ciudad de Las Anod —situada geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia aunque la mayoría de los clanes de la región se encuentran asociados a los de Puntlandia. Los enfrentamientos provocaron la muerte de alrededor de 20 personas, según diversas fuentes. A principios de 2023 las fuerzas de Somalilandia se retiraron de la localidad para evitar una escalada de la violencia.

Los factores de causalidad más preponderantes en la región fueron, por este orden, la oposición al Gobierno (69%); el control de los recursos (28%), las cuestiones relacionadas con la identidad (25%); las demandas de autogobierno y autodeterminación y el control de los recursos (un 14% cada uno de ellos); y la oposición al sistema (11%). Estos datos guardan cierta continuidad con los del año anterior, salvo en las cuestiones de identidad (que se reducen del 30% al 25%), oposición al Gobierno (disminuyen del 74% al 69%) y control de los recursos (que se incrementan del 8% al 14%). En comparación con los datos agregados a escala global, hay algunas causas que están claramente por debajo de la media, como las demandas de autodeterminación (14% vs. 24%), las disputas vinculadas con la identidad (25% vs. 36%) y la oposición al sistema (11 vs. 22%). Por otra parte, las tensiones de naturaleza interna supusieron el 50% de los casos (un 60% en 2021), las internas internacionalizadas un 28% (un 17% en 2021) y las internacionales un 22% (un 23% en 2021), en todos los casos porcentajes muy parecidos a la media mundial.

En **América** se registraron 16 escenarios de tensión (15% del total), cuatro casos más que en 2021: Jamaica, EEUU, Brasil y Ecuador. De los 16 casos, la gran mayoría se ubicaron en América del Sur (7), seguida de Centroamérica (4), el Caribe (3) y América del Norte (2). En términos generales, la intensidad media de los casos en la región se incrementó respecto del año anterior, puesto que, aunque los casos de máxima intensidad fueron parecidos a los del año anterior (un tercio en 2021 y un 31% en 2022), los casos de menor intensidad se redujeron respecto del año anterior (del 58% al 50%) y los de intensidad media se incrementaron (del 8 al 19%). Además, en términos comparativos, América fue la región con una mayor proporción de casos de máxima intensidad (casi un tercio): Ecuador; Haití; México; Perú; Venezuela. Si bien México, Haití y Venezuela ya habían sido considerados como escenarios de alta intensidad en 2021 y en años precedentes, Ecuador y Perú padecieron importantes incrementos de las

dinámicas de conflictividad en 2022. En Ecuador, por el dramático aumento de los homicidios y la violencia relacionada con el narcotráfico, así como por las importantes protestas que se registraron en la segunda mitad del año; y en Perú, por las enormes protestas que se produjeron en diciembre tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado. Por el contrario, si bien las manifestaciones multitudinarias que se registraron en Colombia en 2021 ameritaron que el caso fuera considerado de máxima intensidad el pasado año, en 2022 se redujeron muy significativamente los niveles de protestas y movilizaciones sociales.

América fue la región con una mayor proporción de tensiones de alta intensidad

En cuanto a las causas, los 16 casos identificados estaban vinculados a la oposición a las políticas domésticas o internacionales del Gobierno, como en 2021. Además, factores como el control de los recursos y las cuestiones identitarias estuvieron asociadas a tres casos cada uno de ellos; mientras que las dinámicas vinculadas al autogobierno fueron un factor explicativo en otros dos casos y la oposición al sistema en un solo caso (Cuba). Ninguno de los casos en América estuvo relacionado con disputas por el control del territorio. Por otra parte, cabe destacar que todas las tensiones en la región fueron internas, lo que contrasta con los datos agregados a nivel internacional, según los que aproximadamente la mitad de casos en todo el mundo son tensiones de naturaleza interna.

En **Asia y el Pacífico** se registraron 33 tensiones, el 31% del total a nivel global. En relación al 2021, se contabilizaron nueve casos adicionales: Kirguistán-Tayikistán; Tayikistán (Gorno-Badakhshan); Uzbekistán (Karakalpakistán); China-EEUU; Corea, RPD; Japón-Rusia (Islas Kuriles); Papúa Nueva Guinea; Fiji y Sri Lanka. Por subregiones, 11 de las tensiones estaban en Asia oriental –China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), China-Japón, China-Taiwán, Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea; Mar de la China Meridional–, ocho en Asia Meridional –Bangladesh, India, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), India-China, India-Pakistán y Pakistán–, siete en Asia central –Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán–, cuatro en el Sudeste asiático –Indonesia (Sulawesi), Indonesia (Papúa Occidental), Laos y Tailandia– y dos en el Pacífico –Papúa Nueva Guinea y Fiji. Como en años anteriores, hubo algunos países que estuvieron involucrados en varios escenarios de tensión, como China (ocho tensiones), India (seis), Tayikistán (cinco), Uzbekistán (cuatro) o Indonesia, Japón y Corea del Sur (tres). Prácticamente la mitad de los casos (49%) fueron de intensidad baja, el 24% de intensidad media

y el 27% restante de alta intensidad. Cabe señalar, sin embargo, que la intensidad media de las tensiones en la región se incrementó significativamente respecto del año 2021, puesto que los escenarios de máxima intensidad se incrementaron del 8% al 27%, mientras que las de intensidad baja pasaron del 63% al 49%. En consonancia con estos datos, el 58% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2022 respecto del año anterior, mientras que solamente un 18% de los casos disminuyeron en intensidad. De hecho, más de una tercera parte de todas las tensiones en el mundo que escalaron en 2022 se concentraron en Asia. Cabe destacar especialmente la escalada de aquellos escenarios que en 2022 pasaron a ser considerados de máxima intensidad. Kazajstán fue escenario de una crisis social y política en enero, con protestas ciudadanas y grave represión violenta de estas, y un balance de en torno a 200 víctimas mortales, el más mortífero en su historia reciente. La tensión fronteriza entre Kirguistán y Tayikistán se agravó durante el año, con incidentes bélicos y una escalada militar en septiembre que provocó la muerte de un centenar de personas y la evacuación de decenas de miles de personas. En la península coreana, el dramático incremento en el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte respecto de los años anteriores agudizó sustancialmente la preocupación internacional respecto del programa armamentístico norcoreano y deterioró enormemente las relaciones con Seúl, especialmente tras la elección de un nuevo presidente en Corea del Sur. En Sri Lanka, las protestas masivas en Colombo y otras ciudades provocaron la renuncia del primer ministro y, posteriormente, del presidente, que huyó del país. En Pakistán, la destitución del primer ministro mediante una moción de censura motivó intensas protestas sociales. En Papúa Nueva Guinea, los numerosos episodios de violencia comunitaria y vinculada a las elecciones del mes de julio provocaron la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de otras decenas de miles.

El 58% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2022 respecto del año anterior, mientras que solamente un 18% de los casos disminuyeron en intensidad

En cuanto a las causas de fondo, los factores con mayor relevancia en la región fueron la oposición al Estado (42%); la oposición al Gobierno y las cuestiones identitarias (39% cada factor); el control del territorio (36%); y las demandas de autogobierno y el control de los recursos (27% cada uno). Esta distribución de factores es parecida a la del año 2021, pero cabe destacar una ligera disminución de la importancia de la oposición al Estado (del 50% al 42%) y un sensible aumento de la prevalencia del control del territorio (del 29% al 36%). En términos comparativos con otras regiones, la preponderancia de la oposición al Gobierno en Asia fue mucho más baja que la media mundial (39% vs. 69%) o la de algunos otros

continentes, como América (100%) o África (69%). Sin embargo, la prevalencia de otros factores como el control del territorio (36% vs. 19%) fue con mucha diferencia la más alta del mundo. De igual modo, 14 casos (con una prevalencia que prácticamente doblaba la media mundial, 42% vs. 22%) estuvieron vinculados a la oposición al Estado o al sistema: China (Xinjiang); China (Tíbet); China (Hong Kong); China-EEUU; Corea, RPD-Rep. de Corea; Corea, RPD; India; Indonesia (Sulawesi); Kazajstán; Kirguistán; Lao, RPD; Pakistán; Tayikistán y Uzbekistán. Por otra parte, un poco más de una quinta parte (21%) de las tensiones fueron internas internacionalizadas, una disminución importante respecto del año anterior, en que significaron una tercera parte. En cambio, si en 2021 las tensiones internas fueron el 38% del total de las tensiones en Asia y el Pacífico, en 2022 tal porcentaje ascendió hasta casi la mitad (49%). El 30% restante de las tensiones fueron internacionales, siendo así Asia la región con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; la tensión entre China-Taiwán; el contencioso entre China y EEUU, que tiene uno de sus principales escenarios en Asia Oriental; la disputa histórica entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles, o la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. India estuvo involucrada en dos tensiones internacionales con países fronterizos con quienes mantiene una fuerte rivalidad histórica (Pakistán y China), mientras que la tensión internacional restante es la que enfrentó a Tayikistán y Kirguistán.

En **Europa** se registraron 12 casos, el 11% del total. Respecto del año anterior, dos casos pasaron a ser considerados tensiones –Rusia y Moldova, cuyas dinámicas políticas estuvieron decisivamente influenciadas por la invasión rusa de Ucrania–, mientras que otro dejó de serlo –España (Cataluña). Precisamente la subregión con un mayor número de casos activos (5) fue Rusia y el Cáucaso, seguida del Sudeste de Europa (4) y Europa Oriental (3). Además de las dos tensiones que acontecen en su territorio –Rusia y Rusia (norte del Cáucaso)–, Rusia fue claramente el país con una mayor participación en disputas en la región, tanto en escenarios de Europa Oriental –Belarús, Moldova o Moldova (Transnistria)– como del Cáucaso –Armenia-Azerbaiyán, Georgia (Osetia del Sur), Georgia (Abjasia). Turquía fue actor en tres de los casos de la región –

En Europa, en 2022 se agravaron 11 de los 12 casos identificados

En Oriente Medio el 64% de los casos estuvieron relacionados con la oposición al Gobierno y el 46% con cuestiones identitarias

Turquía; Turquía-Grecia-Chipre; y, en menor medida, en Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj).

Sin duda el aspecto más destacado del análisis de las tensiones en esta región es que en 2022 se agravaron todos los casos, excepto uno –Rusia (norte del Cáucaso)–, que no registró cambios significativos respecto del año anterior. Por tanto, Europa fue la región en la que hubo un mayor porcentaje de casos que empeoraron en 2022 (92%). El deterioro estuvo vinculado tanto a repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania en el continente como a otras dinámicas locales y regionales. Si bien en 2021 el 55% de los casos era de intensidad baja, en 2022 lo eran solamente el 25%. Los casos de intensidad media subieron del 36 al 67%, y, como en 2021, solamente hubo un caso de alta intensidad: el de Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj).

En cuanto a las causas, la oposición al Gobierno y las disputas vinculadas a la identidad estuvieron presentes en un 67% de los casos cada una, seguidas de las demandas de autogobierno y autodeterminación (58%), de la oposición al sistema y del control del territorio (17%) y, finalmente, del control de los recursos (8%). Cabe destacar que la oposición a las políticas domésticas o internacionales del Gobierno se incrementaron respecto del año anterior (del 55% al 67%) mientras que las demandas de autogobierno disminuyeron su prevalencia en la región (pasando del 73% al 58%). A pesar de ello, Europa sigue siendo a mucha distancia la región del mundo en la que esta causa tiene mayor presencia (la media mundial es del 24%). De igual modo, las cuestiones relacionadas con la identidad tuvieron una mayor importancia en Europa (67%) que en cualquier otra región del mundo. En todo caso, son elementos presentes en contextos de tensión complejos insertos en dinámicas más amplias e internacionalizadas en los que tienen peso otros elementos como las disputas geoestratégicas e intereses de actores externos, como es el caso de Rusia en relación a Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria o la ascendencia de Turquía sobre la autoproclamada república turca del norte de Chipre. Finalmente, cabe destacar que el 58% de los casos fueron tensiones internas internacionalizadas, un 25% internacionales y un 17% internas, porcentajes muy similares a los del año anterior. Respecto de esta cuestión, lo más significativo es la gran disparidad que existe entre el porcentaje de tensiones internas a nivel global (una media del 52%) y en Europa (17%), con solamente tres casos: Rusia, Rusia (norte del Cáucaso) y Turquía. De manera complementaria, las tensiones internas internacionalizadas tenían más del doble de prevalencia en Europa (58%) que a escala internacional (27%).

En **Oriente Medio** se identificaron 11 escenarios de tensión, el mismo número que el año pasado, que representa el 10% del total. De los 11 casos identificados, siete se concentraron en el Golfo y los cuatro restantes en el Mashreq. Tal y como sucedió en otras regiones, la tensión promedio de la región se incrementó respecto de 2021, puesto que los casos de intensidad media pasaron de 27 a 36% y los de intensidad alta del 18% a 27%. Además de los escenarios que en 2021 ya fueron de alta intensidad (Irán - EEUU, Israel e Israel - Siria - Líbano), en 2022 se añadió el caso de Irán, donde las movilizaciones antigubernamentales que se iniciaron en septiembre, en las que habrían muerto unas 500 personas hasta finales de año, fueron consideradas como uno de los mayores desafíos al régimen desde 1979. En cuanto a la evolución de las dinámicas de conflictividad, el 73% de los casos no registró cambios significativos respecto del año anterior, pero hubo tres casos (un 27%) relacionados con Irán que escalaron en comparación con 2021: Irán, Irán (noroeste) e Irán (Sistán Baluchistán).

En cuanto a las causas de las tensiones, el panorama fue muy parecido al del año anterior: el 64% de los casos estuvieron relacionados con la oposición al Gobierno; el 46% a cuestiones relacionadas con la identidad; el 27% a las demandas de autodeterminación y autogobierno y también a la oposición al sistema; y el 18% al control de los recursos y del territorio. De todos los factores, aquel que tiene una mayor prevalencia en relación con otras regiones o con la media global es de aspiraciones relacionadas con la identidad (46% en Oriente Medio y un 35% a escala global). Como en 2021, el 46% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el 36% internas, y el 18% internacionales, siendo los dos casos –Irán-EEUU, Israel e Israel-Siria-Líbano– de alta intensidad.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército

Síntesis:

Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas. El deterioro de la situación de seguridad en el país, debido a los efectos de la regionalización del conflicto armado iniciado en el norte de Malí en 2012, ha contribuido a ampliar la crisis política. En este contexto, Burkina Faso ha sido escenario de diferentes golpes de Estado en los últimos años.

La crisis política se acentuó en el país durante el año padeciendo dos golpes de Estado. El año se inició con un golpe militar que derrocó, el 24 de enero, al Gobierno presidido por Roch Marc Christian Kaboré. Fue depuesto por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, líder del Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración (MPSR). Damiba, quien solo un mes antes había sido ascendido a comandante de la tercera región militar de Burkina Faso por Kaboré, anunció la disolución del Gobierno, de la Asamblea Nacional, la suspensión de la Constitución y el cierre de las fronteras del país. Al igual que lo sucedido en otros países del entorno que habían sufrido golpes como Malí y Guinea, el cambio inconstitucional de gobierno generó reacciones dispares al interior y exterior del país. A nivel interno, a diferencia de lo que ocurrió en el 2015 con otro intento de golpe de Estado en el país que provocó importantes movilizaciones en contra, en esta ocasión no se registraron movilizaciones para defender las instituciones democráticas, en gran medida debido al enorme malestar con la situación económica y el deterioro de la seguridad en el país.

Sin embargo, a nivel externo generó la condena de la UA, la CEDEAO, la ONU, EEUU o Francia, entre otros actores.¹¹ La UA y la CEDEAO suspendieron a Burkina Faso de sus organismos, aunque sin imponer sanciones y la CEDEAO envió una misión de mediación al país. En febrero la Junta Militar aprobó un periodo transicional de tres años antes de la celebración de elecciones y el teniente coronel Damiba juró como presidente. La amenaza de sanciones por parte de la CEDEAO generó que la Junta modificase el cronograma de transición a 24 meses a partir del 1 de julio, programando un referéndum constitucional para finales de 2014 y elecciones generales para febrero de 2025.

El deterioro de la situación de seguridad en el país¹² y la incapacidad de la Junta Militar para contener la violencia, provocó, nueve meses después, un segundo golpe de Estado el 30 de septiembre que derrocó a la Junta presidida por Damiba. El capitán Ibrahim Traoré, jefe de una unidad de artillería de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso que encabezó el golpe, justificó el mismo por el deterioro de la situación de seguridad en el país. Los golpistas tomaron el control de la televisión estatal, cerraron las fronteras, impusieron un toque de queda nocturno, anunciaron la disolución del Gobierno de transición y suspendieron la Constitución, acusando a Damiba de no haber sofocado la escalada de violencia en todo el país desde que asumió el poder.

En el contexto del golpe, diferentes edificios franceses, incluida la embajada y los institutos franceses en Uagadugú y Bobo-Dioulasso, fueron atacados por manifestantes que acusaron a Francia de proteger a Damiba. El 2 de octubre, Damiba, quien presuntamente se había refugiado en una base militar francesa, anunció que renunciaba oficialmente a su cargo y se exilió a Togo. En respuesta al nuevo cambio inconstitucional de gobierno, la CEDEAO condenó el golpe y pidió el retorno al orden constitucional, aunque nuevamente sin aplicar sanciones contra el país. El 5 de octubre Traoré anunció que se adherirá al plan de transición establecido por el régimen anterior. Posteriormente, entre el 14 y 15 de octubre, la nueva junta militar organizó un foro nacional con los representantes de la junta en el cual Traoré fue designado presidente de transición y decretó que el retorno al orden constitucional se produciría el 2 de julio de 2024 con la celebración de elecciones. La inestabilidad se mantuvo en el país hasta finalizar el año, y el 1 de diciembre la Junta Militar denunció un supuesto intento de golpe que el Ejército frustró.

Burkina Faso padeció durante el año dos golpes de Estado

Malí	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, CEDEAO

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, Malí ha hecho frente a diversos periodos de inestabilidad, incluyendo el golpe militar de 1968; una rebelión popular y militar en 1991; y revueltas e insurgencia tuareg en demanda de mayor participación política y desarrollo del norte del país. Malí celebró sus primeras elecciones pluripartidistas en 1992, si bien desde entonces los diversos comicios han transcurrido en medio de críticas opositoras en relación a la falta de garantías democráticas. El peso del Ejército se evidenció con un nuevo intento de golpe militar en el año 2000, que fue desbaratado. La inestabilidad se incrementó una vez más en 2012, con la toma de control del norte por parte de grupos tuareg e islamistas y un golpe de Estado militar que forzó la caída del Gobierno. A partir de ese momento los sucesivos Gobiernos que ha tenido el país se han enfrentado a múltiples desafíos políticos, económicos y de seguridad, persistiendo la violencia en la zona septentrional del país, y extendiéndose hacia la región central. Durante 2019 se produjo un incremento significativo de las protestas y movilizaciones populares, que fueron seguidas en 2020 de un golpe de Estado y la conformación de un nuevo Gobierno transicional en el país.

Durante el año se mantuvo la crisis política en el país tras el golpe de Estado de 2020 y se siguieron deteriorando las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus aliados tradicionales debido a las discrepancias en el periodo de transición sobre la transferencia de poder a la población civil y la estrategia de seguridad en la región. El año se inició con el anuncio de la Junta Militar de posponer el proceso transicional por cinco años, estableciendo un referéndum constitucional en enero de 2024, elecciones legislativas en noviembre de 2025 y elecciones presidenciales en diciembre de 2026. El anuncio generó la condena de una coalición de 100 partidos políticos y 60 grupos de la sociedad civil, solicitando a las autoridades interinas respetar el acuerdo de transición de septiembre de 2020. Por su parte, el bloque de países del África Occidental (CEDEAO) respondió estableciendo nuevas sanciones económicas al país, congeló los bienes de Malí en los bancos centrales de sus Estados miembros, frenó la asistencia financiera y anunció el cierre de las fronteras entre los países de la CEDEAO y Malí. La UE también impuso sanciones al país, en línea con las decisiones tomadas por la CEDEAO, mientras que Rusia y China impidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una declaración

11. Bajo, Carlos, "Turbulencias en el Sahel: entre los defectos de la democracia y la reivindicación de la soberanía", Actualidad Africana, *El Salto*, 4 de febrero de 2022

12. Véase el resumen de Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

redactada por Francia que respaldaba las sanciones. Durante el año se produjeron diferentes manifestaciones en la capital Bamako contra la presencia francesa y las sanciones de la CEDEAO y en apoyo de la Junta, aunque también se registraron protestas contra los cambios en el cronograma de transición impuestos por los militares. Tras varios espacios de negociación entre la Junta Militar y la CEDEAO¹³, en junio el presidente de transición, coronel Assimi Goïta, anunció unilateralmente un período de transición de dos años, en el cual se prevé la celebración de un referéndum constitucional en marzo de 2023 y elecciones presidenciales en febrero de 2024. La CEDEAO volvió a cuestionar la decisión unilateral, anunciando que mantendría las conversaciones. En julio, en la cumbre del organismo, se acordó levantar las sanciones económicas y financieras contra Malí, manteniendo las individuales y diplomáticas, y se exigió que ningún miembro del Gobierno de transición se presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2024. En octubre la comisión encargada de la redacción de una nueva Constitución presentó el borrador preliminar, que deberá someterse a referéndum en marzo de 2023. El texto fue cuestionado por una coalición de partidos de oposición que demandó que el proceso de redacción de la Carta Fundamental fuera manejado por un gobierno civil elegido democráticamente.

Paralelamente, otra de las tensiones políticas en el país se relaciona directamente con el **deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar y los antiguos aliados occidentales de Malí**, principalmente con el Gobierno francés.¹⁴ Este deterioro de las relaciones responde también al anuncio del Gobierno maliense de un acuerdo de cooperación militar con Rusia, desplegándose en el país a principios de año entre 300 y 400 instructores rusos. Las autoridades interinas negaron su vinculación con la empresa rusa de seguridad privada Wagner Group. Entre los episodios más destacados durante el año en la crisis diplomática se encuentra la orden de expulsión del embajador francés del país; la suspensión de los acuerdos de colaboración militar con Francia; la suspensión de los permisos de transmisiones de los medios de comunicación franceses RFI y France24; el fin de la operación antiterrorista Barkhane en el país; la retirada del país de la operación europea Takouba; la suspensión de las misiones de la UE en Malí (EUCAP y EUTM); las tensiones con la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSMA); la retirada de Malí de todos los órganos e instancias del G5 Sahel, incluida la fuerza militar conjunta; la prohibición a las ONG francesas y financiadas por Francia de operar en el país; o la

Las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar de Malí y los antiguos aliados occidentales siguieron deteriorándose

acusación realizada por la Junta Militar de haber abortado un intento de golpe de Estado entre el 11 y 12 de mayo, supuestamente orquestado por un Estado occidental.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el noroeste del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

En Nigeria se produjo un incremento de la violencia política y de la violencia criminal, principalmente como consecuencia de la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2023 y de la persistencia del aumento de la violencia durante el 2022 por parte de grupos criminales en el noroeste del país, mientras que el conflicto en esa región y en la cuenca del Lago Chad permaneció en unos umbrales de violencia similares a 2021.¹⁵ A esto se sumó el clima permanente de violencia intercomunitaria entre ganaderos y agricultores del cinturón central del país, así como la persistencia de los enfrentamientos y acciones insurgentes en el estado de Biafra.¹⁶ Las elecciones de 2023 marcan

13. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

14. Véase los resúmenes sobre Malí (norte) y Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

15. Véase el resumen de Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

16. Véase resumen de Nigeria (Biafra) en este capítulo.

24 años de democracia ininterrumpida, el período más largo desde la independencia, aunque tendrá lugar en medio de un clima general de inseguridad y violencia multifactorial y multiactor en el conjunto del país. Una veintena de los 36 estados que componen el Estado federal nigeriano se vieron gravemente afectados en 2022 por este elevado clima de violencia. Centros de investigación como el International Crisis Group y ACLED señalaban que durante el año 2022 se habrían producido más de 10.000 víctimas mortales vinculadas al clima de violencia criminal e insurgente en el conjunto del país. La compra masiva de votos comprometería profundamente la integridad de las elecciones y socavaría la confianza en el resultado, según destacó el International Crisis Group en diciembre.¹⁷

Los grupos armados islamistas BH, Ansaru e ISWAP, en su voluntad de obstaculizar las acciones gubernamentales –como los procesos electorales, vistos como una imposición occidental– establecieron enclaves en diversas partes de los estados de Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger, donde llevaron a cabo acciones armadas de forma creciente durante 2022.¹⁸ En el noroeste, también había más de cien grupos de bandas de criminales que participan en secuestros, saqueos e incendios provocados con la voluntad de erosionar al Estado nigeriano. En años anteriores el Gobierno federal había llevado a cabo iniciativas que fracasaron, como las operaciones militares terrestres y aéreas contra las bases de estos grupos criminales, el apagón de las telecomunicaciones por parte del Gobierno y las restricciones en el acceso a combustible y en el suministro de alimentos, así como las limitaciones a los movimientos de ganado y la reducción de los horarios o cierre de los mercados, como medidas para presionar a los grupos criminales. Ante el fracaso de medidas de años anteriores, en el estado de Zamfara, uno de los más afectados por la violencia, las autoridades intentaron promover acuerdos de paz, amnistías y otros incentivos –como el acuerdo con el poderoso señor de la guerra Bello Turji, anteriormente ganadero– con desigual resultado. Este clima de violencia fue en aumento durante el año, siguiendo la tónica de años precedentes, exacerbado por la instrumentalización de la violencia criminal y política por parte de los actores contendientes. Además, según diversos análisis, la posibilidad de que los grupos de criminales e islamistas se coordinen para interrumpir o al menos entorpecer las elecciones sigue siendo elevada, y ambos grupos ya colaboran cuando es de interés mutuo.¹⁹

Ante la escalada de violencia e inseguridad en Nigeria surgieron diversos actores armados no estatales progubernamentales que podrían ser instrumentalizados políticamente en el marco del proceso electoral

Con el pretexto de abordar la inseguridad, surgieron diversos actores armados no estatales progubernamentales que alegaban tener el objetivo de mantener la ley y el orden. Algunos, como Amotekun en el suroeste, Ebubeagu en el sureste y la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF) en el noreste, contaban con el respaldo del Estado y sus gobernadores.²⁰ Estos grupos, según diversos análisis, contaban con una mala formación y podrían ser instrumentalizados políticamente ante la proximidad de la cita electoral. A finales de año surgieron denuncias sobre acciones abusivas, como actos de intimidación, de estas milicias y grupos paramilitares progubernamentales. El uso de grupos paramilitares y milicias de autodefensa financiadas u organizadas por parte de gobernadores y políticos locales ha sido una constante histórica en Nigeria.

En los cuatro estados del noroeste del país (Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) los actos de violencia provocaron 4.480 víctimas mortales, según ACLED –cifra que ascendía a 4.655 víctimas mortales si se incluye Sokoto–, 500 víctimas mortales más que el año 2021, cuando se produjeron 4.162 (año en que se incluyó a Sokoto en el recuento). Esta cifra, no obstante, se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de bandas de criminales de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles.

Nigeria (Biafra)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, el Estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad,

17. International Crisis Group, *Countdown Begins to Nigeria's Crucial 2023 Elections*, 23 de diciembre de 2022.

18. Véase el resumen del conflicto armado en la región del Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados).

19. Idayat Hassan, *The insecurity ahead of Nigeria's 2023 elections is unprecedented*, *African Arguments*, 21 de diciembre de 2022.

20. Op.cit.

alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en el sureste del país –denominado como Biafra por los movimientos independentistas– a través de organizaciones noviolentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB.

En el sureste de Nigeria persistieron los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la insurgencia, así como las operaciones militares que causaron decenas de víctimas mortales. El brazo armado del movimiento independentista IPOB, la Red de Seguridad del Este (ESN), continuó llevando a cabo acciones armadas durante todo el año. Según el centro de investigación ACLED, en 2022 se produjeron 703 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 985 personas en el conjunto de los 10 estados que componen la región de Biafra (Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Delta y Cross River, aunque fue en los cinco primeros, en los que la comunidad ibo es mayoritaria, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales vinculadas al conflicto). Esta cifra incluía la violencia vinculada al conflicto armado de Biafra entre el Gobierno y grupos armados independentistas, pero también los múltiples ataques en ese estado cometidos por grupos criminales, así como los enfrentamientos de carácter intercomunitario por los usos y la propiedad de la tierra, así como por el acceso al agua, que causaron centenares de víctimas mortales.

El clima de inestabilidad y la recurrencia de las operaciones militares, que causaron decenas de víctimas mortales durante el año, así como los ataques contra puestos de policía y destacamentos militares, supusieron un grave obstáculo para el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2023, ya que la ESN se encontraba detrás de los ataques contra el personal e infraestructuras de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC). Cabe destacar que el 13 de octubre el Tribunal de Apelaciones de Abuja retiró todos los cargos contra el líder del IPOB Nnamdi Kanu. Kanu había demandado en marzo al fiscal general y al presidente Buhari por su arresto. El tribunal argumentó irregularidades procedimentales y el arresto y extradición ilegal. Kanu había sido arrestado en junio de 2021 en Kenia y extraditado a Nigeria, acusado de sedición, incitación al odio étnico y traición. Desde entonces, se había producido una intensificación de las protestas y movilizaciones sociales exigiendo su liberación, sumada

a múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad de Nigeria (NSF). A pesar de la sentencia, el 19 de octubre el Gobierno apeló la sentencia y Kanu permaneció en custodia policial.

Cuerno de África

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que ha gobernado Etiopía desde 1991 se ha enfrentado a una serie de movimientos opositores que reclamaban avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) estuvo controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que gobernó el país entre 1991 y 2019 con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Ha existido un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas –entre las cuales, disolver la coalición EPRDF y refundarla en diciembre de 2019 en un nuevo partido de ámbito nacional, el Prosperity Party (PP), que rehuía el federalismo étnico, partido en el que el TPLF no quiso integrarse– dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal controlado por el PP y el TPLF, que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré, conflicto de dimensiones regionales por la implicación de Eritrea. En paralelo, durante 2022 se produjo una escalada de la violencia por parte del grupo armado OLA y un aumento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad en la región de Oromiya.

El país continuó sumido en una grave situación como consecuencia de los impactos de la guerra entre actores armados de la región de Tigré y el Gobierno federal y sus aliados,²¹ cuya intensidad se redujo a partir de diciembre como consecuencia del acuerdo de paz. No obstante, cabe destacar la persistente escalada de la violencia en la región de Oromiya,²² los recurrentes brotes de violencia intercomunitaria en diferentes partes de la federación, las incursiones del grupo armado somalí al-Shabaab en el este de Etiopía y la creciente tensión en diversas regiones vinculada a movimientos secesionistas. Finalmente, es remarcable la mejora de la situación en la región de al-Fashaga, fronteriza con Sudán, a raíz de la distensión de las relaciones entre Etiopía y Sudán después de meses de grave tensión.

Las iniciativas de diálogo político anunciadas por el Gobierno a principios de 2022 y celebradas por la comunidad internacional –que incluyeron la liberación de prominentes opositores, como uno de los fundadores del Tigrayan People’s Liberation Front, Sebhat Nega, los líderes del Oromo Federalist Congress, Jawar Mohammed y Bekele Gerba, y el periodista y líder opositor Eskinder Nega, decisión calificada por el secretario general de la ONU Antonio Guterres como una medida de construcción de confianza significativa– surtieron poco efecto debido al boicot de diferentes movimientos políticos secesionistas del país, como los partidos políticos Oromo Federalist Congress, Oromo Liberation Front y Ogaden National Liberation Front. En paralelo, la violencia intercomunitaria que sacude periódicamente diferentes regiones del país se vio agravada por el conflicto en la región de Oromiya y la extensión de este a otras regiones, así como las crecientes actividades de grupos secesionistas y las acciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad, como en Gambella o en Benishangul-Gumuz, entre otras. En Gambella, el Gambella Liberation Front, un grupo rebelde de la región, colaboró con el grupo armado Oromo Liberation Army en acciones contra los cuerpos de seguridad regionales. La presencia de comunidad oromo en otras regiones del país tuvo consecuencias en términos de brotes de violencia y persecución de la comunidad oromo –como en la región de las Naciones y Nacionalidades del Sur (SNNPR, por sus siglas en inglés)– tal y como denunciaron diferentes organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Cabe destacar también los enfrentamientos esporádicos entre el Gumuz People’s Democratic Movement y las Fuerzas Armadas federales en la región de Benishangul-Gumuz. En este sentido, también cabe señalar que durante el año se produjeron brotes esporádicos de violencia y represalias entre grupos

Etiopía continuó sumida en una grave situación como consecuencia de los impactos en el conjunto del país de las guerras en Tigré y en Oromiya

vinculados a diferentes religiones en diferentes partes del país.

Otro de los focos de tensión que ha afectado a Etiopía en los últimos años ha sido el contencioso regional vinculado a la construcción de la **Gran Presa del Renacimiento Etíope** (GERD, por sus siglas en inglés). En febrero Etiopía señaló que había iniciado la producción de energía hidroeléctrica en la GERD y en agosto el primer ministro Abiy Ahmed anunció que había completado el tercer llenado del embalse, iniciado en 2020.²³ Estos anuncios provocaron reacciones de rechazo de Sudán y Egipto y una comunicación de Egipto al Consejo de Seguridad de la ONU a finales de julio protestando ante las decisiones unilaterales de Etiopía que podrían desencadenar una escalada de la tensión de graves consecuencias regionales. Finalmente, cabe destacar la incursión en Etiopía que llevó a cabo el grupo armado somalí al-Shabaab en julio, cuando penetró en la región etíope de Somalí. Las autoridades anunciaron la muerte de alrededor de más de 200 combatientes del grupo en diferentes operaciones. Al-Shabaab, según diversos análisis, estaría pretendiendo ampliar su radio de acción fuera del territorio somalí.

Finalmente, **en relación con la disputa fronteriza entre Sudán y Etiopía, motivo de inestabilidad y enfrentamientos esporádicos entre ambos países desde el inicio de la guerra en Tigré, cabe destacar la mejora de las relaciones entre ambos** a raíz del encuentro entre el primer ministro etíope y el presidente de facto de Sudán, en general al-Burhan el 15 de octubre en la ciudad etíope de Bahir Dar. Ambos países habían mantenido históricamente una disputa en torno a la región fronteriza de al-Fashaga (un área de Sudán al este del río Atbara y al sur del río Tekeze). Etiopía nunca firmó un tratado con Sudán sobre el territorio, porque el gobierno argumentó que la región quedó bajo control etíope cuando Sudán fue se declaró independiente en 1956. Etiopía había abandonado desde 2008 todas las reclamaciones sobre al-Fashaga siempre que Sudán permitiera que los agricultores y activistas etíopes armados y no armados permanecieran en el área. Con el estallido de la guerra de Tigré, la tensión entre Sudán y Etiopía se intensificó. Desde entonces y durante el año 2022 se produjeron enfrentamientos esporádicos entre los cuerpos de seguridad etíopes y sudaneses y milicias en la frontera común, que causaron decenas de víctimas mortales, así como la ocupación por parte de Sudán de territorios en disputa. Tras este encuentro en octubre, se celebraron diversas reuniones que culminaron con la firma de un acuerdo de cooperación y seguridad el 15 de diciembre para resolver la disputa fronteriza.

21. Véase el resumen sobre Etiopía (Tigré) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

22. Véase el resumen sobre Etiopía (Oromiya) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

23. Véase "La cuenca del Nilo: ¿cooperación o conflicto?" en capítulo 5 (Escenarios de Riesgo para 2021) en Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2021.

Kenia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder al autocrático Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras este proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibaki y Raila Odinga. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007, aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenia en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, y tensiones entre Kenia y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

El año estuvo marcado por un creciente clima de tensión y polarización vinculado al proceso electoral celebrado en agosto, así como por la persistencia de los ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en el este y el noreste y el incremento de la violencia intercomunitaria y de la criminalidad principalmente en el norte y el centro-norte, vinculada a disputas estructurales en torno a los usos y la propiedad de la tierra agravadas por la extrema sequía derivada de las consecuencias del cambio climático. Según datos de ACLED,²⁴ durante el 2022 se registraron 440 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en el conjunto del país que costaron la vida a 498 personas, acciones que estarían principalmente vinculadas a la violencia intercomunitaria y los ataques

La extrema sequía que afecta el Cuerno de África se puso de manifiesto por la gravedad de la situación humanitaria y por el deterioro de la situación de seguridad derivada de la competencia por los recursos escasos

de al-Shabaab. Si a esta cifra se le añade la violencia vinculada a protestas y a movilizaciones con disturbios, el número de eventos violentos alcanzó la cifra de 1.660 y las víctimas mortales ascendieron a 698, lo que pone en evidencia la inestabilidad vinculada al proceso electoral.

Las confrontaciones y la movilización política entre los partidarios del presidente Uhuru Kenyatta, aliado del candidato Raila Odinga, y los partidarios del vicepresidente William Ruto y aspirante a la presidencia, fueron en aumento y alcanzaron cotas de violencia muy preocupantes durante el año hasta la celebración de las elecciones en agosto. La jornada electoral transcurrió de forma generalmente pacífica, y las misiones de observación electoral, como la de la EAC, ratificaron que el proceso había transcurrido de forma transparente y en libertad, aunque se registraron una decena de incidentes violentos. Las elecciones dieron la victoria a William Ruto y su alianza de partidos United Democratic Alliance (UDA) sobre Raila Odinga y la coalición Azimio la Umoja, en la que se integraba el partido Jubilee del presidente saliente Uhuru Kenyatta. Raila Odinga no aceptó la derrota y anunció que llevaría a cabo todas las medidas legales a su alcance así como protestas y movilizaciones por todo el país para impugnar los resultados. El Tribunal Supremo ratificó la victoria de Ruto. A pesar de las críticas y las movilizaciones, el nuevo presidente William Ruto consiguió consolidar su poder, y Uhuru Kenyatta –que fue nombrado enviado especial para los Grandes Lagos, confirmando Ruto la continuidad en la política exterior de Kenia– anunció que facilitaría el traspaso de poder. En octubre cabe destacar que Ruto desmanteló una unidad de policía de elite, la Special Service Unit, acusada de haber cometido ejecuciones extrajudiciales, decisión celebrada por Amnistía Internacional.

Por otra parte, el grupo armado somalí al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil durante todo el año, incluyendo el uso de artefactos improvisados al paso de convoyes militares, principalmente en los condados del noreste y este (Mandera, Wahir, Garissa y Lamu) causando decenas de víctimas mortales. En agosto el grupo armado reiteró que continuaría perpetrando ataques hasta que las tropas de Kenia abandonaran Somalia.²⁵ No obstante, algunos ataques supuestamente cometidos por al-Shabaab respondían a disputas intercomunitarias instrumentalizadas políticamente debido a la carrera electoral. Fue el caso de Lamu, donde aunque el Gobierno responsabilizó a al-Shabaab de los actos de violencia, fuentes locales señalaron que la tensión entre las comunidades kikuyu

24. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

25. Mohammed Dhaaysane, *Al-Shabab Militants Issue New Threats Against Kenya*, VOA, 28 de agosto de 2022.

y swahili en competencia por alcanzar el puesto de gobernador en el condado estaba agravando las tensiones estructurales en torno a las disputas por la propiedad y usos de la tierra.

La extrema sequía que afecta el Cuerno de África se puso de manifiesto en Kenya por la gravedad de la situación humanitaria y por el deterioro de la situación de seguridad derivada de la competencia por los recursos escasos. El PMA alertó en abril de que tres millones de personas sufrían una situación de inseguridad alimentaria grave como consecuencia de la sequía. Los condados del norte y centro-norte registraron disputas intercomunitarias persistentes en torno al acceso a tierra, agua y pastos, así como por la proximidad de las elecciones generales de 2022, que los partidos políticos tradicionalmente instrumentalizan en beneficio propio. Los robos de ganado, ataques de milicias comunitarias, represalias y la intervención de los cuerpos de seguridad fueron constantes durante todo el año en los condados de Marsabit, Isiolo, Baringo, West Pokot, Elgeyo-Marakwet, Samburu, Turkana, Garissa y Wajir. La gravedad de la situación llevó a las autoridades a declarar el toque de queda en mayo en los condados de Marsabit e Isiolo, que fue prorrogado durante varios meses y ampliado en julio a partes de los condados de Baringo, Elgeyo-Marakwet y West Pokot en un intento de hacer frente a la criminalidad y la violencia intercomunitaria. En el caso de Marsabit se añade el hecho de que el grupo insurgente etíope Oromo Liberation Army (OLA) habría estado utilizando este condado como base de apoyo a sus operaciones en Etiopía, según el International Crisis Group. El OLA se habría dirigido al Gobierno de Kenia demandando neutralidad en lo concerniente al conflicto entre el OLA y las autoridades etíopes.²⁶

Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (52 grupos, entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas

Síntesis:

Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un complejo clima de inestabilidad y violencia desde casi todo el período posterior a la independencia en 1960. La diversidad étnica del país se ha visto instrumentalizada por una tradición de faccionalismo. El colonialismo francés también exacerbó la animosidad entre el norte mayoritariamente musulmán y el sur más cristiano y animista, división instrumentalizada políticamente y que forma parte del núcleo del conflicto. Los sucesivos gobiernos desde 1966 se han visto confrontados por insurgencias que pretendían acceder al poder. Libia y Francia históricamente han estado presentes en los asuntos internos chadianos, apoyando, respectivamente, a insurgencias y gobiernos. El presidente autoritario Hissène Habré (en el poder desde 1982) fue reemplazado mediante un golpe de Estado en 1990 por otro nordestino, Idriss Déby, que gobernó desde entonces en un clima de represión y violencia. Déby reformó la Constitución en 2005, boicoteada por la oposición, lo que le permitió convertirse en uno de los líderes más longevos en el poder (1990-2021), pero que fue el germen de una insurgencia compuesta por desafectos al régimen. A esto se añade el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra de la vecina región sudanesa de Darfur desde 2003. Por último, cabe destacar las recientes intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia (entre los que se encuentra el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad, FACT) y contra la minería ilegal, así como contra Boko Haram en la región del Lago Chad. El clima de inestabilidad se agravó con la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado por parte de un consejo militar que instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente, suspendió la Constitución y la reemplazó con una carta de transición y la promesa de elecciones libres al cabo de 18 meses, tras la celebración de un diálogo nacional.

Chad continuó inmerso en un grave clima de inestabilidad y violencia.²⁷ El periodo de transición de 18 meses adoptado en abril de 2021 por el consejo militar que ocupó el poder mediante un golpe de Estado –y que suspendió la Constitución e instaló a Mahamat Idriss Déby, hijo de Idriss Déby, tras la muerte de este– ha significado la consolidación del poder de Déby. Durante este periodo entre abril de 2021 y finales de 2022 la Junta Militar ha utilizado la violencia para reprimir la disidencia y las protestas pacíficas que pedían el regreso de un gobierno civil. **El proceso de paz de Doha y el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano concluyó en octubre de 2022 con la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) bajo la imagen de un nuevo Gobierno, calificado de unidad nacional, y la continuidad de la presidencia de Mahamat Déby,** lo que ha supuesto la perpetuación de la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021. El mandato del CMT fue prolongado a partir de octubre de 2022 por un nuevo periodo de 24 meses, tras el cual se celebrarán

26. Finfinne News Network, [OLF-OLA sends an open letter to the Kenyan government](#), 11 de mayo de 2022.

27. Véase el resumen de Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados). Para profundizar en la cuestión, véase Josep Maria Royo, [Claves y retos de la transición en Chad \(2\) esperanzas frustradas con el proceso de paz y el diálogo nacional](#), *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, No 23, Escola de Cultura de Pau, diciembre de 2022; Josep Maria Royo, [Claves y retos de la transición en Chad \(1\) Cambio climático, inestabilidad y conflicto](#), *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, No, 19, Escola de Cultura de Pau, noviembre de 2022.

elecciones a las que se podrá presentar Mahamat Déby. La perpetuación del régimen de Déby desencadenó en octubre el rechazo de la oposición política y social y la subsiguiente represión por parte de los cuerpos de seguridad, causando decenas de víctimas mortales en 2022, lo que evidenció la deriva autoritaria del Gobierno y la voluntad de silenciar la oposición política y social con todos los medios a su alcance. La respuesta internacional tras la prolongación del mandato del CMT evidenció el fracaso de la comunidad internacional para evitar la deriva autoritaria y represora del régimen chadiano y lanzó un peligroso mensaje a otros países de la región.

En julio de 2021 se estableció el Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo (CODNI), con la voluntad de organizar –inicialmente en diciembre de 2021– el anunciado diálogo nacional. No obstante, los desacuerdos en torno a los integrantes del CODNI, la inclusividad del diálogo nacional, la injerencia del CMT, la participación de las diferentes insurgencias o la agenda de temas del mismo diálogo, entre otras cuestiones, retrasaron su celebración. Su retraso se justificó por la voluntad de facilitar la participación de las insurgencias en el diálogo, para lo cual se pretendía un acuerdo de paz previo entre estas y el CMT. Las negociaciones formales se iniciaron en marzo de 2022 en Doha (Qatar) bajo la mediación qatarí, y después de diversas rondas negociadoras, el 7 de agosto se alcanzó un acuerdo de paz entre decenas de grupos insurgentes del país y el Gobierno. Este acuerdo era el paso previo y condición para participar en el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) que había estado impulsando el Gobierno junto a diferentes sectores de la sociedad civil, y que se celebró entre el 20 de agosto y el 8 de octubre de 2022.²⁸

Los contactos entre representantes oficiosos del CMT y sectores insurgentes en Togo, en Egipto y Francia, celebrados en 2021 continuaron con el ofrecimiento de Qatar a facilitar encuentros en Doha con los grupos insurgentes, lo que fue celebrado por la oposición político-militar chadiana como un impulso al proceso. Previamente, el CMT había dado luz verde a una de las principales demandas de la insurgencia, el establecimiento de una amnistía como condición a participar en el diálogo nacional. En noviembre de 2021 Mahamat Déby había decretado una amnistía para alrededor de 300 líderes insurgentes y opositores políticos encarcelados o exiliados. Esta cuestión dio una imagen de apertura a la junta militar. En este sentido, el CMT había llevado a cabo una política de gestos y medidas para ganarse el apoyo de la oposición

a través de la cooptación de actores políticos y sociales opositores, entre los que destaca el histórico líder de la oposición Saleh Kebzabo (nombrado vicepresidente del CODNI y al término del DNIS, primer ministro). Después de diversos retrasos, finalmente el 13 de marzo de 2022 se iniciaron los contactos entre los representantes de más de 40 grupos insurgentes y el CMT en Doha, bajo la mediación del enviado especial qatarí Mutlaq bin Majed Al Qahtani. De entre estas decenas de actores armados, solo cuatro representaban una verdadera amenaza militar para el régimen de Mahamat Déby: el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT), el Consejo de Mando Militar para la Salvación de la República (CCSMR), la Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo (UFDD) y la Unión de Fuerzas de Resistencia (UFR).

El diálogo nacional en Chad ratificó la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021 por Mahamat Déby y su Junta Militar

El objetivo del proceso negociador –calificado como pre-diálogo al DNIS– era lograr la participación de estos grupos armados en el DNIS. Finalmente, tras cinco meses de rondas negociadoras, 34 de los 52 grupos político-militares, incluidos la UFDD y la UFR, firmaron un acuerdo el 7 de agosto en Doha a cambio de la liberación de los presos, la amnistía y el fin de las hostilidades entre el Gobierno y estas facciones armadas, así como de la participación en el DNIS. 18 grupos armados, incluido el FACT, rechazaron el acuerdo,²⁹ denominado Acuerdo de Doha por la Paz y la Participación de los Grupos Político-Militares en el DNIS, y formaron una nueva coalición opositora, el Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR).³⁰ El CPCR argumentó su rechazo al acuerdo señalando agravios en las cuotas de participación en el diálogo nacional, el incumplimiento de la liberación de prisioneros de guerra y la inelegibilidad de las autoridades de transición para presentarse a las elecciones posteriores a la transición, según destacó el informe del secretario general de la ONU de diciembre.³¹ Según el acuerdo, el CMT y centenares de representantes de la oposición político-militar podrían participar en el DNIS, y los representantes de los grupos rebeldes tendrían garantías de acceso y protección armada. La UA había acordado en mayo de 2021 apoyar la transición con la condición de que las autoridades celebraran elecciones presidenciales en un plazo de dieciocho meses, transición que debería culminar en octubre de 2022, y también que se prohibiera que los miembros de la Junta Militar se presentaran a las elecciones, exigiendo que la junta modificara la carta de transición para incluir estas cláusulas. Sin embargo, la Junta no enmendó la carta de transición como prometió, y señaló que la revisión de la carta debería discutirse durante el diálogo nacional.

28. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

29. Mills, Andrew, *Chad signs peace pact with rebels, but main insurgents stay out*, Reuters, 8 de agosto de 2022.

30. Madjissebaye Ngarndinon, *Tchad : les groupes armés non signataires de l'accord de Doha mettent en place un cadre commun de lutte*, *Tchad Infos*, 8 de agosto de 2022.

31. Consejo de Seguridad de la ONU, *La situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central*, S/2022/896 de 1 de diciembre de 2022.

El DNIS estaba previsto que se celebrara en diciembre de 2021 y posteriormente se fijó para febrero de 2022, pero fue pospuesto reiteradamente, a la espera de que el pre-diálogo de Doha culminara exitosamente para facilitar la participación de los actores armados. Finalmente, la firma del acuerdo de Doha el 7 de agosto permitió la puesta en marcha del DNIS. El 20 de agosto, más de 1.400 representantes de movimientos político-militares, representantes del Gobierno de transición, representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres y jóvenes, líderes tradicionales, diáspora, autoridades provinciales, fuerzas de seguridad e instituciones estatales y sindicatos iniciaron en N'Djamena el DNIS, con la presencia de actores regionales e internacionales. El FACT, la coalición de organizaciones de la sociedad civil Wakit Tama y el partido opositor Les Transformateurs, entre otros, boicotearon el diálogo. La Conferencia Episcopal de Chad se retiró del DNIS debido a que no percibía que hubiera un proceso de diálogo real.³² Este anuncio contribuyó a alimentar la frustración de diversos actores políticos y sociales que veían con preocupación la evolución del DNIS, y que organizaron diversas movilizaciones pacíficas contra el DNIS que fueron duramente reprimidas, tal y como denunció, entre otros, HRW.

La respuesta de la comunidad internacional ante la grave situación de Chad supone un mensaje de graves implicaciones para otros países de la región inmersos en procesos similares como Malí, Guinea, Burkina Faso o incluso Sudán

Sin embargo, el 1 de octubre, los participantes en el diálogo nacional aprobaron las recomendaciones sobre el camino a seguir con la transición, con medidas para la disolución del CMT y el nombramiento del presidente del Consejo Militar como presidente de la transición para una “segunda transición” con una duración de hasta 24 meses, así como para la celebración de un referéndum sobre una versión modificada de la Constitución de 1996 y la forma del Estado, la duplicación del número de escaños en el Consejo Nacional de Transición y el establecimiento de una segunda cámara del Parlamento. En particular, el diálogo recomendó que todos los chadianos que cumplieran con los requisitos legales pudieran presentarse a las próximas elecciones –que se celebrarán en 2024–, incluidos los miembros de las instituciones de transición. El 10 de octubre, el presidente de la Junta Militar, Mahamat Déby, prestó juramento como presidente de la transición y días después nombró un Gobierno de Unidad Nacional encabezado por el ex líder de la oposición y ex vicepresidente del CODNI, Saleh Kebzabo,³³ en el que se incluyeron otras figuras de la oposición y miembros de los grupos político-militares

que firmaron el acuerdo de Doha, como Tom Erdimi, el líder de la UFR.³⁴ Diversos generales cercanos a Déby presentes en el CMT mantuvieron carteras estratégicas. El 20 de octubre culminaba el periodo de 18 meses tras el cual el presidente del Consejo Militar de Transición, Mahamat Déby, debía retornar el poder a las autoridades civiles. La oposición política y social hizo un llamamiento a la movilización ciudadana para el 20 de octubre como consecuencia de la prolongación del mandato del CMT y de su presidente, Mahamat Déby. El Gobierno prohibió las movilizaciones anunciadas para el 20 de octubre.³⁵ La represión violenta de la movilización social provocó al menos 50 víctimas mortales, entre las cuales al menos 10 policías, y unos 100 heridos, según el nuevo primer ministro del país, Saleh Kebzabo, y anunció el toque de queda en N'Djamena y otras tres localidades, así como la suspensión de las actividades de varios partidos políticos. Mahamat Déby acusó a fuerzas extranjeras de estar detrás de las movilizaciones. La comunidad internacional condenó la represión gubernamental e hizo un llamamiento al respeto de los derechos humanos y al diálogo con la oposición política, pero no se establecieron sanciones contra el Gobierno. Hay estimaciones no confirmadas que elevaron el balance de represión a más de 100 víctimas mortales y centenares de heridos.

La Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), que había avalado las recomendaciones del diálogo antes de la jornada del 20 de octubre, nombró a su presidente, el congolés Félix Tshisekedi, como facilitador de la transición chadiana y designó una comisión de investigación. Este anuncio chocó con la posición de la UA, cuyo presidente, el chadiano Moussa Faki Mahamat, presentó un informe muy crítico con las autoridades de la transición, en el que exigía a la institución africana que condenara los asesinatos, torturas, arrestos y encarcelamientos arbitrarios de cientos de civiles y denunciara la “represión sangrienta”, exigiera “la liberación inmediata de todos los presos políticos”, abriera una investigación y tomara medidas por el incumplimiento de los compromisos asumidos que incluyeran la suspensión de Chad de los órganos de la UA. Sin embargo, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA reunido el 11 de noviembre para analizar la situación del país no alcanzó el quorum necesario para suspender a Chad de la organización. Entre finales de noviembre y principios de diciembre se celebró un juicio que no cumplió con los estándares internacionales, según el Colegio de Abogados de Chad,

32. Atemanke, Jude, *Catholic Bishops Withdraw from Chad's National Inclusive Dialogue, Cite Lack of "dialogue"*, *ACI Africa*, 4 de septiembre de 2022.

33. Olivier, Mathieu, “Tchad : pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno a nommé Saleh Kebzabo Premier ministre”, *Jeune Afrique*, 12 de octubre de 2022.

34. Olivier, Mathieu, “Nouveau gouvernement au Tchad : Mahamat Saleh Annadif aux Affaires étrangères, Tom Erdimi à l'Enseignement supérieur”, *Jeune Afrique*, 14 de octubre de 2022.

35. RFI, “Le Tchad interdit les manifestations marquant la fin initiale de la transition”, 20 de octubre de 2022.

y en el que se condenaron a 262 personas a penas de prisión en relación al 20 de octubre. A principios de diciembre otras 139 personas fueron liberadas por no recibir penas de prisión o por no haber sido consideradas culpables en el juicio. La comisión de investigación de la CEEAC sobre los hechos del 20 de octubre visitó el país para iniciar sus trabajos el 14 de diciembre, y el Colegio de Abogados de Chad cuestionó su independencia e hizo un llamamiento a que participaran otras organizaciones internacionales como la UA y la ONU.

RDC - Rwanda	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, identidad, recursos Internacional
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR, grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP)

Síntesis:

Las tensas relaciones entre RDC y Rwanda se remontan a principios de los noventa, cuando el Mariscal zaireño Mobutu Sese Seko apoyó al régimen ruandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del Rwandan Patriotic Front (RPF), insurgencia liderada por Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 consiguió derrocar al régimen genocida y tomó el poder en Rwanda. En 1996 una rebelión liderada por el general congolés Laurent Kabila, con el apoyo de Rwanda y Uganda penetró en RDC para desmantelar los campos de refugiados huidos del genocidio ruandés desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo Gobierno y Ejército ruandeses, e iniciar la guerra contra Mobutu, al frente del Gobierno del por entonces Zaire. Esta rebelión se convirtió en la primera guerra congoleña (1996-1997), que llevó al poder a Laurent Kabila. Posteriormente, en 1998, los países vecinos que habían encumbrado a Kabila le retiraron su confianza y, directa e indirectamente a través de grupos armados organizados y promovidos desde estos mismos países vecinos, especialmente Rwanda y Uganda, iniciaron una nueva rebelión para intentar derrocar al nuevo líder congolés, la llamada guerra mundial africana (1998-2003). La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras, principalmente de Rwanda. Éstas justificaban su presencia por la existencia de grupos insurgentes en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congoleñas para desarticularlos, mientras ejercían el control y la explotación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por estos, en especial Rwanda. La existencia de grupos insurgentes enemigos de Rwanda, Uganda y Burundi, la permanencia de las causas de fondo del conflicto en RDC en sus múltiples niveles y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar estos grupos provocó el surgimiento en 2012 del M23, apoyado por Rwanda. A pesar de la firma de un nuevo acuerdo de paz en diciembre de 2013, en 2021 el grupo volvió a reorganizarse con el apoyo ruandés.

Durante el año se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. La ofensiva del M23, iniciada a finales de 2021, habría contado con el apoyo de Rwanda, según señaló en agosto la ONU, y junto a los bombardeos transfronterizos e incursiones de soldados de RDC en Rwanda y de Rwanda en RDC, provocó una escalada de la tensión entre ambos países y esfuerzos regionales para desescalar el conflicto y para promover contactos que condujeran a negociaciones de paz entre RDC y el M23 y entre RDC y Rwanda.³⁶ En agosto el Grupo de Expertos de la ONU señaló que disponía de sólidas evidencias sobre el apoyo de Rwanda al M23 –grupo que desde noviembre de 2021 reinició sus actividades tras prácticamente una década de inactividad y desde mayo de 2022 ha llevado a cabo una fuerte ofensiva ampliando su presencia y control del territorio en la provincia de Kivu Norte. El informe, rechazado por Rwanda, destacaba que el Ejército ruandés habría lanzado intervenciones militares en territorio congolés desde noviembre de 2021 proporcionando apoyo militar y logístico a acciones del M23.

Los intentos de los países de la región para desescalar el contencioso y promover el diálogo entre las partes fueron constantes, liderados por Angola bajo el mandato de la UA. En abril los países de la EAC, incluido RDC (que se incorporó a la organización en marzo) aprobaron el despliegue a partir de agosto de una misión militar en el este de RDC para combatir al grupo armado M23 y apoyar al Gobierno a poner fin al clima de violencia como consecuencia del reinicio de las hostilidades por parte del M23, decisión ratificada en junio.³⁷ El despliegue se hizo parcialmente efectivo en noviembre, aunque con incógnitas abiertas en torno a los miembros, la coordinación con la MONUSCO, la financiación y mandato. RDC vetó la participación de Rwanda en la misión.

Ante la escalada de la ofensiva del M23 en octubre, el Gobierno congolés expulsó al embajador ruandés. El 31 de octubre se produjo una movilización de miles de personas en Goma –capital de Kivu Norte– contra Rwanda, pidiendo armas para combatir ante la preocupación de que el grupo armado pudiera ocupar la capital, tal y como hizo en 2012, manifestando su rechazo y frustración ante la pasividad internacional y exigiendo a la comunidad internacional sanciones contra Rwanda por el apoyo al M23. Posteriormente, el presidente congolés, Félix Tshisekedi, y el ministro de Exteriores ruandés, Vincent Biruta, participaron en una minicumbre sobre paz y seguridad en el este de RDC en Luanda el 23 de noviembre, en la que se hizo un llamamiento para una inmediata retirada del M23 de las zonas ocupadas

36. Informe del Secretario General, *Aplicación del Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región*, Consejo de Seguridad de la ONU, 4 de octubre de 2022.

37. Sam Mendick y Claude Muhindo, *East African military force met with scepticism in DR Congo*, *The New Humanitarian*, 25 de noviembre de 2022.

en Kivu Norte y para alcanzar un alto el fuego que debía entrar en vigor el 25 de noviembre, aunque el M23 no lo respetó. El M23 continuó ampliando el territorio bajo su control cometiendo graves vulneraciones de los derechos humanos. Las acciones del M23 provocaron la condena unánime de la comunidad internacional, y numerosos países exigieron a Rwanda poner fin al apoyo al grupo armado, entre ellos EEUU, Francia y la UE. El informe del Grupo de expertos de la ONU del 16 de diciembre encontró “pruebas sustanciales” de que Fuerzas Armadas ruandesas habían penetrado en territorio congolés desde enero de 2022, ya sea para reforzar a los rebeldes del M23 o para realizar operaciones militares,³⁸ aunque Kigali negó las acusaciones.

A finales de año se produjeron diferentes acciones que pusieron de manifiesto la volatilidad de la situación. Mientras persistía la ofensiva del M23, un avión de combate congolés SU-25 penetró el 7 de noviembre al espacio aéreo de Rwanda y aterrizó brevemente en el aeropuerto de Rubavu, provincia occidental. Rwanda no respondió militarmente, pero acusó a Kinshasa de provocación. Posteriormente, las tropas ruandesas mataron el 19 de noviembre a un soldado congolés que había cruzado la frontera hacia el distrito Rubavu. El 28 de diciembre Kigali dijo que Kinshasa había violado nuevamente su espacio aéreo al volar un avión de combate sobre su territorio, y el 24 de enero de 2023 las Fuerzas Armadas ruandesas dispararon misiles contra un avión de combate congolés por presuntamente violar nuevamente el espacio aéreo de Rwanda, instando a Kinshasa a detener esta agresión. Kinshasa negó que su avión hubiera violado el espacio aéreo de Rwanda y calificó el incidente de acto de guerra.

Sudán	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del

control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevaron la caída del régimen de al-Bashir y la apertura de un proceso de transición.

Tras un año del golpe militar del 25 de octubre de 2021, que derrocó al Gobierno de Transición y generó una amplia movilización ciudadana contra la Junta Militar, a finales de año se logró un acuerdo marco en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político. El año, sin embargo, se inició con una nueva crisis política provocada por la renuncia al cargo de primer ministro de Abdalla Hamdok, dejando a los militares con el control total de la transición y provocando protestas masivas que fueron duramente reprimidas. En respuesta a la crisis, la Misión de la ONU en Sudán (UNITAMS) anunció el 8 de enero un proceso de diálogo entre las partes para tratar de salvar la transición. Paralelamente se habían puesto en marcha negociaciones separadas con las partes signatarias del Acuerdo de Paz de Juba de 2020, organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos, incluidas facciones de la coalición política Forces for Freedom and Change (FFC) y los Comités de Resistencia en el estado de Jartum. No obstante, la principal alianza prodemocracia del país, las Forces for Freedom and Change-Central Command (FFC-CC), boicoteó las negociaciones debido a la continua represión policial. El 10 de marzo, UNITAMS, juntamente con la UA y el bloque regional Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) anunciaron una iniciativa conjunta de paz intrasudanesa para mediar entre la Junta Militar y la oposición política con el fin de resolver la crisis de gobernanza en el país. La iniciativa, conocida como mecanismo trilateral, se puso en marcha a mediados de mayo. De forma paralela al mecanismo trilateral, diplomáticos estadounidenses y saudíes pusieron en marcha en el mes de junio conversaciones informales entre la Junta Militar y el FFC-CC, en lo que se conoció como la mediación del Quad (que incluyó a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos).

Este diálogo generó críticas por parte del Mecanismo Trilateral, que denunció “interferencia externa”, acusando a los países Quad de apoyar públicamente el proceso trilateral mientras lo socava a través del proceso de negociación paralelo.

Tras meses de estancamiento y de tensiones entre las partes –entre ellas entre el jefe del Ejército y jefe de Estado de facto, el general Abdel Fattah al-Burhan, y el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), general Dagalo “Hemeti”–, en septiembre

38. Informe de mitad de período del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 2641 (2022), Consejo de Seguridad de la ONU, 16 de diciembre de 2022.

se logró reanudar las conversaciones después de que el Colegio de Abogados de Sudán presentara un nuevo borrador de constitución que contemplaba la restauración de la autoridad civil durante un período de transición. Finalmente, tras meses de negociación, el 5 de diciembre se logró un acuerdo marco entre la Junta Militar y los principales partidos políticos civiles y otras fuerzas civiles articuladas, en su mayoría, bajo el principal bloque de oposición civil FFC-CC. En el acuerdo los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y crear un gobierno civil de transición con elecciones en dos años. El período de transición comenzará con el nombramiento del primer ministro, nominado por civiles, después de que concluya la segunda fase de negociaciones prevista para principios de 2023. En esa fase estaba previsto que se aborden cinco temas particularmente delicados: justicia transicional, la reforma del sector de la seguridad (incluyendo la integración de los antiguos grupos rebeldes y las RSF en un ejército unificado), el Acuerdo de Paz de Juba, el desmantelamiento del ex régimen de Omar al-Bashir y la crisis en el este de Sudán.

Si bien el acuerdo representaba un importante paso para poner fin a la crisis política en el país, el pacto seguía planteando importantes desafíos debido a que la opinión pública y la oposición permanecían divididas; los Comités de Resistencia de base rechazaron adherirse y prometieron sostener las protestas en la capital; tres grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba de 2020 rechazaron el acuerdo debido al redactado que sugería que parte del acuerdo de paz pueda ser renegociado; otros grupos rebeldes no signatarios del acuerdo de paz de Juba, SLM/A-AW dirigido por Abdulwahid al-Nur (Darfur) y el SPLM-N encabezado por Abdulaziz al-Hilu (Kordofán Sur), tampoco se unieron al pacto; así como debido a las crecientes tensiones entre el Ejército y las RSF.

El 5 de diciembre se logró un acuerdo marco entre la Junta Militar y parte de la oposición sudanesa para la creación de un gobierno civil de transición, pero continuaban los desafíos

Norte de África - Magreb

Marruecos-Sáhara Occidental	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³⁹
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO

Síntesis:

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

Tras una intensificación de la tensión en torno al Sáhara Occidental en 2021, los hechos de violencia se redujeron en 2022. **Durante el año persistió la ruptura del cese el fuego –vigente entre 1991 y 2020– y no se observaron avances en la búsqueda de una salida negociada a la disputa, pese a las gestiones diplomáticas desplegadas por el nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.**⁴⁰ Según el informe del secretario general de la ONU dado a conocer el último trimestre, y que cubre el período de octubre de 2021 a octubre de 2022, la situación en el Sáhara Occidental se caracterizó por hostilidades de baja intensidad entre Marruecos y el Frente POLISARIO. Recuentos informales a partir de informaciones de prensa apuntan a que los hechos de violencia podrían haber causado la muerte de una veintena de personas en 2022. Las dinámicas del contencioso siguieron viéndose afectadas por las tensiones regionales entre Marruecos y Argelia y en 2022 también fue relevante el cambio de postura del Gobierno de España, que se alineó abiertamente con la iniciativa de Marruecos para abordar una salida política al conflicto. Respecto a la evolución de las hostilidades, la misión de Naciones Unidas, MINURSO, reconoció que no está en condiciones de verificar de manera independiente el número ni las localidades en las que se produjeron los diversos intercambios de fuego –a menudo los datos son cuestionados–, pero los indicios apuntan a que la mayor parte de los incidentes a lo largo de la berma se concentraron en el norte del territorio, en las proximidades de Mahbas. A lo largo del año se informó de diversos ataques perpetrados por las fuerzas marroquíes con artefactos aéreos no

39. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

40. Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

tripulados al este de la berma. Según medios de prensa ataques con drones habrían provocado la muerte de tres civiles mauritanos y de cuatro miembros del Frente POLISARIO en enero. En abril, otra ofensiva similar cerca de la frontera con Mauritania causó la muerte de otros tres civiles, dos mauritanos y un argelino. Tras este último episodio, el Gobierno argelino acusó a Marruecos de perpetrar “asesinatos selectivos”, de “repetidos actos de terrorismo” y alertó que los posibles efectos colaterales en territorio argelino de lo que calificó como “belicismo” de Marruecos serían considerados como *casus belli*. La MINURSO documentó 18 ataques de las fuerzas marroquíes al este de la berma desde septiembre de 2021, uno de los cuales habría provocado la muerte de un alto mando militar del Frente POLISARIO en julio. Por su parte, el Frente POLISARIO aseguró que había matado a una docena de soldados marroquíes en una serie de operaciones a principios de febrero. La misión de la ONU denunció que la falta de acceso a las áreas próximas a la berma imponía grandes retos a sus actividades de observación y a las posibilidades de verificar los hechos en terreno.

Estos acontecimientos se produjeron en un trasfondo de reactivación de las gestiones diplomáticas impulsadas por la ONU después de varios años en los que el puesto de enviado especial para el Sáhara Occidental estuvo vacante. El diplomático Staffan de Mistura asumió el cargo a finales de 2021 y a lo largo de 2022 realizó dos rondas de visitas a la región, durante las cuales se reunió con representantes de Marruecos, el Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania. Paralelamente, mantuvo contactos con diversos actores internacionales interesados y/o con capacidad de incidir en la evolución de la disputa. Al finalizar el año, sin embargo, las partes se mantenían en sus posiciones alejadas. Marruecos insistió en que su plan de autonomía es el único punto de partida posible para un proceso negociador y se mostró dispuesto a retomar contactos en un formato de mesas redondas, con participación de Argelia y Mauritania, tal y como ocurrió en 2018 y 2019 bajo los auspicios del anterior enviado especial, Horst Kohler. Este formato, sin embargo, ha sido rechazado expresamente por Argelia, que no desea un marco que pretenda presentar la situación como un conflicto regional. El Frente POLISARIO reiteró su compromiso con la autodeterminación del pueblo saharauí a través de un referéndum y subrayó que el bloqueo político y la indiferencia de la comunidad internacional habían llevado a la reanudación de las hostilidades y el abandono del acuerdo de cese el fuego. **Durante 2022 España se sumó a los países que han expresado públicamente su apoyo al planteamiento de Marruecos para abordar el contencioso. En mayo, en una carta dirigida al rey de Marruecos, el presidente español manifestó que la iniciativa de autonomía marroquí como “la base más seria, creíble y realista para resolver la disputa”, decantándose así por una aproximación que excluye la independencia como vía para canalizar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharauí.**

El cambio de postura fue duramente criticado por el Frente POLISARIO y generó una crisis diplomática entre Madrid y Argel. Por el contrario, la decisión española permitió descongelar las relaciones con Marruecos, deterioradas tras la crisis que generó en 2021 la acogida en territorio español del líder del Frente POLISARIO para ser tratado por COVID-19, un hecho que derivó entonces en represalias diplomáticas y en el control fronterizo de los flujos migratorios por parte de Rabat.

Durante 2022 las cuestiones relacionadas con las vulneraciones a los derechos humanos en el Sáhara Occidental continuaron siendo un tema de preocupación. **Diversas ONG denunciaron malos tratos y torturas a activistas saharauis y presentaron quejas contra Marruecos ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.** Por séptimo año consecutivo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos no pudo realizar visitas al territorio, a pesar de múltiples requerimientos y de la necesidad de investigar diversas denuncias. Entre ellas, el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestaciones que reivindican la autodeterminación, detenciones arbitrarias de activistas y acoso, amenaza y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellas varias mujeres. En paralelo, también se alertó sobre un empeoramiento en la situación humanitaria en los campos de personas refugiadas saharauis. Un informe conjunto de ACNUR, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU advirtió de los riesgos de inseguridad alimentaria severa y malnutrición como resultado de los problemas de financiamiento de los programas de ayuda, los efectos de la COVID-19, el incremento global en los precios de combustibles y alimentos, incluyendo por los efectos de la guerra en Ucrania. La ONU subrayó que la infrafinanciación había obligado al PMA a recortar en un 80% las raciones de alimentos en los campos de personas refugiadas de Tindouf.

Túnez	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba ibn Nafi o Brigadas Oqba ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS
Síntesis:	Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que

caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS. Desde mediados de 2021, Túnez está inmerso en una nueva crisis, en un contexto caracterizado por los intentos de concentración del poder por parte del presidente Kais Saïed.

A lo largo de 2022 se acentuó la deriva autoritaria del presidente Kais Saïed, que adoptó una serie de medidas para reforzar su control del país y las instituciones tunecinas. Sus medidas motivaron manifestaciones de descontento y reacciones críticas de grupos opositores durante todo el año, a pesar de la persecución del Gobierno a las voces disidentes. **En marzo, Saïed disolvió definitivamente el Parlamento** –que había suspendido en julio del año anterior–, después de que los legisladores celebraran una reunión plenaria online en la que llamaron a revocar los decretos presidenciales que desde 2021 han otorgado una autoridad casi total al mandatario. Saïed denunció los hechos como un golpe de Estado y una conspiración, y ordenó una investigación contra los parlamentarios. En paralelo, el presidente tunecino reforzó su control sobre el poder judicial.

En febrero había disuelto el Alto Consejo Judicial, organismo encargado de la designación de magistrados y de supervisar la independencia de los jueces, bajo acusaciones de sesgo y corrupción. Este consejo fue reemplazado por una nueva entidad temporal, con una parte de sus integrantes designada directamente por el mandatario. Saïed también prorrogó en febrero y hasta finales de año el estado de emergencia, designó a tres de los siete integrantes de la nueva autoridad electoral (abril) y destituyó a más de 50 jueces, motivando nuevas protestas y huelgas del sector de la judicatura. En este contexto, y siguiendo la hoja de ruta ideada por Saïed en 2021, se votó la nueva Constitución. En los primeros meses del año el presidente había promovido una consulta online sobre las reformas, que tuvo un alcance muy limitado, y luego un diálogo nacional que fue boicoteado por los principales grupos políticos, incluyendo el partido islamista Ennahda, y también por el poderoso sindicato UGTT. El nuevo texto –elaborado por un panel nominado por el presidente y que se hizo público solo tres semanas antes de la votación– fue aprobado el 25 de julio con un 94,6% de los votos

y una participación del 30,5%, aunque la oposición aseguró que la implicación ciudadana había sido menor. **La nueva Constitución establece un sistema presidencialista similar al que existía en el país antes de la revuelta contra el régimen de Zine el Abidine Ben Alí en 2011** y reduce el poder del Parlamento.

Para finales de año, según se había anunciado en 2021, se programaron las elecciones parlamentarias. Tres meses antes de su celebración, Saïed reformó la ley electoral sin ningún tipo de consulta y debate, reduciendo el número de legisladores (de 217 a 161) y permitiendo la votación de candidatos individuales en vez de listas. La medida fue interpretada como un intento de reducir el poder y la influencia de los partidos políticos. **Los comicios legislativos se celebraron el 17 de diciembre y contaron con una participación de tan solo 11,2% de los votantes, después de que numerosas fuerzas políticas llamaran a un boicot.** A lo largo del año, periódicas movilizaciones y protestas contra el Gobierno fueron impulsadas por activistas de la sociedad civil articulados en el movimiento “Ciudadanos contra el golpe”, por el partido islamista Ennahda y por otros partidos de diverso signo. En abril, se anunció la formación de un nuevo conglomerado de fuerzas de la oposición, Frente de Salvación Nacional, que aglutina a cinco partidos políticos –entre ellos Ennahda– y cinco organizaciones de la sociedad civil.

Tras los comicios de diciembre, esta alianza subrayó la falta de legitimidad del mandatario, reiteró su rechazo a la nueva Constitución y exigió elecciones presidenciales anticipadas y la conformación de un nuevo gobierno. Durante 2022, numerosas ONG locales e internacionales, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y algunos gobiernos condenaron las medidas adoptadas por Saïed y expresaron su **preocupación por el deterioro en la situación de derechos humanos en el país norteafricano.** Esto incluía las restricciones a la libertad de expresión; medidas represivas contra personas críticas, opositores políticos, incluyendo prohibiciones de viaje, detenciones y persecución judicial –en algunos casos en tribunales militares. El líder de Ennahda y ex portavoz parlamentario, Rachid Ghannouchi, tuvo que comparecer por acusaciones de diversos delitos, incluyendo lavado de dinero e incitación a la violencia. También se denunciaron las acciones de las fuerzas de seguridad para prevenir y/o disolver manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza y la aprobación, vía decreto presidencial, de una norma que establece delitos vinculados a la información y comunicación y que condena a hasta 10 años a personas acusadas de difusión de noticias falsas. La ONG Reporteros Sin Fronteras denunció que la medida amenazaba la libertad de prensa y pretendía crear un clima de temor.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:

Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generando ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

El Gobierno declaró que se registró el número más bajo de homicidios de la historia reciente del país, pero algunas organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la veracidad de tales cifras y a la vez criticaron que la imposición del estado de excepción desde finales de marzo había comportado numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención de más de 61.000 personas.

A finales de diciembre, el Gobierno declaró que durante 2022 se habían registrado 495 homicidios y que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 7,8. Según datos oficiales, en el año 2015, la tasa de homicidios fue de 106,3, y desde entonces fue reduciéndose paulatinamente hasta alcanzar un mínimo histórico en 2022, muy inferior a la tasa de 18,1 del 2021. El Gobierno sostiene que la aplicación del plan de la lucha contra las maras (denominado “Control Territorial”) había permitido una reducción sustancial en la tasa de homicidios tras la llegada al poder de Nayib Bukele a mediados de 2019, pues en 2018 esta era de 53, y a finales de 2019 se había reducido a 38. El Ejecutivo señaló a finales de año que la aplicación de la quinta fase del “Plan Control Territorial” no solamente había permitido una drástica reducción del número de homicidios, sino que a finales de 2022 se había debilitado enormemente a las principales maras del país, en especial a la Mara Salvatrucha o MS13, con la incautación de miles de armas y la detención de unos 900 líderes de dichas maras. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación cuestionaron tanto la cifra de homicidios publicada por el Gobierno

Mas de 61.000 personas fueron detenidas en El Salvador tras la imposición del estado de excepción a finales de marzo

como los motivos que han motivado una reducción en las tasas de criminalidad en el país. Según estas voces, el Gobierno de Bukele se ha mostrado poco transparente respecto de los datos oficiales de criminalidad en El Salvador y ha modificado la definición de homicidio para su propio beneficio, excluyendo de las cifras oficiales a presuntos miembros de las maras y sospechosos de delitos muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado o bien en prisión. Durante el año también se registraron discrepancias importantes entre la Fiscalía del Estado y el Instituto de Medicina Legal respecto de las estadísticas de cadáveres hallados en fosas comunes, por lo que el Estado desautorizó el acceso a tales datos a la prensa. En la misma línea, en el mes de junio el Estado militarizó el Instituto de Medicina Legal, de modo que durante la segunda mitad del año hubo opacidad respecto de los datos de homicidios en el país por parte de dicho Instituto, tradicionalmente una de las fuentes más fiables en este asunto. Por otra parte, algunas organizaciones y analistas en el país denunciaron que la reducción de los niveles de criminalidad en el país no se debía principalmente a la efectividad de las operaciones del Gobierno contras las maras, sino a las negociaciones clandestinas entre el Estado y determinados líderes del crimen organizado para lograr mejores condiciones carcelarias, la liberación o la no extradición a EEUU de determinados líderes mareros. En este sentido, durante el año varios medios de comunicación siguieron publicando de manera regular acerca de los presuntos vínculos y contactos entre funcionarios del Estado y las principales maras del país. A modo de ejemplo, algunos medios de comunicación denunciaron que algunos grupos de crimen organizado habían estado enterrando cadáveres en fosas comunes con conocimiento del Estado. Finalmente, cabe destacar que **algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron el drástico incremento en el número de personas desaparecidas** y alertaron de que

desde el 2019 el número de desapariciones en El Salvador es superior al número de homicidios. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, por ejemplo, señaló que, según datos de la Policía, entre enero de 2020 y junio de 2022 se habían registrado 4.060 casos de desapariciones, de los que solamente 1.309 seguían bajo investigación. En la misma línea, organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas declararon que solamente en los cinco primeros meses del año habían desaparecido 577 personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció tal incremento en el número de desapariciones e instó al Estado a tomar medidas preventivas al respecto.

La cuestión que provocó mayor número de protestas en el país y de denuncias a nivel internacional fue la imposición del estado de excepción a finales de marzo –y su prorrogación mensual a lo largo del año– después de que se registraran 87 homicidios en dos

días consecutivos. A finales de diciembre, el **Gobierno reconoció que desde entonces se habían detenido a más de 61.300 personas**, y que unas 3.300 habían sido liberadas al no haber sido debidamente probada su participación en ningún delito. En agosto, el Instituto de Medicina Legal declaró que 73 personas habían muerto bajo custodia policial desde finales de marzo, mientras que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana señaló haber recibido denuncias de 306 casos de tortura en el mismo periodo. A principios de octubre, el Defensor del Pueblo declaró haber recibido casi 4.800 denuncias por violaciones de derechos humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas contra la tortura denunciaron numerosas detenciones arbitrarias. A pesar de las críticas y denuncias contra la instauración del estado de excepción, esta medida fue renovada mensualmente durante todo el año. Por otra parte, en septiembre, Nayib Bukele anunció que se presentará a las elecciones presidenciales de 2024, siendo así el primer caso desde la recuperación de la democracia que concurre a la reelección. La Constitución había prohibido hasta ahora que se encadenaran dos mandatos presidenciales consecutivos, pero en 2021 el Tribunal Constitucional –nombrado por el oficialismo– decretó que Bukele sí podía optar a la reelección. Dicha decisión provocó algunas movilizaciones no masivas durante el año y la crítica de algunas organizaciones de la sociedad civil que consideran que Bukele está encaminando al país hacia al autoritarismo.

Haití	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, fraude electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolítica empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar completamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

La crisis política y bloqueo institucional que sufre el país, el incremento sin precedentes de los niveles de violencia, el creciente control geográfico de zonas de la capital por parte de numerosos grupos armados y un brote de cólera que en dos meses ya habían afectado a más de 20.000 personas provocaron una grave crisis humanitaria y propiciaron una discusión en el seno de Naciones Unidas sobre una eventual intervención militar en el país. En el mes de diciembre, Naciones Unidas señaló que varias de las aproximadamente 200 bandas armadas que se estima operan en el país controlaban el 60% de la capital, en la que vive un tercio de la población de Haití. Naciones Unidas advirtió que tal contexto había contribuido a agudizar la situación de emergencia económica y humanitaria, estimando que el 90% de la población vivía con menos de 7 dólares al día, que la mitad de la población padecía inseguridad alimentaria y que unas 20.000 personas se enfrentaban al riesgo de inanición o hambruna. Según Naciones Unidas, unas 155.000 personas se habían visto obligadas a abandonar en 2022 sus hogares a causa de la violencia y la inseguridad, que también provocó el cierre masivo de escuelas (a finales de año solo la mitad aproximadamente estaba en funcionamiento) y la interrupción de los servicios sanitarios. Por otra parte, a finales de 2022 se estimaba que el brote de cólera que se detectó a inicios de octubre había afectado a más de 20.000 personas y provocado la muerte a 376 personas. Cabe señalar que entre 2010 y 2019 se reportaron más de 800.000 casos y 9.000 defunciones por cólera. Ante tal situación, a mediados de noviembre Naciones Unidas hizo un llamamiento de emergencia de 145 millones de dólares.

Tanto Naciones Unidas como el Gobierno haitiano señalaron que durante el 2022 el nivel de actividad de los numerosos grupos armados que operan en el país había alcanzado niveles sin precedentes, provocando un incremento sustantivo en el número de homicidios, secuestros y casos de violencia sexual. Naciones Unidas, por ejemplo, advirtió que se habían registrado más de 1.200 secuestros, más del doble que en 2021 (que a su vez había experimentado un notable incremento respecto de los años precedentes). El Gobierno no publicó datos oficiales, pero a finales de año la organización Colectivo Défenseur Plus señaló que solamente en la capital se habían producido 2.769 homicidios intencionales. Naciones Unidas declaró a principios de julio que en los seis primeros meses del año se habían registrado 934 asesinatos y 680 secuestros en el marco de la violencia de las bandas armadas. En la misma línea, según el centro International Crisis Group, los enfrentamientos entre grupos armados en el área metropolitana de Puerto Príncipe entre mayo y julio había provocado la muerte de casi 500 personas, la mayoría civiles. Aún si en la primera mitad del año se habían producido numerosas manifestaciones antigubernamentales por las altas tasas de inseguridad, desde finales de agosto estas se tornaron más masivas y generalizadas. A mediados de septiembre, poco después de que el Gobierno anunciara una importante reducción en los

subsidios a los carburantes, se produjeron numerosas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades del país que provocaron el cierre masivo de comercios, de algunas embajadas y también de la frontera por parte del República Dominicana, que a principios de año inició la construcción de un muro fronterizo para frenar el flujo de personas indocumentadas. Asimismo, en el marco de las movilizaciones masivas también se registraron numerosos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, en los que como mínimo 10 personas perdieron la vida solamente en los primeros días de protestas. La situación se hizo todavía más compleja cuando, el 17 de septiembre, el principal grupo armado que opera en la capital, el llamado G9, tomó por la fuerza la terminal petrolera de Varreux –que contiene el 70% de las reservas de petróleo de todo el país– y anunció su intención de bloquear su suministro hasta que dimitiera el primer ministro, Ariel Henry. El bloqueo de dicha terminal durante casi dos meses provocó el desabastecimiento de combustible en todo el país, generando ello nuevas protestas y nuevos disturbios, la parálisis de buena parte del país y una importante disrupción del funcionamiento de hospitales o en la distribución de agua potable, que a su vez agudizó la ya precaria situación humanitaria de la población y aceleró la expansión del cólera.

El Gobierno haitiano solicitó el despliegue inmediato de una fuerza internacional que pudiera revertir la violencia ejercida por los grupos armados y mitigar sus consecuencias humanitarias

Ante dicha situación, a principios de octubre el Gobierno solicitó el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada internacional que pudiera revertir la violencia ejercida por los grupos armados y mitigar sus consecuencias humanitarias. Poco después, **António Guterres pidió al Consejo de Seguridad el despliegue temporal de una fuerza de acción rápida** –que se retiraría del país una vez el Gobierno hubiera retomado el control de las infraestructuras básicas del país– seguido del despliegue de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití en su combate contra los grupos armados. A mediados de octubre el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en el que se imponían sanciones, restricciones de movimientos y embargos de armas a los líderes y colaboradores de determinados grupos armados e inició las discusiones sobre una propuesta de resolución presentada por EEUU y México en la que proponía el despliegue de una misión internacional pero no bajo el paraguas y mandato de Naciones Unidas, pero al finalizar el año no había sido aprobada. En noviembre y diciembre, países como EEUU y Canadá impusieron sanciones adicionales a algunos líderes políticos y el primer ministro de Canadá incluso declaró públicamente que su país estaría dispuesto a liderar una misión internacional. Sin embargo, numerosos partidos políticos en Haití se mostraron reacios o contrarios a tal propuesta, algunos por considerarla inaceptable desde el punto de vista de la soberanía nacional y otros porque consideraban que tal misión podría reforzar la legitimidad del Gobierno de Ariel Henry. Buena parte de la clase política y de las organizaciones de la sociedad

civil en Haití tildan de ilegal el Gobierno de Henry por considerar que su mandato finalizaba el 7 de febrero de 2022, el mismo día que hubiera acabado el mandato del expresidente Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021. De hecho, la principal plataforma opositora del país, el llamado Acuerdo de Montana, hizo una propuesta de transición política en el país y, ante la negativa del Gobierno a negociarla, a principios de año eligió a un presidente y primer ministro alternativos. Sin embargo, Henry sostuvo que la única solución al impasse institucional en el que se hallaba el país era la celebración de unas nuevas elecciones –que deberían haberse celebrado originalmente en octubre de 2019–, pero al finalizar el 2022 no había una propuesta de fecha sobre las mismas, bien por la falta de acuerdo sobre la composición del organismo electoral o por la situación de violencia e inseguridad en el país.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2022 se redujo ligeramente el número de homicidios, pero siguieron registrándose un número muy alto de desapariciones forzadas y algunas organizaciones internacionales consideraron a México el país con el mayor número de asesinatos de periodistas y activistas de la tierra y el medio ambiente. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2022 se registraron 30.968 asesinatos intencionales, una reducción del 7,1% respecto del año anterior (33.350 homicidios). Según el Gobierno, es el tercer año consecutivo en el que se reduce el número de homicidios –en 2019 se registraron 34.718 y en 2020, 34.563. En el mandato de Andrés Manuel López Obrador

ya se han producido más de 140.000 homicidios, y desde el 2006, año en el que Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, más de 340.000. Seis estados concentraron casi la mitad de todos los homicidios del país: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Según declaró el presidente a mediados de año, el 75% de los homicidios registrados en el país son atribuibles a enfrentamientos entre cárteles de la droga rivales. Según datos gubernamentales, en 2022 se produjeron 3.450 asesinatos de mujeres, de los que 858 se clasificaron como feminicidios y 2.592 como homicidios dolosos. Estado de México fue el estado con mayor número de feminicidios (131), seguido muy de lejos por Nuevo León (85), Ciudad de México (70), Veracruz (63) y Chiapas (42). Por otra parte, según Reporteros Sin Fronteras, México fue por cuarto año consecutivo el país del mundo en el que se registró el mayor número de asesinatos de periodistas. En 2022 se registraron 11 asesinatos, 80 en los últimos 10 años. Según la organización de derechos humanos Artículo 19, en 2022 se produjo el asesinato de 17 profesionales de la comunicación, 12 de ellos directamente por ejercer su profesión, convirtiéndose así en el año más letal para el periodismo desde que se tienen registros al respecto. Artículo 19 también denunció el deterioro de la libertad de prensa en el país y los altos niveles de impunidad que existen para este tipo de delitos. México también siguió siendo por tercer año consecutivo el país en el que se registra un mayor número de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Según un informe de Global Witness publicado en septiembre, pero con datos de 2021, ese año murieron asesinadas 54 personas, muchas más que en 2020 (30). Tal cifra es muy superior a la del resto de países con mayor número de activistas medioambientales asesinadas, como Colombia (33), Brasil (26), Filipinas (19) o India (14). La mitad de las víctimas en México eran indígenas y dos terceras partes de los casos estuvieron vinculados a conflictos por tierras y minería. Precisamente dos estados con una importante actividad minera, como Oaxaca y Sonora, concentraron aproximadamente dos terceras partes de los asesinatos. Además, el informe de Global Witness también señaló que en 2021 hubo 19 desapariciones de activistas medioambientales. En este sentido, México fue también uno de los países del mundo con mayores desapariciones forzadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, al finalizar el año 2022 había 109.516 personas desaparecidas. Por distribución geográfica, el estado de Jalisco era el que concentraba mayor número de casos (15.038), seguido del Estado de México (11.868), Veracruz (7.438), Nuevo León (6.250) y Sinaloa (5.664). En 2022 se registraron unas 9.500 desapariciones, unas 26 cada día. Tal cifra es algo inferior a la del 2021 (10.400, unas 28 por día), pero bajo gobierno de López Obrador ya se han registrado 38.186 casos, una cifra que, faltando todavía dos años para que concluya el mandato, ya es superior al de las administraciones de Peña Nieto (36.064) y de Felipe Calderón (17.095).

Ante tal constatación, el actual Gobierno sostiene que la principal explicación del incremento exponencial de casos tras la asunción en el cargo de López Obrador (se pasó de 419 casos en 2018 a 9.772 en 2019) se debe a cuestiones de definición y metodología y a la voluntad política de la actual administración de encontrar a las personas desaparecidas. Desde que se inició el registro de dichas personas en 1969, más de 269.000 personas han desaparecido en México, aunque el 98% de las mismas lo ha hecho desde el 2006, año en el que Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En el mismo período se han encontrado más de 8.200 en fosas comunes, pero los cadáveres que se hallan en ellas no se cuentan como homicidios, porque no se pueden identificar los cuerpos –se estima que hay más de 52.000 sin identificar.

En 2022, los principales hechos de violencia fueron atribuidos a enfrentamientos entre cárteles de la droga. López Obrador declaró que los estados con mayores tasas de homicidios eran aquellos en los que varios grupos criminales se enfrentaban por el control del territorio, mientras que aquellos estados en los que un solo cartel ejercía un control predominante los niveles de violencia eran claramente inferiores. Según un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, buena parte de la violencia en el país se debe a las acciones protagonizadas por 12 grandes organizaciones dedicadas principalmente al narcotráfico, siete de ellas con mayor antigüedad –Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez (Organización Carrillo Fuentes), Cártel Beltrán Leyva, Cártel del Golfo y La Familia Michoacana– y otras cinco de más reciente creación –como el Cártel Jalisco Nueva Generación, creado en 2011– o de menor alcance territorial –como Los Rojos (una escisión de los Beltrán Leyva), Los Caballeros Templarios o Los Viagras. Según otro informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México existen al menos 150 bandas del crimen organizado, la mayoría, aliadas o financiadas por las dos más importantes: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según tal informe, cuenta con una importante presencia en 14 de los 32 estados del país, mientras que el segundo ejerce el control en unos 23 estados. Según el informe del Congreso de EEUU, el Cártel de Sinaloa controla Durango y Sinaloa y mantiene una férrea lucha con el cartel de Juárez en Chihuahua, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación domina Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Querétaro y está en disputas con otras organizaciones en Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco. Por otra parte, según el mencionado informe, Los Zetas y el Cártel del Golfo mantienen una fuerte rivalidad en San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Tras el CJNG y el Cártel de Sinaloa, la tercera organización criminal con mayor alcance territorial es el Cártel del Golfo, con presencia en las regiones orientales del país. Ambos informes sostienen que ha habido un drástico incremento en el número de grupos

armados ilegales que operan en el país desde el año 2006. En esta misma línea, el centro de investigación International Crisis Group sostiene que entre mediados de 2009 y finales de 2020 se ha documentado la existencia de 543 grupos armados, la gran mayoría de naturaleza estrictamente criminal y en algunos casos con motivaciones políticas. Según este informe, 107 de los grupos eran escisiones de grupos más grandes o antiguos, y 212 tenían algún tipo de alianza –aunque a menudo inestable– con las organizaciones criminales de mayor tamaño. Según ACNUR, el número de personas desplazadas internamente a causa de la violencia entre grupos armados rivales se ha incrementado drásticamente en los últimos años. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2021 hubo 28.867 nuevos desplazamientos por situaciones de violencia, una tercera parte más que en 2020 (9.714) y 2019 (8.664). Los estados más afectados por este fenómeno fueron Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco.

Finalmente, cabe destacar que durante el año **varias organizaciones nacionales e internacionales expresaron su rechazo a lo que consideran una creciente militarización de la seguridad pública por parte del Gobierno de López Obrador**. A finales de año, la Cámara de Diputados, el Senado y como mínimo 20 de los 32 parlamentos estatales aprobaron una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el año 2028 –en lugar del año 2024. En la misma línea, a lo largo del año se llevaron a cabo varias movilizaciones contra la intención del Gobierno de integrar la Guardia Nacional –un cuerpo creado por López Obrador en 2019 para combatir a la delincuencia organizada– en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, al finalizar el año, tales intenciones no habían podido materializarse porque un juez federal dictó la suspensión provisional de dicha integración por considerarla inconstitucional.

América del Sur

Ecuador	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Síntesis:

En los últimos años, Ecuador ha experimentado uno de los incrementos de la violencia más pronunciados de toda América Latina. En 2022, el Gobierno sostenía que desde el año 2017 la tasa de homicidios se ha multiplicado casi por cinco, y que más del 80% de los asesinatos en el país están vinculados al narcotráfico. Si bien Ecuador había sido históricamente un lugar de tránsito de drogas ilícitas,

algunos análisis sostienen que el país cada vez juega un rol más prominente en la cadena de suministro de drogas a escala internacional, especialmente de cocaína, con una mayor participación en el almacenaje, el procesamiento, la producción y la distribución internacional de estupefacientes, muy principalmente a través de las rutas del Pacífico –la ciudad costera de Guayaquil concentra casi un porcentaje importante de los homicidios– y de la Amazonía, gracias a su frontera con Brasil. Tal contexto ha dado lugar a un incremento sustancial de los enfrentamientos por el control de lugares y rutas estratégicas entre grupos locales de crimen organizados (como Los Lobos, Los Choneros o Los Lagartos), cárteles mexicanos (especialmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), facciones disidentes de las FARC (como el Frente Oliver Sinisterra o la columna Urías Rondón) u organizaciones criminales internacionales.

Además de unas protestas de gran alcance y de un intento de destitución del presidente, durante 2022 Ecuador registró la cifra de homicidios más alta de la historia reciente del país, el doble de asesinatos que el año anterior, en el que ya se había incrementado en un 180% respecto del 2020. Según datos oficiales del Gobierno, en 2022 se registraron 4.539 muertes violentas y una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de 25,5. Cabe señalar que tal tasa se ha multiplicado por cinco desde el año 2017, año en el que esta era de 5,8, y casi se ha duplicado desde el año 2021, cuando era de 13,7. Aproximadamente un tercio de los homicidios de todo el país se concentraron en la llamada Zona 8 de la provincia de Guayas, que incluye Durán, Samborombón y Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del país y una de las que concentra mayor actividad económica. El segundo foco más importante de violencia fue la provincia de Esmeraldas, situada cerca de la frontera con Colombia. En la ciudad de Esmeraldas, la tasa de homicidios fue de 77 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Guayaquil fue de 46,6. A finales de año, el Gobierno declaró que se habían producido 273 feminicidios, la cifra más alta de la historia del país. Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), desde enero de 2014 y el 15 de noviembre de 2022, se había registrado la muerte de 1.317 de mujeres y niñas por violencia machista.

El Gobierno declaró que el 83% de las muertes violentas registradas en el país están relacionadas con el control de la distribución y exportación de drogas, especialmente cocaína, y advirtió que el crimen organizado se estaba erigiendo en un estado dentro del Estado. Según el centro de investigación International Crisis Group, históricamente Ecuador había sido un lugar de tránsito importante para drogas ilícitas, pero el incremento de la producción de coca y cocaína en Colombia y algunos cambios en las dinámicas globales del narcotráfico han motivado una creciente participación del crimen organizado en Ecuador en la producción, procesamiento, almacenaje y transporte de estupefacientes. Según el ICG, en los últimos tiempos cárteles mexicanos y grupos delincuenciales colombianos han incrementado la subcontratación de

determinadas partes de la cadena de suministros a grupos ecuatorianos. Según fuentes oficiales, más de una tercera parte de los aproximadamente 32.000 reos que hay en el país –que se cuadruplicaron entre 2009 y 2021– pertenecen a alguna organización de crimen organizado. En el mes de julio, Human Rights Watch denunció que el narcotráfico controla buena parte del sistema carcelario del país y que muchos reclusos, incluso aquellos en prisión preventiva, son obligados a trabajar o colaborar con grupos de crimen organizados para preservar su propia integridad. En este sentido, en los últimos años se han incrementado sustancialmente los motines y enfrentamientos en las cárceles del país. Aunque en 2022 el número de reos que murieron en tales episodios de violencia –alrededor de un centenar– se redujo respecto del año anterior, desde el año 2022 más de 450 personas reclusas han fallecido y otros varios centenares de ellas han resultado heridas. En este sentido, en el mes de noviembre, varias bandas armadas lanzaron 18 ataques simultáneos en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas poco después de que el Gobierno ordenara el traslado de unos 1.000 reclusos de una cárcel en Guayaquil a otros centros de detención controlados por bandas rivales. El ICG señaló que la mitad de los 145 atentados con artefactos explosivos que se habían registrado en todo el país hasta mediados de agosto se habían producido en la ciudad de Guayaquil. En este sentido, el 14 de agosto, cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras detonar un artefacto explosivo improvisado en Guayaquil, en un ataque que el Gobierno atribuyó a grupos de crimen organizado y que el ministro de interior consideró como una declaración de guerra contra el Estado. El presidente, Guillermo Lasso, impuso el estado de emergencia –por sexta ocasión desde que asumió el cargo en mayo de 2021.

Además del incremento de la violencia y la actividad vinculada al narcotráfico, **durante el mes de junio se produjeron protestas en varias partes del país, durante las que como mínimo siete personas murieron y unas 650 (incluyendo más de 200 policías y unos 100 militares) resultaron heridas.** Dichas movilizaciones, también conocidas como Paro Nacional, fueron convocadas y lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) para protestar contra el alto precio del combustible y de otros productos, contra la precariedad del sistema de salud pública, contra los altos niveles de desempleo, contra los altos niveles de inseguridad, y contra la actividad de empresas petroleras y mineras en determinadas zonas del país. Ante la magnitud de las protestas, que provocaron numerosos cortes de carreteras y el desabastecimiento de buena parte del país, el Gobierno decretó el estado de excepción en las zonas más afectadas por las movilizaciones y el toque de queda en la capital. Durante los 14 días en los que las movilizaciones fueron

En Ecuador la tasa de homicidios se ha multiplicado por cinco desde el año 2017, en buena medida por el incremento de la actividad vinculada al narcotráfico

más intensas, y al amparo del estado de excepción, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo casi 3.000 operaciones militares en varias partes del país. En tal contexto, los días 25 y 26 de junio la oposición presentó en la Asamblea Nacional una moción para destituir a Lasso, pero solamente obtuvo 80 de los 92 votos necesarios para que la moción fuera aprobada. A finales de junio, el Gobierno y la CONAIE alcanzaron un acuerdo, con mediación de la Conferencia Episcopal, por el que el Gobierno se comprometía a reducir el precio del combustible, a restringir la actividad minera en determinadas áreas protegidas, a derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía, a incrementar los subsidios a las familias más vulnerables y a incrementar el presupuesto para la salud pública y la educación intercultural.

Perú	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso, posteriormente renombrado como Militarizado Partido Comunista del Perú, se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

La destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado, motivaron unas intensas protestas durante el mes de diciembre en las que 28 personas murieron y más de 650 resultaron heridas. La crisis se desencadenó a

principios de diciembre a raíz del intento por parte del Congreso de iniciar un proceso de destitución (o moción de vacancia presidencial) contra Castillo, el tercero que enfrentaba tras asumir el cargo en junio de 2021. El 7 de diciembre, fecha en la que estaba previsto que Castillo ejerciera su derecho de defensa en dicho proceso, el presidente emitió un mensaje televisado en el que anunciaba su intención de disolver el Congreso y reemplazarlo por un “gobierno excepcional de emergencia”. En el mismo mensaje, Castillo también adelantó su voluntad de intervenir el poder judicial y la Corte Suprema y también de convocar la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes. Tras esta alocución, que fue considerada por una parte significativa de la clase política y la opinión pública como un intento de perpetrar un golpe de Estado, el Congreso destituyó por amplia mayoría a Castillo por “incapacidad moral”. Buena parte del Gobierno de Castillo dimitió y expresó su rechazo a sus planes, y tanto las Fuerzas Armadas como la Policía emitieron un comunicado para expresar su oposición a cualquier intento de subvertir el orden constitucional. Posteriormente, Castillo fue arrestado por cargos de rebelión y conspiración cuando se dirigía a solicitar asilo político a la embajada mexicana, que sí se lo concedió a su esposa. Posteriormente, la vicepresidenta Dina Boluarte fue designada presidenta del país. Inmediatamente después de estos hechos se iniciaron movilizaciones en varias partes del país para protestar por la destitución de Castillo y en contra de Dina Boluarte y para exigir el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, en línea con las reivindicaciones expresadas desde prisión por parte del ya expresidente. A mediados de diciembre, la Corte Suprema prolongó el periodo de prisión preventiva de Castillo a 18 meses. Durante las protestas, que se concentraron principalmente entre el 7 y el 25 de diciembre, 28 personas murieron, más de 650 resultaron heridas (la mitad aproximadamente policías). Numerosas carreteras del país fueron cortadas (incluyendo la Panamericana) y el aeropuerto internacional de Arequipa fue bloqueado y el de Cuzco se vio obligado a cancelar sus vuelos. Se registraron protestas en todo el territorio nacional, pero fueron especialmente intensas en zonas como Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cuzco, Puno o Ayacucho, donde se produjeron casi la mitad de las víctimas mortales. Las protestas remitieron en intensidad coincidiendo con las fechas navideñas, pero a principios de año se reanudó una segunda ola de protestas. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la desproporcionalidad de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas. Amnistía Internacional, por ejemplo, denunció numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales, desde el uso excesivo de la fuerza hasta la tortura.

La destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado, motivaron unas de las protestas más importantes de los últimos años en Perú

Ante tal situación de bloqueos y disturbios de alta intensidad, el nuevo Gobierno anunció un proceso de diálogo y concertación nacional para superar la crisis, y el Congreso aprobó un plan presentado por Boluarte para adelantar las elecciones del 2026 a abril del 2024, adelantando la finalización tanto del mandato presidencial como del Parlamento. Las protestas remitieron en intensidad coincidiendo con las fechas navideñas, pero a principios de año se reanudó una segunda ola de protestas que provocaron el bloqueo de decenas de carreteras y la muerte de 18 personas. En el plano internacional, varios Gobiernos y organismos internacionales condenaron la violencia que se registró durante las protestas. Varios países justificaron la destitución de Castillo, pero **los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por la destitución y detención de Castillo, denunciaron que éste había sufrido hostigamiento e instaron a las nuevas autoridades peruanas a no revertir la voluntad popular.** Los embajadores de dichos países fueron llamados a consultas por parte del nuevo Gobierno peruano, y el embajador de México fue declarado persona non grata e instado a abandonar el país tras acoger en su embajada a la esposa de Castillo. Cabe señalar que la crisis de finales de 2022 se enmarca en una compleja situación política, social y económica en los últimos años, como así lo ilustra el hecho de que Boluarte se convirtiera en la sexta jefa del Estado desde el 2018. En este sentido, entre finales de marzo y mediados de abril se estima que ocho personas murieron y muchas más resultaron heridas durante unas movilizaciones convocadas por el colectivo de transportistas para protestar contra el incremento de los precios de combustible y también contra la acción de gobierno de Castillo.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de

creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

Se redujo considerablemente la tensión entre el Gobierno y la oposición y disminuyó sensiblemente la presión internacional sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro, pero siguieron registrándose numerosas movilizaciones sociales, un alto número de homicidios y, según organismos internacionales, importantes violaciones de los derechos humanos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 se registraron 2.328 homicidios, un 25% menos que en 2021. Sin embargo, el mismo Observatorio también señaló que si contabilizan los 5.799 casos de “muerte por averiguación” –casos que no han sido investigados ni enjuiciados– y los 1.240 casos de muerte por intervención policial, el total de muertes violentas en el país ascendía a 9.367, con una tasa de homicidios de 35,3 casos cada 100.000 habitantes. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, tal cifra implica que seguramente Venezuela será el país con la segunda tasa más alta de homicidios de América Latina, por detrás de Honduras. Además, el OVV también declaró que se han registrado 1.370 denuncias por desapariciones, por lo que el número real de homicidios en el país podría ser aún superior. En 2021 se registraron 9.437 muertes violentas, de modo que el incremento en 2022 fue imperceptible. Caracas fue la región con mayor tasa de homicidios (89), seguida de los estados de La Guaira (62), Miranda (54) y Bolívar (50). Por otra parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló que entre enero y junio se registraron 3.892 protestas en el país, un 15 % más que en el mismo periodo del 2021. El 73% de las protestas estaban relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, especialmente los derechos laborales, mientras que el 27% restante tenía relación con derechos civiles y políticos, y con cuestiones como la persecución, criminalización y detención de defensores de los derechos humanos, opositores, trabajadores humanitarios y miembros de la sociedad civil. A pesar del incremento de las protestas respecto del año anterior, el número de manifestaciones es muy inferior a los de años anteriores (en 2017, por ejemplo, casi se alcanzaron las 10.000 protestas). Además, el OVCS también señaló que se documentó represión en 52 protestas en 14 estados, pero que en ninguna de ellas se produjeron víctimas mortales y que había disminuido la conducta represiva de las fuerzas de seguridad del Estado y de los cuerpos de civiles armados respecto de años anteriores.

A pesar de ello, en 2022 varios organismos internacionales denunciaron la situación de derechos humanos en Venezuela. Cabe destacar especialmente

que en el mes de noviembre, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares su autorización para continuar con la investigación abierta en noviembre de 2021 sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017. En abril, el Gobierno solicitó postergar la investigación argumentando que estaba avanzando en varias investigaciones y juicios sobre la materia, pero a finales de año Karim Khan consideró que tales avances eran insuficientes. La Corte Penal Internacional había abierto una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, en las que se estima murieron unas 100 personas. El Gobierno se opone tajantemente a las observaciones de la CPI, pero en el mes de marzo autorizó la apertura de una oficina de la CPI en Caracas. Previamente, en septiembre, se presentó el tercer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela –creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014–, en el que se afirma que se siguen cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos contra la disidencia en Venezuela sin una posterior investigación o sanción. Según dicho informe, desde 2014 en Venezuela se han cometido violaciones de lesa humanidad –como Torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias– como parte de un plan urdido y dirigido al más alto nivel para reprimir a la oposición. El Informe de la Misión señala tanto a personas concretas (incluyendo a Nicolás Maduro) como a determinadas estructuras del Estado, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Pocos días más tarde de la presentación del informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió por otros dos años el mandato de la Misión y no reeligió a Venezuela como miembro de dicho Consejo, en una decisión que varios medios de comunicación interpretaron como una importante llamada de atención al Gobierno venezolano. En la misma línea, en abril la organización de derechos humanos Foro Penal declaró que en el país hay 240 personas detenidas que considera presos políticos, además de 9.414 personas que están sujetas, a su juicio, a procesos penales injustos por motivos políticos. Además, en varias ocasiones durante el año la oposición denunció hostigamiento contra algunos de sus líderes, incluido el propio Guaidó, durante una gira por el país en el mes de junio.

Además de la situación de derechos humanos, tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil denunciaron la precaria situación económica y humanitaria del país. **A fecha de diciembre de 2022 había más de 7 millones de personas venezolanas migrantes o refugiadas en todo el mundo y, según la OIM, había 7,7 millones de personas en el país que necesitaban ayuda humanitaria.** En marzo, la Federación Internacional de

Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Venezuela (Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, Provea), publicaron un informe que denuncia las graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela y en el que señalan que la pobreza alcanzó al 94% de la población y en los últimos seis años el PIB se ha contraído en más del 80%. Además, la FIDH denunció que al menos 30% de los menores padece de alguna forma de desnutrición –la mitad de dicho porcentaje aguda o severa–, que la distribución de agua potable se ha reducido en un 60% desde 1998 y que la producción de electricidad había caído un 74%, por lo que en 2021 se registraron 174.000 apagones en el país.

En el plano político, aunque la oposición llevó a cabo varias medidas para mejorar su cohesión y coordinación interna y establecer un sistema de primarias en todo el país que permita elegir a la persona que concurra a las elecciones presidenciales previstas para 2024, en el mes de diciembre la propia Asamblea Nacional elegida en 2015 –considerada como único órgano legítimo del país según la oposición, pero ilegalizada por el Gobierno– decretó el fin del Gobierno interino y de la presidencia encargada de Juan Guaidó por entender que ya no es percibido como un instrumento de cambio real. Guaidó criticó tal medida por considerar que refuerza al Gobierno de Maduro, pero previamente ya había habido algunos indicadores de que el apoyo internacional a Guaidó había menguado. En enero de 2022, por ejemplo, la Asamblea Nacional había prorrogado un año la presidencia interina de Guaidó pero había reducido la estructura burocrática que le daba apoyo, y en el mes de octubre 19 países latinoamericanos votaron en contra de que el Gobierno de Guaidó detentara la representación de Venezuela en la OEA, pero la moción no se aprobó porque se requería el apoyo de dos terceras partes de los estados miembro.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kazajstán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales
Síntesis:	Desde su independencia de la URSS en 1991, Kazajstán ha experimentado un crecimiento económico significativo en

paralelo a una evolución política y social mayoritariamente estable. No obstante, los 30 años en la presidencia del país de Nursultán Nazarbáyev también estuvieron marcados por el déficit democrático y políticas de tendencias autoritarias, sin espacio para la oposición política y social. Tras su salida en 2019, Nazarbáyev continuó detentando posiciones de liderazgo, incluyendo como Líder de la Nación y presidente del partido oficialista Nur Otan. Los ejes de conflicto incluyen la tensión entre las autoridades y sectores de oposición en torno a la gobernanza y el acceso al poder político; así como entre las autoridades y grupos sectoriales en torno a elementos socioeconómicos, en un contexto de desigualdad económica y deficitarias condiciones de trabajo en sectores como el de los hidrocarburos. Por otra parte, en el conjunto de Asia central, actores armados locales y regionales de inspiración islamista han protagonizado incidentes de violencia en diversos momentos, incluyendo en Kazajstán, mientras gobiernos de la región también han instrumentalizado el supuesto riesgo de violencia islamista para justificar prácticas represivas.

Kazajstán fue escenario de una crisis social y política en enero, con protestas ciudadanas y grave represión violenta de estas, y un balance de en torno a 200 víctimas mortales, el más mortífero en su historia reciente. Las movilizaciones se iniciaron el 2 de enero en la localidad petrolera de Zhanaozen (al oeste, y escenario en 2011 de represión violenta contra trabajadores en huelga), en protesta contra la retirada por el Gobierno del límite al precio del gas licuado y contra la consiguiente alza de precios. Las protestas se extendieron a amplias zonas del país y fueron abarcando dimensiones múltiples relativas al descontento económico y social y a la mala praxis política, con movilizaciones espontáneas y de carácter ciudadano contra la corrupción, la desigualdad social, los bajos salarios, y con el reclamo de democratización del poder, entre otros aspectos. Un lema aglutinador fue el de “¡Viejo, vete ya!” (“Shal, ket!”), usado ya por activistas feministas en 2014) en contra del poder que aun detentaba el expresidente Nazarbáyev y su entorno y contra el autoritarismo y vertical de poder, incluyendo bajo el gobierno del presidente Kasim-Yomart Tokáyev.

La situación se tornó violenta en ciudades como Almaty. Algunos análisis señalaron la aparente retirada de fuerzas de seguridad en la noche del 5 de enero en Almaty y acciones de pillaje y destrozos en ese contexto,⁴¹ así como posible connivencia entre sectores criminales y del régimen o del entorno de Nazarbáyev en la generación de caos,⁴² y también existencia de desafección, frustración e ira⁴³ en unas protestas mayoritariamente de carácter ciudadano, espontáneo y diverso. En conjunto, las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según HRW, hubo uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, así como otras violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, como

41. International Crisis Group, *Behind the Unrest in Kazakhstan*, ICG, 14 de enero de 2022.

42. Marat, Erica y Assel Tutumlu, *Kazakhstan's Protests Aren't a Color Revolution*, Foreign Policy, 11 de enero de 2022.

43. Rowley, Thomas y Zhanar Sekerbayeva, *What really happened in Kazakhstan? A feminist perspective*, Open Democracy, 19 de enero de 2022.

detenciones arbitrarias y encarcelamiento, malos tratos y tortura de personas detenidas. El presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, declaró el estado de emergencia, cortó internet, ordenó disparar sin previo aviso y atribuyó las protestas a “terroristas” y “figuras extranjeras”, pese al carácter ciudadano de la protesta. Tokáyev solicitó el 5 de enero la intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar de varios países del espacio postsoviético y liderada por Rusia. En lo que fue la primera intervención de la organización militar en sus tres décadas de existencia, la OTSC envió tropas -mayoritariamente rusas-, que fueron desplegadas en infraestructura considerada estratégica, hasta su retirada gradual entre el 13 y el 19. **En las jornadas de protesta y represión al menos 238 personas murieron -en su práctica totalidad manifestantes, y otros 19 miembros de fuerzas de seguridad. Cerca de 10.000 personas fueron detenidas, incluyendo activistas y periodistas, y cientos de personas detenidas denunciaron malos tratos o tortura.**

Algunos análisis señalaron que entre sus diferentes capas la crisis podía tener también elementos de disputa entre élites. Así, junto a la respuesta en forma de represión, Tokáyev desplazó de cargos de poder en el ámbito de seguridad a Nazarbáyev y aliados de éste, incluyendo la destitución del expresidente de la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno dimitió y asumió un nuevo gobierno, en el que 11 de los 20 ministros mantuvieron sus cargos. En marzo Tokáyev anunció planes para establecer límites a los poderes presidenciales. En un referéndum en junio se aprobaron enmiendas constitucionales que, en palabras del presidente, cambiaban la “forma super-presidencialista” a una “república presidencia con un parlamento fuerte”.

Algunos análisis señalaron la falta de participación de la sociedad civil en la preparación de las enmiendas así como los escasos límites introducidos a los poderes. Tokáyev fue reelegido presidente en elecciones presidenciales anticipadas en noviembre. La misión de observación de la OSCE señaló la falta de competencia y la necesidad de reformas para garantizar pluralismo real. Un año después del que fue denominado como el “enero sangriento” (*Qandy Qantar*), análisis e informes destacaron la falta de una investigación independiente sobre los hechos de enero y la falta de cambios efectivos en el país encaminados a garantías de derechos y libertades civiles y políticas y justicia social, mientras otros señalaron pasos de cierta mayor apertura a la participación aun si manteniéndose el control.⁴⁴

Kirguistán-Tayikistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	Kirguistán, Tayikistán

Síntesis:

Kirguistán y Tayikistán mantienen un conflicto fronterizo en torno a la demarcación de una parte de su frontera común, de la cual en torno a la mitad permanece sin delimitar desde la independencia de ambos países tras la descomposición de la Unión Soviética. La disputa abarca la falta de demarcación fronteriza, tensiones intercomunitarias en torno al acceso y uso de áreas de pastoreo y de agua –que escalan en ocasiones a violencia intercomunitaria– y hostilidades entre fuerzas fronterizas. La tensión tiene su epicentro en el Valle de Ferganá (Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán), que cuenta con varios enclaves territoriales, cuyo acceso se ha visto afectado en situaciones de incremento de tensión. En diversas etapas ambos países han llevado a cabo negociaciones en torno a la delimitación de la frontera, sin lograr acuerdos efectivos duraderos. En 2021 la tensión aumentó de forma significativa, con incidentes de violencia que resultaron en medio centenar de personas fallecidas, otras 200 heridas y varias decenas de miles evacuadas. En 2022 se produjo una nueva escalada, con un centenar de fallecidos y uso de armamento pesado, interpretada en algunos análisis como una ofensiva militar de Tayikistán contra Kirguistán. El incremento de la militarización en ambos países añade más riesgos al escenario de tensión interestatal.

Se incrementó la tensión fronteriza entre Kirguistán y Tayikistán, con incidentes durante el año y una escalada militar en septiembre con un centenar de fallecidos y que supuso un salto de mayor militarización con respecto a años anteriores. En enero se produjeron choques entre guardas fronterizos en territorio entre la región de Batken (Kirguistán) y de Sughd (Tayikistán), con dos civiles de Tayikistán fallecidos, una veintena de heridos de ambos países -incluyendo civiles y fuerzas de seguridad- y un millar de evacuados. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego a finales de ese mes. Se produjeron nuevos incidentes en meses posteriores y en septiembre la tensión aumentó. Disparos entre fuerzas fronterizas de ambos países el día 14 de ese mes derivaron en días posteriores en una escalada militar. Ambos Estados se acusaron de uso de armamento pesado, incluyendo tanques, drones y lanzacohetes múltiples. A diferencia de crisis anteriores, se denunció ataques de Tayikistán contra áreas más alejadas de la frontera en disputa, como zonas de los distritos de Batken y Leilek en la región de Batken, incluyendo bombardeos contra la capital regional Batken y su aeropuerto. Medios de comunicación se hicieron eco de denuncias de disparos de mortero también en la región de Osh, en Kirguistán. Algunos análisis caracterizaron la violencia como una operación militar ofensiva

44. Véase, entre otros, Mazorenko, Dmitriy y Paolo Sorbello, *Too little has changed in Kazakhstan in the year since ‘Bloody January’*, Open Democracy, 5 de enero de 2023; HRW, *Kazakhstan. Events of 2022*, en World Report 2023, HRW, 2023; Abishev, Gaziz, *Has Kazakhstan Become More Democratic Following Recent Elections?*, Carnegie, 12 de abril de 2023.

de Tayikistán contra Kirguistán, diferenciándolo de otras situaciones previas de incidentes entre guardias fronterizos de ambos países.⁴⁵ En torno a un centenar de personas fallecieron, incluyendo al menos 37 civiles –entre ellos, 4 menores–, y más de un centenar resultaron heridos.

Kirguistán cifró en 136.000 los civiles evacuados en su país. HRW denunció que población civil de al menos 12 localidades de ambos países se vio afectada, y se hizo eco de alegaciones de Kirguistán recogidas en medios de comunicación sobre incendios intencionados y saqueo de muchas viviendas en la localidad de Ak-Sai (Kirguistán) y de incendios y daños a más de 300 estructuras y equipamientos civiles, incluyendo mercados y colegios.⁴⁶ HRW también se hizo eco de alegaciones de Tayikistán de incendios contra viviendas en su territorio y de población civil herida, aunque señaló que no había informaciones sobre evacuaciones dentro de Tayikistán. Hubo varios acuerdos de alto el fuego –incluyendo uno el 16 de septiembre alcanzado por ambos presidentes durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai– si bien ambas partes se acusaron de incumplimientos. En torno al 18 de septiembre las autoridades de Kirguistán señalaron que la situación en la frontera se estaba estabilizando, aunque continuaba tensa. El 25 de septiembre los dos países acordaron un protocolo por el cual se comprometían a retirarse cada uno de cuatro puestos fronterizos, así como a llevar a cabo patrullajes fronterizos en rutas acordadas.

Pese a la desescalada posterior a la crisis de septiembre, la situación permaneció tensa en meses posteriores. Ambos gobiernos intercambiaron a mediados de octubre nuevas acusaciones de despliegue de fuerzas militares en posiciones de asalto en torno a áreas de la frontera en disputa, así como de violaciones del espacio aéreo con drones y de preparación de trincheras. Tayikistán denunció también violaciones del alto el fuego y prácticas de hostigamiento contra la población tayika del enclave de Voruj –rodeado de territorio de Kirguistán–, mientras Kirguistán acusó al país vecino de entrenamiento de mercenarios, de acopio de armamento y munición y de instalación de minas en áreas fronterizas en disputa. Cada país rechazó las acusaciones del otro.

Asia Meridional

India – China	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	India, China

Síntesis:

La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuya demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido.

Se agravó la tensión entre India y China en torno a las disputas territoriales por la demarcación fronteriza entre los dos países conocida como Línea Actual de Control, con los primeros enfrentamientos directos entre tropas indias y chinas en dos años. Durante todo el año se produjeron acusaciones verbales y, aunque hubo varias reuniones para tratar de solventar el conflicto entre ambos Gobiernos, no se produjeron avances. En estos dos años se habían producido casi 20 encuentros entre mandos militares con el objetivo de solventar las tensiones en el terreno, aunque sin resultados significativos. Además, persistió la construcción de infraestructura en las inmediaciones a la frontera, lo que elevó el riesgo de incidentes y de escalada de la tensión.

No obstante, cabe destacar que en 2022 se produjeron algunos acercamientos diplomáticos de gran relevancia. En marzo, el ministro de exteriores chino, Wang Yi, viajó a Delhi en la visita de mayor rango desde junio de 2020. Y en noviembre se produjo el primer encuentro presencial entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, desde los enfrentamientos de 2020. Este encuentro fue de cortesía, sin que trascendiera ninguna reunión entre ambos mandatarios y tuvo lugar en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia. No obstante, a pesar de estos y otros intentos de acercamiento, finalmente, en el mes de diciembre se produjeron enfrentamientos violentos entre soldados de los dos países que causaron 30 heridos en las filas indias y un número indeterminado de heridos chinos, aunque no se utilizaron armas de fuego. Ambos países se acusaron mutuamente de haber traspasado la frontera de forma ilegal. El enfrentamiento tuvo lugar en el sector Tawang del estado indio de Arunachal Pradesh,

45. Sharshenova, Aijan, *More than a 'Border Skirmish' Between Kyrgyzstan and Tajikistan*, The Diplomat, 19 de septiembre de 2022.

46. Sultanalieva, Syinat, *Kyrgyzstan-Tajikistan Border Clashes Prove Deadly for Civilians*, HRW, 21 de septiembre de 2022.

una zona considerada por China como parte del Tíbet y un emplazamiento estratégico para ambas partes, lo que incrementó la gravedad del choque. Se trataba de los primeros enfrentamientos directos en dos años, desde los enfrentamientos en junio de 2020 en el valle de Galwan, aunque en enero de 2021 se había producido un choque en Sikkim. El Gobierno indio señaló posteriormente que tras los enfrentamientos se habían producido contactos diplomáticos entre ambas partes y que había tenido lugar una reunión entre los comandantes locales de ambos ejércitos, pero la tensión entre los dos países se mantuvo muy elevada. Los enfrentamientos se produjeron a pesar de que en el mes de septiembre se había alcanzado un acuerdo para desescalar la tensión por el que ambas partes se comprometían a una retirada parcial y progresiva en la zona de Gogra-Hot Springs en Ladakh Este, con el objetivo de crear una zona de contención. No obstante, 50.000 soldados de cada uno de los países permanecían en la zona. El acuerdo del mes de septiembre se produjo después de que en agosto India hubiera presentado quejas por la presencia de aviones de combate chinos en las proximidades de la Línea Actual de Control, violando los límites de la zona de contención.

Se agravó la tensión entre India y China en torno a las disputas territoriales por la demarcación fronteriza entre los dos países, con los primeros enfrentamientos directos entre tropas indias y chinas en dos años

A pesar de que persistió la tensión entre India y Pakistán, con numerosos desencuentros diplomáticos y acusaciones mutuas entre ambos países, la situación de violencia mejoró considerablemente como consecuencia de la renovación del acuerdo de alto el fuego entre ambos países en 2021. Durante 2022 se registró un único incidente de violencia en la Línea de Control, frontera de facto entre India y Pakistán. India acusó a Pakistán en septiembre de haber disparado en el sector de Arnia, distrito de Jammu, a lo que India habría respondido militarmente. No se produjeron víctimas ni hubo heridos y posteriormente se produjo una reunión entre responsables de las fuerzas de seguridad de ambos bandos, tras la que se acordó seguir respetando el acuerdo de alto el fuego. En marzo se había producido un incidente en el que un misil se disparó accidentalmente desde India, aterrizando en Pakistán sin causar víctimas.

El Gobierno lamentó lo sucedido, reiterando el carácter accidental del suceso. Aunque no se produjo ninguna escalada, se expresaron dudas sobre los mecanismos para prevenir este tipo de incidentes. Así pues, se consolidó la tendencia de reducción de la tensión en la frontera desde los acercamientos diplomáticos que se llevaron a cabo durante 2021, sin episodios de enfrentamientos ni de violaciones del acuerdo de alto el fuego vigente en la Línea de Control. Algunos análisis señalaron que la tensión en la frontera entre India y China, conocida como Línea Actual de Control, habría llevado a India a concentrar sus esfuerzos militares en esta zona. Además, tras la toma de posesión del nuevo primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, el primer ministro indio Narendra Modi le felicitó e hizo un llamamiento a establecer una relación constructiva, a lo que Sharif respondió instando a la resolución del conflicto por Cachemira. No obstante, persistieron las acusaciones mutuas de terrorismo y de apoyo a diferentes fuerzas insurgentes que operan en cada uno de los dos países y no se produjeron avances diplomáticos para resolver los diferentes conflictos pendientes. El ministro de Interior indio, Amit Ahah, señaló que no tenía intención de dialogar con Pakistán, sino que su objetivo era hacerlo dialogar con la población de Jammu y Cachemira, reiterando las acusaciones al Gobierno vecino de prestar apoyo a organizaciones terroristas. Así, el ministro de exteriores Bilawal Bhutto-Zardari, afirmó en diciembre que había evidencias claras de que India había colaborado con el atentado que tuvo lugar en junio de 2021 en Lahore, y su vez, su homólogo indio acusó a Pakistán de haber dado cobijo a Osama bin Laden.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

Pakistán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una condena exiliándose a Arabia Saudita. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finalizó su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán continuó siendo un país inestable. En 2018 resultó vencedor en las elecciones generales el partido PTI, encabezado por Imran Khan.

Pakistán atravesó una grave crisis durante el año, que se sumó a la situación de conflicto armado en el país. La crisis fue especialmente aguda en las dimensiones política, económica y medioambiental. En lo que respecta a la crisis política, la situación se agravó a partir de marzo, cuando nueve partidos de la oposición, liderados por el PPP, PML-N y U-e-I presentaron una moción de censura que derivó en la destitución del primer ministro, Imran Khan, en abril. Khan había acusado a los partidos impulsores de la moción de actuar al dictado de una “conspiración extranjera”. Previamente a la votación de la moción de censura a principios de abril, en la que resultó perdedor Khan, el presidente de la Asamblea Nacional disolvió el parlamento y nombró a Khan como primer ministro interino, en un intento de impedir que la votación se llevase a término. No obstante, el Tribunal Supremo declaró ilegal dicho intento e instó a que se celebrase la votación, que tuvo lugar sin la presencia de Khan. Tras la moción de censura el Parlamento eligió primer ministro a Shehbaz Sharif, del PML-N. En los días posteriores seguidores de Khan llevaron a cabo protestas en varias ciudades y se produjeron enfrentamientos con la policía. Durante los mismos, al menos 30 policías resultaron heridos el 25 de mayo y en las semanas siguientes se repitieron múltiples protestas. En agosto Khan fue acusado de terrorismo,

pero un juez estableció un aplazamiento de su arresto y posteriormente se retiraron los cargos. La crisis escaló nuevamente en noviembre cuando se produjo un intento de asesinato contra Khan en la provincia de Punjab. En el transcurso de una marcha a la que el ex mandatario asistía junto con cientos de sus seguidores, Khan fue tiroteado y resultó herido en la pierna. El atentado tenía lugar después de Khan hubiese sido inhabilitado para cargos públicos por la comisión electoral. Khan acusó al Gobierno, incluyendo al propio primer ministro de estar detrás del atentado. Posteriormente se intensificaron las protestas en varias zonas del país por parte de los seguidores de Khan. En paralelo a la crisis política, el país se vio sumido en una grave crisis económica que intensificó las tensiones sociales. Además, en agosto se produjeron unas graves inundaciones que causaron la muerte de al menos 1.700 personas y afectaron de forma importante a diferentes zonas del país. Más del 75% del territorio de la provincia de Baluchistán se vio afectado por la catástrofe, atribuida al impacto del cambio climático en el país asiático. Más de 30 millones de personas resultaron afectadas por las inundaciones y cerca de ocho millones tuvieron que desplazarse de manera forzada, como consecuencia de uno de los peores desastres en el país. El secretario general de la ONU hizo un llamamiento a que se prestara un apoyo internacional de carácter masivo a Pakistán, señalando que el país afectado tenía mucha menos responsabilidad que otros en el cambio climático que había dado lugar a las inundaciones.

Sri Lanka	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde entonces miles de tamiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos.

Durante el año escaló gravemente la crisis política en el país, con protestas masivas en Colombo y otras ciudades y un cambio en el Gobierno. La agudización de la crisis económica debido fundamentalmente a la inflación –25% en los productos alimentarios y 18% en términos generales–, la escasez en el suministro de productos básicos y combustibles y el riesgo de hambruna en el país, en un contexto de acusaciones persistentes de corrupción gubernamental generalizada y mala gestión, derivó en manifestaciones masivas en marzo en las que se exigió la dimisión del presidente, Gotabaya Rajapakse, y el primer ministro, Mahinda Rajapakse (hermano del primero), después de que el gabinete en pleno presentara su dimisión con la excepción de los dos mandatarios. Como consecuencia de estas protestas iniciales, al menos una persona murió en las manifestaciones contra el Gobierno y otras tres murieron en las colas frente a las gasolineras. La oposición trató de forzar una moción de censura ante la negativa inicial del presidente y el primer ministro a dimitir de sus cargos. Finalmente, a principios de mayo, el primer ministro Mahinda Rajapaksa, se vio forzado a dimitir tras semanas de intensas protestas en las que al menos ocho personas murieron debido a la violencia y la represión y centenares resultaron heridas. La Policía recibió la orden de disparar sin previo aviso para contener las protestas, al tiempo que se imponía un toque de queda nacional. Al menos 40 viviendas de personas partidarias de Rajapaksa fueron incendiadas y también hubo un intento de asalto a su vivienda oficial. Asimismo, se produjeron violentos ataques contra una zona en la que habían acampado personas que exigían la dimisión del presidente y el primer ministro. Tras su dimisión, se produjo el nombramiento de Ranil Wickremesinghe como primer ministro, quien ya había ocupado el cargo durante varios mandatos, con el cometido de liderar un gobierno de unidad nacional. El Ejecutivo aprobó la completa restricción del acceso al combustible, excepto para servicios esenciales, ante la imposibilidad de importar debido a la deuda de la compañía estatal petrolera. El impacto de la COVID y la desaparición del turismo en el país había llevado al Gobierno a tener que usar las reservas extranjeras para hacer frente al pago de la deuda y las importaciones, lo que habría llevado a la práctica bancarota, provocando enorme escasez de combustible y falta de suministro de electricidad. El Gobierno solicitó ayuda al FMI para hacer frente a la crisis económica, considerada la más grave en el país en los últimos 70 años. Tras el nombramiento de Wickremesinghe el Gobierno aprobó la completa restricción del acceso al combustible, excepto para servicios esenciales, ante la imposibilidad de importarlo debido a la deuda de la compañía estatal petrolera. La crisis económica que atraviesa el país ha llevado al impago de la deuda y tuvo como consecuencia el desabastecimiento de medicamentos, alimentos, combustible y otros bienes esenciales, generando también una crisis sanitaria de enorme gravedad. En

julio se produjo una nueva escalada de la tensión tras el asalto al domicilio presidencial por parte de manifestantes, lo que forzó la dimisión del presidente Gotabaya Rajapakse –que huyó del país– y llevó al nombramiento de Wickremesinghe como presidente interino. Este declaró el estado de emergencia después de que su oficina también fuera ocupada por manifestantes y en los días siguientes se intensificó la represión de las protestas. Finalmente, el 15 de julio Wickremesinghe tomó posesión de su cargo y ganó la votación parlamentaria para su nombramiento definitivo en los días siguientes. Las protestas sociales y la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad continuaron en los meses posteriores, en un contexto de colapso económico y crisis humanitaria.

Asia Oriental

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁴⁷	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia
Síntesis:	La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

En paralelo al incremento de la tensión política y militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, **en 2023 se agudizó sustancialmente la preocupación internacional (especialmente de EEUU, Corea del Sur y Japón) respecto del programa armamentístico norcoreano. En todo el año, Corea del Norte lanzó alrededor de 95 misiles, varios de ellos intercontinentales, una cifra claramente superior a los ocho lanzamientos que se produjeron en 2021 o a los cuatro del 2020.** Además del dramático incremento en la frecuencia de tales lanzamientos, varios analistas también expresaron su preocupación por el tipo de armamento que testó Pyongyang durante

47. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

el año, incluyendo misiles crucero y balísticos, armas hipersónicas o misiles intercontinentales balísticos de gran alcance (como el Hwasong-17, con un recorrido de unos 15.000 kilómetros). Además, tanto los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y algunos centros de investigación señalaron que Corea del Norte estaba reactivando la principal instalación de ensayos nucleares del país en Punggye-ri –supuestamente clausurada en 2018 como parte del proceso diplomático con EEUU– y advirtieron en varios momentos del año sobre la posibilidad de que Corea del Norte llevara a cabo un nuevo ensayo nuclear, que de producirse sería el séptimo de su historia y el primero desde 2017 (ensayo que, según algunos análisis, fue una bomba de hidrógeno con una potencia muy superior a las de los anteriores ensayos). De hecho, Naciones Unidas afirmó en un informe confidencial filtrado en agosto que Corea del Norte había realizado preparativos para un ensayo nuclear durante los primeros seis meses de 2022. En la misma línea, a principios de septiembre Corea del Norte promulgó una nueva ley que especifica las condiciones para el despliegue y uso del arsenal nuclear y que estipula que Pyongyang no atacará a los estados no nucleares, excepto si se alían con los estados nucleares, y también que el uso de armas nucleares podría servir para prevenir la expansión o prolongación de una guerra o en respuesta a un ataque contra el país. A pesar de que la aparente escalada militar de Corea del Norte comportó la imposición de nuevas sanciones por parte de países como EEUU, el Consejo de Seguridad no consiguió aprobar ninguna resolución condenatoria ni nuevas sanciones contra Pyongyang por el veto de China y Rusia.

A principios de año, Corea del Norte acusó a EEUU de enviar armas nucleares estratégicas a la región, avanzó su disposición a reanudar sus actividades armamentísticas suspendidas desde 2017, como el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, y, solamente en el mes de enero, lanzó casi tantos misiles como en todo el 2021 (incluyendo armas hipersónicas), lo cual comportó la imposición de sanciones por parte de EEUU. En los meses de marzo y abril EEUU impuso nuevas sanciones a Pyongyang por nuevos ensayos armamentísticos (con satélites y misiles balísticos intercontinentales). Durante todo el año, y especialmente tras la toma de posesión del cargo del nuevo presidente surcoreano, Yoon Seok-yeol, EEUU expresó su disposición a reforzar su alianza estratégica con Corea del Sur (y con Japón) y a incrementar sus capacidades disuasorias en la región para hacer frente a la escalada militar por parte de Pyongyang. En este sentido, aunque EEUU descartó públicamente la demanda expresada por Yoon Seok-yeol de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con armas nucleares, a lo largo del año se llevaron a cabo algunas de las maniobras militares conjuntas entre EEUU y Corea del Sur (que eventualmente incluyeron a Japón) más importantes de los últimos años. Además,

En todo el año, Corea del Norte lanzó alrededor de 95 misiles, varios de ellos intercontinentales, una cifra claramente superior a los ocho lanzamientos que se produjeron en 2021 o a los cuatro del 2020

en varias ocasiones a lo largo del año, EEUU y Corea del Sur lanzaron misiles en respuesta al previo lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Una de las pruebas con misiles balísticos que generaron mayor preocupación en Washington y en otros países fue el lanzamiento en noviembre (y previamente, de manera fallida, en marzo) del misil Hwasong-17, con un recorrido de unos 15.000 kilómetros y, por tanto, con la capacidad de impactar en territorio estadounidense. Sin embargo, algunos analistas albergaban dudas de la capacidad de dichos misiles balísticos intercontinentales de transportar cabezas nucleares hasta su objetivo con precisión. EEUU expresó su preocupación por el discurso de fin de año de Kim Jong-un en el que solicitaba un incremento exponencial de su arsenal nuclear para 2023. Ya en 2021, tras el colapso del diálogo entre el ex presidente Donald Trump y Kim Jong-un y el fin de la aproximación política entre Corea del Norte y Corea del Sur, Kim Jong-un ya había anunciado un plan a cinco años vista para modernizar el Ejército y su arsenal, así como para desarrollar nuevas armas.

Por otra parte, también cabe destacar que durante el año se incrementó la tensión entre Corea del Norte y Japón. A principios de octubre, un misil balístico norcoreano de alcance intermedio sobrevoló Japón por primera vez desde 2017. Más tarde, a principios de noviembre, uno de los 26 misiles que Pyongyang disparó en dos días consecutivos cayó a 200 km al oeste de la isla japonesa de Hokkaido (norte). Ante tal situación, el Gobierno japonés declaró su disposición a reforzar sus capacidades defensiva y de contraataque, mientras que Washington dejó claro su compromiso con Japón y expresó su voluntad de colaboración con Corea del Sur, Japón y la comunidad internacional para coordinar una respuesta inmediata y a largo plazo a la amenaza que representa el programa armamentístico de Corea del Norte. En esta línea, en la segunda mitad del año Japón participó en ejercicios navales conjuntos con Corea del Sur y EEUU por primera vez desde 2017 y en diciembre presentó públicamente su nueva estrategia de seguridad nacional, que incluye el programa nuclear y balístico de Corea del Norte como amenaza. Por su parte, Pyongyang advirtió que la llamada “capacidad de contraataque” incluida en la nueva estrategia de seguridad nacional de Japón no se refiere al derecho a la legítima defensa de cualquier estado soberano, si no a la capacidad de llevar a cabo un ataque preventivo contra terceros países, lo cual entraña una grave crisis de seguridad en la península de Corea y en Asia oriental en su conjunto. Ante tal escenario, algunos análisis consideraron que el lanzamiento de misiles que crucen el espacio aéreo de un tercer país sin previo aviso ni coordinación –como hizo Corea del Norte en octubre de 2022– no solamente contraviene la legislación internacional, si no que, a la luz de la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada por Japón, podría ser interpretado como un ataque en su contra por parte de Tokio.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

En consonancia con el notable incremento de la tensión internacional acerca del programa armamentístico de Corea del Norte, en 2022 también aumentó considerablemente la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya en el mes de enero, Pyongyang disparó seis misiles (casi los mismos que en todo el 2021) y declaró la posibilidad de reanudar los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, suspendidos desde 2017. Por su parte, en abril Corea del Sur lanzó dos misiles balísticos lanzados desde submarinos en la costa oriental de la península coreana –la primera prueba de este tipo desde septiembre de 2021– y el ministro de Defensa declaró disponer de la capacidad de alcanzar con precisión cualquier objetivo en Corea del Norte. Tanto Kim Jong-un como su hermana, una de las máximas responsables de la política norcoreana hacia su país vecino, expresaron su disposición a utilizar armas nucleares si Corea del Norte fuera atacada. A pesar de la retórica utilizada por ambos gobiernos en los primeros meses del año, que se enmarca en el deterioro de las relaciones entre ambos países en los últimos años, **la elección de Yoon Suk-yeol como nuevo presidente surcoreano en los comicios celebrados en marzo supuso un punto de inflexión importante en el contencioso entre ambos países y un claro distanciamiento de la política exterior de Moon Jae-in**, que en varias etapas de su mandato lideró una aproximación hacia Corea del Norte que desembocó en varios acuerdos y en la época de distensión de los últimos años.

Poco después de la toma de posesión del cargo de Yoon Suk-yeol en el mes de mayo, Corea del Sur, conjuntamente con EEUU, dispararon dos misiles en respuesta al lanzamiento por parte de Pyongyang de su misil balístico intercontinental de mayor alcance (Hwasong-17), coincidiendo con un viaje a la región del presidente estadounidense Joe Biden. Pocos días más tarde, a principios de junio, Corea del Sur y EEUU lanzaron ocho misiles en la costa oriental pocas horas después de que Corea del Sur hubiera lanzado ocho misiles balísticos de corto alcance frente a la misma costa. Además, pocos días más tarde, Seúl inició ejercicios militares conjuntos con EEUU y Yoon Suk-yeol pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una respuesta coordinada a lo que tildó de provocaciones por parte de Corea del Sur. Ante tales acciones, varios medios de comunicación señalaron que la nueva administración surcoreana estaba tratando de instaurar una política de reaccionar y responder con proporcionalidad ante cualquier acción armada por parte de Corea del Norte. En esta línea, durante la presentación oficial de su política exterior hacia el país vecino, Yoon Suk-yeol señaló que la desnuclearización de Corea del Norte era un requisito para el avance de la paz y la prosperidad en la región y a la vez también anunció su intención de reforzar las capacidades militares del país, reservándose la posibilidad de incluso llevar a cabo ataques preventivos ante las amenazas y riesgos que entraña el programa nuclear y balístico de Corea del Norte. En línea con el acercamiento estratégico de Seúl a Washington y con su intención de reforzar sus capacidades militares disuasorias, Corea del Sur participó en los ejercicios militares Rim of the Pacific liderados por EEUU (del 29 de junio al 4 de agosto) y, a finales de agosto, Corea del Sur y EEUU llevaron a cabo las mayores maniobras militares conjuntas en años. Igualmente, EEUU y Corea del Sur llevaron a cabo nuevos ejercicios militares conjuntos (en algunos de los cuales también participó Japón) a finales de septiembre, coincidiendo con la visita de la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris a Seúl y a la frontera intercoreana.

Uno de los momentos de máxima tensión en la península coreana se vivió a finales de octubre, cuando ambos países intercambiaron disparos de advertencia en la Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés), la frontera marítima de facto, en disputa entre ambos países. Según varias fuentes, un barco norcoreano cruzó dicha Línea –que no es reconocida por Pyongyang–, y Corea del Sur disparó varios proyectiles y se adentró varios kilómetros en aguas surcoreanas para garantizar el retorno del barco norcoreano. Ante tal decisión, el Ejército norcoreano habría disparado 10 proyectiles en la costa occidental de la península coreana, cerca de la isla Baengyeong. Poco después, a principios de noviembre, en dos días consecutivos Pyongyang disparó más de 20 misiles –uno de los cuales cayó al sur de la NLL, a pocos kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho– y unos 100 proyectiles de artillería cerca de frontera marítima, y pocos días más tarde volvió a lanzar varios misiles de corto alcance, así como

su misil balístico intercontinental de mayor alcance (Hwasong-17). La tensión volvió a incrementarse nuevamente en diciembre, después de que Corea del Norte consiguiera que cinco de sus drones se adentraran en el espacio aéreo surcoreano –uno de ellos incluso alcanzando el extremo norte de Seúl– y no pudieran ser derribados por aviones y helicópteros que les dispararon numerosos proyectiles. Pocos días antes, el Gobierno norcoreano publicó fotos a gran altitud de las ciudades de Seúl e Incheon y declaró haber lanzado exitosamente un cohete especial como parte del desarrollo de un satélite de reconocimiento militar, una de las prioridades del desarrollo armamentístico del país anunciadas por Kim Jong-un para los próximos años. Finalmente, en su discurso de fin de año, Kim Jong-un tildó a Corea del Sur de enemigo e hizo un llamamiento a incrementar exponencialmente sus capacidades nucleares en 2023. Al día siguiente el presidente surcoreano pidió públicamente que Seúl y Washington intensificaran su colaboración en materia de armamento nuclear, incluyendo la planificación, el intercambio de información, los ejercicios y el entrenamiento.

Sudeste Asiático

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideraran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

En consonancia con el incremento de la violencia que se ha observado en la región desde que en enero de 2018 el grupo armado OPM declarara la guerra al Gobierno, en 2022 se produjeron numerosos enfrentamientos entre el OPM y las fuerzas de seguridad del Estado y ataques contra población civil, y también se registró un importante

aumento de las protestas por la decisión del Gobierno de crear tres nuevas provincias en Papúa Occidental. Según un informe del centro de investigación IPAC, desde el año 2018 se han incrementado notablemente tanto la frecuencia y letalidad de los enfrentamientos como el alcance territorial y las consecuencias humanitarias del conflicto. Según datos de Naciones Unidas hechos públicos a principios de marzo de 2022, desde el año 2018 entre 60.000 y 100.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por el incremento de la violencia. Según el centro de investigación ACLED, si en el 2017 se registraron 13 ataques del OPM contra las fuerzas de seguridad del Estado, en 2018 fueron el doble y en 2021 se alcanzaron los 137. En la misma línea, los datos compilados por IPAC muestran que desde 2018, la frecuencia de la violencia aumentó de un promedio de once incidentes por año entre 2010 y 2017 a uno de 52 incidentes por año entre 2018 y 2021. Desde el 2018, se han registrado 183 enfrentamientos entre tropas gubernamentales y combatientes y 74 episodios de violencia contra civiles. Según IPAC, el 66% de las 320 muertes ocasionadas por el conflicto armado entre 2010 y 2021 se registraron entre 2018 y 2021. En dicho periodo, murieron 52 miembros de las fuerzas de seguridad, 34 combatientes y 125 civiles (un incremento sustancial respecto de los 53 civiles que habían muerto entre 2010 y 2017). Según un informe de ACLED publicado en octubre de 2022, desde el año 2018 se ha incrementado notablemente el alcance geográfico del conflicto más allá de los bastiones tradicionales del OPM –el llamado Triángulo Negro, que incluye las regencias de Puncak Jaya, Lanny Jaya y Mimika–, y en los últimos tiempos regiones como las regencias de Intan Jaya, Puncak o Yahukimo también se han visto afectadas por la violencia. Según el Gobierno, en los últimos años el OPM dispone de un arsenal mucho más cuantioso y sofisticado que las armas rudimentarias que había utilizado en las últimas décadas, adquirido gracias a los crecientes ataques a puestos militares o policiales o a la compra de equipamiento procedente de regiones afectadas por la violencia como Ambon (Indonesia), Bougainville (Papúa Nueva Guinea) o Mindanao (Filipinas). El Gobierno acusa al grupo de obtener cuantiosos recursos de la extorsión o de actividades de minería ilegal en varias de las regiones en las que opera. Según el informe de IPAC, la mayor capacidad bélica del OPM se ha traducido en un cambio en su táctica y modus operandi militar, incrementándose la intensidad y duración de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas con el objetivo de asegurar el control territorial sobre ciertas regiones.

En cuanto a los datos del 2022, según el centro Human Rights Monitor, entre enero y finales de noviembre el conflicto armado había provocado la muerte de 68 personas, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. En comparación con el año 2021, la principal diferencia en las dinámicas de violencia fue el claro incremento de ataques del OPM contra población civil. En 2022, 39 de los 43 civiles que murieron en el marco

del conflicto armado lo hicieron por ataques del OPM. Cabe destacar la muerte de ocho trabajadores que reparaban una torre de telecomunicaciones en el distrito de Puncak a principios de marzo, el ataque contra un camión en la población de Nogolai (regencia de Nduga) a mediados de julio en el que 10 civiles murieron y otros dos resultaron heridos, o la muerte de cuatro civiles (y la desaparición de otro) que trabajaban en la construcción de una carretera entre los distritos de Bintuni Bay y Maybrat tras un ataque reivindicado por el OPM. En la mayor parte de este tipo de ataques, el OPM declaró que las víctimas eran espías o informantes del Estado. En los últimos años, en varias ocasiones el OPM ha hecho un llamamiento a la población no papúa a abandonar las regiones afectadas por conflicto porque su seguridad no está garantizada. A principios de marzo, los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y personas desplazadas internas emitieron un comunicado en el que mostraban su alarma y su condena por las violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos tres años por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como la negación de alimentación y servicios sanitarios adecuados a las personas desplazadas internas. Naciones Unidas también señaló que desde el 2018 habían escrito en más de 10 ocasiones al Gobierno para expresar su preocupación y para solicitar de manera urgente el acceso humanitario a la región y el inicio de investigaciones sobre los abusos cometidos contra la población indígena. A mediados de año el OPM también hizo un llamamiento a Naciones Unidas a intervenir en Papúa por considerar que el Gobierno, al que tilda de colonial, está llevando a cabo crímenes contra la humanidad contra la población local. El Gobierno, por su parte, negó tajantemente tales acusaciones y a la vez criticó a Naciones Unidas por expresar opiniones sesgadas y poco rigurosas. Además, Yakarta declaró que desde finales de 2021 las Fuerzas Armadas están implementado un nuevo enfoque securitario que no contempla solamente las operaciones de contrainsurgencia sino también el desempeño de tareas vinculadas al desarrollo, la educación, la sanidad o la construcción de infraestructuras. Este nuevo enfoque, que según el Gobierno podría comportar la retirada de algunas tropas no orgánicas de Papúa, fue recibido con escepticismo y críticas por parte de varias organizaciones de derechos humanos, pero el Gobierno señaló que desde su implementación en 2022, tanto el número de civiles como el de combatientes del OPM fallecidos en el marco del conflicto han disminuido significativamente respecto del año anterior. A finales de diciembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, se mostró partidario de reducir el número de tropas en Papúa, aunque sin dar detalles al respecto y a la vez remarcando la intención del Gobierno de mantenerse firme en su lucha contra el OPM. En el mes de marzo, Amnistía Internacional también criticó el incremento de la violencia y las violaciones de los derechos humanos y pidió revocar el permiso para una nueva mina de oro

en Wabu Block (regencia de Intan Jaya) por considerar que podría agudizar la conflictividad en la región. En la misma línea, el OPM pidió paralizar dicho proyecto y también cerrar la mina de Grasberg, operada por la multinacional estadounidense Freeport McMoRan.

Por otra parte, **durante el 2022 se produjeron numerosas protestas en Papúa y en otras partes de Indonesia contra la decisión de Yakarta de revisar y prolongar la Ley de Autonomía especial del año 2011 y también crear tres nuevas provincias en Papúa Nueva Guinea (Papúa Central, Papúa del Sur y Tierras Altas de Papúa Central)**. El Gobierno sostenía que la nueva división administrativa de la región tenía el objetivo de mejorar la gobernanza y el desarrollo económico en provincias más pequeñas pero que según el OPM y parte de la sociedad civil en Papúa solamente pretendía incrementar el control político y militar del Gobierno sobre la región y debilitar el movimiento secesionista papúa. En 2003, poco después de aprobar la Ley de Autonomía Especial, la decisión del Gobierno de dividir la región (entonces denominada Irian Jaya) en dos provincias también provocó protestas.

Pacífico

Papúa Nueva Guinea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville

Síntesis:

En las últimas décadas, se han registrado altos niveles de tensión y violencia intercomunitaria, clánica y tribal en varias regiones de Papúa Nueva Guinea, un país conformado por más de 600 islas y con una gran diversidad cultural (se hablan más de 850 lenguas). La mayor parte de tal violencia intercomunitaria, que afecta especialmente a provincias como Enga, Hela, Southern Highlands y Western Highlands, está vinculada a conflictos por la tenencia de la tierra –que en un porcentaje muy elevado se regula a través del derecho consuetudinario–, aunque históricamente también se han registrado episodios de violencia relacionados con otras cuestiones, como el control de los recursos, las rivalidades familiares o clánicas o las acusaciones de brujería y magia negra, que han provocado la muerte de decenas de personas. Las tensiones comunitarias se agudizan en periodos electorales (tal y como sucedió en 2022) y cada vez se tornan más letales por el creciente acceso a armas de fuego. Además, las regiones más afectadas por la violencia intercomunitaria se cuentan entre las que sufren mayores tasas de pobreza, menores niveles de educación formal y ausencia y fragilidad de instituciones vinculadas a la seguridad, la aplicación de la ley y el acceso a la justicia o la resolución de conflictos.

Durante el 2022 los numerosos episodios de violencia comunitaria y vinculada a las elecciones del mes de

julio provocaron la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de otras decenas de miles. A finales de septiembre, **el coordinador residente de Naciones Unidas en el país declaró que estimaba que la violencia relacionada con las elecciones había afectado a 265.000 personas y había provocado el desplazamiento de unas 90.000 personas en la región de Highlands,** especialmente en las provincias de Enga, Southern Highlands y Hela. Además, también señaló que unos 25.000 menores se habían quedado sin escolarización y que unas 560.000 personas no tenían acceso (o muy limitado) a servicios sanitarios básicos a causa de la destrucción de infraestructuras, la disrupción de suministros o la huida de personal sanitario. A finales de julio, OCHA declaró que estimaciones no oficiales situaban en más de 300 las personas que habían sido asesinadas desde el mes de mayo en la región de Highlands, la mitad de ellas aproximadamente en la provincia de Enga, advirtiendo sobre la posibilidad de que dicha cifra se incrementara en las semanas siguientes. En las provincias de Enga (especialmente en Porgara) y de Hela (sobre todo en Magarima), cientos de casas fueron destruidas y numerosos edificios públicos incendiados por la violencia sectaria que se desató a mediados de año. Algunos medios de comunicación señalaron que los episodios de violencia atribuibles específicamente a las elecciones nacionales que se llevaron a cabo entre el 4 y el 22 de julio, incluyendo la campaña electoral y el proceso de escrutinio (que se alargó hasta principios de agosto), provocaron la muerte de alrededor de 50 personas. Sin embargo, Naciones Unidas señaló que buena parte de la violencia de matriz comunitaria, tribal o clánica que se registró en la región de Highlands podría tener que ver con motivos no estrictamente electorales –como disputas por tierras–, pero que habrían sido agudizados o acelerados por la inestabilidad y tensión asociados a los comicios. En la localidad de Porgera, por ejemplo, que concentró buena parte de la violencia comunitaria, las tensiones se remontan al cierre de la mina de oro en 2020, que proporcionaba aproximadamente el 10% de las exportaciones del país, pero la violencia estalló precisamente cuando el Ejército custodiaba la retirada de las urnas a finales de julio. Según las autoridades locales, más de 20 clanes de la región se vieron inmersos en enfrentamientos de distinto signo. Durante la espiral de violencia, el Gobierno documentó unos 70 casos de mujeres o niñas que habían sido violadas o secuestradas. Además, en abril, aunque no existen registros oficiales al respecto, Naciones Unidas señaló en el mes de abril que cada año se producen una media de 388 casos de violencia relacionadas con acusaciones de brujería en la región de Highlands. A modo de ejemplo, en la provincia de Enga a finales de julio nueve mujeres tildadas de brujas fueron secuestradas y torturadas, cuatro de las cuales murieron y otras tres quedaron en estado crítico. Aunque en el país ya hay una ley sobre brujería, a principios de año se empezó a tramitar una nueva ley para prevenir y mitigar este fenómeno.

Por otra parte, los enfrentamientos comunitarios a finales de octubre entre los pueblos kulumata y kuboma en la isla de Kiriwina (provincia oriental de Milne Bay) provocaron la muerte de 32 personas y la desaparición de otras 15. A mediados de diciembre, la Policía declaró que 20 personas habían muerto en enfrentamientos comunitarios en la región de Koroba, en la provincia de Hela. En ambos casos, el Gobierno desplegó efectivos policiales adicionales y envió equipos de mediación para tratar de desescalar la tensión y la violencia.

2.3.4. Europa

Europa oriental

Moldova	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, Rusia
Síntesis:	Moldova se proclamó república independiente en 1991, en el contexto de disolución de la URSS. Históricamente, su territorio actual a la izquierda del río Dniester formó parte del principado medieval de Moldavia –integrado también por áreas de la actual Rumanía y Ucrania. Atravesó etapas bajo control de diferentes poderes, incluyendo el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, Rumanía y la URSS. Durante la II Guerra Mundial y tras el pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi, la Rusia soviética estableció la RSS de Moldova en 1940 (que pasaría a ser una más de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que formaron parte de la URSS) uniendo parte de la región histórica de Besarabia y Transnistria -franja territorial al este del río Dniester y anteriormente parte de una región autónoma de la RSS de Ucrania. La actual Moldova, país de 2,6 millones de habitantes y una tasa de pobreza absoluta del 24,5% (2021), es escenario de tensión en diferentes ámbitos entrecruzados. Por una parte, mantiene un conflicto no resuelto en torno al estatus de Transnistria, área de mayoría rusoparlante, independiente de facto desde 1992, apoyada por Rusia y reconocida internacionalmente como parte de Moldova. Por otra parte, el país se ha visto afectado por etapas de inestabilidad y división política, incluyendo en relación a la orientación del país en política exterior, así como por graves problemas de corrupción. Ha mantenido neutralidad respecto a la OTAN, junto a una relación de cooperación con la alianza militar. En diferentes etapas se ha incrementado la tensión entre Rusia y Moldova, incluyendo en la esfera energética, en la que tradicionalmente Moldova ha dependido del gas ruso. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la tensión e incertidumbre en la vecina Moldova por los riesgos de extensión del conflicto.

Se incrementó la situación de tensión en Moldova, influida por la invasión de Rusia en Ucrania, con un deterioro del contexto de seguridad, político, social y económico y presiones de Rusia sobre el país en diferentes ámbitos, como el energético. Por una parte, en el ámbito de seguridad, la invasión rusa a Ucrania

generó alerta en país. **Ya en febrero el Parlamento de Moldova aprobó la introducción del estado de emergencia, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, prolongado en varias ocasiones –la última en noviembre para otros sesenta días.** Se incrementaron los temores por los riesgos de una extensión de la guerra. En abril, el general ruso y vicecomandante del distrito militar central Rustam Minnekáyev declaró que en la segunda fase de la guerra Rusia tenía el objetivo de tomar el control del este y sur de Ucrania, incluyendo la ciudad de Odesa, y llegar hasta Transnistria. Además, a finales de ese mes y en mayo las autoridades autoproclamadas de Transnistria informaron de varias explosiones e incidentes en el territorio bajo su control, sin víctimas.⁴⁸ No obstante, el riesgo de extensión territorial de la guerra se mantuvo en niveles bajos, debido al mantenimiento del control de Odesa por Ucrania, entre otros factores. Las autoridades de Moldova y Transnistria mantuvieron contactos durante el año, descartaron la extensión del conflicto y defendieron una salida negociada. No obstante, la invasión rusa a Ucrania mantuvo la incertidumbre sobre Moldova. En noviembre una investigación periodística señaló que los servicios de seguridad rusos tuvieron órdenes en junio de preparar escenarios de un “segundo frente” en Transnistria y Moldova; y en diciembre el jefe de inteligencia de Moldova también señaló que existía el riesgo de que Rusia intentase en 2023 avanzar militarmente hacia Moldova y establecer un corredor con la región de Transnistria, si bien la agencia de inteligencia moldava matizó después que las declaraciones hacían referencia al análisis de diferentes escenarios que Rusia podría intentar. La proximidad física a Ucrania implicó diversos incidentes de seguridad. Las autoridades moldavas denunciaron en octubre que tres misiles de crucero disparados por Rusia desde el mar Negro y dirigidos contra Ucrania atravesaron el espacio aéreo de Moldova. Además, en varias ocasiones denunciaron que misiles rusos impactaron sobre territorio moldavo.

Se incrementó la tensión también en el ámbito político en los últimos meses del año, de la mano de manifestaciones opositoras, iniciadas en verano y que tomaron mayor envergadura en septiembre y se prolongaron en meses posteriores. Tuvieron lugar principalmente en la capital, Chisinau, organizadas por el partido Shor, con vínculos con Rusia. Los manifestantes reclamaron el fin de las sanciones a Rusia y la dimisión de la presidenta moldava, Maria Sandu, y de su gobierno, de orientación pro-EU. Análisis identificaron en las protestas un intento de Rusia de desestabilizar el país, a través de los vínculos del Kremlin con partidos opositores pro-rusos.

Otro ámbito de tensión fue el energético, esfera en la que Moldova era dependiente del gas ruso (Gazprom) suministrado a través de un gaseoducto de tránsito por Ucrania, así como de la electricidad procedente de Transnistria y, en menor medida, de Ucrania. **Rusia**

redujo su suministro de gas a Moldova y Transnistria en octubre y diciembre –y emitió amenazas en noviembre de paralización de todo el suministro de gas ruso a Moldova si esta no pagaba la deuda de gas acumulada por Transnistria, finalmente no llevadas a cabo. Las autoridades de Moldova lo consideraron un intento de desestabilizar al país. Además, se produjeron apagones en Moldova en noviembre por los bombardeos de Rusia contra la red energética ucraniana. A todo ello se sumó la reducción en octubre e interrupción total en noviembre del suministro eléctrico de Transnistria a Moldova, influida por la reducción del flujo de gas ruso, del cual depende la central eléctrica de Cuciurgan en Transnistria para la producción y suministro de electricidad a la región y a Moldova. En diciembre Chisinau y Tiraspol alcanzaron un acuerdo provisional, por el cual todo el gas ruso importado irá a Transnistria y Transnistria suministrará electricidad a Moldova a un precio acordado –muy inferior al precio pagado por la alternativa de la electricidad procedente de Rumanía. En paralelo, durante el año Moldova dio pasos para la diversificación energética, incluyendo con la sincronización de su red eléctrica con la red continental europea y con la compra de gas del mercado europeo. En conjunto, durante el año la población moldava afrontó una situación socioeconómica compleja, por el alza de precios, incluyendo en los alimentos, productos no alimentarios y servicios, con impactos en la población en un país considerado uno de los más pobres de Europa. Actores internacionales como la UE comprometieron ayuda humanitaria, así como apoyo económico para la diversificación energética. Asimismo, la UE concedió a Moldova en junio el estatus de país candidato a la entrada en la UE, junto a Ucrania. Se intensificaron también los contactos diplomáticos entre actores internacionales y el gobierno moldavo.

Por otra parte, Moldova fue país de tránsito y de destino de población refugiada ucraniana, con 726.705 entradas al país entre el inicio de la invasión (24 de febrero de 2022) y mediados de diciembre, según datos de ACNUR. A fecha 23 de diciembre, había en el país 99.524 personas refugiadas de Ucrania -un 59% eran mujeres, un 48% menores y un 21% población de tercera edad. En una visita en mayo a Moldova, el secretario general de la ONU calificó al país como el país vecino de Ucrania más frágil.

Moldova (Transnistria)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdnistria, Rusia

48. Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en este capítulo.

Síntesis:

Transnistria, un territorio de 4.000 km² y medio millón de habitantes, con mayoría de población rusoparlante, legalmente bajo soberanía de Moldova y de facto independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transnistria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía –ambas con vínculos históricos y culturales–. Transnistria rechazó la soberanía de Moldova y se declaró independiente de esta. Se asistió a una escalada de incidentes, que derivaron en un conflicto armado en 1992. Un acuerdo de alto el fuego ese mismo año puso fin a la guerra y dio paso a un proceso de paz, con mediación internacional. Entre las principales cuestiones en disputa se incluye el estatus del territorio –defensa de la integridad estatal y aceptación de un estatus especial para la entidad, por parte de Moldova; y demanda de modelos de amplias competencias, como confederalismo e independencia plena, por parte de Transnistria. Otros ejes de disputa en la negociación incluyen la dimensión cultural y socioeconómica y la presencia militar rusa en Transnistria. La cuestión de Transnistria es uno de los ejes de tensión en un escenario de fragilidad más amplio en Moldova, exrepública soviética, uno de los países más pobres de Europa y afectado por divisiones políticas en el eje pro-UE y pro-Rusia y por problemas históricos de corrupción. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la incertidumbre en la región de Transnistria y en el conjunto de Moldova, fronteras con Ucrania.

Se incrementó la tensión en torno al conflicto entre Moldova y Transnistria, influido por la invasión de Rusia a Ucrania y los riesgos de extensión del conflicto, si bien tanto las autoridades de Moldova como de Transnistria se reafirmaron en su posición de defensa del diálogo como vía de resolución del conflicto en torno al estatus de la región en disputa. Los avances militares de Rusia al sur de Ucrania al inicio de la invasión generaron incertidumbre por los riesgos de una extensión de la invasión y guerra a Transnistria, región fronteriza con Ucrania y en la que Rusia mantiene presencia militar –una parte bajo el paraguas de la fuerza trilateral de mantenimiento de paz integrada por fuerzas de Moldova, Transnistria y Rusia, y otra parte en forma de contingente de fuerzas de Rusia heredero de una unidad militar del Ejército soviético, que permanece en Moldova sin consentimiento de su Gobierno, el cual reclama su salida. Moldova declaró en febrero el estado de emergencia, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Kiev cerró los puestos fronterizos con el territorio de Transnistria. En abril, el general ruso y vicecomandante del distrito militar central Rustam Minnekáyev declaró que en la segunda fase de la guerra Rusia tenía el objetivo de tomar el control del este y sur de Ucrania, incluyendo la ciudad de Odesa, y llegar hasta Transnistria.

A finales de abril las autoridades autoproclamadas de Transnistria informaron de varias explosiones e incidentes en el territorio bajo su control, sin víctimas, incluyendo un ataque con lanzacohetes contra la sede vacía del ministerio del Interior en la capital, Tiraspol; un supuesto ataque contra la base aérea de la localidad; explosiones contra dos antenas de repetición en Maiac e incidentes en Cobasna –localidad que mantiene un

depósito de munición soviética–, que supuestamente involucraron vuelos de drones y disparos. Las autoridades de Transnistria atribuyeron a Ucrania los incidentes, elevaron la situación a “alerta roja” e introdujeron medidas restrictivas, incluyendo de limitación de movimiento de personas e incremento de puestos de control. La primera ministra de Moldova, Natalia Gavrilita, calificó los incidentes de seguridad de acciones de provocación en Transnistria dirigidas a desestabilizar la región. La presidenta del país, Maria Sandu, atribuyó los incidentes a facciones pro-guerra, sin especificar detalles, pero descartó que hubiera riesgos inmediatos de extensión a Moldova del conflicto de Ucrania, al menos al territorio bajo control del Gobierno. El ministerio de Defensa de Ucrania atribuyó las acciones al servicio de seguridad de Rusia. En mayo Tiraspol informó de nuevos ataques, contra una comisaría militar y contra un depósito de petróleo. Pese al incremento de la tensión, las autoridades de Moldova y Transnistria mantuvieron contactos y realizaron declaraciones en que descartaban la extensión de la violencia armada y la opción de la guerra y defendían una salida pacífica al conflicto. Se produjeron diversas reuniones durante el año al nivel de altos representantes políticos de Moldova y Transnistria –el viceprimer ministro y ministro de Reintegración de Moldavia, Oleg Serebrian, y el negociador jefe de Transnistria Vitaly Ignatiev–, en las que también participaron representantes del formato negociador 5+2. No se produjeron grandes acuerdos en el proceso, pero sí se logró mantener un grado fluido de interlocución en un año de gran incertidumbre por la guerra en Ucrania. En conjunto, el mantenimiento del control de la región de Odesa en Ucrania por las fuerzas ucranianas redujo los riesgos de extensión militar del conflicto en el país vecino a la región de Transnistria. Analistas también señalaron otros factores que reducían el riesgo, como el elevado grado de integración comercial de Transnistria con Moldova y con Europa, entre otros. Pese a ello, continuó hasta final de año la situación de tensión y de incertidumbre. En noviembre una investigación periodística señaló que los servicios de seguridad rusos recibieron órdenes en junio de preparar escenarios de un “segundo frente” en Transnistria y Moldova; y en diciembre el jefe de inteligencia de Moldova también señaló que existía el riesgo de que Rusia intentase en 2023 avanzar militarmente hacia Moldova y establecer un corredor con la región de Transnistria, si bien la agencia de inteligencia moldava matizó después que las declaraciones hacían referencia al análisis de diferentes escenarios que Rusia podría intentar. Otro de los ejes de tensión fue la cuestión energética, en un contexto de dependencia de Moldova del gas ruso y de la electricidad procedente en su mayoría de Transnistria y en menor medida de Ucrania. Rusia redujo su suministro de gas a Moldova y Transnistria en octubre y diciembre –y emitió amenazas en noviembre de paralización de todo el suministro de gas ruso a Moldova si no pagaba la deuda de gas acumulada por Transnistria, finalmente no llevadas a cabo. Las autoridades de Moldova lo consideraron un intento de desestabilizar al país. La reducción de gas también tuvo impactos económicos

negativos en Transnistria, que decretó en octubre el estado de emergencia económica. Además, se produjeron apagones en Moldova en noviembre por los bombardeos de Rusia contra la red energética ucraniana. A todo ello se sumó la reducción en octubre e interrupción total en noviembre del suministro eléctrico de Transnistria a Moldova, influida por la reducción del flujo de gas ruso, del cual depende la central eléctrica de Cuciurgan en Transnistria para la producción y suministro de electricidad a la región y a Moldova. En diciembre Chisinau y Tiraspol alcanzaron un acuerdo provisional, por el cual todo el gas ruso importado irá a Transnistria y Transnistria suministrará electricidad a Moldova a un precio acordado –muy inferior al precio pagado por la alternativa de la electricidad procedente de Rumanía. En conjunto, el conflicto entre Moldova y Transnistria transcurrió en 2022 en un contexto de tensión en el conjunto de Moldova, donde a finales de año seguía en vigor el estado de emergencia decretado en febrero.⁴⁹

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía

Síntesis:

El conflicto entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociado a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Este comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego. Desde el alto el fuego de 1994 ha habido diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. La guerra se reabrió en septiembre de 2020. En torno a 6.800 militares de ambos países murieron o desaparecieron, varios cientos de civiles murieron y unos 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos se desplazaron. En noviembre de ese año las partes alcanzaron un acuerdo que puso fin a la guerra y que supuso un cambio total del statu quo (control por Azerbaiyán de los distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj, así como de una parte de Nagorno-Karabaj y despliegue de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz), pero que dejaba irresuelto el estatus político de Nagorno-Karabaj.

La situación entre Armenia y Azerbaiyán y en torno al enclave en disputa de Nagorno-Karabaj fue de fragilidad, con una nueva escalada de violencia de la mano de una ofensiva militar aérea de Azerbaiyán contra zonas de Armenia en el centro y sur de la frontera, que causó más de 280 víctimas mortales y medio millar de heridos. Si bien se produjeron contactos diplomáticos y cierto acertamiento en la primera mitad del año, con el establecimiento de comisiones para la demarcación fronteriza entre ambos países y compromiso de avanzar hacia un acuerdo de paz,¹ en la práctica la situación continuó tensa. Durante el año Azerbaiyán afirmó su soberanía sobre la región y la condición de ciudadanos de Azerbaiyán de la población armenia de la región y descartó abordar la situación de la población armenia en la región con ningún actor internacional ni con Armenia. Asimismo, durante el año se produjeron incidentes de seguridad tanto en Nagorno-Karabaj como en la frontera interestatal y operaciones militares de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj y en Armenia. Bakú llevó a cabo operaciones y ataques militares que resultaron en la toma de control de algunas áreas de Nagorno-Karabaj y de Armenia, como en marzo, agosto y septiembre. La ofensiva aérea del Ejército azerbaiyano en septiembre contra zonas de Armenia en el centro y sur de la frontera resultó en la escalada interestatal más mortífera desde la guerra de 2020, con 207 soldados armenios y otros 80 azerbaiyanos fallecidos, varias víctimas mortales civiles, decenas de civiles heridos y el desplazamiento de más de 2.700 civiles armenios, entre otros impactos. Armenia y Azerbaiyán anunciaron un alto el fuego el 14 de septiembre, tras una tregua anterior fallida promovida por Rusia y llamadas internacionales a un alto el fuego y a retomar las negociaciones. Pashinián había expresado su disposición a alcanzar un acuerdo con Azerbaiyán si Bakú reconocía la integridad territorial de Armenia, incluyendo las áreas de Armenia tomadas por Bakú en 2021 y 2022, que cifró en 50 km², y señalando que Armenia a su vez reconocería la integridad territorial de Azerbaiyán. Tras su anuncio se produjeron protestas ciudadanas –algunos miles de personas, según algunos medios– contra Pashinián en la capital armenia, Ereván, así como en la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, y en Gyumri, contra lo que se percibía como concesiones. La escalada militar y tregua de septiembre fueron seguidas de nuevos movimientos diplomáticos, con llamamientos internacionales al diálogo. Las partes alcanzaron un acuerdo en octubre para el despliegue de una misión civil de observación de la UE en el lado armenio de la frontera internacional y se comprometieron con el reconocimiento mutuo de la integridad territorial y la soberanía, en base a la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Almá Atá de 1991. La misión se desplegó el 20 de octubre y finalizó en diciembre. Miles de personas –40.000 según las autoridades locales– se manifestaron el 30 de octubre en la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, en rechazo a la posibilidad de

49. Véase el resumen sobre Moldova en este capítulo.

que la región pase a estar bajo control de Azerbaiyán. El Parlamento de Nagorno-Karabaj, organizador de la protesta, aprobó ese mismo día una declaración en defensa de la soberanía de la región y de su derecho a la autodeterminación y contraria a cualquier documento o propuesta que lo cuestionase.

La cuestión del corredor de Lachin, única vía que conecta Nagorno-Karabaj y Armenia, fue elemento de tensión y discusión durante el año. En agosto Bakú anunció que ya había finalizado su tramo de la nueva ruta que, según el acuerdo de 2020 de fin de hostilidades, sustituirá al corredor de Lachin, y acusó a Ereván de dilación en su tramo. Además de incidentes agosto y evacuación de población de localidades en torno al corredor, a finales de año escaló la tensión a causa del bloqueo en diciembre del corredor por manifestantes azerbaiyanos contrarios a la actividad minera en la región. El bloqueo obstaculizó acceso a bienes básicos y generó riesgo de emergencia humanitaria. Actores internacionales como EEUU, la UE y el secretario general de la ONU llamaron a su apertura. Al finalizar el año el corredor seguía bloqueado.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ⁵⁰
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislamiento fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

Se incrementó la tensión entre Serbia y Kosovo en torno a cuestiones en disputa como el reconocimiento de matrículas de vehículos, que llevó a incidentes de seguridad, cierre de frontera y disposición de tropas en máxima alerta por parte de Serbia. Uno de los principales desafíos que afrontó el proceso durante el año fue la disputa en torno a medidas de reciprocidad sobre matrículas de vehículos y tarjetas de identidad. El pacto provisional de 2021 en relación a las matrículas expiró en abril de 2022. Ambas cuestiones fueron abordadas durante el año en el proceso negociador facilitado por la UE.⁵¹ A finales de junio el Gobierno kosovar anunció que pasaba a exigir matrículas kosovares a partir del 30 de septiembre, así como también documentos temporales de identidad expedidos por Pristina a la población con identificación de Serbia que entrase en Kosovo, a partir de agosto. El anuncio recibió fuertes críticas de Serbia y de representantes serbokosovares y fue seguido de barricadas e incidentes violentos en varios días. En las protestas participaron individuos armados, señalado como un elemento de alarma en el informe del secretario general de la ONU. El Gobierno kosovar responsabilizó al serbio de los bloqueos y las protestas. En medio de llamamientos internacionales, Pristina pospuso la implementación de la medida de los documentos de identificación al 1 de septiembre. A finales de agosto las partes llegaron a un acuerdo sobre libertad de movimiento de personas.⁵² En cambio, se prolongó la disputa sobre la cuestión de las matrículas. Tras un aplazamiento hasta finales de octubre por parte de Kosovo de la entrada en vigor de la medida y tras nuevos incidentes de violencia, Kosovo optó por una medida por plazos, con un periodo de aviso a conductores hasta el 21 de noviembre de 2022 y entrada en vigor de la totalidad de la medida en abril de 2023.

Pese al acuerdo de noviembre continuó la tensión en el norte de Kosovo. Varios centenares de personas incluyendo políticos, alcaldes, funcionarios y parlamentarios serbokosovares dimitieron ese mes de sus cargos en las municipalidades serbokosovares del norte de Kosovo y del Parlamento de Kosovo, denunciando incumplimiento de los acuerdos entre Serbia y Kosovo facilitados por la UE. Además, la dimisión en masa siguió a la suspensión de un director regional del servicio de la Policía del norte de Kosovo que había llamado a desobedecer al Gobierno kosovar en relación a la medida de las matrículas. Tras la renuncia colectiva, el Gobierno kosovar tenía previsto celebrar en diciembre elecciones municipales anticipadas en el norte de Kosovo, rechazadas por el principal partido serbio de Kosovo, Srpska Lista. Se produjeron algunos incidentes violentos contra instalaciones electorales y colocación de barricadas en protesta por la detención de un policía serbokosovar por supuestos vínculos con uno de los ataques. El Gobierno kosovar anunció finalmente la postergación de las elecciones a abril de 2023. No

50. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

51. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

52. Véase, Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

obstante, continuó la tensión hasta final de año, con la prolongación de las barricadas en seis localidades del norte de Kosovo. Serbia solicitó a la OTAN que le autorizase a desplegar un millar de efectivos propios de Serbia en Kosovo –solicitud rechazada posteriormente por la organización militar– y ordenó a su propio Ejército pasar a situación del “más alto nivel de preparación para el combate”. A su vez, Kosovo cerró tres pasos fronterizos por el bloqueo de carreteras causado por las barricadas. Se produjeron nuevos contactos diplomáticos. A finales de diciembre, Serbia anunció la retirada de las barricadas y la desactivación de la orden de máxima alerta al Ejército. El policía cuya detención por Kosovo desencadenó parte de las protestas pasó a situación de arresto domiciliario. Además, Kosovo afirmó que no existían listas de ciudadanos serbokosovares a arrestar o enjuiciar por las protestas y la instalación de barricadas. Su eliminación –si existían– había sido una de las demandas serbokosovares. Por otra parte, durante 2022 la tensión involucró otras cuestiones, como la negativa de Kosovo a facilitar el ejercicio de voto dentro de Kosovo a la población serbokosovar con doble nacionalidad en el referéndum constitucional de Serbia de mediados de enero y en las elecciones generales de abril. Abandonó así su política anterior de permitir a la OSCE la facilitación del voto en su territorio. En paralelo, y en un año de incremento de la tensión en todo el continente por la invasión de Rusia contra Ucrania, actores internacionales instaron a Kosovo y Serbia a avanzar en la normalización de relaciones a través de una propuesta franco-alemana. A su vez, Kosovo solicitó formalmente en diciembre su entrada a la UE.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Irán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos

de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persistieron. Movimientos de protesta recientes, en especial en 2019 y 2022, han evidenciado el malestar político y social en la población iraní y han sido duramente reprimidos por el régimen.

La tensión en Irán escaló durante el último cuatrimestre del año, cuando se activaron **nuevas movilizaciones populares contra las autoridades en el marco de un movimiento de contestación que ha sido considerado como uno de los mayores desafíos al régimen teocrático desde 1979**. El detonante de las protestas fue la muerte en septiembre de una joven kurda, Mahsa Jîna Amini, mientras permanecía en custodia policial, tras haber sido detenida por llevar el hijab (velo que cubre la cabeza) de manera inapropiada según los estándares del régimen. Su muerte –que Teherán justificó alegando una condición médica previa, pero que fue atribuida a maltratos por las fuerzas de seguridad– derivó en masivas movilizaciones que se multiplicaron por el país. Hasta principios de diciembre se habían contabilizado más de 1.600 manifestaciones, que contaron con un alto protagonismo de las mujeres y que pusieron sus derechos y libertades en el centro de las reivindicaciones.⁵³ Las protestas contaron con un apoyo transversal e hicieron patentes agravios y demandas más amplias en ámbitos múltiples –social, político, económico y de género, entre otros. Como en ocasiones anteriores, en particular las protestas de 2019, el régimen optó por una dura represión para sofocar el movimiento a través de la acción de los cuerpos de seguridad y de las milicias Basij. **Al finalizar el año, diversos balances apuntaban a que cerca de 500 personas habían fallecido por la represión, entre ellas un centenar de mujeres**. Unos 60 miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron también en incidentes tras el inicio de las protestas. Otras miles de personas habrían resultado heridas en el marco de la campaña represiva del régimen, en la que se observó un uso excesivo de la fuerza y un uso de la violencia de género, por ejemplo, a través de disparos a las mujeres que buscaban dañar deliberadamente su rostro y genitales. Hasta finales de 2022, miles de personas –más de 20.000 según algunas fuentes– fueron detenidas y algunas de ellas sometidas a juicios sin el debido proceso, según denunciaron ONG de derechos humanos. Las sanciones incluyeron condenas a muerte y la primera ejecución de un participante en las movilizaciones se produjo a principios de diciembre. Grupos de derechos humanos alertaron que la represión afectó desproporcionadamente a menores de edad. Se estimaba que hasta finales de 2022 al menos 58 –46 niños y 12 niñas– habían

53. Para más información, véase Pamela Urrutia, *La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista*, *Apunts ECP de Conflictes i Pau*, No.27, marzo de 2023.

muerto en acciones de las fuerzas de seguridad desde septiembre y se denunció que muchos menores habían sido detenidos en redadas llevadas a cabo incluso en escuelas. A partir de noviembre, también se denunciaron casos de envenenamiento de niñas en escuelas. El régimen también adoptó medidas para intentar impedir o silenciar las protestas, a través de cortes de electricidad, de internet y amenazas a quienes dieran sus testimonios a la prensa.

La contestación popular se produjo en un contexto de acumulación de agravios y de incremento del descontento social por medidas adoptadas por el Gobierno de Ebrahim Raisi, del ala más conservadora, que llegó al poder a mediados de 2021. Desde antes de la muerte de Amini se venía denunciando una intensificación de la represión contra dirigentes sociales y estudiantiles, un refuerzo de la llamada “policía moral” y mayores medidas de control y vigilancia del código de vestuario de las mujeres. Protestas en mayo de 2022 en varias provincias del país por la situación económica y los recortes en subsidios ya habían provocado la muerte de al menos cinco manifestantes en mayo. Cabe destacar que **tras la muerte de Amini la represión de las movilizaciones fue especialmente intensa en las áreas habitadas por minorías étnico-religiosas** –sobre todo en áreas kurdas y baluchis– donde las movilizaciones reflejaron también la desafección hacia el régimen tras décadas de medidas discriminatorias y políticas que limitan sus derechos culturales y políticos. La ciudad de Zahedan, en Sistán Baluchistán, fue escenario de la peor jornada desde el inicio de las movilizaciones, con más de 90 muerte el 30 de septiembre tras las movilizaciones en solidaridad con las protestas en el resto del país y manifestaciones locales por la violación de una menor por parte de un alto mando policial. Según grupos de derechos humanos, 60% de los menores fallecidos desde el inicio de las movilizaciones eran kurdos o baluchis. Teherán –que atribuyó la contestación interna a una acción orquestada desde el extranjero– también lanzó varias acciones de represalia contra grupos kurdos con base en la Región Autónoma Kurda del norte de Iraq, en particular contra el KDPI y Komala que en el pasado protagonizaron luchas contra las políticas centralistas y homogeneizadoras del régimen. En estas ofensivas habrían muerto al menos 16 personas y decenas habrían resultado heridas, según informaciones de prensa.

Irán – EEUU, Israel ⁵⁴	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

La tensión en torno al programa nuclear iraní se mantuvo elevada durante 2022, en un contexto de negociaciones oscilantes y una tendencia general de bloqueo en los intentos por restablecer el pleno cumplimiento del acuerdo de 2015 (conocido como JCPOA, por sus siglas en inglés). Además de los intercambios de amenazas y de los incidentes de seguridad –que involucraron principalmente a fuerzas de Irán, EEUU e Israel–, el proceso negociador se vio influido durante el año por otros acontecimientos, entre los que destacaron las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania en el escenario global y el impacto de la represión por parte de Teherán de una nueva oleada de contestación interna. El año se inició con ciertas expectativas dada la reanudación de las negociaciones del proceso de Viena en el último trimestre de 2021. El proceso diplomático consiguió algunos avances relevantes en el acercamiento de posiciones durante los primeros meses del 2022, pero la actividad negociadora se vio frenada y bloqueada por el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania y el consiguiente incremento de tensiones a nivel internacional. Los contactos entre las partes que permanecían adheridas al pacto y conversaciones indirectas entre Irán y EEUU –que se retiró del acuerdo en 2018 durante el gobierno de Donald Trump– se reactivaron hacia mediados de año, bajo la mediación de la UE, pero no desembocaron en acuerdos. Tras el inicio de las movilizaciones populares en Irán y la respuesta represiva del régimen, los contactos volvieron a dificultarse. Según trascendió, los principales puntos de desacuerdo de las negociaciones tenían que ver con las sanciones impuestas a la república islámica

54. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

y, en particular, con la designación de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) como organización terrorista por parte de EEUU en 2019 –Teherán exige el fin de esta medida, Washington plantea condiciones. Irán insistía en que no reducirá sus reservas de uranio hasta que se levanten las sanciones, mientras que la Casa Blanca demandaba una disminución como condición previa. Ambos países no se ponían de acuerdo en qué sanciones deben retirarse ni en la duración de un nuevo acuerdo. Teherán deseaba garantías de que el pacto durará y no será revertido por un nuevo gobierno en EEUU. Irán también deseaba que se ponga una fecha límite a la investigación del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en el país.

En este contexto, en noviembre el Consejo de Gobierno de la OIEA aprobó una resolución que reprobaba a Irán por su falta de colaboración en las investigaciones sobre actividades nucleares pasadas y sitios no declarados. Como respuesta, el Gobierno iraní intensificó sus actividades atómicas y comenzó a enriquecer uranio al 60%, un nivel justo por debajo de lo necesario para producir armas nucleares y muy por sobre del límite de 3,67% establecido en el acuerdo nuclear. Previamente, la OIEA había alertado que Irán ya había acumulado 62,3 kilos de uranio enriquecido al 60% y que sus tareas de verificación y monitoreo se habían visto severamente afectadas por la decisión de Teherán de desmontar los aparatos instalados para la vigilancia y supervisión del JCPOA. El secretario general de la ONU hizo entonces un llamamiento a Irán a revertir los pasos que le habían alejado de la implementación del acuerdo desde mediados de 2019. En paralelo a las tensiones en el plano diplomático, durante el año continuaron haciéndose evidentes las fricciones en una serie de incidentes. Por un lado, algunos **intercambios de fuego entre fuerzas de EEUU e Irán en hechos ocurridos en Iraq y Siria**, sobre todo a principios de año, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del general iraní Qassem Soleimani a manos de un ataque estadounidense en Bagdad. En agosto, EEUU advirtió sobre las consecuencias que tendría un ataque iraní contra ciudadanos de su país, tras la detención de un presunto miembro de la IRGC involucrado en un complot para asesinar al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Durante el año, **Irán y EEUU intercambiaron advertencias y amenazas; y también se produjeron algunos episodios de tensión en el espacio marítimo** entre naves de ambos países, en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. Ambos países también aprobaron nuevas sanciones. **Irán también intercambió amenazas con Israel, que perpetró varios ataques contra objetivos iraníes en Siria.**⁵⁵ A lo largo del año, Teherán anunció el desmantelamiento de una presunta red de espías colaboradores con Israel que planeaba actos de sabotaje en las instalaciones nucleares de Fordow (marzo) y de otro supuesto grupo de colaboradores con el Mossad (julio). Las muertes

en extrañas circunstancias de un general y otros tres individuos en una instalación militar aeroespacial iraní (junio) también se vincularon a las hostilidades entre Irán e Israel. Durante la visita del presidente de EEUU a Israel en julio, ambos países emitieron una declaración conjunta reiterando su compromiso para no permitir que Irán desarrolle un arma nuclear. El gobierno israelí enfatizó entonces que la única manera de disuadir a Teherán era mantener una amenaza militar creíble sobre la república islámica. Al finalizar el año, las relaciones de Irán con el exterior también se vieron afectadas por las acusaciones por parte de países occidentales a Irán por su responsabilidad en la transferencia de armas –en concreto, vehículos aéreos no tripulados– a Rusia para su invasión de Ucrania y en vulneración de la resolución 2331 de Naciones Unidas que en 2015 sirvió para respaldar el acuerdo nuclear (JCPOA).

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban a una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

En 2022 el **Gobierno egipcio** continuó siendo objeto de **críticas y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos por su persistente campaña de represión y silenciamiento a las voces disidentes y la comisión de diversas vulneraciones de derechos**

55. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

humanos. Las autoridades promovieron algunas medidas, consideradas simbólicas o cosméticas por observadores críticos, que se interpretaron como intentos por apaciguar los cuestionamientos internacionales, en especial en vísperas de la celebración de la conferencia anual global sobre cambio climático (COP27) en el balneario egipcio de Sharm el Sheikhen noviembre.⁵⁶ Así, por ejemplo, se liberó a cientos de prisioneros en el transcurso del año, pero muchos de ellos volvieron a ser arrestados y, además, se produjeron numerosas nuevas detenciones. **Amnistía Internacional indicó que antes de la COP27 las autoridades excarcelaron a 897 personas detenidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple,** incluyendo a cientos de activistas que hicieron llamamientos a manifestarse durante el encuentro internacional. Miles de personas percibidas como opositoras o críticas al gobierno permanecían detenidas al finalizar el año –algunas estimaciones apuntan a unas 60.000–, entre ellas más de una veintena de periodistas arrestados de manera arbitraria y acusados de cargos como difusión de “noticias falsas”, mal uso de las redes sociales o terrorismo. Personas vinculadas a la oposición islamista y otras voces disidentes, como el excandidato presidencial Abdelmoniem Aboufotouh fueron condenados por cargos similares en procesos denunciados por sus irregularidades y motivación política. Las autoridades también detuvieron y sometieron a persecución y acoso a numerosos activistas de derechos humanos. En enero, la Arab Network for Human Rights Information (ANRHI), una de las organizaciones referentes del país en materia de derechos humanos, anunció su cierre tras 18 años de trayectoria tras amenazas, ataques y arrestos por la Agencia de Seguridad Nacional y ante el inminente cumplimiento del plazo (en abril) para registrarse como ONG bajo una draconiana ley de asociaciones aprobada por el Gobierno en 2019. En paralelo, **continuaron produciéndose muertes de personas bajo custodia policial en circunstancias sospechosas y sin investigaciones adecuadas pese a los indicios de torturas y/o falta de asistencia.** Las fuerzas de seguridad también fueron señaladas por someter a cientos de personas detenidas a desapariciones forzadas, algunas durante meses, y persistieron las denuncias sobre torturas y tratos crueles en prisiones, estaciones de policía e instalaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. En un informe conjunto divulgado en abril, las ONG Egyptian Front for Human Rights y Freedom Initiative denunciaron el uso sistemático de la violencia sexual para torturar a mujeres, hombres y personas trans por parte de fuerzas de seguridad y prisiones. ONG internacionales de derechos humanos también insistieron en denunciar las condenas a muerte y ejecuciones de personas tras juicios sin garantías.

El **Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi**, que en septiembre de 2021 lanzó una estrategia nacional de derechos

humanos y declaró 2022 como “el año de la sociedad civil”, **hizo un llamamiento en abril a un diálogo nacional con sectores de la oposición política. Aunque durante el año se informó de diversas acciones preparatorias, hasta finalizar 2022 la iniciativa no se había lanzado formalmente.** El secretariado responsable de su impulso acordó abrir el diálogo a todas las fuerzas políticas y sociales del país, a excepción de miembros de los Hermanos Musulmanes, y excluyó posibles reformas a la Constitución como resultado de las conversaciones. El trabajo de este diálogo nacional se articulará en torno a tres ámbitos –político, económico y social– y resultará en recomendaciones no vinculantes, que se enviarán al presidente al-Sisi para que decida cuáles serán adoptadas. Sectores de la oposición política, de la sociedad civil y observadores externos expresaron su escepticismo ante la posibilidad de que esta iniciativa supusiera el inicio de reformas genuinas o el abordaje de la crisis de derechos humanos en el país.⁵⁷ Hasta fines de 2022, el opositor Movimiento Civil Democrático –coalición que reúne a una docena de partidos seculares dispuestos a participar– condicionaba su implicación a la excarcelación de más de un millar de personas. A nivel de opinión pública, una de las principales preocupaciones era la situación económica, dado el grave impacto en el país de la guerra en Ucrania. Cabe destacar que, pese a las denuncias sobre la situación de derechos humanos en Egipto, países como Francia, Italia o EEUU continuaron vendiendo armas al país norteafricano. En el caso de Washington, en enero se anunció una venta de armas por 2.500 millones de dólares. No obstante, al mismo tiempo, a lo largo de 2022, se mantuvo la decisión de retener 130 millones de los 300 millones de dólares en ayuda militar a Egipto aprobados en 2021, condicionados a progresos en materia de derechos humanos. En octubre, el Congreso estadounidense elevó esta cifra en 75 millones de dólares. En noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena por la situación de derechos humanos en la que instó a una revisión profunda de las relaciones de la UE con el país. Legisladores europeos también interpellaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que investigue la situación en el país.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán
Síntesis:	La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que

56. Para más información, véase Pamela Urrutia, *Emergencia climática y conflictos: retos para la paz en la región MENA*, *Apuntes ECP de Conflictos i Pau*, No.22, diciembre de 2022.

57. Khaled Dawoud, “Egyptian ‘national dialogue’ will kick off amid difficult domestic situation”, Middle East Institute, 20 de octubre de 2022.

se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión de décadas entre Israel, Siria y Líbano –que en los últimos años se ha visto influida por el conflicto armado en Siria– continuó motivando periódicos hechos de violencia con un balance de víctimas difícil de precisar. Como en años previos, **a lo largo de 2022 se informó de diversas ofensivas israelíes en territorio sirio que tuvieron como objetivo bases del régimen sirio y fuerzas vinculadas a Irán y Hezbollah.** Estos ataques se produjeron en varios puntos de Siria, incluyendo los aeropuertos de Damasco y Alepo, y habrían dejado al menos unos 25 militares fallecidos, además de un civil y de causar heridas a numerosas personas. Medios israelíes justificaron algunas de estas ofensivas asegurando que pretendían evitar la transferencia de armas de Irán a Hezbollah. El líder de Hezbollah aseguró en febrero que su organización estaba produciendo aviones no tripulados y que con ayuda de Irán en breve sería capaz de transformarlos en cohetes guiados de precisión. Ese mismo mes Israel informó que había derribado un dron de Hezbollah que había accedido a su espacio aéreo. Los informes periódicos de la ONU sobre la implementación de la resolución 1701 –que puso fin al conflicto armado de 2006– reiteraron las continuas vulneraciones del espacio aéreo libanés por parte de las fuerzas de Israel, centenares a lo largo del año. **A finales de año un ataque a un convoy de la misión de la ONU en Líbano, UNIFIL, provocó la muerte de un soldado y heridas a otros tres en la localidad Al-Aaqbya,** al sur del país. La ONU constató en sus informes que a lo largo de 2022 no se había avanzado en un acuerdo de cese el fuego permanente entre Líbano e Israel.

Uno de los focos de mayor tensión y expectativas durante el año estuvo relacionado con la demarcación de la frontera marítima entre Líbano e Israel. En junio, la llegada de una embarcación al borde marítimo para preparar las instalaciones destinadas a la extracción de gas para Israel desde el yacimiento de Karish, motivó

que el presidente libanés, Michel Aoun, advirtiera que cualquier actividad en las áreas en disputa mientras continuaban las negociaciones entre ambos países constituía una provocación y un acto hostil. Ministros israelíes aseguraron que la prioridad era la protección de intereses estratégicos y que su país estaba preparado para defenderlos. El líder de Hezbollah llamó a todas las fuerzas políticas libanesas a unirse en la defensa de sus recursos marítimos y amenazó con atacar las infraestructuras de gas israelíes si comenzaban a extraerlo antes del acuerdo de demarcación. En julio, el grupo libanés lanzó varios drones sobre Karish que fueron interceptados por Israel. Dos días más tarde, el primer ministro libanés advirtió que las interferencias de actores no estatales en las negociaciones sometían a Líbano a riesgos innecesarios. Pese a ello, Nasrallah insistió en un ataque armado si la disputa no se resolvía en septiembre, fecha en que Israel tenía previsto iniciar la explotación de gas.⁵⁸ **Finalmente, después de años de mediación intermitente de EEUU, en octubre Líbano**

Tras años de mediación intermitente de EEUU, en octubre Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo para la demarcación de su frontera marítima

e Israel alcanzaron un acuerdo para la demarcación de su frontera marítima. El pacto, suscrito tras diversas gestiones del enviado especial estadounidense, Amos Hochstein, fue calificado de histórico por numerosas voces. Algunos análisis, sin embargo, subrayaron las dudas sobre su implementación ante la fragilidad política en Líbano y el rechazo al acuerdo por parte de Benjamin Netanyahu, que venció en las elecciones de noviembre y volvió al poder en Israel a finales de año.⁵⁹ Pese

a sus amenazas de dismantelar el acuerdo, analistas señalaban que Netanyahu seguramente priorizará los beneficios económicos del pacto y no enemistarse con EEUU. Tras la intensificación de las tensiones en los meses precedentes, el acuerdo fue considerado como una solución que desactivaba la posibilidad de un conflicto armado en el corto plazo, aunque observadores destacaron que no es garantía de estabilidad a largo plazo ni reduce necesariamente las perspectivas de una eventual nueva guerra entre Israel y Hezbollah.⁶⁰

Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

58. International Crisis Group, *Time to Resolve the Lebanon-Israel Maritime Border Dispute*, Alert, Middle East and North Africa, 18 de agosto de 2022.

59. Véase el resumen sobre Líbano en este capítulo y sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

60. Ksenia Svetlova, *The Israel-Lebanon maritime deal is an example of successful US-led mediation. Can it be copy-pasted to other Middle Eastern arenas?*, *Atlantic Council*, 28 de octubre de 2022.

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses. En los últimos años, las consecuencias del bloqueo político-institucional y una grave crisis económica, entre otros factores, han repercutido en un severo deterioro en las condiciones de vida de la población.

La situación en Líbano continuó caracterizándose por **un persistente impasse político y una severa crisis económica con graves repercusiones en las condiciones de vida de la población** y preocupación por la situación de seguridad. **En mayo, el país celebró las primeras elecciones parlamentarias desde las masivas protestas populares de 2019.** Grupos de derechos humanos denunciaron compra de votos, incitación a la violencia y abuso de poder por parte de partidos políticos. Durante los comicios se produjeron varios incidentes, incluyendo choques entre seguidores del partido cristiano Fuerzas Libanesas y de los grupos shiíes Hezbollah-Amal,. Dirigentes políticos evocaron el recuerdo de la guerra civil ante las diferencias y pulsos de poder entre las diferentes facciones. Aunque candidatos independientes vinculados al movimiento de protesta civil de 2019 obtuvieron 13 de los 128 escaños, la votación no cambió significativamente el escenario político, que continuó caracterizándose por el bloqueo en los meses siguientes. El primer ministro en funciones Najib Mikati aseguró el respaldo de 54 legisladores –el menor nivel de apoyo desde el fin de la guerra civil- y recibió el encargo de formar un nuevo gobierno, pero hasta finalizar el año no lo había conseguido en medio de persistentes diferencias sobre la asignación de diferentes ministerios a las distintas comunidades sectarias del país. A finales de octubre también venció el mandato del presidente Michel Aoun. El Parlamento celebró 11 sesiones entre septiembre y diciembre para escoger a su sucesor, sin éxito. Este clima político repercutió en las posibilidades de abordar la profunda crisis económica del país, señalada por el Banco Mundial como una de las más graves a nivel mundial desde el siglo XIX. La crisis ha motivado que la moneda local haya perdido más de

95% de su valor y a finales de 2022 la devaluación de la libra libanesa alcanzaba niveles históricos (47.000 libras libanesas por dólar). **La población, el 80% de la cual se encuentra en situación de pobreza, se ha visto afectada por el acelerado aumento de precios, suspensión de subsidios y grave deterioro de servicios, en particular en el ámbito de salud, educación y seguridad, y de suministros como agua y electricidad.** La inseguridad alimentaria ha aumentado significativamente, en un contexto afectado también por las repercusiones de la guerra en Ucrania (Líbano importaba 80% de grano de Ucrania). Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), desde octubre de 2019 y hasta noviembre de 2022 el precio de los alimentos se había incrementado en 1.800%. La carencia intermitente de pan provocó incidentes en todo el país durante el año y se produjeron continuas huelgas, manifestaciones y bloqueos de carreteras en protesta por el deterioro de la situación económica. Entre agosto y noviembre una veintena de bancos fueron escenario de acciones armadas de personas que exigían acceso a sus depósitos. La ONU también alertó sobre incidentes armados y tiroteos atribuidos a “disputas personales” que dejaron decenas de muertes y personas heridas a lo largo del año. En este contexto, a lo largo del año se activaron una decena de redes de mujeres mediadoras para intentar resolver disputas locales y evitar violencia comunitaria.⁶¹

Líbano continuó afectado por un persistente impasse político y por una severa crisis económica que repercutió especialmente en colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la numerosa población refugiada que alberga el país

El deterioro de la situación económica afectó especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la población refugiada que alberga el país (incluyendo 1,5 millones de sirios y sirias). A modo de ejemplo, se calcula que 9 de cada 10 personas refugiadas sirias en Líbano vivía en condiciones de extrema pobreza en 2022. A lo largo del año se informó de varios naufragios de embarcaciones que intentaban alcanzar Europa, con decenas de víctimas mortales libanesas, sirias y palestinas –uno en las costas de Trípoli en abril, otro cerca de la costa turca en agosto, otro en la costa siria en septiembre, entre otros. ACNUR constató que, según la información a

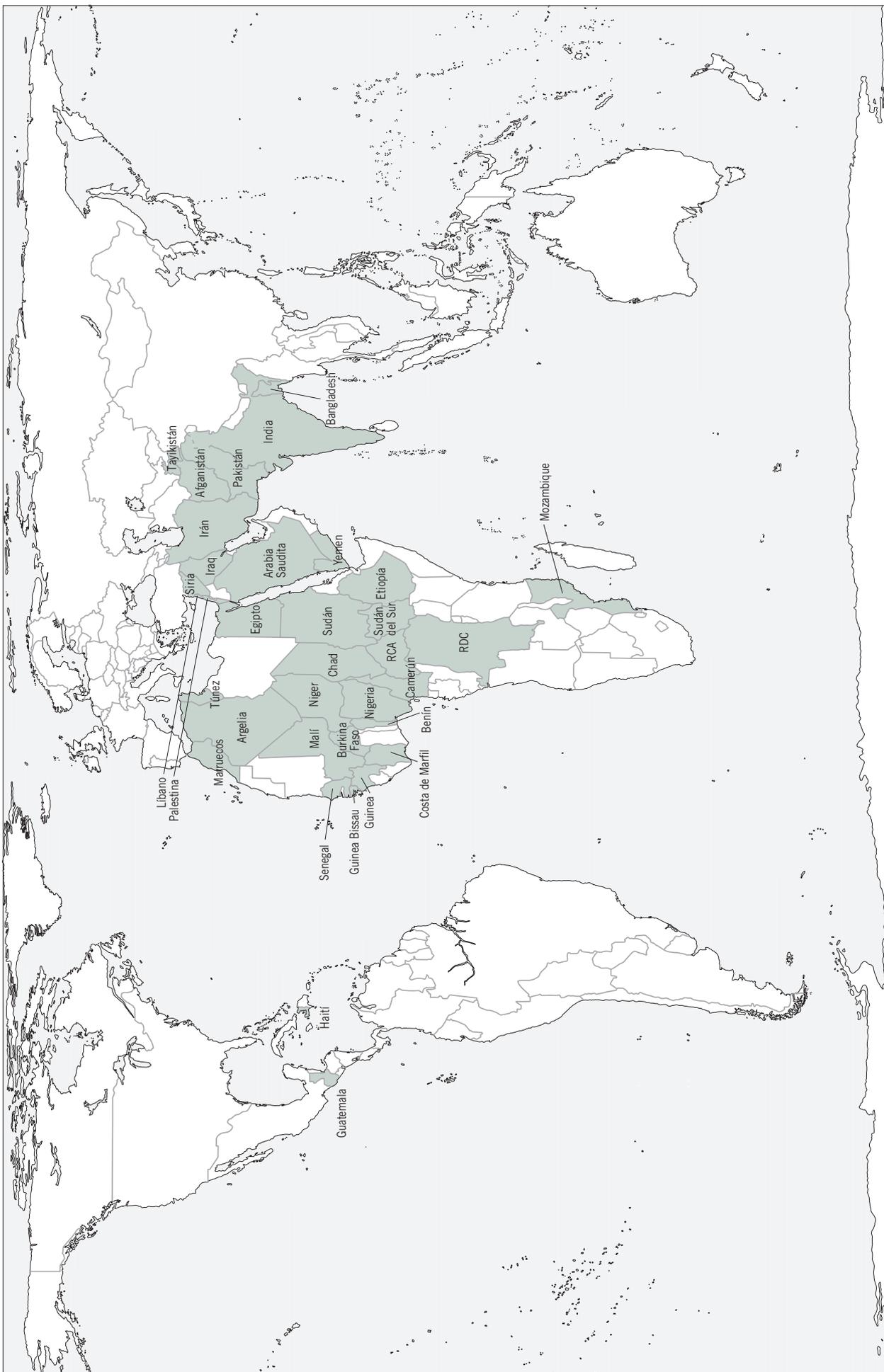
la que había podido acceder, los movimientos en el mar en esta área que involucraban a población desplazada y migrante habían aumentado, pasando de 31 con 1.570 personas implicadas en 2021 a 55 con 4.629 personas en 2022. ONG de derechos humanos también alertaron sobre retornos forzados de población refugiada siria. Persistieron además múltiples retos en materia de impunidad. Grupos como Human Rights Watch denunciaron que el *establishment* político continuó obstruyendo la investigación sobre la devastadora explosión en Beirut en agosto de 2020, que causó la muerte a más de 220 personas y dejó

61. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

heridas a otras 7.000 y que persistieron los fallos y negligencias en la investigación de cuatro asesinatos políticos ocurridos en los últimos dos años. La comisión nacional independiente establecida en 2020 para investigar el paradero de más de 17.000 personas desaparecidas durante la guerra civil en el país (1975-

1990) aún estaba pendiente de la asignación de presupuesto. A lo largo del año también se informó de diversos incidentes de seguridad en los campos para personas refugiadas palestinas, entre diferentes facciones, incluyendo tiroteos que dejaron al menos una persona muerta y varias heridas.

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad



Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género 2022

3. Género, paz y seguridad

- 23 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2022 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género y tres en países con un nivel medio-bajo de igualdad de género.
- 24 de los 33 conflictos armados activos transcurrieron en países en los que ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra población LGTBIQ+.
- Se documentó el uso de violencia sexual en contextos como Etiopía (Tigré), Sudán del Sur, Ucrania o Haití.
- En Afganistán y en Irán, las mujeres protagonizaron intensas protestas sociales en contra de legislaciones y políticas restrictivas y lesivas de sus derechos.
- En Ucrania se denunció uso de violencia sexual por fuerzas rusas contra mujeres, hombres y niñas, así como múltiples formas de violencia de género, que exacerbaban situaciones previas de desigualdad, mientras organizaciones de mujeres llamaron a la no revictimización.
- Naciones Unidas señaló que la mayoría de los más de 81.000 asesinatos de mujeres y niñas que se produjeron durante 2021 tuvieron una motivación de género.
- La agenda de mujeres, paz y seguridad continuó infrafinanciada y organizaciones de mujeres señalaron barreras como la falta de flexibilidad y adecuación a las circunstancias de los contextos en conflicto y la excesiva burocratización.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Desarrollo de Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con bajos niveles de igualdad según el Índice de Desarrollo de Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

3.1. Desigualdades de género

Para evaluar la situación de desigualdad de género en los países afectados por conflictos armados y/o tensiones se han utilizado los datos proporcionados por el Índice de Desarrollo de Género (IDG) elaborado por el PNUD. Este índice mide las disparidades con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH)² entre los géneros. El valor del

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales. Esta aproximación debe ir de la mano de un análisis interseccional que relacione el género con otros factores que estructuran el poder en una sociedad, como la clase social, la raza, la etnicidad, la edad, o la sexualidad, entre otros aspectos que generan desigualdades, discriminaciones y privilegios.
2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable (longevidad), el conocimiento (educación) y un nivel de vida decente (ingreso per cápita). Para más información, véase PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. Tiempos inciertos, vidas inestables: Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación*, PNUD, 2022.

Tabla 3.1. Países que son escenario de conflicto armado con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género³

Nivel bajo de igualdad		
<p>Afganistán</p> <p>Camerún (2) Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) Región Lago Chad</p> <p>Chad Región Lago Chad</p> <p>Egipto Etiopía (Sinaí)</p> <p>Iraq</p> <p>India (2) India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M)</p>	<p>Malí (2) Malí Región Sahel Occidental</p> <p>Níger (2) Región Lago Chad Región Sahel Occidental</p> <p>Nigeria Región Lago Chad</p> <p>Palestina Israel-Palestina</p> <p>Pakistán (2) Pakistán Pakistán (Baluchistán)</p>	<p>RCA</p> <p>RDC (2) RDC (este) RDC (este-ADF)</p> <p>Siria</p> <p>Sudán (2) Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</p> <p>Sudán del Sur</p> <p>Yemen</p>
Nivel medio-bajo de igualdad		
<p>Etiopía (2) Etiopía (Oromiya) Etiopía (Tigré)</p>	<p>Burkina Faso Región Sahel</p>	<p>Mozambique Mozambique (norte)</p>

Índice de Desarrollo de Género se calcula a partir de la proporción entre los valores del IDH para mujeres y hombres.⁴ El IDG incluye cinco agrupaciones de países según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH.

De acuerdo con el IDG, los niveles de igualdad entre hombres y mujeres fueron medio-bajos o bajos en 46 países, la mayoría situados en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **23 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2022 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género** –Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental,⁵ RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Sudán del Sur, Afganistán, India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Egipto (Sinaí), Iraq, Israel-Palestina, Siria, Yemen– **y nivel medio-bajo de igualdad de género** –Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Mozambique (norte)–. **No existían datos sobre Somalia, país en el que transcurre un conflicto armado. En cuanto a intensidad de los conflictos, 12 de**

los 17 conflictos armados de violencia de alta intensidad de 2022 (70% de los casos) transcurrieron en países con niveles bajos o medio-bajo de igualdad y en el caso de Somalia no había datos del IDG. Asimismo, en otros ocho países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles altos de igualdad (Libia, Colombia, Filipinas, Tailandia, Rusia, Ucrania, Israel) o medios (Myanmar), de acuerdo con el IDG. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, **47 de las 108 tensiones activas durante el año 2022 transcurrieron en países en los que existían niveles bajos o medio-bajo de igualdad.**

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter

3. Tabla elaborada a partir de los datos de conflictos armados de la Escola de Cultura de Pau y de los datos sobre países con nivel bajo y medio-bajo en igualdad del Índice de Desarrollo de Género del PNUD señalados en Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica el conflicto o conflictos armados en ese país en 2022. Entre paréntesis se señala el número de conflictos armados en ese país cuando hay más de uno.

4. Para establecer los diferentes niveles de desigualdad en los países se ha utilizado la clasificación que propone el PNUD, por la que los países se dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de la paridad de género en los valores del IDH. Grupo 1: países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta inferior al 2,5%); grupo 2: países con un nivel medio-alto de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 2,5% y el 5%); grupo 3: países con un nivel medio de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 5% y el 7,5%); grupo 4: países con un nivel medio-bajo de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 7,5% y el 10%); y grupo 5: países con un bajo nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de la paridad de los géneros superior al 10%).

5. El conflicto de Región Sahel Occidental se ha contabilizado como uno de los 20 conflictos armados en países con niveles bajos de igualdad. Este conflicto involucra a tres países con nivel bajo de igualdad (Malí, Costa de Marfil y Níger) y un país con nivel medio-bajo (Burkina-Faso).

Tabla 3.2. Países que son escenario de tensión con nivel medio-bajo o bajo de igualdad de género⁶

Nivel bajo de igualdad		
Argelia	Irán (4) Irán	Pakistán (2) Pakistán
Bangladesh	Irán (noroeste)	India – Pakistán
Benín	Irán (Sistán Baluchistán)	RCA (2) RCA
Chad	Irán – EEUU, Israel	África central (LRA)
Costa de Marfil	Iraq Iraq (Kurdistán)	RDC (3) RDC
Egipto (2) Egipto	Líbano Líbano	RDC – Rwanda
Etiopía – Egipto – Sudán	Israel – Siria – Líbano	África central (LRA)
Guinea	Malí	Senegal Senegal (Casamance)
Guinea Bissau	Marruecos Marruecos – Sáhara Occidental	Siria Israel – Siria – Líbano
Haití	Níger	Sudán (5) Sudán
India (6) India	Nigeria (3) Nigeria	Sudán – Sudán del Sur
India (Assam)	Nigeria (Biafra)	África central (LRA)
India (Manipur)	Nigeria (Delta del Níger)	Etiopía – Egipto – Sudán
India (Nagalandia)	Palestina	Etiopía-Sudán
India – China		Sudán del Sur (2) Sudán – Sudán del Sur
India – Pakistán		África central (LRA)
Nivel medio-bajo de igualdad		
Arabia Saudita	Etiopía (3) Etiopía – Egipto – Sudán	Tayikistán (3) Tayikistán
Burkina Faso	Etiopía – Sudán	Tayikistán (Gorno-Badakhshan)
Guatemala	Eritrea – Etiopía	Kirguistán – Tayikistán
	Mozambique	

sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2022 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.⁷ Su utilización, que en

23 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar en 2022 se dieron en países donde existían niveles bajos de igualdad de género

En abril se celebró el **debate abierto anual en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados** y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión. El debate retomó su formato presencial, después de que la edición anterior tuviera lugar virtualmente como consecuencia de

6. Tabla elaborada a partir de los datos de escenarios de tensión de la Escuela de Cultura de Pau y de los datos sobre países con nivel bajo y medio-bajo en igualdad del Índice de Desarrollo de Género del PNUD señalados en Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. Se señala en negrita el país y debajo de cada país se especifica la tensión o tensiones en ese país en 2022. Entre paréntesis se señala el número de tensiones en ese país cuando hay más de uno.

7. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

Tabla 3.3. Actores armados y violencia sexual en conflictos⁸

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en marzo de 2022 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.⁹

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Iraq		Dáesh
Malí		Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, parte de la Coordinadora de Movimientos de Azawad; Ansar Eddine; Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental; Al-Qaida en el Magreb Islámico, parte de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Musliimin; Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgads y sus Aliados, parte de la Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel.
Myanmar	Tatmadaw (Fuerzas Armadas), incluida la guardia de fronteras integrada	
Nigeria		Grupos afines a Boko Haram y grupos escindidos, incluidos Jama'atu Ahlis-Sunna; Lidda'Awati Wal Jihad y Provincia de África Occidental del Estado Islámico
RCA	Fuerzas armadas nacionales	Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC): el ex-Presidente François Bozizé; Retorno, Reclamación y Rehabilitación: General Bobbo; antibalaka: MokomMaxime Mokom; antibalaka Ngaissona-Dieudonné Ndomate; Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana: Noureddine Adam y el comandante de zona Mahamat Salleh; Movimiento Patriótico por la República Centroafricana: Mahamat Al-Khatim; Unión por la Paz en la República Centroafricana: Ali Darrassa; Ejército de Resistencia del Señor; Facciones ex-Seleka; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano: Abdoulaye Miskine; Revolución y Justicia
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congoleña	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Janvier; Fuerzas Democráticas Aliadas; Milicias Bana Mura; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri; Ejército de Resistencia del Señor; Nduma Defensa del Congo; Nduma Defensa del Congo Renovado: facción liderada por el "General" Guidon Shimiray Mwissa y facción liderada por el Comandante Gilbert Bwira Shuo y el Comandante Adjunto Fidel Malik Mapenzi; Mai-Mai Kifuafua; Mai-Mai Raia Mutomboki; Mai-Mai Apa Na Pale; Mai-Mai Malaika; Mai-Mai Yakutumba; Nyatura; Cooperativa para el Desarrollo del Congo; Milicias twas; Unión de Patriotas para la Defensa de los Ciudadanos; Fuerzas Patrióticas Populares-Ejército del Pueblo
Siria	Fuerzas gubernamentales, incluidas las Fuerzas de Defensa Nacional, los servicios de inteligencia y las milicias partidarias del Gobierno	Dáesh; Hay'at Tahrir al-Sham; Ejército del Islam; Ahrar al-Sham
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional Somalí y sus milicias aliadas; Fuerzas de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Sudán-Abdul Wahid
Sudán del Sur	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, incluidas las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur aliadas de Taban Deng; Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur	Ejército de Resistencia del Señor; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición - pro-Machar

la pandemia por la COVID-19. El debate estuvo centrado en la cuestión de la rendición de cuentas como una herramienta de prevención y contó con la participación de la representante especial del Secretario General de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, más de 70 representantes de gobiernos y tres representantes de la sociedad civil –Nadia Murad, premio nobel de la paz y Embajadora de Buena Voluntad de UNODC, Mariana Karkoutly, de la organización siria Huquqyat y Hilina Berhanu, representante de la sociedad civil etíope–. Además, Suecia intervino en nombre del United Nations LGBTI Core Group, grupo informal que se estableció en 2008, integrado por estados miembros y copresidido por Argentina y Países Bajos, con el objetivo de promover los derechos de las personas LGTBIQ+.

El informe anual presentado en 2022 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.¹⁰ La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales (37) y otros 12 eran actores armados gubernamentales, de un total de diez contextos (RCA, RDC, Iraq, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Nigeria). Según Naciones Unidas, el 70% de los actores en conflicto señalados eran considerados perpetradores persistentes, debido a su inclusión en el anexo de Naciones Unidas durante cinco o más

8. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

9. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos*. Informe del Secretario General, S/2022/272, 29 de marzo de 2022.

10. Ibid.

años. Más allá del listado de actores perpetradores de violencia sexual, el informe del secretario general abordaba la evolución en 18 contextos. De los 18 contextos¹¹ que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, 12 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad durante 2022 –Etiopía (Tigré), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este – ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. En seis de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2022 con respecto al año anterior – Etiopía (Oromiya), Malí, Región Sahel Occidental, RDC (este), Somalia y Myanmar–. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

Naciones Unidas documentó la utilización de violencia sexual en **Haití** por parte de grupos armados con el objetivo de atemorizar a la población y así expandir su control sobre importantes zonas de Port-au-Prince, capital del país. De hecho, en agosto de 2022 los grupos armados controlaban amplios segmentos de la ciudad en los que vivía al menos 1,5 millones de personas. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Oficina Integrada de Naciones Unidas en el país (BINUH) publicaron un informe¹² conjunto en el que se señalaba que mujeres, niñas y niños y, en menor medida hombres, habían sido víctimas de violaciones, violaciones colectivas y otras formas de violencia sexual, como una forma de destruir el tejido social. También fueron víctimas de esta violencia mujeres que habían sido secuestradas para pedir rescate a las familias y garantizar así una forma de financiación para los grupos armados que operan en la capital. En el informe se destacaba la impunidad en la que queda esta violencia y cómo esta situación de falta de persecución y castigo, así como el acceso a armas de alto calibre y municiones traficadas desde el extranjero permite a los grupos armados cometer actos de violencia sexual y otras

Se denunció la utilización de la violencia sexual en Haití, en la región etíope de Tigré, en Sudán del Sur y en Ucrania en el marco de la invasión rusa

violaciones de los derechos humanos. Las carencias estructurales en las fuerzas policiales, que no fueron capaces de abordar adecuadamente esta violencia, así como en los servicios sanitarios y de apoyo psicosocial, agravaron la crisis en un contexto de grave violencia y falta de acceso a los bienes y servicios más esenciales.

Se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado en la **región etíope de Tigré**, incluyendo violencia sexual por parte de los diferentes actores armados. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional hizo un llamamiento a la Unión Africana para que incrementara la presión sobre el Gobierno etíope para garantizar el acceso a la justicia de miles de víctimas. El llamamiento se produjo después de que las partes en conflicto alcanzaran un acuerdo bajo la mediación del antiguo mandatario nigeriano

Olusegun Obasanjo. A pesar del acuerdo, seguía pendiente proporcionar acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el marco del conflicto armado –especialmente entre 2020 y 2021–, entre los que se incluye la violencia sexual contra mujeres y niñas. Organizaciones de derechos humanos también denunciaron la situación de especial vulnerabilidad en la que se hallaban las mujeres refugiadas

eritreas que se habían desplazado a esta región etíope en los años previos. Además, la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía¹³ presentó su informe¹⁴ en el que se documentaba la utilización de violencia sexual por parte de diferentes actores armados y se señalaba que las víctimas atribuían la violencia a las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía, las Fuerzas de Defensa de Eritrea y la milicia amhárica Fano. La Comisión señalaba que más de 1.000 mujeres y niñas habían sido víctimas de violencia sexual, pero el informe recogía que la cifra podría ser mucho mayor, según lo que apuntaban fuentes locales que habían atendido a víctimas. Además de violaciones –incluyendo en presencia de familiares–, también se produjeron secuestros y esclavitud sexual. Entre las consecuencias de esta violencia, cabe destacar el impacto de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA, traumas psicológicos o embarazos no deseados, en un contexto en el que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva o de apoyo psicosocial, tiene enormes dificultades.

11. Los países objeto de análisis del informe de 2022 del secretario general son: Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Además, se analizan las situaciones de posconflicto en BiH, Nepal y Sri Lanka y los casos de especial preocupación de Etiopía y Nigeria. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la Escola de Cultura de Pau. El listado completo de conflictos armados en los países recogidos en el informe del secretario general es: Etiopía (Tigré), Etiopía (Oromiya), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, Región Sahel Occidental (incluye Malí), RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Sudán del Sur, Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.
12. United Nations Integrated Office in Haiti y Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Sexual violence in Port-au-Prince: A weapon used by gangs to instill fear*, BINUH y OHCHR, octubre de 2022.
13. La Comisión está integrada por tres expertos en derechos humanos nombrados por la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos: Kaari Betty Murungi, Presidenta (Kenya), Steven Ratner (EEUU) y Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka).
14. Informe de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, A/HRC/51/46, Asamblea General de la ONU, 5 de octubre de 2022

La Comisión de Derechos Humanos en **Sudán del Sur**, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció que los grupos armados en todo el país estaban cometiendo violencia sexual de forma muy extendida.¹⁵ Esta comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2016 y renovada anualmente desde entonces, con el mandato de determinar, recoger y preservar evidencias y esclarecer responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual y de género, con el objetivo de contribuir a poner fin a la impunidad. Aunque no existen cifras oficiales del impacto de esta violencia en la población civil del país, un informe de la Comisión señala que la violencia sexual se utiliza como táctica para desplazar y aterrorizar a las comunidades rivales, que el matrimonio forzado y la esclavitud sexual se utilizan de forma crónica, que existen enormes dificultades y desafíos para el acceso de las supervivientes a los servicios de apoyo, destacando también la impunidad. De acuerdo con el informe de la Comisión, la violencia sexual que se ha cometido en el contexto de este conflicto armado ha sido instrumentalizada como una forma de “recompensa y un derecho” para los hombres, incluyendo hombres jóvenes, que participan en conflictos. La Comisión señala que esta violencia ha servido como un medio para construir la solidaridad étnica, como una forma de venganza y con el objetivo de destruir el tejido social, también a través del desplazamiento forzado, ocasionando graves impactos en las víctimas. En el informe se señala que la Comisión de Derechos Humanos ha conseguido generar un importante archivo documentando diferentes formas de violencia sexual como violaciones, violaciones en grupo, esclavitud sexual, matrimonio forzado, tortura y una variedad de actos crueles e inhumanos sexualmente degradantes y palizas. La Comisión también lamentaba que no hubiera habido avances en la implementación del acuerdo de paz de 2018, prolongando el clima de conflicto armado en que se perpetra violencia sexual. En ese sentido, la plataforma de organizaciones internacionales NGO Working Group on Women, Peace and Security (NGO GWPS) alertó en marzo de la necesidad de esfuerzos para la participación de diversos sectores de la sociedad civil en el proceso de paz, incluyendo mujeres de diversas comunidades, así como su participación en diversas esferas gubernamentales, actualmente por debajo de la cuota del 35% incluida en el acuerdo. El NGO GWPS instó a todas las partes a priorizar la rendición de cuentas a través del establecimiento de un tribunal híbrido en paralelo a la comisión para la verdad, reconciliación y recuperación y a otros mecanismos de justicia transicional del acuerdo de paz, y que estos sean diseñados y desplegados con

Organismos locales e internacionales documentaron violencia sexual en Ucrania, cometida principalmente por fuerzas armadas rusas contra mujeres, hombres y niñas

participación sustantiva y liderazgo de las mujeres, enfoque de género y dotación de recursos.

En relación a la invasión de **Rusia a Ucrania** y el conflicto armado, se denunció violencia sexual, en su gran mayoría por fuerzas de Rusia. Fue documentada por diversos órganos. Por una parte, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania – establecida por el Consejo de Derechos Humanos a través de la resolución 49/1 de marzo de 2022, integrada por tres personas expertas y en coordinación con ACNUDH- documentó casos de violencia sexual y violencia de género en nueve regiones de Ucrania, así como en Rusia, que afectaron a mujeres, hombres y niñas de entre 4 y 82 años y concluyó que las fuerzas rusas habían perpetrado violencia sexual principalmente en dos tipos de situaciones, que incluían registros de casas y en situaciones de confinamiento.

En el caso de la violencia sexual durante registros de casas, esta tipología fue documentada principalmente en región de Kiev, así como en Chernihiv, Járkov y Jersón, y sobre todo referente a los primeros dos meses de la guerra y perpetrada principalmente contra mujeres. Según la comisión, las violaciones se cometieron a punta de pistola, con brutalidad extrema y con actos de tortura y, en ocasiones, con amenazas de asesinar a las víctimas o a familiares si oponían resistencia.

En algunos casos, los perpetradores también ejecutaron a maridos y familiares varones; y, en ocasiones, familiares, incluyendo menores, fueron forzados a presenciar la violencia sexual.¹⁶ En relación a la segunda tipología, la comisión documentó numerosos casos de violencia sexual y de género perpetrada por autoridades rusas durante situaciones de confinamiento ilegal en las regiones de Donetsk, Járkov, Jersón, Kiev y Lugansk, así como también en Rusia. Según el trabajo de documentación de la comisión, este tipo de violencia sexual afectó principalmente a hombres, tanto civiles como prisioneros de guerra, y fue perpetrada con el objetivo de extraer información o confesiones, forzar cooperación, castigar, intimidar o humillar individualmente o como grupo. La comisión recogió evidencias de uso de esta violencia sexual como parte de la tortura ejercida por las autoridades rusas, con métodos como la violación, descargas eléctricas en genitales y mutilación, entre otras. Adicionalmente, la comisión también documentó casos en que las fuerzas rusas impusieron desnudos forzados en situaciones de detención, puestos de control y en “puestos de filtración” (puestos de inspecciones forzadas de ciudadanos). En este caso, desnudos forzados durante periodos prolongados pueden ser una forma de violencia sexual, como señaló la comisión. En conjunto, la comisión concluyó que algunos miembros de las fuerzas armadas

15. Human Rights Council, [Conflict-related sexual violence against women and girls in South Sudan](#), A/HRC/49/CRP.4, 21 de marzo de 2022.

16. Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, [Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine](#), Human Rights Council, A/HRC/52/62, 15 de marzo de 2023.

rusas han cometido crimen de guerra de violación y violencia sexual, que puede equivaler a tortura.

Por otra parte, la Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés)¹⁷ documentó 133 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en el periodo entre febrero de 2022 y 31 de enero de 2023, en su mayoría cometidos en territorio de Ucrania ocupado por Rusia y principalmente (109 casos) perpetrada por fuerzas armadas rusas, autoridades policiales rusas o personal ruso de prisiones.¹⁸ Esos 133 casos afectaron a 85 hombres, 45 mujeres y 3 niñas. La violencia sexual documentada por la HRMMU fue perpetrada en gran parte en contextos de privación de libertad y en áreas residenciales, así como en los procesos de “filtración” por parte de las fuerzas armadas rusas.

Asimismo, según recogió ACNUDH, la Oficina de la Fiscalía General de Ucrania informó de que a finales de enero de 2023 tenía iniciadas investigaciones relativas a 155 casos de violencia sexual relacionada con conflicto armado cometidas por fuerzas armadas rusas contra 106 mujeres, 38 hombres y 11 niñas desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022.¹⁹ De estos 155 casos, 65 de ellos (el 42%) hacían referencia a la región de Jersón, otros 52 a la región de Kiev (34%), seguidos de las regiones de Donetsk (17 casos), Járkov (9), Zaporíyia (6), Chernihiv (4), Mikolaiv (1) y Lugansk (1). ACNUDH dio reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno ucraniano para integrar un enfoque centrado en las personas víctimas en sus investigaciones, así como para proporcionar asistencia a supervivientes. La asistencia a personas víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata de personas fue uno de los ámbitos contenidos en el nuevo plan de acción para la implementación de la Resolución 1325, adoptado en diciembre de 2022. Asimismo, organizaciones de mujeres de Ucrania denunciaron el uso de violencia sexual por las fuerzas rusas como arma de guerra en áreas bajo ocupación y señalaron que los casos denunciados podían ser la punta del iceberg. La rama ucraniana de la ONG La Strada, que trabaja en el ámbito de la promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia de género, señaló que solo durante el primer mes de invasión y guerra sus líneas de atención telefónica y servicios de apoyo a través de plataformas sociales recibieron 10.000 llamadas o mensajes, en su mayoría de la región de Kiev.²⁰ Al mismo tiempo, La Strada-Ucrania instó a la no victimización de las mujeres ucranianas. La asociación de mujeres juristas ucranianas “JurFem” también señaló la necesidad

de que medios de comunicación, cargos públicos y activistas informen sobre este ámbito siguiendo criterios de información con enfoque de género, para no generar daños añadidos en las personas contra las que se ha perpetrado esta violencia.²¹

ONG internacionales también documentaron algunos casos de violencia sexual, como HRW.²² HRW alertó de las dificultades de acceso a asistencia que afrontaban las personas supervivientes de violencia sexual, incluyendo asistencia médica de urgencia, y entre los obstáculos al acceso a servicios médicos, psicosociales, legales y socioeconómicos señaló las hostilidades armadas, la ocupación, el desplazamiento forzado, la destrucción de servicios médicos o la falta de éstos y de material médico.²³

Por otra parte, también se documentó violencia sexual por fuerzas ucranianas, en menor escala. En el periodo entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, ACNUDH documentó 24 casos de violencia sexual en áreas bajo control del Gobierno de Ucrania, que afectaban a 18 hombres y seis mujeres.²⁴ Todos estos casos tuvieron lugar entre marzo y julio de 2022 y en su mayoría consistieron en amenazas de uso de violencia sexual por fuerzas de seguridad ucranianas en las primeras etapas de detención. Según ACNUDH, muchos casos también implicaron desnudos forzados de personas que supuestamente habían infringido la ley, perpetrados por civiles o miembros de las fuerzas de defensa territorial.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En relación a la **respuesta de Naciones Unidas frente a la explotación y abusos sexuales por parte de personal que desempeña servicio bajo su mandato**, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, desde 2017, centrada en cuatro áreas de acción: dar prioridad a los derechos y dignidad de la víctimas; poner fin a la impunidad mediante el fortalecimiento de la presentación de denuncias; colaborar con los Estados,

17. Misión desplegada en 2014 en Ucrania y desde el inicio de la invasión con foco en la documentación de violaciones del derecho Internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos por todas las partes en conflicto.

18. OHCHR, *Report on the human rights situation, 1 August 2022 to 31 January 2023*, OHCHR, 24 de marzo de 2023.

19. *Ibid.*

20. EUAM, “Alyona Kryvulyak: “La Strada hotline is witnessing a trauma which might destroy a generation””, *EUAM*, 13 de mayo de 2022.

21. ONU Mujeres, “In the words of Larysa Denysenko, Ukrainian legal expert: “Sexual violence is a tactic of intimidation, torture and humiliation”, 17 de junio de 2022.

22. HRW. “Ukraine. Events of 2022”, *World Report 2023*. HRW, 2023.

23. *Ibid.*

24. OHCHR, *Report on the human rights situation, 1 August 2022 to 31 January 2023*, OHCHR, 24 de marzo de 2023.

sociedad civil y actores asociados; y mejorar las comunicaciones. En 2022 se anunció el fortalecimiento del cargo de Coordinador Especial para mejorar la respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación y Abuso Sexual, que pasó a tener el nivel de Secretario General Adjunto, con una mayor dotación de recursos, con el objetivo de mejorar el trabajo en este ámbito. No obstante, persistieron las denuncias de explotación y abuso sexual por parte de personal de Naciones Unidas. El informe del Secretario General recogió que en 2022 hubo 79 denuncias relativas a operaciones de mantenimiento de la paz y políticas especiales, frente a las 75 que se habían producido el año anterior.²⁵ El informe señaló que se identificó a 116 víctimas, de las que 90 eran personas adultas y 26 menores. Las denuncias señalaban a 115 perpetradores incluyendo a 46 hombres en 61 demandas de paternidad y manutención de niños y niñas. Especialmente preocupante fue el hecho de que dos misiones de mantenimiento de la paz concentraron el 90% de las denuncias, MONUSCO con 48 alegaciones y MINUSCA con 24. El resto de denuncias se afectaron a las misiones UNMISS (Sudán del Sur), MINUSMA (Malí), UNFIL (Líbano), la antigua MINUSTAH (Haití) y la UNAMA. El informe destaca que hubo un aumento en el número de denuncias que involucraron a personal militar y civil y una reducción en las denuncias contra personal policial. El informe del secretario general señala que la lucha contra la impunidad continúa siendo una prioridad, pero no se especifican qué medidas se han adoptado contra los perpetradores de violencia, y únicamente se señalan iniciativas de formación para mejorar las investigaciones relativas a la violencia y explotación sexual.

Dos misiones de mantenimiento de la paz, MONUSCO y MINUSCA, concentraron el 90% de las denuncias por abuso y explotación sexual

En relación a la invasión de **Rusia** a **Ucrania** y las denuncias de violencia sexual -así como de otras vulneraciones de derechos humanos-, diferentes organismos llevaron a cabo respuestas en forma de documentación e investigación de la violencia sexual. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició en marzo de 2022 la recopilación de pruebas para una investigación sobre alegaciones pasadas y presentes de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en Ucrania desde 2013. 43 países solicitaron al TPI que investigara los posibles crímenes de guerra. Ucrania no es parte del Estatuto de Roma, pero ha aceptado por segunda vez la jurisdicción del tribunal para la investigación de crímenes cometidos en su territorio desde 2013. Rusia tampoco es parte del Estatuto de Roma. Por otra parte, se sumaron las investigaciones de la Oficina de la Fiscalía general del Gobierno de Ucrania

sobre violencia sexual así como otras vulneraciones de derechos humanos, actor al que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal daba apoyo en el ámbito de la coordinación con diversas investigaciones internacionales promovidas por diferentes estados. También la Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) de ACNUDH así como la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania –establecida por el Consejo de Derechos Humanos– documentaron violencia sexual. ONG locales e internacionales también se involucraron en la respuesta.²⁶

Además, el Gobierno de Ucrania desarrolló la Estrategia de Prevención y respuesta a la Violencia Sexual relacionada con el Conflicto, con apoyo de la HRMMU y de ONU Mujeres. Asimismo, el Gobierno ucraniano y Naciones Unidas (a través de la Secretaria General y Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos) firmaron un marco de cooperación en mayo de 2022 con el objetivo de fortalecer la prevención y respuesta a la violencia sexual relacionada con el conflicto en el contexto de la invasión.²⁷ El acuerdo señalaba 16

áreas de acción e instaba a la comunidad internacional y a donantes a proporcionar apoyo financiero y técnico al Gobierno de Ucrania para implementar su actualización del plan acción nacional sobre la Resolución 1325, que incluye medidas de prevención y repuesta a la violencia sexual relacionada con el conflicto. Por otra parte, el Gobierno Ucraniano adoptó y ratificó en junio el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor en noviembre. Su adopción había sido una demanda clave de las organizaciones y activistas de derechos humanos de las mujeres del país. La Convención de Estambul, que es de aplicación en tiempos de paz y de guerra, reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y tiene entre sus objetivos la protección contra todas las formas de violencia, así como la prevención, persecución y eliminación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real, incluyendo el empoderamiento de las mujeres, entre otros. El tratado abarca violencia en el ámbito doméstico así como otras formas de violencia, incluyendo violencia física y psicológica, violencia sexual incluyendo la violación, acoso, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, acoso sexual, abortos

25. Secretario General de la ONU, *Special measures for protection from sexual exploitation and abuse. Report of the Secretary-General, A/77/748* 16 de febrero de 2023.

26. Horne, Cynthia M. "Accountability for atrocity crimes in Ukraine: Gendering transitional justice", *Women's Studies International Forum* 96 (2023).

27. Gobierno de Ucrania y Oficina de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, *Framework on cooperation between the Government of Ukraine and the UN on prevention and response to conflict-related sexual violence*, mayo de 2022.

forzosos, esterilizaciones forzosas y delitos cometidos supuestamente en nombre del “honor”. La organización La Strada Ucrania calificó la ratificación de momento histórico y señaló que esperaban contribuyese a reducir la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en Ucrania, problemática agravada por el contexto de conflicto armado.²⁸ Amnistía Internacional describió la ratificación del convenio de Estambul como victoria histórica para los derechos de las mujeres en Ucrania.

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente.

En Irán, las protestas que se activaron en el país a partir de septiembre de 2022 tras la muerte en custodia policial de una joven kurda tuvieron un componente central de reivindicación por los derechos y libertades de las mujeres. Las movilizaciones, que se enmarcan en un proceso de malestar político y social de más larga data en el país, contaron con una extraordinaria participación y liderazgo de las mujeres iraníes. Sus demandas, enarboladas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” -una consigna de origen kurdo- concitaron un amplio apoyo entre hombres y mujeres y trascendieron también diferencias generacionales y étnicas. La rebelión frente al hiyab obligatorio como símbolo de la negativa del Estado a reconocer la libre autodeterminación de las mujeres alentó discusiones más amplias sobre temas de género, étnicos, sociales, económicos y políticos. En este sentido, las protestas pusieron en evidencia las interconexiones entre diferentes agravios, discriminaciones y formas de opresión. Cabe destacar que las mujeres, muchas de ellas jóvenes y menores de edad, protagonizaron acciones altamente simbólicas para desafiar los códigos y convenciones impuestos por el régimen, quemando sus pañuelos, cortando sus cabelleras o bailando en las calles. En línea con políticas previas, el régimen reaccionó ante las movilizaciones con una severa represión a manos de las fuerzas policiales y milicias progubernamentales. Hasta finales de 2022, se estima que más de 500 personas habían muerto en el marco de las protestas, entre ellas un centenar de mujeres. Otras miles de personas resultaron heridas a causa de la represión gubernamental, en la que se identificó un uso de la violencia deliberado contra las mujeres. ONG y personal médico constataron una mayor prevalencia de mujeres entre las personas heridas en

El gobierno iraní reprimió duramente las manifestaciones de mujeres en todo el país reivindicando mayores libertades y reconocimiento a sus derechos

el rostro y genitales. Al finalizar el año, comenzaron a denunciarse casos de envenenamientos de niñas en escuelas, atribuidos a sectores que querían castigar a las menores por su participación en el movimiento de protesta.²⁹

En la región MENA también cabe destacar que una serie de **feminicidios** ocurridos en Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU) motivaron una oleada de indignación entre activistas y grupos feministas a mediados de año. Los casos, que se registraron con pocos días de diferencia en el mes de junio, presentaron un patrón similar. En el primer caso, ocurrido en Egipto, una joven de 21 años fue asesinada por un hombre del que había recibido una propuesta de matrimonio y que ella había rechazado. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en las afueras de la universidad donde la joven que cursaba sus estudios. Días más tarde, otra joven estudiante fue tiroteada en una universidad de Amán, capital de Jordania, por un hombre con el que había rechazado casarse. Un tercer caso, que tuvo menor notoriedad mediática que los dos previos, afectó a otra joven jordana que fue asesinada en EAU. Tras estos asesinatos machistas se multiplicaron los mensajes de rabia y pesar en las redes sociales, así como las demandas de justicia y seguridad para las mujeres. Activistas y entidades interpellaron a las autoridades para que aborden el machismo y la misoginia y para que ofrezcan respuestas sustantivas ante los elevados niveles de violencia contra las mujeres en países de la región. Ante otros casos similares de feminicidios y otras expresiones de la violencia machista en la región, organizaciones feministas convocaron una protesta transnacional el 6 de julio para denunciar el patriarcado y el control de sus cuerpos y sus vidas, para reclamar cambios estructurales y legales y para exigir que las instituciones cumplan con sus obligaciones y garanticen el derecho a la vida y la seguridad de las mujeres.

En **Afganistán**, el Gobierno talibán aprobó en diferentes momentos del año nuevas restricciones a los derechos de las mujeres, entre las que cabe destacar la imposición de reglas de vestimenta estrictas que obligan a las mujeres a permanecer completamente tapadas, a excepción de los ojos, en el espacio público y a no abandonar sus casas “si no es estrictamente necesario” o la prohibición de desplazarse por el país sin estar acompañadas de un hombre. A pesar de que se anunció que las niñas podrían volver a recibir educación secundaria, la medida no se hizo efectiva, argumentándose que para ello era necesario un cambio en las condiciones de seguridad o la necesidad de uniformes e infraestructuras para garantizar la completa segregación. El regreso de las niñas a las aulas de forma generalizada no se llegó

28. Semeryn, Khrystyna, “Russian Invasion Overshadows Domestic Violence in Ukraine”, *Institute for War and Peace Reporting*, 11 de julio de 2022.

29. Para más información, véase Pamela Urrutia, “La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista”, *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, No.27, marzo de 2023.

a producir, solo sucedió en algunas zonas del país. Por otra parte, en diciembre de 2022 el ministro de Educación publicó una orden que prohibía el acceso de las mujeres a todas las universidades del país, públicas y privadas. La prohibición de acceso a la educación para las niñas y las jóvenes continuó siendo el principal obstáculo para que haya un reconocimiento oficial al régimen talibán por parte de otros Gobiernos. El régimen talibán no ha recibido por el momento ningún reconocimiento gubernamental. Estas prohibiciones se sumaron a la imposibilidad de acceder a prácticamente ningún trabajo remunerado para las mujeres y a su completa exclusión del ámbito gubernamental y político. Por otra parte, todas las manifestaciones públicas organizadas por mujeres en protesta por las violaciones a sus derechos fundamentales que se repitieron en diferentes momentos del año fueron reprimidas violentamente. Estas protestas se produjeron para exigir la reapertura de la educación secundaria para las niñas y denunciar las violaciones a los derechos de las mujeres, como la exclusión del trabajo remunerado o la participación política y la exigencia de cubrirse el rostro en los espacios públicos, entre otros motivos.

La invasión de **Rusia a Ucrania** llevó al país a una situación de grave emergencia con dimensión de género. Como recoge ONU Mujeres, además de la violencia sexual relacionada con el conflicto, se denunciaron múltiples formas de violencia de género, incluyendo violencia doméstica, explotación y abuso sexual, acoso sexual, abusos económicos, que exacerbaban situaciones previas a la guerra.³⁰ Según señaló un informe de ACNUDH, el número de denuncias de violencia doméstica presentadas ante la policía disminuyó en 2022 en comparación con el año anterior debido a las hostilidades armadas, el desplazamiento forzado y la ocupación.³¹ En todo caso, un informe de ONU Mujeres y CARE de mayo de 2022 señalaba que las personas entrevistadas identificaban un incremento de la violencia doméstica pero que el cambio de prioridades en el contexto de guerra había reducido el acceso a protección y apoyo en este ámbito.³² En conjunto, ese informe sobre la primera etapa de la invasión señalaba también que las mujeres afrontaban dificultades de acceso a servicios de apoyo, pérdidas de medios de vida y problemas para poder cubrir las necesidades básicas de las personas dependientes. También señalaron que la guerra estaba agravando

En Afganistán, el Gobierno talibán aprobó en diferentes del año nuevas restricciones a los derechos de las mujeres, impidiendo el acceso a la educación de adolescentes y mujeres jóvenes

desigualdades y discriminación preexistentes de género y de otras dimensiones incluyendo contra mujeres y hombres gitanos y población LGTBQ+, si bien personas entrevistadas LGTBQ+ señalaron que las prioridades actuales estaban centradas en la supervivencia frente a la guerra, por encima de otras preocupaciones.³³

El NGOWG on Peace and Security en un análisis de abril de 2022 señaló los impactos en las mujeres de mayor edad -que constituyen la mayoría de las personas mayores en Ucrania-, así como los impactos en acceso a atención médica y en familias monomarentales, entre otros.³⁴ Otro de los impactos de la invasión fue el desplazamiento forzado de población. A finales de 2022 se estimaba en 5,9 millones de personas desplazadas internas, 7,9 millones las personas registradas como refugiadas en Europa y en 4,9 millones las personas refugiadas de Ucrania registradas

para recibir protección temporal en Europa o en otros mecanismos de protección nacional similares. La ley marcial impuesta por Ucrania en febrero de 2022 prohibía a los varones de entre 16 y 60 años de Ucrania salir del país, salvo excepciones. Según ACNUR, en torno al 90% de las personas desplazadas eran mujeres y población menor de edad. Organizaciones de Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría que trabajan en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos denunciaron junto a organizaciones y redes internacionales las restricciones al acceso a los servicios iniciales mínimos para la salud sexual y reproductiva en esos países de destino y tránsito de mujeres desplazadas ucranianas y de otros orígenes (anticoncepción de emergencia y otros métodos anticonceptivos, el acceso al aborto, atención prenatal, profilaxis postexposición, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual).³⁵ Asimismo, la invasión agravó formas de discriminación preexistentes contra grupos de población, como personas gitanas, entrecruzadas con la discriminación y violencia de género y otras dimensiones. Minority Rights alertó de formas de discriminación como la segregación de la población ucraniana gitana en los centros de recepción de personas refugiadas en países como Moldova, así como mayores dificultades de acceso a medios de vida, entre otros.³⁶ Señalaron también cómo cuestiones como la falta de documentación estaba teniendo impactos en el acceso a la asistencia humanitaria y al asilo. Esta ONG se hizo eco también de denuncias del Fondo de Mujeres Roma “Chiricli” sobre los impedimentos a mujeres y menores gitanas/os para cruzar la frontera a Moldova, Polonia y Hungría para buscar asilo.

30. UN Women, *Securing gender equality in Ukraine amidst the war*, 2023.

31. OHCHR, *Report on the human rights situation*, 1 August 2022 to 31 January 2023, OHCHR, 24 de marzo de 2023.

32. CARE y ONU Mujeres, *Rapid Gender Analysis of Ukraine*, 4 de mayo.

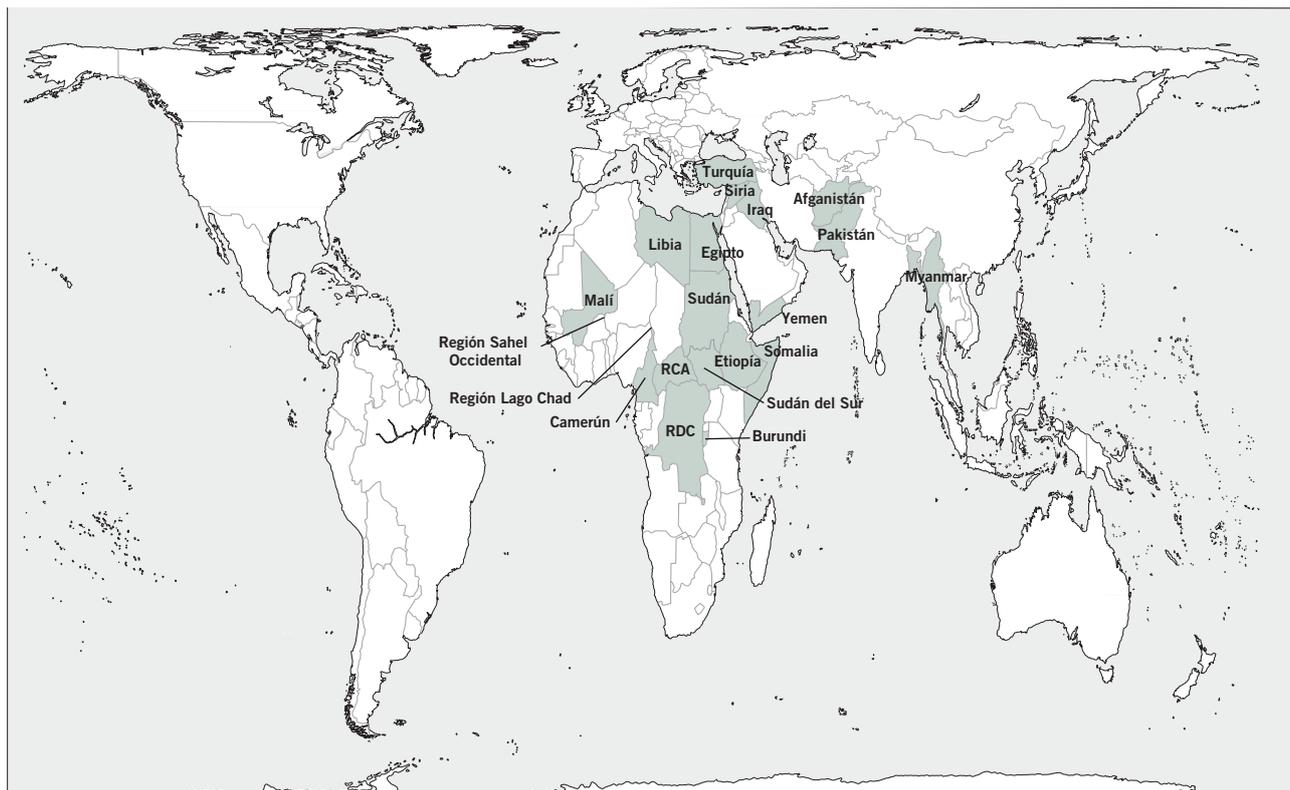
33. Ibid.

34. NGO Working Group on Women, Peace and Security, *Gender Analysis of the Situation in Ukraine*, abril de 2022.

35. VV.AA. “Llamada a la acción. La salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas y de poblaciones marginadas afectadas por el conflicto de Ucrania”, 17 de marzo de 2022.

36. Popenko, Viola, “For displaced Roma, the conflict has exacerbated existing patterns of discrimination – and left them without an income”, Minority Rights, 2022.

Mapa 3.2. Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+



■ Conflictos armados en 2022 en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+

Tabla 3.4. Países en conflicto armado con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+³⁷

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO	EUROPA
Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West) Etiopía (Tigré) Etiopía (Oromiya) Libia Malí Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental República Centroafricana RDC (este) RDC (este-ADF) Somalia Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Iraq Siria Yemen	Turquía (sudeste)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2023 y de Kellyn Botha, *Nuestras Identidades Bajo Arresto. Un panorama global de la aplicación de normas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo y las expresiones de género diversas*, ILGA, 2021.

37. Esta tabla incluye conflictos armados en 2022 en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+ .

En 2022, 24 de los 33 conflictos armados activos transcurrieron en países en los que ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra población LGTBIQ+, agravando los impactos de la violencia en estos contextos. 15 de los 17 conflictos armados de alta intensidad de 2022 (88% de los casos) tuvieron lugar en países con legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+. Fueron los conflictos de Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigré), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen. Por otra parte, personas expertas de Naciones Unidas de diversos ámbitos alertaron de que las violaciones de derechos humanos y situación de vulnerabilidad estructural que afronta la población LGTBIQ+ se intensifica en los procesos de desplazamiento forzado.³⁸ Señalan que no hay cifras precisas de número de personas LGTBIQ+ desplazadas, pero que podrían aumentar en próximos años; e instan a abordar las causas de fondo del desplazamiento forzado, así como a políticas públicas e implementación de medidas que pongan fin a la violencia y discriminación que afrontan las personas LGTBIQ+. Las más de 20 voces expertas firmantes alertaron sobre formas de abuso como la violencia de género, la exclusión de servicios esenciales como alojamiento seguro y acceso a alimentos y otros bienes básicos y de la atención médica y psicosocial y a medios de vida, entre otros. Instaron al establecimiento de programas que tengan en cuenta las necesidades específicas de la población LGTBIQ+ en todas las fases del desplazamiento; a la mejora de condiciones de acogida, incluyendo garantías de alojamiento seguro y acceso a servicios de salud; garantías de acceso a la protección, asilo y a la determinación del estatus de refugiado; la provisión de opciones de soluciones duraderas, incluyendo de reasentamiento; la generación de datos y evidencias, con recopilación, manejo y denuncias siguiendo procedimientos éticos. Destacan que todas las medidas deben ir encaminadas a la protección y las garantías de ejercicio de los derechos fundamentales y la asistencia y el apoyo en esos ámbitos.

En Uganda, durante el año se mantuvo la criminalización y la retórica hostil contra la población LGTBIQ+ por parte de figuras públicas, así como la represión del Gobierno contra los grupos de derechos LGTBIQ+ y otras organizaciones de derechos humanos. El 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda prohibió la organización

15 de los 17 conflictos armados de alta intensidad de 2022 (88% de los casos) tuvieron lugar en países donde ILGA había documentado la aplicación de legislación o políticas criminalizantes contra la población LGTBIQ+

Sexual Minorities Uganda (SMUG), una destacada organización de derechos LGTBIQ+.³⁹ Ya en 2021 la Oficina había suspendido indefinidamente a 54 grupos de la sociedad civil sin el debido proceso, restringiendo el trabajo de los grupos de derechos humanos en el país. A nivel parlamentario, también se avanzó en el proyecto de ley contra la homosexualidad, que busca ampliar la Ley de Delitos Sexuales aprobada por el Parlamento en 2021, que penaliza cualquier “acto sexual entre personas del mismo género”, así como el sexo anal entre personas de cualquier género, con hasta 10 años de prisión. Se preveía que el nuevo proyecto de ley que criminaliza la homosexualidad con penas aún mayores, incluida la pena capital, se presentase y aprobase en el parlamento a principios de 2023.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y ONU Mujeres publicaron un informe conjunto analizando los **asesinatos por motivos de género de mujeres y niñas en 2021**.⁴⁰ El informe señalaba que las estimaciones mundiales apuntaban a que durante 2021, 81.100 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente y que la mayoría de estos asesinatos tuvieron una motivación de género. 45.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas íntimas o por otros integrantes de sus familias en 2021. El informe destaca que a pesar de que los hombres y los niños continúan siendo las principales víctimas de los homicidios a nivel global, representando el 81% de estas víctimas, la violencia homicida que se comete en el espacio privado y familiar afecta de forma desproporcionada a las mujeres y niñas. Los datos que sostienen estas afirmaciones apuntan a que el 56% de los asesinatos de mujeres se cometen en el ámbito privado, por sus parejas o miembros de sus familias, mientras que

solamente el 11% de los asesinatos de hombres tienen lugar en este contexto privado. No obstante, en el informe se recogen las dificultades para identificar la violencia de género y se señala que no se cuenta con información sobre un 10% aproximadamente de los homicidios de mujeres, lo que dificulta las políticas públicas de respuesta frente a esta forma extrema de violencia de género. Globalmente, Asia fue la región del mundo en la que se registró un mayor número de homicidios de mujeres en 2021, con 17.800 mujeres asesinadas, seguida de África en segundo lugar, donde fueron asesinadas 17.200 mujeres. Le seguía América, con 7.500 asesinatos de mujeres, Europa con 2.500 y Oceanía con 300. A nivel regional, cabe señalar que en Europa se produjo una reducción en el número de homicidios de mujeres cometidos por parejas o familiares, mientras que en el continente americano se

38. VV.AA. *Forcibly displaced LGBT persons face major challenges in search of safe haven*, ACNUDH, 16 de mayo de 2022.

39. Oryen Nyeko, “Uganda Bans Prominent LGBTQ Rights Group. End Harassment, Allow Group to Operate”, HRW, 12 de Agosto de 2022.

40. UNODC y ONU Mujeres, *Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide). Global estimates of gender-related killings of women and girls in the private sphere in 2021. Improving data to improve responses*, UNODC y ONU Mujeres, 2021.

produjo un aumento. Así, entre 2010 y 2021 en Europa se constató una disminución del 19% –con diferencias entre subregiones– y en América un aumento del 6%. No existían datos suficientes para identificar una tendencia en Asia, África y Oceanía. Por otra parte, la revista *The Lancet* publicó una investigación⁴¹ en la que señaló que una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años que alguna vez han tenido pareja (el 27%) a nivel mundial, habían experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Este porcentaje era del 24% en las mujeres de entre 15 y 19 años y del 26% de las mujeres entre 19 y 24 años. El estudio analizó datos procedentes de 161 países, lo que representa el 90% de la población mundial de mujeres y niñas con 15 años o más. En los países de renta más baja se registraron índices de prevalencia de la violencia más elevados. El estudio señala que los países no están en la senda de cumplir con la meta del ODS de igualdad de género relativa a la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

En 2021 fueron asesinadas 45.000 mujeres por su parejas o familiares, lo que representa el 56% del total de asesinatos de mujeres a nivel mundial

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

En octubre se celebró una nueva sesión del debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión.⁴²

El tema central del año 2022 fue la situación de las defensoras de derechos humanos y su protección.

En su informe anual el secretario general destacó la persecución que sufren las defensoras en todo el mundo, llegando a ser víctimas de asesinatos por su trabajo en defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. El secretario general destacó que durante el año 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) había documentado 29 casos de asesinatos de defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas en ocho países afectados por conflictos, una cifra que queda por debajo de la cifra real de asesinatos. Las defensoras de derechos humanos sufren estigma, persecución y

violencia y el secretario general instó a los gobiernos a que adopten todas las medidas posibles para su protección. Como muestra del impacto de esta persecución, señaló que una proporción importante de las mujeres que han comparecido ante el Consejo de Seguridad en los debates abiertos sobre mujeres, paz y seguridad, han sido objeto de acoso.

Con respecto a la participación activa de las mujeres en las negociaciones de paz que tienen lugar en contextos de conflicto armado o tensión, el informe del secretario general señalaba que durante el año 2021 se constató la participación de mujeres como negociadoras o delegadas de las partes en conflicto en todos los procesos de paz que contaban con la facilitación o mediación de Naciones Unidas. Sin embargo, en un análisis global del conjunto de procesos de paz, la representación de las mujeres se situó en el 19%, frente al 23% de participación en el año 2020. En lo que respecta a los acuerdos de paz, el informe señala que en 2021, 8 de los 25 acuerdos de paz que se firmaron (32%) incluían algún tipo de cláusula o disposición en la que se hicieran referencia al género, a las mujeres o la niñas. Esto supuso un incremento del 26% en la presencia de este tipo de disposiciones con respecto a 2020, pero muestra cómo la mayoría de acuerdos de paz siguen siendo completamente excluyentes con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

En 2022, 21 países que protagonizaban negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos. Nueve de estos países estaban en África (Camerún, Malí, Marruecos, Mozambique, RCA, RDC, Senegal, Sudán, Sudán del Sur); dos en Asia (Corea y Filipinas); ocho en Europa (Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Moldova, Serbia, Kosovo y Ucrania) y dos en Oriente Medio (Palestina y Yemen). Ninguno de los dos países en el continente americano con unas negociaciones en curso contaba con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325. Así, en 21 de las 39 negociaciones activas durante 2022 al menos uno de los actores gubernamentales negociadores contaba con un plan de acción que debía guiar su actuación en materia de inclusión de la perspectiva de género y de participación de las mujeres. Las 21 negociaciones y procesos de paz tuvieron lugar en Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Malí, Marruecos–Sáhara Occidental, Mozambique, RCA, RDC, Senegal, Sudán, Sudán del sur, Sudán-Sudán del Sur, Corea (Corea, RPD–Corea, Rep. de), Filipinas (MILF), Filipinas (NDF), Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Chipre, Georgia (Abjasia, Osetia del Sur), Moldova (Transnistria), Serbia–Kosovo, Rusia–Ucrania,

41. Lynnmarie Sardinha, Mathieu Maheu-Giroux, Heidi Stöckl, Sarah Rachel Meyer, Claudia García-Moreno, "Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018", *The Lancet*, Volume 399, Issue 10327, p. 803-813, 26 de febrero de 2022.

42. Secretario General, *Women and peace and security. Report of the Secretary-General, S/2022/740*, 5 de octubre de 2022.

Tabla 3.5. Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz

Camerún (2017)	Armenia (2019)
Malí (2012)	Azerbaiyán (2020)
Marruecos (2022)	Chipre (2020)
Mozambique (2019)	Georgia (2018)
RCA (2014)	Moldova (2018)
RDC (2010)	Serbia (2017)
Senegal (2011)	Kosovo (2014)
Sudán (2020)	Ucrania (2016)
Sudán del Sur (2015)	Palestina (2015)
Corea (2014)	Yemen (2019)
Filipinas (2009)	

*Entre paréntesis año de aprobación del Plan de Acción Nacional

Palestina y Yemen. **Sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, la mayoría de negociaciones de paz continuaron excluyendo a las mujeres y tampoco se incorporó la perspectiva de género en las dinámicas de los procesos de paz, poniendo en entredicho la eficacia de los planes de acción como herramientas de construcción de paz inclusiva.** En el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno de Ucrania actualizó en diciembre de 2022 su plan de acción nacional sobre la Resolución 1325. El plan de acción que estaba en vigor era en segundo plan de Ucrania (2016-2020, 2020-2025). La actualización del plan mantiene su periodo de acción hasta 2025.⁴³

Con respecto a la financiación de la implementación de la agenda, el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria presentó los resultados de la encuesta realizada con las organizaciones de mujeres beneficiarias de la financiación de este Fondo.⁴⁴ Cabe destacar que a pesar de las recomendaciones efectuadas en 2020 por el Secretario General de la ONU para que al menos el 15% de la AOD se dedicase a promover como objetivo principal la igualdad de género en países afectados por conflictos armados, incluyendo a través de la financiación de organizaciones de mujeres, esta financiación representó solamente el 0,4% del total de la ayuda en 2021, y además permanecía estancada desde 2010 tal y como recogía el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria. La encuesta, que contó con la participación de representantes de más de 160 organizaciones de mujeres de 23 países reveló que el 89% de las organizaciones consideraba que la continuidad de su trabajo estaba en riesgo moderado, alto o muy alto y que más de la mitad de

8 de los 25 acuerdos de paz que se firmaron en 2021 (32%) incluían algún tipo de cláusula o disposición en la que se hicieran referencia al género, a las mujeres o la niñas, según datos de la ONU

las organizaciones (57%) sentían que su continuidad estaba en riesgo alto o muy alto. La región en la que el riesgo era mayor era Asia Pacífico, donde se incluían organizaciones de mujeres en países como Afganistán o Myanmar y donde el 85% valoraban que el riesgo para su continuidad era alto o muy alto. Cerca del 60% de las organizaciones de mujeres identificaban como una de sus principales preocupaciones el acceso a financiación para su funcionamiento institucional o para sus programas multianuales y señalaban además la falta de flexibilidad y adecuación a las circunstancias de los contextos en conflicto y la excesiva burocratización como algunas de las principales barreras para acceder a esta financiación. Cerca de la mitad de las organizaciones de mujeres en contextos de conflicto habían recibido amenazas como resultado de su trabajo en el ámbito de la agenda mujeres, paz y seguridad, lo que unido a las dificultades financieras hacía peligrar el trabajo de estas organizaciones.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2022.⁴⁵ Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

43. Gobierno de Ucrania, *National Action Plan on UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security until 2025*, 2022. Más información en WILPF, "Ukraine", *National Action Plans: At a Glance*, WILPF.

44. United Nations Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF), *Civil Society Organization (CSO) Annual Survey on Women, Peace and Security (WPS) and Humanitarian Action*, 13 de octubre de 2022.

45. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

En **Libia** las mujeres libias continuaron reivindicando una mayor presencia en las negociaciones y los espacios de decisión sobre el futuro político del país, en un contexto de crecientes amenazas y hostilidad hacia activistas y mujeres que se desempeñan en el ámbito público. Naciones Unidas advirtió de la propaganda y el discurso de odio, que viene afectando a funcionarias del ministerio de la Mujer y a activistas de la sociedad civil que reclaman una participación más sustantiva de las mujeres en el proceso político y la implementación de la agenda internacional mujeres, paz y seguridad. Como parte de los mecanismos de seguimiento internacional al proceso negociador en Libia, en particular en el ámbito de derechos humanos, defensoras libias presentaron su visión sobre los retos en este ámbito y también se analizaron experiencias de reconciliación internacionales y las lecciones sobre la importancia de asegurar la inclusión de las mujeres. En términos generales, y pese a las diversas reuniones celebradas en 2022, las negociaciones en el país norteafricano no consiguieron desbloquear el impasse político y las profundas divisiones.

En el caso de la disputa en torno al **Sáhara Occidental**, aunque el proceso negociador se mantuvo bloqueado durante todo el año, a lo largo de 2022 algunos hechos indicaron una mayor atención a las voces de las mujeres y a su participación en los esfuerzos por alcanzar una salida política al conflicto. Un ejemplo relevante fue la decisión del enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, de no visitar el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos en julio a causa de las restricciones impuestas por Rabat, que en la práctica impedían reuniones con representantes de la sociedad civil y organizaciones de mujeres. El informe anual del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental planteó explícitamente que el viaje de De Mistura fue suspendido “en coherencia con los principios de Naciones Unidas y, en particular, por la importancia que se otorga a la participación igualitaria y total implicación de las mujeres en todos los esfuerzos para mantener y promover la paz y la seguridad”. En su visita a los campos de refugiados saharauis en septiembre, De Mistura se reunió con grupos de la sociedad civil y organizaciones de mujeres, que le manifestaron su frustración por la falta de avances hacia una salida política y su preocupación por la situación humanitaria en los campos.

En el caso de **Yemen**, y pese a su importante papel en actividades de paz y seguridad, las mujeres yemeníes continuaron siendo excluidas de espacios de poder y decisión relevantes para una resolución política del conflicto armado. Durante 2022, activistas yemeníes reiteraron que los niveles de participación están muy por debajo de la cuota de 30% de representación en los espacios de decisión acordada en 2014 en las conclusiones de la Conferencia de Diálogo Nacional. No había mujeres en los comités establecidos tras la

adopción del acuerdo de Estocolmo en 2018 (sobre intercambio de prisioneros, seguridad militar y Taiz). En las conversaciones intra yemeníes auspiciadas por el Consejo de Cooperación de Golfo había mejorado la participación de mujeres en distintos ámbitos, pero permanecían excluidas de las discusiones sobre seguridad y antiterrorismo. El nuevo Consejo de Liderazgo Presidencial -creado en abril de 2022 y que intentó representar las distintas fuerzas del bando anti al-houhtista- se conformó sin la presencia de ninguna mujer. En la Comisión de Consulta y Reconciliación de 50 integrantes establecida como organismo asesor del consejo presidencial, el equipo ejecutivo incluyó una mujer entre sus cinco miembros. Tanto en Yemen como en **Siria**, donde se impuso el bloqueo en las negociaciones durante 2022, continuaron activos espacios consultivos de mujeres promovidos por Naciones Unidas.

En **Colombia** la Comisión de la Verdad presentó su informe final, titulado *Hay Futuro si Hay Verdad*,⁴⁶ en el que se recogieron los resultados de la investigación sobre el impacto del conflicto armado entre 1986 y 2016. La Comisión de la Verdad incluyó el enfoque de género interseccional como herramienta de análisis para investigar las consecuencias del conflicto en las mujeres y la población LGTBIQ+. El informe recogió algunos de los impactos de género, fundamentalmente la utilización de la violencia sexual. Así, se señala que todos los actores del conflicto cometieron violencia sexual, en diferente medida y con distintos patrones de victimización. Los perpetradores fueron hombres casi en su totalidad y las principales víctimas fueron mujeres en tres contextos fundamentalmente identificados en el informe: los contextos de indefensión como capturas o detenciones; en el escenario de control territorial en las comunidades; y en el contexto de operativos y masacres. La falta de mecanismos y garantías para denunciar las violencias y el estigma, fueron algunos de los factores que reforzaron la impunidad de este tipo de violencia. El informe recogió las cifras registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), en el que se constata que al menos 32.446 personas fueron víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual, siendo las mujeres y las niñas el 92% de las víctimas, especialmente en las áreas rurales. Asimismo, el informe recoge que la mayor parte de la violencia sexual de la que se tiene registro tuvo lugar entre 1997 y 2005. El informe también señala el impacto del conflicto en la población LGTBIQ+.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2022 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de las más relevantes.

En **Líbano**, afectado por una severa crisis política, económica y social, a lo largo del año se crearon una

46. Comisión de la Verdad, *Hay Futuro si Hay Verdad*, 2022.

decena de redes de mujeres mediadoras, con el apoyo de la ONU, para abordar disputas locales relacionadas con el acceso a combustible, gestión de residuos, violencia escolar y violencia comunitaria. Algunos de estos grupos se establecieron en el área de operaciones de la misión de la ONU en el país, UNIFIL. Además, Naciones Unidas destacó que como parte de los esfuerzos de construcción de paz en el país mujeres de localidades como Trípoli y Beqaa lideraron iniciativas de diálogo comunitario sobre el legado de la guerra civil y reconciliación. La ONU también convocó diálogos con mujeres de partidos políticos tradicionales y emergentes tras las protestas de 2019 y brindó apoyo a 450 potenciales candidatas a los comicios. La representación política de mujeres, sin embargo, continuó siendo muy limitada. En las elecciones celebradas en mayo, de las 718 personas candidatas un total de 118 eran mujeres (16,4%), aunque esta cifra representó un aumento respecto a las 86 (13,4%) en los comicios celebrados en 2018. Finalmente, solo ocho mujeres fueron electas -en un total de 128 escaños parlamentarios-, entre las cuales cuatro representantes de los grupos emergentes tras las protestas de 2019, dos de Fuerzas de Líbano, una del Movimiento Patriótico Libre y otra de Amal. En septiembre, la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas también publicó un informe sobre los derechos de nacionalidad e hizo un llamamiento a la igualdad entre hombres y mujeres en este ámbito.

En **Colombia** organizaciones de mujeres por la paz convocaron la III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, en la que participaron 100 mujeres de todo el país. Las anteriores Cumbres Nacionales se convocaron en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y el diálogo con el ELN y tuvieron como objetivo incidir en los procesos para promover la participación de las mujeres en las negociaciones. La Cumbre Nacional está conformada por Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia -ANMUCIC-; Casa de la Mujer; Colectivo de Pensamiento y Acción "Mujeres, Paz y Seguridad"; Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas; Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad; Mujeres por la Paz; y Ruta Pacífica de las Mujeres. En el marco de la III Cumbre Nacional se llevó a cabo una evaluación del proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC (2016) y se presentaron propuestas encaminadas a promover un nuevo proceso de diálogo con el grupo armado ELN. Las integrantes de la cumbre señalaron la falta de implementación del acuerdo de 2016 y el retraso en el proceso, y atribuyeron esta situación a la falta de voluntad política del Gobierno con respecto al avance de la implementación; a los insuficientes recursos económicos destinados a la implementación, a los obstáculos jurídicos que han dificultado el trabajo de las diferentes instancias de implementación y verificación y

a la falta de garantías de seguridad para las defensoras de derechos humanos, constructoras de paz y firmantes del acuerdo. El manifiesto final de la cumbre incluyó diferentes aspectos, como el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz con la incorporación del enfoque de género; el aumento del 50% de los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de lo acordado para el enfoque de derechos de las mujeres y de género; el cese inmediato de las violencias contra las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz; la incorporación en la política pública nacional de mujeres de manera clara en sus objetivos y metas el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, entre otras cuestiones.

Mujeres en **Ucrania** se movilizaron en múltiples esferas comunitarias en respuesta a la invasión, incluyendo en la evacuación de civiles y apoyo a las personas desplazadas, en la recogida y distribución de ayuda humanitaria, en las redes de apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica y de violencia sexual relacionada con la guerra, en la generación de refugios y espacios de protección, en la recogida de información para localizar a personas desaparecidas, en la documentación de vulneraciones de derechos humanos, en la atención a personas con necesidades específicas, incluyendo de salud o movilidad, entre muchos otros ámbitos de respuesta a la crisis, a través de iniciativas informales y autoorganizadas así como a través de organizaciones de la sociedad civil y en coordinación con las instituciones ucranianas. La participación activa de mujeres se produjo, a su vez, en el marco de la repuesta masiva de la población ucraniana en su conjunto -mujeres, hombres, población LGTBIQ+ en la respuesta frente a invasión y la crisis humanitaria. Población LGTBIQ+ se movilizó también en la provisión de apoyo mutuo específico frente a la invasión y sus riesgos de agravamiento de otras formas de discriminación preexistentes, incluyendo a través de apoyo en la búsqueda de alojamiento seguro. Muchas mujeres se sumaron a las fuerzas armadas y a las unidades de defensa territorial (ampliando las en torno a 32.000 mujeres que ya formaban parte del Ejército previo a la invasión), así como a funciones de apoyo directo a los actores armados, poniendo de manifiesto la heterogeneidad en respuesta a la invasión. En contraste, las negociaciones entre Rusia y Ucrania - iniciadas poco después de la invasión y mantenidas de manera fragmentada y con muchos obstáculos hasta quedar paralizadas en torno a abril de 2022 excluyeron la participación de mujeres, con la excepción de la viceprimera ministra y ministra para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Irina Vereshchuk, involucrada en las negociaciones en el ámbito humanitario (evacuaciones humanitarias, intercambio de prisioneros de guerra, entre otros). A su vez, la comisionada de derechos humanos Lyudmila Denisova también supervisó intercambios de prisioneros hasta mayo, mes en que fue destituida y sustituida por Dmytro Lubinets.⁴⁷

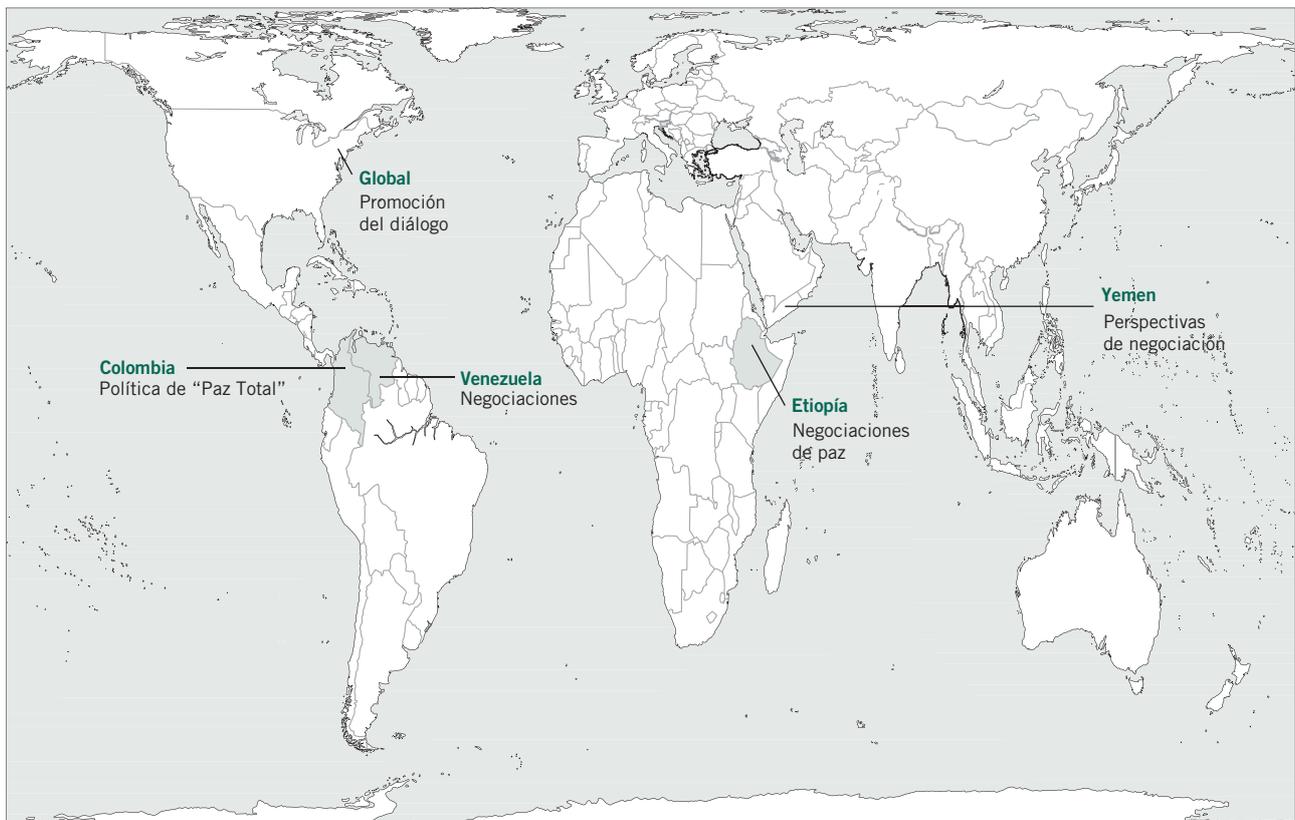
47. Véase el resumen sobre Ucrania en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria: 2023.

4. Oportunidades de paz

Tras analizar el año 2022 en materia de conflictividad y construcción de paz,¹ la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades de paz identificadas hacen referencia a la ventana de oportunidad para la paz en Etiopía, tras el cese de hostilidades en Tigré y el inicio de conversaciones sobre el conflicto en Oromiya; a las posibilidades de transformación de los conflictos armados en Colombia en el marco de la propuesta de Paz Total del presidente Gustavo Petro; a la consolidación de un contexto nacional e internacional más propicio para la resolución de la crisis en Venezuela a través del diálogo entre el Gobierno y la facción mayoritaria de la oposición; a la reducción de los niveles de violencia y convergencia de factores locales y regionales que podrían favorecer el abordaje del conflicto armado en Yemen por la vía de la negociación; y a la relevancia de apostar por la prevención y resolución negociada de conflictos, ante un contexto internacional de grave deterioro de la seguridad humana en muchos contextos y en el que cobran mayor importancia iniciativas como la Nueva Agenda de Paz impulsada por la ONU.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz



1. El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2022 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2023.

4.1. Etiopía, ante una nueva ventana de oportunidad para construir la paz

Etiopía vive inmersa en un complejo abanico de retos, profundos cambios e inestabilidad agravados en los últimos años. A este clima de inestabilidad se sumó el inicio del conflicto armado en la región de Tigré en noviembre de 2020 y la grave escalada de la violencia en la región de Oromiya durante 2022. El cese permanente de hostilidades alcanzado entre el Gobierno Federal y las autoridades político-militares de Tigré, así como el inicio de las conversaciones de paz en Oromiya con el grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), podrían suponer una nueva oportunidad para que el país empiece a transitar hacia un nuevo escenario político, no exento de riesgos y fragilidad.

El régimen que ha gobernado Etiopía desde 1991 se ha enfrentado a una serie de movimientos opositores que reclamaban avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) estuvo controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que gobernó el país entre 1991 y 2019 con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. El régimen federal étnico implantado por el EPRDF no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales, mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico como un freno a la consolidación del Estado-nación y exigen además una democratización de las instituciones.

La multitudinaria movilización social desde 2014 reprimida con extrema violencia contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y a la designación de Abiy Ahmed. Este último emprendió una serie de reformas¹ dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal controlado por el PP y el TPLF, que culminó con el estallido del conflicto en Tigré que ha causado miles de víctimas mortales y graves vulneraciones de los derechos humanos. En paralelo, durante 2022 se produjo una escalada de violencia por parte del grupo armado OLA y un aumento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad

federales y grupos paramilitares progubernamentales en la región de Oromiya, en paralelo a las negociaciones de paz entre el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré. Estas negociaciones habrían centrado la atención de la comunidad internacional en detrimento de la situación en Oromiya, según diversos análisis.

El 2 de noviembre de 2022 el Gobierno y las autoridades político-militares de la región de Tigré alcanzaron un acuerdo de cese permanente de hostilidades en Pretoria (Sudáfrica). Este compromiso estuvo precedido de la ruptura de la tregua humanitaria vigente entre marzo y agosto. Diversos análisis y voces de la diáspora situaron el desastre humanitario como la principal cuestión que ha empujado a las autoridades de Tigré a negociar y aceptar el acuerdo, entre otras cuestiones, que podría interpretarse como una concesión por parte del TPLF. Detalles incluidos en el acuerdo evidenciaban esta cuestión y dejaban en manos de la voluntad del Gobierno federal su implementación efectiva. En primer lugar, Eritrea no formó parte del acuerdo, por lo que no se vio forzada a aceptar ninguna de las provisiones establecidas por el Gobierno Federal. En segundo lugar, las limitadas dimensiones del mecanismo de supervisión del alto el fuego y la exclusión de la ONU, EEUU, UE e IGAD de la firma del pacto –fueron simples observadores y no firmantes del proceso– sembraron dudas sobre su implementación real sobre el terreno y pusieron en evidencia la victoria de la estrategia etíope de no incluir a la comunidad internacional. En tercer lugar, el acuerdo estableció que el Gobierno federal debería restablecer la autoridad en la región hasta que se celebrasen nuevas elecciones

y que el Gobierno federal planteaba una política global de justicia transicional nacional sin mencionar ningún mecanismo de investigación internacional de los crímenes cometidos en la región, tal y como destacaron HRW y Amnistía Internacional. A esto se sumaron las violaciones iniciales del alto el fuego por parte de los cuerpos de seguridad etíopes y eritreos y de las milicias de Amhara contra el TPLF desde la firma del acuerdo, que pusieron de manifiesto las dificultades para implementar este acuerdo y la fragilidad de la situación.

Sin embargo, la implementación del acuerdo por el momento ha sido positiva. En las semanas siguientes el liderazgo político-militar de Tigré acordó e inició el desarme efectivo de sus combatientes, disolvió el gobierno regional surgido de las elecciones de 2020 (no reconocidas por el Gobierno Federal que condujeron a la

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal y las autoridades político-militares de Tigré, así como el inicio de las conversaciones de paz con el grupo armado Oromo Liberation Army, podrían suponer una nueva oportunidad para que el país transite hacia un nuevo escenario político

1. Entre otras, Abiy disolvió la coalición EPRDF y la refundó en diciembre de 2019 en un nuevo partido de ámbito nacional, el Prosperity Party (PP), que rehuía el federalismo étnico, partido en el que el TPLF no quiso integrarse.

guerra), y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) inició la distribución de la ayuda humanitaria. El 12 de noviembre las partes firmaron en Nairobi la Declaración Ejecutiva sobre las Modalidades de Implementación del Acuerdo, en la que se contemplaba la entrega de las armas pesadas y la desmovilización de combatientes, el restablecimiento de servicios públicos en Tigré, la reactivación de la ayuda humanitaria y la retirada de todos los grupos armados y fuerzas extranjeras, en referencia a Eritrea, que combatieron junto al Ejército federal. El 22 de diciembre se acordó el establecimiento de la misión de monitoreo de la UA, tal y como establecía el acuerdo, y el 29 de diciembre se puso en marcha la misión. Eritrea progresivamente fue retirándose de la mayoría de ciudades de Tigré y en febrero de 2023 sus fuerzas prácticamente habían abandonado la región y solo algunas unidades menores permanecían en posiciones estratégicas en áreas fronterizas, según el líder negociador del TPLF, Getachew Reda,² conforme las autoridades político-militares de Tigré fueron entregando el armamento pesado en presencia de la misión de monitoreo de la UA. Entre diciembre y enero fue mejorando ostensiblemente el acceso humanitario a la región, según fuentes de Naciones Unidas,³ y se restablecieron las comunicaciones, así como los vuelos comerciales. El 3 de febrero el primer ministro Abiy Ahmed se reunió con los líderes del TPLF por primera vez desde 2020, y el consejero de seguridad nacional y líder negociador del Gobierno Federal, Redwan Hussein, anunció al día siguiente la entrega de 90 millones de dólares al banco central de Tigré para aumentar el flujo de caja. Días después el TPLF estableció un comité para formar una administración interina, y los líderes de Tigré a principios de marzo acordaron en una conferencia la composición de la administración interina, boicoteada por tres partidos opositores de Tigré bajo la acusación al TPLF de monopolizar el poder. El 17 de marzo el TPLF escogió a Getachew Reda para presidir la administración interina –Interim Regional Administration. El primer ministro Abiy Ahmed ratificó este nombramiento y días después el Parlamento Federal retiró al TPLF de la lista de grupos terroristas y el Gobierno Federal también retiró los cargos contra sus líderes políticos y militares, requisito indispensable para formar la –Interim Regional Administration (IRA). Getachew Reda nombró a los miembros del IRA el 5 de abril.

Cabe destacar, no obstante, diversas cuestiones de fondo pendientes, que ponen de manifiesto la fragilidad del acuerdo, tal y como señalan algunos análisis.⁴ En primer lugar, el debate político en torno a la cuestión nacional, el federalismo étnico y la tensión centro-periferia sigue pendiente de cara a resolver este y otros focos de inestabilidad en el país. En segundo lugar, la lucha contra la impunidad ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la región. A finales de febrero se

filtró que Addis Abeba había estado buscando apoyo para poner fin a la a la investigación ordenada por la ONU sobre las atrocidades en Tigré; más de 60 organizaciones de derechos humanos instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que discutirá las denuncias en marzo, a rechazar tal resolución. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, visitó en marzo el país y señaló que todas las partes eran responsables de crímenes contra la humanidad. En tercer lugar, la tensiones entre la comunidad amhara y la comunidad oromo, llevó al Gobierno Federal a anunciar en abril el desarme y disolución de las milicias paramilitares de la región de Amhara y su integración en la Policía y Ejército, milicias responsables de crímenes contra la humanidad. Estas medidas provocaron una escalada de la confrontación entre la milicia Fano y simpatizantes y activistas contra el Ejército Federal y el establecimiento del toque de queda en la región. A mediados de abril los enfrentamientos empezaron a remitir. En cuarto lugar, cabe destacar el conflicto entre el grupo armado Oromo Liberation Army (OLA) y el Gobierno Federal, con el apoyo de las milicias paramilitares amharas Fano, que escaló gravemente durante la segunda parte del año 2022, causando centenares de víctimas mortales. Tras la firma del acuerdo entre el TPLF y el Gobierno Federal y el inicio de su positiva implementación, las autoridades federales escalaron las acciones bélicas contra el OLA. Las presiones del gobierno local de la región de Oromiya así como el interés del OLA y de las autoridades federales en alcanzar algún tipo de tregua condujeron a diversos contactos exploratorios indirectos en febrero de 2023 entre ambas partes manifestando su interés en explorar un cese de hostilidades. En medio del clima de violencia, en marzo el primer ministro Abiy Ahmed manifestó su compromiso en explorar un proceso de diálogo con el OLA y el 25 de abril se iniciaron conversaciones de paz en Tanzania. Las negociaciones de paz se iniciaron en Zanzíbar con la facilitación de Kenya –el OLA había exigido la mediación de una tercera parte–⁵ en nombre de la autoridad regional IGAD y de Noruega.⁶ Aunque esta primera ronda culminó sin avances a principios de mayo, ambas partes manifestaron su compromiso en buscar una solución al conflicto.⁷

En definitiva, si bien existe un amplio consenso sobre la positiva implementación del acuerdo de paz entre el TPLF y el Gobierno Federal, existen numerosos elementos de fragilidad que pueden hacer fracasar los positivos avances que se han producido hasta la fecha. Es imprescindible una continua atención de la oposición social y política, así como del Gobierno Federal y presión de la comunidad internacional para seguir avanzando en el proceso de implementación del acuerdo de paz, así como del diálogo entre el OLA y el Gobierno Federal y también la lucha contra la impunidad respecto a los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Tigré.

2. Crisis Watch, *Ethiopia - February 2023*, International Crisis Group, 1 de febrero de 2023.

3. Harter, Fred, *Tigray aid access improves as peace deal makes headway*, *The New Humanitarian*, 31 de enero de 2023.

4. Davison, William, *Creating Lasting Peace in Ethiopia*, International Crisis Group, 30 de diciembre de 2022.

5. OLA Command, *Regarding Peace Negotiations*, OLF-OLA Press Release, 23 de abril de 2023.

6. Kombe, Charles, *Peace Talks Between Ethiopian Government, OLA Continue in Tanzania*, *VOA*, 27 de abril de 2023.

7. Paravicini, Giulia, *First round of peace talks between Ethiopia and Oromo rebels ends without deal*, *Reuters*, 3 de mayo de 2023.

4.2. La “Paz Total”, una política de paz ambiciosa para Colombia

El nuevo Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, está impulsando una política pública de construcción de paz conocida como “Paz Total”, que puede suponer una oportunidad para transformar los diferentes conflictos que afectan al país. Colombia hace frente a múltiples retos dada la persistencia de la violencia política y criminal, graves violaciones de derechos humanos y falta de seguridad humana, así como la oposición a la salida negociada a los conflictos por parte de diferentes actores armados y políticos. Esta nueva política pretende trascender los límites de las negociaciones de paz que se han dado con diferentes grupos armados de oposición activos en el país en décadas anteriores, tratando de involucrar en diferentes procesos a todos los actores armados activos en el país, tanto los que persiguen agendas de carácter político, como aquellos involucrados en actividades de crimen organizado, como el narcotráfico. Gustavo Petro resultó vencedor en las elecciones de junio de 2022 con un programa electoral que incluía, entre otras cuestiones, un compromiso amplio con la construcción de la paz en el país, tanto con la implementación del acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno y las FARC, como en nuevas negociaciones de paz con el ELN y otros actores armados activos en el país. Durante los años de la presidencia de Iván Duque, y su propuesta de “paz con legalidad”, la implementación del acuerdo de paz de La Habana sufrió por la falta de compromiso del Ejecutivo, con importantes retrasos, falta de recursos e incluso obstaculización deliberada. Así pues, la llegada de Petro al poder ha representado el inicio de un nuevo enfoque gubernamental hacia los diferentes conflictos violentos que atraviesa el país desde hace décadas y un nuevo impulso para la consolidación de la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

El Gobierno de Colombia está impulsando una política pública de construcción de paz conocida como “Paz Total”, que puede suponer una oportunidad para transformar los diferentes conflictos que afectan al país mediante el diálogo

En noviembre culminaba la aprobación de la legislación para la “Paz Total” (Ley 2272), mediante la prórroga y modificación de la Ley 418 de 1997. Esta norma, sancionada durante el Gobierno de Ernesto Samper, ha permitido a los presidentes colombianos llevar a cabo negociaciones de paz con grupos armados y diseñar políticas de seguridad. Bajo el amparo de esta ley, diferentes gobiernos han llevado a cabo negociaciones y acercamientos a grupos armados. La nueva norma establece que “la política de paz será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la

justicia”.⁸ Bajo este paraguas de “Paz Total” se incluyen diferentes aspectos y procesos de construcción de paz, entre los que se cuentan la implementación del acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre las FARC y el Gobierno colombiano; las negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley con quienes se mantendrán diálogos de carácter político, particularmente las negociaciones con el ELN actualmente en curso; negociaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, entre los que se incluyen narcotraficantes y paramilitares; y el diálogo con población local en diferentes zonas del país, con el objetivo de orientar la política pública a partir de las necesidades de la sociedad civil.

Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, se han puesto en marcha varias iniciativas concretas, algunas de enorme relevancia para la finalización de la violencia armada en el país. En primer lugar, cabe destacar el proceso de diálogo con el ELN, que se ha concretado en varias rondas de negociación entre el Gobierno y el grupo armado.⁹ El proceso ha destacado por su elevado grado de internacionalización y acompañamiento por diferentes actores. Se inició en noviembre de 2022 en Venezuela con una primera ronda de conversaciones, seguida de otras dos en México y en Cuba. En el proceso participan Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México como países garantes, y Alemania, Suecia, Suiza y España como países acompañantes. Además, se ha invitado a que EEUU pueda tener un enviado especial en el mismo. A pesar de algunas dificultades y desencuentros entre las partes, las negociaciones avanzan bajo el liderazgo de Otty Patiño como negociador jefe del Gobierno colombiano y Pablo Beltrán por el ELN, hasta el punto que en junio de 2023 se logró un acuerdo de alto el fuego.

Una vez iniciado el diálogo con el ELN, el 31 de diciembre el presidente Petro anunciaba un acuerdo bilateral de cese al fuego con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, que podría prorrogarse en función de los avances en las negociaciones. Sin embargo, dos días después el ELN negó que se hubiera alcanzado un acuerdo de forma bilateral. Por el contrario, tanto la Segunda Marquetalia como el Estado Mayor Central sí respondían positivamente al alto el fuego. Tras varios meses de negociaciones, el ELN y el Gobierno lograban pactar un alto el fuego.

8. Ley 2272 de 2022.

9. Véase el resumen sobre Colombia (ELN) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de Paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

De esta manera, además del diálogo con el ELN, el Gobierno anunció un proceso de diálogo con el grupo conocido como Estado Mayor Central, originado como grupo disidente de las FARC antes de la firma del acuerdo de paz de 2016 y liderado por Iván Mordisco. En abril, el Gobierno colombiano señaló que se instalaría un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del cese al fuego entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central. No obstante, en mayo, el presidente Petro ponía fin al alto el fuego con este grupo en varias zonas del país como consecuencia del asesinato de cuatro menores indígenas que habían sido víctimas de reclutamiento forzado, evidenciando así la fragilidad y dificultades del proceso. Por otra parte, se anunciaron acercamientos a la Segunda Marquetalia, si bien la propia naturaleza de este grupo disidente de las FARC, que abandonó el acuerdo de 2016 una vez firmado, representaba dificultades añadidas para un nuevo diálogo. También en marzo se había puesto fin al alto el fuego con el Clan del Golfo. Aunque se habían llevado a cabo algunos acercamientos a esta organización paramilitar, las reivindicaciones de reconocimiento político e inicio de un proceso de diálogo equivalente al llevado a cabo con el ELN no habían sido aceptadas por el Gobierno, que esperaba conversaciones para acordar modalidades de sometimiento a la justicia. En conjunto, el Gobierno señalaba en mayo que estaba llevando a cabo diferentes tipos de diálogo con el ELN, el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Además del diálogo con el ELN, el Gobierno colombiano anunció un proceso de diálogo con el grupo conocido como Estado Mayor, disidente de las FARC antes del acuerdo de paz de 2016

La “Paz Total” es un proyecto ambicioso en tanto busca resolver un conflicto multifacético, enquistado y protagonizado por múltiples y diversos actores armados. Las dificultades para emprender de forma simultánea diálogos son evidentes y se requiere de una enorme fortaleza institucional que permita disponer de múltiples equipos negociadores que sean capaces de avanzar de forma paralela en procesos de una enorme complejidad. La propuesta de “Paz Total” ha dado lugar a importantes expectativas que deben ser manejadas con habilidad para responder a las frustraciones que pueden surgir si no se alcanzan los principales objetivos. Otros de los principales retos hacen referencia a la propia posibilidad de resolver mediante el diálogo desafíos de magnitud como el narcotráfico y otros negocios ilícitos sumamente lucrativos. La demanda de reconocimiento como actores políticos que han puesto sobre la mesa actores criminales también tendrá que ser abordada con estrategias de corto, medio y largo plazo y teniendo en cuenta la dimensión internacional del fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado. Así pues, el Gobierno de Gustavo Petro deberá ser capaz de urdir una telaraña de procesos interdependientes, pero en los que el fracaso de alguno de ellos no implique necesariamente la fallida de la política de “Paz Total” en su conjunto. Fortalecer los que deberían ser los principales pilares de esta política, las negociaciones con el ELN y la implementación del acuerdo de 2016, debería ser prioritario para apuntalar una estrategia sumamente ambiciosa, pero también llena de riesgos.

4.3. Un contexto doméstico, regional e internacional más propicio para una resolución negociada de la crisis en Venezuela

A finales de abril de 2023, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro organizó en Bogotá una Conferencia Internacional sobre Venezuela que contó la participación de representantes de 20 países y con el apoyo previo del Gobierno de Venezuela, la oposición venezolana representada en la Plataforma Unitaria y el Gobierno de EEUU. El objetivo de la reunión era principalmente acordar las condiciones que permitieran reanudar el diálogo que Caracas y la oposición iniciaron en México en agosto de 2021 con la facilitación del Gobierno de Noruega, y que se interrumpió en noviembre de 2022 poco después de haber alcanzado un acuerdo sobre inversiones sociales con fondos venezolanos congelados en el extranjero. Aunque la conferencia no arrojó avances importantes ni significó la reanudación del diálogo entre el Gobierno y la oposición, tanto la propia celebración de la cumbre como la coincidencia de algunos factores más estructurales de orden internacional, regional e interno (en Venezuela) que se han registrado en los últimos tiempos ofrecen algunas ventanas de oportunidad para las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

La Conferencia Internacional sobre Venezuela celebrada el 25 de abril, que se llevó a cabo tras numerosas reuniones previas de Gustavo Petro con Nicolás Maduro, la oposición venezolana y Joe Biden, entre otros actores, finalizó con un comunicado con las conclusiones de la cumbre, que principalmente pivotaban sobre tres compromisos: el establecimiento de un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos; el progresivo levantamiento de sanciones al Gobierno venezolano a medida que se satisfagan los compromisos acordados; y que la reanudación del diálogo en México vaya acompañada de la implementación del Fondo fiduciario para la inversión social en Venezuela. Dicho fondo, que debería nutrirse de los activos monetarios venezolanos congelados en el exterior —unos 3.200 millones de dólares— y cuya gestión correspondería a Naciones Unidas, fue acordado en noviembre de 2022 en el marco de las negociaciones en México. Aún si buena parte de los análisis consideraron que la cumbre no lograría reanudar las negociaciones en México a corto plazo y que los resultados de la misma no habían estado a la altura de las expectativas, Petro se comprometió a mantener el contacto con las partes y a volver a convocar un nuevo encuentro (con formato y fecha a determinar) para concretar y dar seguimiento a los compromisos alcanzados en la cumbre. Además, aunque finalmente no asistieron a la cumbre ni Maduro ni el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, tal y como se había especulado inicialmente, la cumbre escenificó un importante apoyo internacional a los esfuerzos de resolución del conflicto, con la

asistencia de representantes de 20 países, buena parte de ellos latinoamericanos, además del Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El hecho de que México y Noruega, que acogen y facilitan respectivamente las negociaciones oficiales entre ambas partes, estuvieran presentes en la cumbre de Bogotá, expresa la complementariedad estratégica y coordinación diplomática entre las negociaciones formales y la iniciativa colombiana.

La cumbre de Bogotá también denota una cierta despolarización regional en América Latina respecto de la crisis de Venezuela. La llegada al poder de algunos gobiernos más progresistas (como en Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, Perú o México) se ha traducido en políticas más conciliadoras o pragmáticas hacia el Gobierno venezolano. El Gobierno de México, por ejemplo, decidió acoger las negociaciones entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria, que se establecieron formalmente en agosto de 2021. Especialmente significativo ha sido el cambio en las relaciones diplomáticas que comportó la llegada al poder de Gustavo Petro en agosto de 2022. Petro no solamente restableció las relaciones diplomáticas y comerciales con Caracas (interrumpidas durante el mandato de Iván Duque), sino que en el primer tramo de su mandato se reunió hasta en cinco ocasiones con Nicolás Maduro para abordar numerosos temas de incumbencia mutua, como las negociaciones con el ELN, o el flujo de personas venezolanas migrantes en Colombia. La organización de la cumbre internacional sobre Venezuela también ilustra la voluntad del actual presidente colombiano de tener un rol activo en la resolución del conflicto político y la crisis humanitaria en Venezuela. Otro de los hechos que indica un contexto regional menos proclive a forzar la alternancia en Venezuela a través del aislamiento político y económico es el fin de la actividad del Grupo de Lima desde finales de 2022, con la salida del poder de Bolsonaro en Brasil. Dicho grupo fue creado en agosto de 2017 por 14 países con el apoyo de EEUU, la OEA o la UE y su principal objetivo era forzar el fin del Gobierno de Maduro. A modo de ejemplo, dicho grupo desconoció el mandato y la legalidad del Gobierno de Maduro y, en cambio, reconoció a Juan Guaidó como presidente del país.

En la misma línea, el Gobierno de EEUU también está mostrando una posición más conciliadora hacia el Ejecutivo venezolano. Aunque aún sigue siendo uno de los pocos países que todavía reconoce y apoya a Juan Guaidó, las relaciones entre ambos países han mejorado sustancialmente tras el fin del mandato de Donald Trump. Varios analistas han señalado que la invasión rusa de Ucrania y la necesidad de EEUU de hallar proveedores de petróleo alternativos a Moscú contribuyó

decisivamente al acercamiento de posiciones entre ambos Gobiernos. Desde marzo de 2022 se produjeron reuniones directas entre representantes del Gobierno de EEUU y el propio Nicolás Maduro, y a principios de octubre, en lo que algunos medios consideraron como el acuerdo más importante entre los dos países desde la asunción del cargo de Biden, ambos Gobiernos acordaron un intercambio de prisioneros en un tercer país, que incluyó a siete ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela y a dos sobrinos de la esposa de Maduro detenidos por la DEA y que cumplían una condena de 18 años en EEUU. En noviembre, poco después de la firma del acuerdo entre Caracas y la oposición, Washington anunció que había autorizado a la petrolera Chevron que retomara sus operaciones de extracción de petróleo en Venezuela para exportarlo a EEUU, y el Gobierno de Venezuela anunció la suscripción de varios acuerdos entre la petrolera nacional PDVSA y Chevron. Además, a finales de 2022, Maduro declaró que su Gobierno estaba totalmente preparado para la normalización de relaciones diplomáticas con EEUU.

En el plano doméstico, también parece haber habido un acercamiento de posiciones entre el Gobierno y una parte de la oposición. Así parece atestiguarlo el acuerdo que ambas partes lograron en noviembre de 2022 en México con la facilitación de Noruega, por el que Gobierno y oposición se comprometían a llevar a cabo todas las gestiones en el ámbito nacional e internacional destinadas a la recuperación progresiva de más de 3.000 millones de dólares de activos estatales inmovilizados en el extranjero para financiar programas sociales de salud, educación o alimentación. Aún si dicho acuerdo no se ha implementado plenamente e incluso ambas partes no se han vuelto a reunir oficialmente desde entonces para abordar aspectos como el calendario y las condiciones y garantías electorales, la liberación de personas o la situación de derechos humanos, la mera existencia formal de un proceso de diálogo, así como la disposición de las dos partes a asistir a la cumbre de Bogotá, denotan un mayor pragmatismo y una mayor confianza en lograr acuerdos para desbloquear la situación. Por parte de la oposición, las tesis menos conciliadoras y polarizadoras representadas por Juan Guaidó parecen haber perdido centralidad en los últimos tiempos. En esta línea, en diciembre de 2022 la propia Asamblea Nacional elegida en 2015 –considerada como único órgano legítimo del país según la oposición, pero ilegalizada por el Gobierno– decretó el fin del gobierno interino y de la presidencia encargada de Guaidó por entender que ya no es percibido como un instrumento de cambio real. Guaidó criticó tal medida por considerar que refuerza al Gobierno de Maduro, pero previamente ya había habido algunos indicadores de que el apoyo internacional a Guaidó había menguado. En enero de 2022, por ejemplo, la Asamblea Nacional había prorrogado un año

La cumbre de Bogotá puso de manifiesto una cierta despolarización regional en América Latina respecto de la crisis de Venezuela

la presidencia interina de Guaidó, pero había reducido la estructura burocrática que le daba apoyo, y en el mes de octubre 19 países latinoamericanos votaron en contra de que el gobierno de Guaidó detentara la representación de Venezuela en la OEA. Algunos sectores de la oposición, no necesariamente representados en la Plataforma Unitaria, como el ex candidato presidencial Henrique Capriles, valoraron positivamente el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la oposición en noviembre de 2022 por considerar que trata de compatibilizar el alivio de las necesidades sociales urgentes de la población y la atención a la crisis humanitaria que padece el país con la mejora de aspectos estructurales, como la separación de poderes, las reglas democráticas, el Estado de derecho o la reinstitucionalización del Estado.

También ha habido gestos por parte del Gobierno que parecen denotar una mayor liberalización interna y proclividad a determinadas concesiones. A modo de ejemplo, tras varios meses de negociaciones con sectores de la oposición no incluidos en la Plataforma Unitaria –y criticados por ésta por considerar que su acción política legítima al Gobierno–, el Gobierno accedió a que dichos sectores nombraran a dos de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en materia electoral. En la misma línea, varios análisis concluyeron que las elecciones regionales y locales del 2021 fueron más justas, libres y competitivas que los comicios anteriores desde 2015. De hecho, Caracas extendió una invitación a una misión electoral de la UE, que validó el proceso electoral y a la vez hizo una serie de recomendaciones en materia electoral. Según el centro de investigación International Crisis Group, existen dos o tres áreas en esta materia que podrían suscitar un acercamiento en las posiciones del Gobierno y la oposición, como la mejora del censo electoral (que actualmente excluye a millones de ciudadanos), la designación de personal funcionario electoral independiente a escala local, o la observación electoral de los siguientes comicios presidenciales. Por otra parte, la organización Provea declaró que en 2022 las detenciones arbitrarias se habían reducido en un 83% respecto a 2021. En la misma línea, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló que en 2022 se redujo sustancialmente el número de protestas, y también que había disminuido la conducta represiva de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de civiles armados en la contención de las manifestaciones respecto de años anteriores.

A pesar de todo lo anterior, los retos que enfrenta el proceso de diálogo son importantes. La cumbre de Bogotá arrojó resultados menos ambiciosos de lo previsto y no ha modificado sustancialmente la posición de EEUU –que se niega a flexibilizar sanciones hasta que Caracas dé pasos inequívocos y claros hacia la celebración de elecciones libres y competitivas—

ni la negativa del Gobierno venezolano a reanudar el diálogo con la Plataforma Unitaria sobre cuestiones políticas hasta que se liberen los activos congelados en el exterior. Además, algunos altos cargos del Gobierno también han exigido otras condiciones para la reanudación del diálogo en México, como la retirada de sanciones y la presencia en las negociaciones de Alex Saab, un empresario colombiano cercano a Caracas extraditado a EEUU desde Cabo Verde en octubre de 2021. Además, tanto la oposición como varias ONG consideran que la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo muy precaria. En noviembre de 2022, por ejemplo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares su autorización para continuar con la investigación abierta en noviembre de 2021 sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017.

Sin embargo, ambas partes siguen teniendo incentivos para reanudar el diálogo y lograr un acuerdo político. Tras varios años de movilizaciones masivas y un reconocimiento internacional notable a un presidente alternativo –Juan Guaidó–, la oposición parece haberse

Un contexto regional e internacional más propicio para la solución dialogada de la crisis en Venezuela maximiza los incentivos para la negociación y facilita explorar opciones para superar el bloqueo institucional y la confrontación política y social en el país

convencido de que la única opción para lograr la alternancia en el país pasa por una victoria electoral. Y, dada la resiliencia del Gobierno venezolano a la presión internacional y las protestas ciudadanas, la mejora de las condiciones electorales parece pasar ineludiblemente por un pacto con el Gobierno. Por parte del Gobierno, la precaria situación económica del país hace acuciante la flexibilización de las sanciones internacionales. A fecha de diciembre de 2022 había más de 7 millones de personas venezolanas migrantes o refugiadas en todo el mundo y, según la OIM, había 7,7 millones de personas en el país que necesitaban ayuda humanitaria. Según algunos análisis, tanto las sanciones internacionales como la falta de inversión extranjera lastran la producción y comercialización del crudo venezolano, una de las principales bazas de la economía. Un contexto regional e internacional más propicio para la solución dialogada de la crisis en Venezuela sin duda maximiza los incentivos de ambas partes para la negociación y facilita explorar opciones que permitan superar el bloqueo institucional y la confrontación política y social que ha experimentado el país tras la llegada al poder de Maduro una década atrás.

4.4. ¿Oportunidad decisiva? Retos para una paz sostenible e inclusiva en Yemen

Yemen afronta una coyuntura crítica. Después de ocho años de un conflicto armado de alta intensidad que se ha cobrado la vida de miles y miles de personas, el país se encuentra en un escenario considerado como una oportunidad sin precedentes y decisiva para intentar poner fin a las hostilidades. Esta expectativa se ha construido a partir de una serie de acontecimientos recientes, tanto a nivel local como regional, que apuntan a la configuración de un contexto aparentemente más propicio para el abordaje del conflicto por vías negociadas y políticas: una tregua que ha reducido significativamente los niveles de violencia y que en términos generales se ha mantenido, pese a no ser renovada formalmente; el establecimiento de un canal de negociación entre Riad y los al-houthistas bajo la mediación de Omán; el acercamiento y restauración de relaciones entre Arabia Saudita e Irán con posibilidades de repercutir en Yemen dado el papel de ambos países en el conflicto; y las muestras de compromiso de actores yemeníes para avanzar en la implementación de algunos acuerdos. No obstante, un análisis detenido de estas y otras dinámicas permite concluir que existen aún importantes retos para consolidar las perspectivas de una paz sostenible e inclusiva en Yemen.

Un hecho incuestionable a poner en valor es la disminución en los niveles de violencia directa en el país como resultado del acuerdo de tregua suscrito entre las principales partes contendientes –el gobierno internacionalmente reconocido depuesto en 2014 y apoyado por Arabia Saudita y las fuerzas al-houthistas– en abril de 2022. Tras un período de intensificación de las hostilidades, este alto el fuego promovido por la ONU –el primero de alcance nacional desde 2016– ha tenido consecuencias relevantes en términos de reducción en el número de víctimas mortales del conflicto, descenso en los niveles de desplazamiento forzado y relativa mejora de los gravísimos niveles de inseguridad alimentaria que afectan a la población. Pese al colapso formal de la tregua –el pacto fue renovado en dos ocasiones, pero no la tercera vez, en octubre de 2022–, aspectos importantes del acuerdo que son significativos para la situación humanitaria en el país han continuado vigentes. Además, no ha habido operaciones armadas de gran escala y las líneas de los principales frentes de batalla se han mantenido estables, a pesar de un aumento de los hechos de violencia en 2023. Los efectos de la tregua han sido destacados como una prueba palpable de los efectos positivos del abordaje del conflicto por la vía de la negociación. Las hostilidades se encuentran en sus niveles más bajos de los últimos años, pero la situación es frágil. La ONU, a través de su enviado especial para Yemen, ha intentado promover una reedición formal del alto el fuego de más largo plazo y avanzar en otros temas que han sido objeto de discusión en el marco de las negociaciones auspiciadas por el organismo en los últimos años. Como resultado de estos esfuerzos, en abril de 2023

se concretó un masivo intercambio de prisioneros, que supuso la liberación de casi 900 personas. Esta medida –que supone avanzar en la implementación del Acuerdo de Estocolmo de 2018–, da cuenta de las posibilidades de entendimiento y compromiso entre los al-houthistas y el Gobierno yemení apoyado por Riad, aunque los intercambios entre las partes no han profundizado en otros temas de desacuerdo.

Desde el último trimestre de 2022, el proceso de diálogo más sustantivo ha pivotado hacia las negociaciones directas entre Arabia Saudita y los al-houthistas mediadas por Omán. Este canal se activó en octubre tras el fracaso en la reedición formal del alto el fuego, un bloqueo atribuido a los al-houthistas por la inclusión de demandas adicionales en el marco del proceso auspiciado por la ONU. Este formato se acomoda a los intereses de los al-houthistas, que prefieren tratar con Riad como interlocutor. La decisión de Arabia Saudita de implicarse en esta vía, en tanto, ha sido interpretada como una evidencia más de su interés por replegarse de un conflicto armado costoso, que se ha extendido más allá de sus previsiones y en el que no ha conseguido ninguno sus objetivos: ni restaurar al gobierno depuesto; ni derrotar a los al-houthistas, que han afianzado su control de parte importante del país; ni evitar la proximidad de un actor armado al que atribuye vínculos con Irán. Al contrario, Teherán ha estrechado lazos y ha proporcionado apoyo político y militar a los al-houthistas en el transcurso del conflicto.

En este contexto, el anuncio en marzo de 2023 de acercamiento entre Riad y Teherán tras años de ruptura diplomática (fruto de unos contactos facilitados inicialmente por Iraq y Omán, pero que cristalizaron tras la mediación de China) generó expectativas por sus posibilidades de repercutir en diversos conflictos regionales y en particular en Yemen dado el papel de ambos actores en el curso del conflicto. Según trascendió, una de las exigencias de Arabia Saudita para el restablecimiento de relaciones con Irán, rotas desde 2016, es que Teherán suspenda su apoyo a los al-houthistas e influya en sus posiciones en el marco del proceso negociador. Aunque se ha considerado que esta “detente” entre Arabia Saudita e Irán ha generado un momentum favorable al diálogo y un entendimiento que puede acelerar las negociaciones en el dossier yemení, diversas voces han subrayado dudas sobre el proceso. La rivalidad entre Riad y Teherán se ha proyectado y ha agravado el conflicto yemení, pero no lo ha originado, ya que la disputa tiene sus raíces en fracturas internas e involucra a numerosos actores políticos y armados. Por tanto, esta nueva dinámica regional, si bien es positiva, no es por sí sola suficiente para propiciar la paz en Yemen. En esta línea, se ha advertido también sobre la capacidad efectiva de Irán para influir en los al-houthistas o forzarlos a aceptar un acuerdo político –su ascendiente es más limitado respecto a otros grupos

de la región y Teherán no puede esgrimir un control total sobre sus acciones— y sobre los riesgos de que los actores regionales pretendan controlar las negociaciones y modelar un resultado en función de sus prioridades, eludiendo a los actores yemeníes y a la ONU. Es lo que se ha identificado como un peligro de “astanización”, en alusión al proceso negociador sobre Siria impulsado por Rusia, Turquía e Irán e instaurado en paralelo a las negociaciones promovidas por la ONU.

En este contexto, la posibilidad de que se fragüe un acuerdo solo entre Arabia Saudita y los al-houthistas, excluyendo a otros actores yemeníes, genera especial preocupación y recelos. Análisis han apuntado los riesgos de que un pacto se limite a garantizar los intereses de estos actores —seguridad fronteriza saudí para facilitar su repliegue y formalización del control territorial de los al-houthistas en buena parte del país— en desmedro de los intereses y la participación de otros actores de la sociedad yemení. El secretismo y las dinámicas de estas negociaciones han alentado los temores de diversos actores yemeníes a que las discusiones aborden y resuelvan cuestiones sustantivas sin tener la posibilidad de incidir y a que esta aproximación favorezca, por tanto, una inestabilidad y violencia futuras. Así, por ejemplo, algunos actores, como los representantes de los sectores separatistas del sur de Yemen, han anticipado que no reconocerán ningún acuerdo que comprometa temas relativos a la distribución de recursos, la administración o la seguridad del país. Actores yemeníes han manifestado su frustración por lo que perciben como un intento de Arabia Saudita de buscar una salida rápida, por la falta de consultas previas a los representantes del Gobierno yemení y por los trascendidos que indican que Riad podría estar dispuesto a aceptar muchas de las demandas de los al-houthistas.

Al menos formalmente, en la vía omaní parece haber un compromiso de facilitar la reactivación de las conversaciones intra-yemeníes facilitadas por la ONU. En caso de concretarse, eso supondría enfrentar otro reto relativo a los conflictos internos en el bloque de actores que conforma el frente “anti al-houthista”. La configuración de un Consejo de Liderazgo Presidencial de carácter colegiado en abril de 2022, bajo las directrices de Riad y EAU (otro de los actores regionales directamente implicados en el conflicto yemení), se presentó como un nuevo intento por sortear estas divisiones. No obstante, tras un año de su creación, este Liderazgo Presidencial aparece

como un interlocutor débil y fragmentado, marcado desde el origen por los desacuerdos y la competencia política y militar entre sus integrantes, dinámicas que se ven alentadas por las políticas de Arabia Saudita y EAU de intentar fortalecer a los actores alineados con sus intereses. Así, más allá de compartir su posición adversa a los al-houthistas, las fuerzas representadas en el Liderazgo Presidencial no tienen una visión compartida sobre el futuro político de Yemen, carecen de una estrategia común de cara a unas negociaciones mediadas por la ONU y han estado excluidas de las conversaciones facilitadas por Omán.

A todo esto, se suma otro reto fundamental para la paz en Yemen: la inclusión efectiva de actores civiles que han sido los que más han sufrido el conflicto y que han estado persistentemente marginados de las negociaciones formales, en especial las mujeres. Unas mujeres que han sido excluidas a pesar de sus públicas reivindicaciones de participación y de los compromisos formales asumidos en el pasado sobre cuotas de representación en los ámbitos de decisión sobre el futuro de Yemen. Sus acciones han sido muy relevantes en iniciativas locales de mediación y construcción de paz y sus contribuciones han sido y serán decisivas en los esfuerzos tendientes a una paz sostenible en Yemen. Una paz que se entienda no solo como el fin de las hostilidades armadas, sino que aborde todas las causas del conflicto y violencias múltiples, tenga en cuenta las demandas sobre una rendición de cuentas ante los abusos perpetrados por todas las partes en conflicto y ponga en el centro las urgentes necesidades humanitarias de la población civil.

Esta oportunidad para la paz en Yemen debe asumirse, por tanto, como el inicio de un proceso de largo plazo. Mientras tanto, las partes contendientes y los actores internacionales con capacidad de acompañar las negociaciones deberían favorecer el mantenimiento del alto el fuego, un entorno que privilegie el diálogo y la negociación, y un proceso realmente inclusivo, que reconozca las aportaciones de las mujeres y la sociedad civil. Las conversaciones deberían abordar la complejidad y los distintos vectores del conflicto, y no limitarse a los intereses de las potencias regionales o de los actores armados. Pese a todas sus imperfecciones, experiencias previas como la Conferencia de Diálogo Nacional (2013-14) indican que es posible establecer formatos para abordar el futuro de Yemen desde una perspectiva multidimensional que ponga en el centro los esfuerzos de entendimiento y reconciliación.

Pese al colapso formal de la tregua en octubre de 2022, aspectos importantes del acuerdo y que son significativos para la situación humanitaria han continuado vigentes, y una serie de factores apuntan a la posibilidad de continuar el abordaje del conflicto por la vía de la negociación

4.5. La promoción del diálogo en tiempos de orden internacional multipolar

El escenario internacional asiste a un grave deterioro de la seguridad humana de muchas poblaciones en contexto de conflicto, de la mano de crisis y procesos entrecruzados, como son el cambio climático y un panorama de conflictividad armada complejo, caracterizado por conflictos de creciente intensidad de la violencia y una elevada proliferación de actores. Además, se trata de conflictos a menudo prolongados en el tiempo, en su mayoría internos internacionalizados, en los que se proyectan disputas externas geopolíticas, y que además presentan una creciente presencia de dimensiones de violencia intercomunal y violencia criminal. Este panorama se da, a su vez, en un contexto internacional de orden multipolar que asiste a una intensificación de las tensiones entre grandes potencias y a una tendencia de mayor militarización. No obstante, al mismo tiempo, el diálogo y la diplomacia—incluyendo en el ámbito de la prevención y el apoyo a la mediación—continúan siendo herramientas relevantes y necesarias para hacer frente a tal panorama. El proceso en marcha bajo el paraguas de Naciones Unidas para el desarrollo de una Nueva Agenda para la Paz ofrece un marco de oportunidad para fortalecer los esfuerzos internacionales, regionales y locales en el ámbito de la prevención y la promoción del diálogo y la construcción de paz.

**En 19 de los 33
conflictos armados
activos durante 2022
(58% de los casos)
había negociaciones
en marcha**

Durante el año 2022 se identificaron 39 procesos y negociaciones de paz a nivel mundial, la gran mayoría en África (15), seguido de Asia (10), Europa (seis), Oriente Medio (cuatro) y América (cuatro).¹⁰ En términos comparativos con el año anterior se identificó un ligero aumento en el número de procesos y negociaciones de paz analizados a nivel mundial (en 2021 se habían contabilizado 37). No alcanzó la cifra de años previos (40 procesos en 2020, 50 en 2019 y 49 en 2018), pero siguió siendo una cifra relevante en cuanto a número de escenarios en que actores en disputa acceden a dirimir sus diferencias o algunas de ellas por vías de diálogo, pese a las muchas dificultades. Una parte de esos 39 procesos involucraban a actores en conflicto armado, mientras otros dirimían situaciones de disputas no armadas. En 19 de los 33 conflictos armados activos durante 2022 (58% de los casos) había negociaciones en marcha, mientras que 14 conflictos no registraron procesos de diálogo entre las partes. Además, en 2022, 11 de los 17 conflictos armados de más intensidad contaban con procesos de diálogo o negociación (65% de los casos). Incluso en un año de retrocesos globales en materia de paz y seguridad como 2022, hubo logros parciales como la consecución de un acuerdo de finalización de

hostilidades en torno al conflicto en la región de Tigré, en Etiopía; un acuerdo de tregua de alcance nacional en Yemen – que en los últimos meses del año dejó de estar vigente, pero se mantuvieron en la práctica algunos elementos del pacto—; un acuerdo entre el Gobierno de Sudán del Sur y una facción armada para integrarla en el acuerdo de paz de 2018; un acuerdo de paz tripartito entre el Gobierno central de la India, el gobierno estatal de Assam y ocho insurgencias adivasis, entre otros. En todo caso, la mayor parte de los procesos de negociación afrontaban graves obstáculos y muchos procesos, como los conflictos abordados, se prolongaban y enquistaban en el tiempo. En conjunto, pese a las enormes dificultades, la amplia presencia de procesos de negociación pone de manifiesto su vigencia y relevancia.

Por otra parte, una aproximación a los procesos de paz activos en 2022 pone de manifiesto la multiplicidad de actores involucrados en la promoción del diálogo.

Si bien la ONU continúa siendo el actor mediador y co-mediador preponderante, el panorama es de diversidad e incremento de actores, aunque no exento de retos de coordinación o vinculados a la proyección de intereses propios en la asunción de roles de mediación, de manera especial en el caso de actores estatales. Entre otros actores, en 2022 la UE llevó a cabo funciones de tercera parte en 16 contextos, la UA en 11 procesos, la IGAD en cinco, la OSCE en cuatro, y numerosos Estados llevaron a cabo funciones como terceras partes en procesos de negociación.

En el contexto de orden internacional marcado por dinámicas de rivalidad entre poderes internacionales y regionales y de conflictos armados internos internacionalizados con capas de disputa geoestratégica, ese involucramiento de un mayor número, o de mayor heterogeneidad de actores en tareas de apoyo al diálogo y la mediación puede contribuir a generar aproximaciones que eventualmente lleven a acuerdos de diverso tipo, incluyendo en el ámbito humanitario. Aunque considerado como un caso excepcional,¹¹ una muestra es el acuerdo de 2022 entre Ucrania y Rusia para la exportación de cereales en medio del contexto de invasión y de grave crisis de alza de precios e inseguridad alimentaria global, alcanzado con participación de Turquía, dos agencias de la ONU y asesoramiento del Centro para el Diálogo Humanitario.

No obstante, entre otros desafíos se identifica el reto de los riesgos de enfoques de apoyo a la mediación que

10. Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

11. Michael Vatikiotis, “Humanitarian crises in a multipolar world: How mediation and reforms can get aid moving”, *Centre for Humanitarian Dialogue*, 14 de septiembre de 2022.

desatiendan aún más -o incluso que confronten- lo que ha sido el marco de principios de apoyo a la mediación desarrollados por Naciones Unidas, como la mediación inclusiva y la integración de la perspectiva de género en la mediación. Ante ese desafío, el apoyo internacional a la multiplicidad de actores locales involucrados desde diferentes ámbitos en la construcción de paz inclusiva, a sus agendas y prioridades locales, a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos resulta clave. A modo de ejemplo, en su informe anual sobre la implementación de la agenda internacional de Mujeres, Paz y Seguridad de 2022 –que analizaba el año 2021–, el secretario general de la ONU destacaba ejemplos de inclusión de disposiciones detalladas relativas al género en acuerdos de ámbito local, incluyendo un acuerdo de Acción de Paz entre etnias lou nuer, dinka bor y murle en el estado de Yonglei, en Sudán del Sur, en relación al cual el secretario general señalaba que las disposiciones parecían estar arraigadas en los procesos de mediación comunitaria que precedieron a los acuerdos.¹²

Por otra parte, en las últimas décadas el ámbito de la construcción de paz ha asistido a una expansión de mecanismos y agendas internacionales que se complementan y fortalecen, al menos formalmente, el ámbito de la prevención y el fomento de la resolución dialogada de conflictos armados. La multiplicación de sistemas de alerta preventiva; el impulso por actores regionales y estatales al apoyo al diálogo y la mediación con adopción de infraestructura institucional y herramientas prácticas; el peso del fomento del diálogo en agendas como la de Mujeres, Paz y Seguridad o de Jóvenes, Paz y Seguridad, entre otros elementos, apuntan a un elevado grado de sofisticación, aprendizaje adquirido e interconexión. No obstante, en la práctica, el ámbito de la construcción de paz, la promoción de la prevención y el apoyo al diálogo continúa infradotado e infrautilizado, de la mano de posiciones políticas cortoplacistas y reactivas. A modo de ejemplo, en el caso de los sistemas de alerta preventiva, Muggah y Whitlock identificaban entre factores que explican la escasa operacionalización y señalaban la falta de voluntad política como elemento principal de la “brecha alerta-respuesta”.¹³ Más ampliamente, la falta de voluntad política a la hora de dar más centralidad a la promoción de la prevención de la violencia armada y el apoyo a la mediación y al diálogo en su conjunto continúa siendo un obstáculo cronificado que merma una enorme potencialidad. Se

necesitan, por tanto, más esfuerzos, incluyendo de liderazgo político, que potencien su implementación.

Finalmente, el proceso impulsado por Naciones Unidas en torno a la llamada “Nuestra Agenda Común” con la que hacer frente a los retos actuales y venideros y acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituye una oportunidad para un renovado impulso en el ámbito de la prevención de conflictos armados y la promoción de la construcción de paz. Este proceso internacional tiene entre sus documentos marco el informe “Nuestra Agenda Común” presentado por el secretario general de la ONU en septiembre de 2021,

El proceso impulsado por Naciones Unidas en torno a la llamada “Nuestra Agenda Común” constituye una oportunidad para el impulso al ámbito de la prevención de conflictos armados y la promoción de la construcción de paz

a modo de hoja de ruta y en respuesta al requerimiento de los Estados miembro en el marco del 75º aniversario de las Naciones Unidas de avanzar hacia una agenda con la que afrontar los retos globales y generar recomendaciones. En ese documento, el secretario general de la ONU señala la necesidad de una nueva agenda de paz e identifica seis áreas potenciales para su desarrollo: a) reducir los riesgos estratégicos, b) reforzar la previsión y la capacidad internacionales a fin de detectar nuevos riesgos para la paz y la seguridad y adaptarse a ellos, c) reformular las respuestas frente a todas las formas de violencia, d) invertir

en la prevención y la consolidación de la paz, e) apoyar las actividades regionales de prevención y f) centrar las políticas de seguridad en las mujeres y las niñas.¹⁴ Está previsto que todo este proceso, incluyendo el desarrollo de la llamada “Nueva Agenda de Paz” se realice con consultas y participación de multiplicidad de actores, incluyendo de la sociedad civil, y desemboque en 2024 en la celebración de la Cumbre del Futuro y la adopción del Pacto del Futuro, con compromisos multilaterales de acción.

En conjunto, el panorama de conflictividad armada y crisis entrecruzadas no invita al optimismo. Al mismo tiempo, la prevención de conflictos armados y la promoción de la resolución negociada de conflictos continúa teniendo vigencia y ha sido escenario en las últimas décadas –y especialmente en los últimos años– de creciente involucramiento de actores y expansión de mecanismos, arquitecturas e integración en agendas interconectadas. El proceso de la “Nueva Agenda de Paz” y el propio escenario global de mayor rivalidad geoestratégica y conflictos prolongados incrementa la oportunidad y la necesidad de reimpulsar la prevención y el apoyo al diálogo y la mediación, con innovación, recursos humanos y económicos, multilateralidad, acompañamiento de agendas y prioridades locales y protección de defensores y defensoras de derechos humanos.

12. Secretario general de la ONU, *Las mujeres y la paz y la seguridad*, S/2022/740, 5 de octubre de 2022.

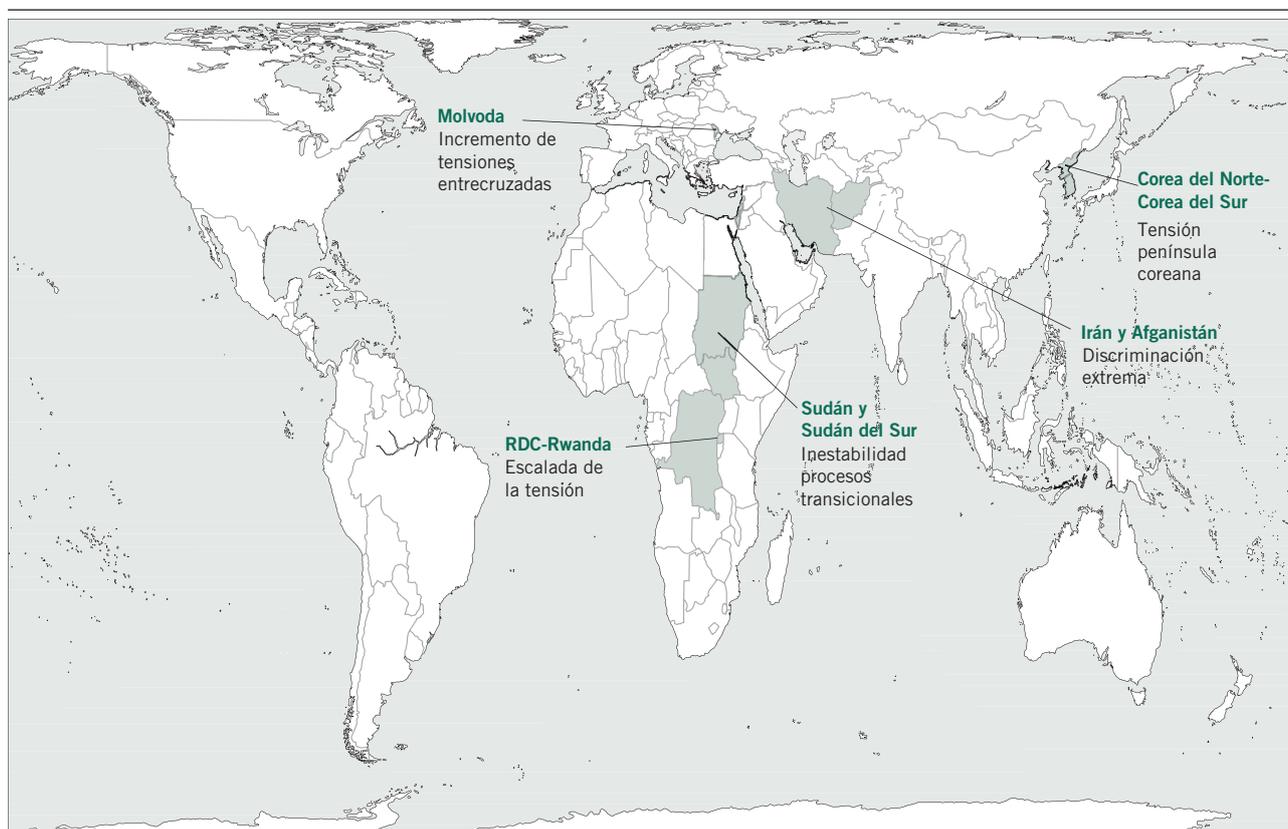
13. Muggah, Robert y Mark Whitlock, “Reflections on the Evolution of Conflict Early Warning”, *Stability: International Journal of Security & Development*, 10(1): 2, pp. 1–16.

14. Secretario general de la ONU, *Nuestra Agenda Común - Informe del Secretario General*, Naciones Unidas, 2021.

5. Escenarios de riesgo

A partir del análisis del año 2022 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial,¹ la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2023 o incluso a más largo plazo. Los escenarios de alerta hacen referencia a las crisis en los procesos transicionales en Sudán del Sur y Sudán, con posibilidades de amplificarse ante la deriva de violencia en este último país; al riesgo de escalada en la zona de Grandes Lagos producto del deterioro en las relaciones entre Rwanda y RDC; al incremento de la tensión política y militar entre Corea del Norte, por un lado, y Corea del Sur, EEUU y Japón, por el otro; al aumento de las tensiones multidimensionales en Moldova como consecuencia de la invasión Rusia a Ucrania; y al agravamiento de las políticas discriminatorias contra las mujeres y la intensificación de los intentos por controlar sus vidas y sus cuerpos en Irán y Afganistán, que ha derivado en la denuncia de su situación como un “apartheid de género”.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo



1. El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2022 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2023.

5.1. Sudán-Sudán del Sur: el deterioro de las transiciones políticas amenaza la estabilidad de la región

Desde la consecución de su independencia en 1956, Sudán ha vivido largos periodos bajo la sombra de la guerra y la inestabilidad. Más de 2,5 millones de personas perdieron la vida en la primera (1955-1972) y segunda fase (1983-2005) de la guerra civil sudanesa. Posteriormente, entre el año 2005 y el 2010 parte del país gozó de cierta estabilidad, producto de la firma del Comprehensive Peace Agreement (CPA) que puso fin a la guerra en la región meridional del país, aunque el inicio de la guerra en Darfur (2003) impidió hablar de años de paz. Durante la última década la región volvió a estar marcada por una profunda inestabilidad, producto de los efectos de la independencia de Sudán del Sur (2011), los convulsos procesos transicionales abiertos en Sudán y Sudán del Sur y los diferentes escenarios de conflictividad armada presentes en Sudan (Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul) y la guerra civil iniciada en Sudán del Sur en diciembre de 2013. Si bien durante este periodo también se han observado pasos positivos, como la firma de sendos acuerdos de paz (Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018 o el Acuerdo de Paz de Juba sobre Sudán de 2020) o la conformación de gobiernos transicionales en ambos Estados –así como la mejora de la relación entre ambos países a raíz de acuerdos de cooperación mutua en torno a delimitaciones fronterizas pendientes, entre las que destaca Abyei– la inestabilidad política y la violencia han seguido comprometiendo los esfuerzos para la construcción de la paz, la estabilidad y la democracia.

A mediados de abril de 2023 se produjo el último episodio de violencia que amenaza con afectar la ya de por sí frágil estabilidad de la región, a raíz del inicio de intensos combates en Jartum, capital de Sudán, y en otros puntos del país protagonizados por las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan (presidente del Consejo Soberano) y las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces (RSF), dirigidas por el teniente general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” (vicepresidente del Consejo Soberano). Estos acontecimientos amenazan con tener un efecto boomerang, afectando, no solamente a la vecina Sudán del Sur, sino al conjunto de países fronterizos: Chad, República Centroafricana, Etiopía, Eritrea, Libia, Egipto o la República Democrática del Congo, muchos de los cuales presentan ya escenarios complejos de violencia.

La nueva crisis en Sudán es el último episodio generado desde las movilizaciones populares de finales de 2018

que conllevaron la caída del gobierno de Omar al-Bashir en abril de 2019, tras tres décadas en el poder. A partir de ese momento el país ha sido incapaz de lograr una transición política efectiva que permita superar las rémoras del antiguo régimen. Los militares usurparon el poder en abril de 2019, y si bien en agosto de ese año acordaron compartir el gobierno transicional con la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), en octubre de 2021 volvieron a dar un nuevo golpe de Estado disolviendo el gobierno transicional y destituyendo al primer ministro, Abdallah Hamdok. Tras un 2022 marcado por dos procesos de negociación entre la Junta Militar y la oposición política –el mecanismo trilateral (facilitado por la UNITAMS, la UA y la IGAD) y el Quad (EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos)– en diciembre se llegó a un acuerdo marco en el que los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y crear un gobierno civil de transición para abril de 2023. Sin embargo, la fase II de las negociaciones iniciada en enero de 2023, la cual pretendía abordar diferentes temas sensibles –entre los

Mientras las transiciones en ambos países se tambalean, sus poblaciones se enfrentan a una importante crisis humanitaria que puede amplificarse con la nueva deriva violenta en Sudán

cuales, la justicia transicional; la reforma del sector de la seguridad, incluyendo la incorporación de las RSF al Ejército; el Acuerdo de Paz de Juba; el estado del comité de desmantelamiento del ex régimen de Omar al-Bashir; y la crisis en el este de Sudán– acabó por mandar el proceso transicional a la casilla de salida, que se ha traducido en el inicio de los enfrentamientos armados entre las SAF y las RSF.

En Sudán del Sur, el proceso transicional presenta ciertas similitudes con la crisis sudanesa. Tras cinco años de guerra, los dos principales actores responsables de la prolongación del conflicto –el Gobierno presidido por Salva Kiir y el SPLA-IO dirigido por el vicepresidente del Gobierno Riek Machar– firmaron un acuerdo de paz en 2018 (R-ARCSS) que permitió abrir un periodo transicional. Este acuerdo, no ha servido para poner fin a la violencia, sino que ha sido instrumentalizado continuamente por las partes. El último episodio se produjo en agosto de 2022, cuando el Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado (R-TGoNU) presidido por Kiir y vicepresidido por Machar, amplió unilateralmente el periodo de transición por otros dos años, situando las elecciones en diciembre de 2024. Sin embargo, muchos analistas intuyen que es probable que ni siquiera se llegue a esa fecha, ya que antes del fin del régimen transicional, tal como se prevé en el Acuerdo Revitalizado, debe estar en vigor una nueva Constitución, algo que hoy en día parece lejano. Asimismo, otra de las claves del Acuerdo es la creación de un ejército nacional unificado. Al igual que en el caso de Sudán,

los pasos para lograr esta integración y las controversias sobre los tiempos, forma y estructura de mando amenazan con hacer descarrilar el proceso transicional.

Mientras las transiciones en ambos países se tambalean, sus poblaciones se enfrentan a una importante crisis humanitaria que puede amplificarse con la nueva deriva violenta en Sudán. A finales de 2022, un tercio de la población de Sudán –más de 15 millones de personas– padecía inseguridad alimentaria grave, y 3,7 millones de personas se encontraban desplazadas internamente por la violencia, mientras que el país acogía simultáneamente a más de un millón de personas refugiadas de las crisis vecinas. En Sudán del Sur el escenario es similar. Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 6,6 millones de personas –más de la mitad de la población del país– afrontan una situación de inseguridad alimentaria aguda, hambre y desnutrición. Estas cifras podrían ascender hasta los 7,8 millones durante el primer semestre de 2023. Además, 2,3 millones de personas se encontraban refugiadas debido a la inseguridad. El estallido de la violencia en abril en Sudán podría tener otros efectos catastróficos en Sudán del Sur, sobre

Se requiere de una acción conjunta de los actores locales, nacionales, regionales e internacionales para lograr que las partes vuelvan a la mesa de negociación, pongan fin a la violencia y recuperen el espíritu de la transición

todo en su economía, ya que el 90% de los ingresos del país dependen de la exportación de petróleo a través de Sudán. Asimismo, también podría provocar, según estimaciones de las Naciones Unidas, que más de 800.000 personas busquen refugio en otros países, amplificando la crisis de desplazamiento forzado en la ya muy tensionada región. Este impacto puede afectar también las dinámicas de violencia presentes en RCA, RDC, Chad, Libia o Etiopía (Tigré y Oromiya), además de las propias internas en Darfur, Kordofán Sur, Nilo Azul o en la región del este de Sudán y en Sudán del Sur, convirtiendo la región en un polvorín.

Si bien no se puede ignorar la posibilidad de que la crisis en Sudán degenere en una guerra prolongada, la intensificación del conflicto no es inevitable. Se requiere de una acción conjunta de los actores locales, nacionales, regionales e internacionales para lograr que las partes vuelvan a la mesa de negociación, pongan fin a la violencia y recuperen el espíritu de la transición. Si esto no sucede, el impacto de otra guerra en Sudán tendrá un efecto dominó impredecible en toda la región del África Central y el Cuerno de África.

5.2. Grandes Lagos: ¿a las puertas de una tercera guerra congoleña?

En 2022 se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda –constatadas y evidenciadas por Naciones Unidas–² de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Las diferentes iniciativas diplomáticas regionales, como el proceso de Luanda encabezado por Angola bajo el mandato de la UA, así como los ofrecimientos de mediación de países como Qatar y EEUU, han fracasado hasta el momento de cara a revertir la situación. A mediados de abril de 2023, el presidente ruandés Paul Kagame atizó el fuego culpando de la crisis del M23 a la delimitación de la frontera de la era colonial,³ afirmando que “una gran parte de Rwanda quedó fuera, en el este de RDC y el suroeste de Uganda”; dándole una nueva dimensión al conflicto. Kagame también defendió a los rebeldes del M23 afirmando que se les niegan sus derechos en RDC remarcando que “el problema de RDC, el problema regional o el problema de Rwanda no es el M23”. En respuesta, Kinshasa denunció estas declaraciones como una nueva provocación por parte de Rwanda y responsabilizó a Kagame de todos los problemas en el este del país durante los últimos 20 años. La retórica de acusaciones e incidentes sobre el terreno han situado la tensión entre ambos países al borde de un conflicto armado de peligrosas consecuencias regionales.

Aunque la apelación de Paul Kagame en torno a la delimitación fronteriza realizada en la era colonial podría contribuir a dibujar los orígenes del conflicto que padece la región –como tantas otras consecuencias derivadas del colonialismo que siguen todavía abiertas y forman parte de la génesis de éste y otros conflictos en el continente– el pasado reciente contribuye notablemente a situar las tensas relaciones entre RDC y Rwanda.³ A principios de los noventa, el mariscal zaireño Mobutu Sese Seko apoyó al régimen ruandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del Rwandan Patriotic Front (RPF), insurgencia liderada por Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 consiguió derrocar y expulsar al régimen responsable de este y tomar el poder en Rwanda. A partir de entonces

se sucedieron la primera y la segunda guerra del Congo, que acabaron con la firma de diversos acuerdos de paz y la retirada de las tropas extranjeras del país entre 2002 y 2003, principalmente de Rwanda. Éstas justificaban su presencia por la existencia de grupos insurgentes nacionales en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congoleñas para desarticularlos, mientras ejercían el control y la expoliación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por estos, en especial Rwanda. La existencia de grupos insurgentes enemigos de Rwanda, Uganda y Burundi, la permanencia de las causas de fondo del conflicto en RDC en sus múltiples niveles y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar estos grupos provocó el surgimiento en 2012 del M23, apoyado por Rwanda. A pesar de la firma de un nuevo acuerdo de paz en diciembre de 2013, en 2021 el grupo volvió a reorganizarse con el apoyo ruandés.

La inacción internacional para frenar el genocidio de 1994 ha llevado a Rwanda a convertirse en el aliado de Occidente en la región, blindándole de las críticas por el autoritarismo del régimen y su injerencia en los asuntos congoleños

El 4 de abril de 2012, el grupo armado M23⁴ se rebeló contra el Gobierno congolés aseverando el incumplimiento del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009. Nkunda, quien había sido un oficial en el grupo armado RCD-Goma –grupo armado “proxy” de Rwanda en la segunda guerra del Congo (1998-2003)–, oficialmente sigue en arresto domiciliario en la localidad ruandesa de Gisenyi. El 20 de noviembre de 2012, el M23 entró en las calles de Goma, capital de Kivu Norte, tras la deshonrosa retirada de las tropas congoleñas de la ciudad y ante la mirada impasible de los cascos azules de la ONU, dejando grabada la fecha en el imaginario colectivo congolés. El pillaje, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otros crímenes de guerra fueron su carta de presentación. En 2013 RDC y Rwanda alcanzaron un acuerdo de paz según el cual el M23 debía ser desarticulado. Sin embargo, a finales de 2021 este grupo retomó sus actividades con el apoyo de Rwanda y desde entonces ha sembrado nuevamente el pánico en territorio congolés y ha amenazado nuevamente con plantarse en el corazón de la capital.⁵

Todos estos líderes insurgentes apoyados por Rwanda formaban parte de la comunidad tutsi banyamulenge,

1. Consejo de Seguridad de la ONU, [informes del Grupo de Expertos](#), Comité de Sanciones de la RDC [en línea, consultado el 15 de enero de 2023].
2. Infoplus RDC, [Paul Kagame dévoile la vraie raison du conflit Rwanda – RDC](#), 16 de abril de 2023.
3. Véase síntesis y resumen de la tensión RDC-Rwanda en el capítulo 2 (Tensiones).
4. El grupo se denomina Movimiento 23 de Marzo en referencia al día de la firma de un acuerdo de paz tres años antes, el 23 de marzo de 2009, entre el Gobierno congolés y el Congr s National pour la D fense du Peuple, liderado por Bosco Ntaganda, cargo que hab a arrebatado al general Laurent Nkunda, quien hab a dejado de ser el protegido de Rwanda y que fue arrestado camino de Kigali. Para profundizar en torno a los or genes del M23, v ase, entre otros, las s ntesis de RDC (este) en el cap tulo 1 (Conflictos armados) en [Escuela de Cultura de Pau, Alerta 2010! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcci n de paz](#), Barcelona: Icaria, 2010; y [Alerta 2014! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcci n de paz](#), Barcelona: Icaria, 2014; Sabbe, Brian, [Why M23 is not your average rebel group](#), IPIS Briefing, enero de 2023.
5. V ase el resumen del conflicto armado RDC (este) en el cap tulo 1 (Conflictos armados).

hermana de la comunidad tutsi que habita en Rwanda y que fue masacrada en el genocidio de 1994. Entre otros muchos factores, en la pervivencia de esta insurgencia conviven argumentos como el miedo, la protección de su propia comunidad, la explotación del territorio congolés y sus recursos, la ausencia de otras perspectivas de futuro y sustento ante una fracasada reforma del sector de la seguridad, su instrumentalización como actor proxy de Rwanda dentro de territorio congolés. Otra cuestión a tener en cuenta es la venganza y persecución de las Forces Démocratiques de Libération du Ruanda (FDLR), movimiento político-militar que ha pretendido un cambio político en Rwanda por la fuerza y heredero de aquellos que cometieron el genocidio de 1994, cuya eliminación es un leit motiv para Rwanda y para esta serie de grupos armados y escisiones, y sirve como argumento permanente para justificar que Rwanda actúe con total impunidad financiando, armando y atacando el territorio congolés. La inacción de la comunidad internacional para frenar el genocidio de 1994 llevó a esta a apoyar al nuevo régimen ruandés surgido tras el genocidio y a convertirlo en su aliado privilegiado en la inestable región. Este apoyo político internacional y el compromiso de Rwanda en la promoción de la paz y la seguridad en el continente, participando activamente en misiones de la ONU y bilaterales –como en el norte de Mozambique– le han granjeado un área de respetabilidad y de compromiso con la construcción de la paz que le ha blindado de las críticas relativas al autoritarismo del régimen ruandés, caracterizado por restringir el espacio político y la libertad de expresión y silenciar la disidencia política. También le ha blindado de las críticas relativas a la injerencia de Rwanda en los asuntos internos congoleños. Rwanda, a pesar de haber sido señalada por la ONU desde 2001 hasta en su último informe interno filtrado en agosto y por el Grupo de Expertos en diciembre de 2022 por participar directa o indirectamente en la explotación de los recursos naturales de forma sistemática y sistemática y de armar y organizar rebeliones para proteger a la comunidad banyamulenge y a sus intereses en los Kivus, y aunque ha recibido numerosas críticas, sigue sin ser sancionada por la ONU y el resto de actores de la comunidad internacional. Sin embargo, todos estos elementos también ponen de manifiesto que el conflicto

Es imprescindible un análisis más profundo para comprender las dinámicas locales, regionales e internacionales que se encuentran en la génesis del conflicto entre RDC y Rwanda de cara a intentar promover su resolución

no es simplemente una agresión externa de Rwanda sobre RDC, como ha intentado remarcar el presidente congolés en múltiples ocasiones.

Es imprescindible un análisis por parte de los actores clave que pueden influir en ambos países que sea más exhaustivo, incluya otras dimensiones desde una mirada multicausal y multinivel, y vaya más allá de reducir el conflicto a una mera confrontación étnica o a la explotación de los recursos como medio y fin para financiar la guerra y que cuya resolución se traduzca únicamente en desarticular a los grupos armados o conseguir ceses de hostilidades, amén de los múltiples procesos de DDR con los actores armados. Es imprescindible entender las raíces históricas y culturales de los pueblos de la región; el expolio continuado y la injusticia social vivida desde la opresión colonial y postcolonial; los agravios de la población local frente a las poblaciones sobrevenidas; la instrumentalización de las diferencias étnicas por parte de Mobutu y posteriormente por Kabila padre e hijo; la presión y la competencia sobre la propiedad de la tierra; los legítimos retos de seguridad de los países vecinos, en especial Rwanda frente al gigante congolés; la creciente presencia postcolonial anglófona y china frente a la progresiva marginalidad francófona; las dinámicas regionales e internacionales vinculadas no solo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas geopolíticas donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental, en un mundo globalizado en el que las grandes potencias como EEUU y China compiten para ampliar sus áreas de influencia. Un mundo globalizado que ha ratificado la receta del modelo de Estado liberal para solucionar los problemas de la RDC, pero que no los ha resuelto, como se evidencia nuevamente con esta enésima escalada de la violencia. Las intervenciones locales y de la comunidad internacional para resolver el conflicto no afrontan las causas de fondo que dieron origen a la guerra y a la inestabilidad que arrastra la región como consecuencia de un análisis no enfocado hacia las raíces del conflicto que enfrenta a ambos países, así como tampoco por parte de los actores internacionales –ONU, China, EEUU y UE, principalmente– que tienen capacidad real de presión sobre ambos países de cara a frenar esta peligrosa escalada de la tensión.

5.3. El incremento de la tensión militar en la península coreana

Tras un breve período en el que las relaciones intercoreanas alcanzaron su momento de mayor cercanía y cooperación en décadas y en el que Corea del Norte y EEUU iniciaran un proceso de aproximación y diálogo respecto de la desnuclearización de la península coreana (2018-19), en los últimos años, y muy claramente desde 2022, la tensión política y militar en la península coreana ha escalado ostensiblemente. Dicha escalada no solamente ha incluido un incremento de la habitual retórica militarista y de las acusaciones cruzadas, sino también un aumento de la tensión militar y los episodios bélicos entre Corea del Norte y Corea del Sur en la frontera terrestre y marítima, un incremento sin parangón en el número de lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, una creciente asertividad de Corea del Sur en la respuesta a los ensayos armamentísticos de Pyongyang, la reanudación del programa nuclear y la fabricación de nuevo armamento por parte de Corea del Norte, el incremento de la tensión entre Corea del Norte y Japón, y la creciente cooperación entre EEUU y Corea del Sur en materia nuclear.

Respecto de esta última cuestión, el 26 de abril de 2023, el presidente de EEUU, Joe Biden, y el de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, estrecharon su cooperación militar en materia nuclear a través de la firma en la Casa Blanca de la llamada Declaración de Washington, en la que, en esencia, Corea del Sur se compromete a no desarrollar su propio programa atómico y, por su parte, EEUU se compromete a reforzar el rol de Corea del Sur en la toma de decisiones en materia de planificación y disuasión nuclear. Concretamente, dicho acuerdo, que se firmó para conmemorar el 70º aniversario del inicio de la alianza entre ambos países, contempla la ampliación y profundización de la cooperación entre ambos ejércitos; el reforzamiento de los ejercicios y maniobras militares conjuntas; la creación de un nuevo Grupo Consultivo Nuclear para reforzar la llamada “disuasión ampliada”; o el próximo envío de un submarino nuclear de misiles balísticos estadounidense a Corea del Sur. Durante la rueda de prensa posterior a la firma de la Declaración, Biden señaló que cualquier ataque nuclear de Corea del Norte sería respondido de manera rápida y abrumadora, pero a la vez dejó claro su negativa a emplazar armas nucleares en la península coreana.

Tales declaraciones de Biden, así como el compromiso del Gobierno surcoreano de respetar el Tratado de No Proliferación Nuclear, toman especial significación después de que en los últimos meses se haya incrementado notablemente el porcentaje de la ciudadanía surcoreana que aboga por el despliegue de armas nucleares en Corea del Sur o bien por el desarrollo de un programa nuclear propio (en 2022 tal porcentaje superó el 70%). En la misma línea, a principios de 2023 el presidente Yoon Suk-yeol declaró estar sopesando desarrollar sus propias armas nucleares

o pedir a EEUU que las desplegara en la península coreana, y pidió públicamente que Seúl y Washington intensificaran su colaboración en materia de armamento nuclear, incluyendo la planificación, el intercambio de información, los ejercicios y el entrenamiento. En 1991, EEUU retiró todas sus armas nucleares de la península de Corea y al año siguiente Corea del Norte y Corea del Sur firmaron una declaración conjunta según la cual ninguna de las dos fabricaría, probaría, almacenaría, desplegaría o usaría armas nucleares. Sin embargo, en las décadas siguientes Corea del Norte ha violado repetidamente tales compromisos hasta el punto de haber llevado a cabo seis ensayos nucleares (el primero en 2006 y el último en 2017, con una bomba de hidrógeno con una potencia de detonación muy superior a las anteriores), haber acumulado decenas de ojivas nucleares –entre 40 y 50, según algunas fuentes–, y de haber fabricado suficiente material fisible para construir al menos varias bombas más cada año. En paralelo, en los últimos años Corea del Norte también ha mejorado su programa de misiles balísticos de largo recorrido, así como su capacidad de miniaturización de cabezas nucleares. Además de sus capacidades nucleares y balísticas, Pyongyang cuenta con unas fuerzas convencionales importantes, con 1,2 millones de soldados en servicio y 600.000 reservistas.

Tras un período de distensión y diálogo con EEUU y Corea del Sur en el que Corea del Norte se comprometió a congelar su programa nuclear, cerrar algunas de las principales instalaciones del país e imponer una moratoria de nuevos ensayos nucleares, en los últimos años ha habido numerosas advertencias –por parte tanto de los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur como del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y algunos centros de investigación– de que Corea del Norte está reactivando y acelerando su programa nuclear. Concretamente, en 2022 señalaron que Corea del Norte estaba reactivando la principal instalación de ensayos nucleares del país en Punggyeri –supuestamente clausurada en 2018 como parte del proceso diplomático con EEUU– y advirtieron en varios momentos del año sobre la posibilidad de que Corea del Norte llevara a cabo un nuevo ensayo nuclear, que sería el primero desde 2017. De hecho, Naciones Unidas afirmó en un informe confidencial filtrado en agosto de 2022 que Corea del Norte había realizado preparativos para un ensayo nuclear durante los primeros seis meses de 2022. En la misma línea, en septiembre Corea del Norte promulgó una nueva ley que especifica las condiciones para el despliegue y uso del arsenal nuclear. La norma estipula que Pyongyang no atacará a los estados no nucleares –excepto si se alían con estados nucleares–, y también que el uso de armas nucleares podría servir para prevenir la expansión o prolongación de una guerra o en respuesta a un ataque contra el país.

En paralelo a la reanudación de su programa de armas nucleares y a la aprobación de una legislación que facilita su despliegue y utilización, en 2022 también se incrementó claramente el lanzamiento de misiles y la producción de nuevos armamentos por parte de Corea del Norte. De hecho, en todo el año 2022 Pyongyang lanzó alrededor de un centenar de misiles, varios de ellos intercontinentales, una cifra claramente superior a los ocho lanzamientos que se produjeron en 2021 o a los cuatro del 2020. Además del dramático incremento en la frecuencia de tales lanzamientos, varios analistas también expresaron su preocupación por el tipo de armamento que testó Pyongyang durante el año, incluyendo misiles crucero y balísticos, armas hipersónicas o misiles intercontinentales balísticos de gran alcance (como el Hwasong-17, con un recorrido de unos 15.000 kilómetros). En los primeros cinco meses del 2023, la tendencia no parece haber cambiado significativamente respecto del año 2022. A mediados de febrero, con pocos días de diferencia, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental Hwasong-15 –que alcanzó casi 6.000 km de altitud antes de caer en el Mar del Japón (conocido en Corea como Mar del Este)–, dos cohetes “tácticos nucleares” y cuatro misiles crucero de largo alcance. En marzo, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental Hwasong-17 en dirección al Mar del Este, así como múltiples misiles crucero de largo alcance. A mediados de abril, Corea del Norte declaró haber llevado a cabo con éxito su primera prueba de vuelo del misil balístico intercontinental de combustible sólido Hwasong-18, lo que según algunos análisis supone un importante paso en los esfuerzos de Pyongyang para proteger el sistema de misiles del país de un ataque preventivo. Poco después, Kim Jong-un declaró su intención de lanzar un satélite de reconocimiento militar –una de las cinco prioridades militares anunciadas por el líder norcoreano en enero de 2021–, en plena consonancia con las afirmaciones previas del Gobierno norcoreano de que había desarrollado un potente motor de cohete que podría garantizar el lanzamiento de dicho satélite. A finales de 2022, Pyongyang publicó fotos a gran altitud de las ciudades de Seúl e Incheon y declaró haber lanzado exitosamente un cohete espacial como parte del desarrollo de un satélite de reconocimiento militar.

El desarrollo de nuevo armamento por parte de Corea del Norte está en plena consonancia con el plan quinquenal dado a conocer por Kim Jong-un durante el 8º Congreso del Partido en 2021 –que preveía, por ejemplo, misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido capaces de ser lanzados tanto por tierra como por mar— o con su discurso de fin de año (31 de diciembre de 2022) en el que prometió aumentar exponencialmente la fabricación de armas nucleares en 2023. En dicho

mensaje, el líder norcoreano también anunció estar desarrollando un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales con capacidad de contraataque nuclear rápido, como respuesta a las amenazas de EEUU y Corea del Sur y a la creciente coordinación entre estos dos países y Japón. Respecto de esta última cuestión, cabe destacar que en los últimos tiempos también se ha incrementado notablemente la tensión entre Corea del Norte y Japón. A modo de ejemplo de sucesos recientes, en octubre de 2022 un misil balístico norcoreano de alcance intermedio sobrevoló Japón por primera vez desde 2017 y, al mes siguiente, uno de los 26 misiles que Pyongyang disparó en dos días consecutivos cayó a 200 km al oeste de la isla japonesa de Hokkaido (norte). Ante tal situación, Washington dejó claro su compromiso con Japón, mientras que Tokio participó en ejercicios navales conjuntos con Corea del Sur y EEUU por primera vez desde 2017 y además declaró su disposición a reforzar sus capacidades defensivas y de contraataque. En esta línea, en diciembre del 2022 el Gobierno japonés presentó públicamente su

En abril de 2023, los líderes de EEUU y Corea del Sur firmaron la Declaración de Washington, en la que Corea del Sur se compromete a no desarrollar su propio programa atómico y Washington a reforzar el rol de Corea del Sur en la toma de decisiones en materia de planificación y disuasión nuclear

nueva estrategia de seguridad nacional, que incluye el programa nuclear y balístico de Corea del Norte como amenaza. Por su parte, Pyongyang advirtió que la llamada “capacidad de contraataque” incluida en la nueva estrategia de seguridad nacional de Japón no se refiere al derecho a la legítima defensa de cualquier estado soberano, si no a la capacidad de llevar a cabo un ataque preventivo contra terceros países, lo cual entraña, a su parecer, una grave crisis de seguridad en la península de Corea y en Asia oriental en su conjunto. Ante tal escenario, algunos análisis consideraron que el lanzamiento de misiles que crucen el espacio aéreo de un tercer país sin previo aviso ni coordinación –como hizo Corea del Norte en octubre de 2022— no solamente contraviene la legislación internacional, si no que, a la luz de la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada por Japón, podría ser interpretado como un ataque en su contra por parte de Tokio.

Otro de los factores que ha provocado un incremento de la tensión en la región ha sido el cambio de política hacia Corea del Norte que ha impulsado el nuevo presidente surcoreano Yoon Suk-yeol desde su asunción en el cargo en mayo de 2022. Esta nueva dirección estratégica se ha traducido, entre otras cuestiones, en que el Gobierno surcoreano ha respondido al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte con el lanzamiento de un número proporcional de proyectiles; ha impulsado los ejercicios y maniobras militares (normalmente en alianza con EEUU) de mayor envergadura de los últimos tiempos y ha intentado estrechar su relación con EEUU en cuanto al uso de armamento nuclear en la península. Como consecuencia, la tensión militar entre ambos países se incrementó ostensiblemente a finales de 2022, con varios episodios de cierta gravedad. A finales

de octubre, ambos países intercambiaron disparos de advertencia en la Línea Límite Norte (LLN), la frontera marítima de facto, en disputa entre ambos países, cerca de la isla Baengyeong. Poco después, en noviembre, en dos días consecutivos Pyongyang disparó más de 20 misiles –uno de los cuales cayó al sur de la LLN, a pocos kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho– y unos 100 proyectiles de artillería cerca de la frontera marítima. En diciembre, cinco drones norcoreanos se adentraron en el espacio aéreo surcoreano, no pudiendo ser derribados por aviones y helicópteros surcoreanos. Ya más recientemente, en febrero de 2023, Corea del Sur y EEUU realizaron simulacros conjuntos con bombarderos y pocos días después destructores surcoreanos, estadounidenses y japoneses participaron en un simulacro de defensa antimisiles frente a la costa este de la península. Igualmente, a mediados de marzo, EEUU y Corea del Sur comenzaron los mayores ejercicios militares desde 2018.

Algunos análisis sostienen que China, que históricamente ha tenido una clara ascendencia sobre el

La tensión militar entre ambos países se incrementó ostensiblemente a finales de 2022, con varios episodios de cierta gravedad

régimen norcoreano, desincentivará cualquier escalada nuclear que pueda desestabilizar la península coreana, y otras voces sostienen que tanto la aceleración del programa armamentístico norcoreano como la mayor asertividad estratégica de Seúl pueden explicarse en parte por razones internas, pero parece claro que la situación en la península coreana vive una dinámica que no está exenta de riesgos. A juzgar por las recientes declaraciones de representantes del Gobierno norcoreano, no parece que la escalada política y militar en la península coreana vaya a remitir en los próximos meses. A mediados de abril, Pyongyang respondió a una declaración del G7 en la que se le pedía que desmantelara sus capacidades nucleares reafirmando su negativa a negociar o renunciar a su capacidad de disuasión nuclear. En la misma línea, a principios de mayo, Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong Un advirtió que la Declaración de Washington firmada por EEUU y Corea del Sur solamente deteriora la paz y la seguridad en la península, refuerza el derecho de Corea del Norte a la autodefensa y reafirma a Pyongyang en su determinación a acelerar y perfeccionar sus capacidades nucleares.

5.4. Desafíos entrecruzados en Moldova en tiempos de guerra en Europa

Moldova, país de 2,6 millones de habitantes, con una tasa de pobreza absoluta del 24,5% (26,3% en el caso de mujeres), fronterizo con Rumanía y Ucrania, ha sido considerado uno de los países más vulnerables a la extensión de la guerra en Ucrania. Exrepública soviética, neutral con respecto a la OTAN, con una trayectoria política afectada por problemas de corrupción, así como por divisiones políticas incluyendo en torno a la orientación del país en política exterior, y con un conflicto no resuelto en torno al estatus de la región de Transnistria, Moldova es escenario de un incremento de tensiones multidimensionales y entrecruzadas, influidas por la invasión de Rusia contra Ucrania. El deterioro de la situación ha tenido reflejo en ámbitos como riesgos de extensión de la guerra a Moldova, denuncias de planes de golpe de Estado encubierto, riesgo de mayor polarización con expresión territorial, crisis energética y deterioro de la seguridad humana. Citas electorales a corto y medio plazo (municipales en el último tercio de 2023, presidenciales en 2024 y parlamentarias en 2025) añaden incertidumbre.

El deterioro de la situación en Moldova abarca diversas esferas. En primer lugar, el inicio de la invasión rusa de Ucrania generó riesgos en un primer momento de extensión directa de la guerra a Moldova y empeoró la situación de seguridad en el país. La evolución del conflicto armado en Ucrania a lo largo de 2022 ha mantenido estos riesgos alejados, de la mano del mantenimiento del control de Odesa por Ucrania, que disiparon los temores de que las tropas rusas pudiesen llegar a Transnistria. Esta franja de territorio al este del río Dnieper, de mayoría rusoparlante, ha sido escenario de un conflicto no resuelto en torno al estatus de la región desde el conflicto armado de 1990-1992 y donde Rusia mantiene fuerzas militares⁶ No obstante, el contexto de seguridad se mantuvo frágil, incluyendo incidentes de seguridad en Transnistria – señalados en algunos análisis como ataques de falsa bandera promovidos por Moscú–,⁷ violaciones del espacio aéreo de Moldova por misiles rusos disparados desde el Mar Negro y dirigidos contra Ucrania –Moldova denunció al menos tres en octubre de 2022 y otros dos en febrero de 2023–, e impactos de fragmentos de misiles rusos en territorio de Moldova. Todo ello puso de manifiesto riesgos en el ámbito militar, estrechamente vinculados a una guerra de perspectivas inciertas.

Moldova es escenario de un incremento de tensiones multidimensionales y entrecruzadas, influidas por la invasión de Rusia contra Ucrania

En segundo lugar, se identifican riesgos de intentos de desestabilización política y socioeconómica de Moldova por parte de Rusia. En febrero de 2023, la presidenta moldava, Maria Sandu, denunció en base a información de inteligencia compartida por Ucrania, planes de Rusia de un golpe de Estado en Moldova mediante individuos con experiencia militar de Rusia, Belarús, Serbia y Montenegro que se infiltrarían como civiles y tomarían edificios gubernamentales.⁸ Según Sandu, el intento de golpe preveía contar con apoyo de grupos locales como el partido opositor pro-Kremlin Shor –liderado por el magnate y político Ilan Shor, sentenciado in absentia por fraude masivo en el sistema bancario en 2014 (caso en el marco del cual se condenó a otros actores económicos y políticos de diferente signo). En los últimos meses de 2022 ya se habían incrementado los temores de riesgo de injerencias externas de la mano de las protestas

antigubernamentales organizadas por el partido Shor en septiembre y que se prolongaron a 2023 y en la que se reclamó la dimisión del gobierno y la presidenta moldava.⁹ Periodistas moldavos publicaron evidencias de The Washington Post, en base a revisión de documentos obtenidos por los servicios de inteligencia de Ucrania, señaló que Rusia había destinado decenas de millones de dólares de compañías estatales rusas a la promoción de una red de políticos moldavos afines y a reorientar el país a la esfera de Rusia.¹⁰ A su vez, periodistas moldavos hicieron públicos en 2023 documentos de 2021 de la administración presidencial del Kremlin que mostraban planes de Rusia de llevar a Moldova a su esfera de influencia para 2030¹¹ (en 2021 el partido pro-UE PAS ganó las elecciones parlamentarias con el 53% de los votos, frente al pro-ruso Bloque de los Comunistas y Socialistas, que obtuvo el 27%, y el partido Shor obtuvo un 5,8%, con una participación del 48%). Se suman otros elementos como el nivel sin precedentes de ciberataques que Moldova afronta desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

En tercer lugar, el escenario de riesgos de tensión multidimensional que afrontaba Moldova se reflejó también en Gagauzia, región discontinua territorialmente en el sur del país, escenario de conflicto político a inicios de los noventa sobre su estatus, con régimen de región autónoma desde mediados de esa década, de 134.535 habitantes (censo de 2014), habitada mayoritariamente

6. En Transnistria hay presencia de unas 1.500 fuerzas rusas. No obstante, algunos análisis relativizan el riesgo militar que supone para Moldova esta presencia y señalan que, en su mayoría, son ciudadanos locales con pasaporte ruso y solo un centenar serían oficiales de Rusia. De Waal, Thomas, "Time to Get Serious About Moldova", Carnegie Europe, 11 de mayo de 2023.

7. Pociumban, Anastasia, "Moldova's Fragile Security Situation", DGAP Memo, German Council of Foreign Relations, 13 de mayo de 2023.

8. Wesolowsky, Tony, "Vulnerable, Volatile Moldova Could Be The Kremlin's Next Target. It Could Also Be Just Another Distraction", RFE/RL, 3 de marzo de 2022.

9. Calugareanu, Vitalie y Robert Schwartz, "Pro-Russian group pays protesters in Moldova", DW, 10 de diciembre de 2022.

10. Belton, Catherine, "Russia's security service works to subvert Moldova's pro-Western government", The Washington Post, 28 de octubre de 2022.

12. Necsutu, Madalin, "Moldova Condemns 'Russian Plan' to Regain Control of Country", Balkan Insight, 16 de marzo de 2023.

por gagaúzos –de lengua túrquica y religión ortodoxa–, y políticamente con predominancia histórica de posiciones pro-Rusia. En el contexto de invasión rusa a Ucrania, y de deterioro de las relaciones entre Rusia y Moldova y entre Rusia y Occidente, se incrementó también el distanciamiento entre el Gobierno moldavo y la región de Gagauzia. Las elecciones a gobernador/a de Gagauzia de abril de 2023 fueron señaladas en algunos análisis como un factor cuyo resultado podría ser usado por Rusia para Moldova.¹³ Los comicios otorgaron el triunfo en segunda ronda (mayo) a la candidata del partido proruso Shor, Evghenia Gutul, lo que apunta a desafíos a corto y medio plazo en las relaciones entre el Gobierno central y la región. Ya en 2014 las autoridades de Gagauzia y su población mostró su oposición a la decisión del Gobierno central de un acuerdo de asociación y de otro de libre comercio con la UE, a través de un referéndum doble no vinculante, considerado ilegal por Moldova. En esa consulta el 98% de votantes expresaron su preferencia por estrechar vínculos con la Unión Aduanera Euroasiática, liderada por Rusia, en lugar de con la UE, y manifestaron apoyo a declarar la independencia de Gagauzia si eventualmente Moldova perdía su soberanía, incluyendo escenarios como una hipotética unión de Moldova a Rumanía –con quien comparte vínculos históricos y culturales.

En cuarto lugar, Moldova sobresale como territorio donde se entrecruzan dinámicas de división y proyección de capas de conflictividad externa, situación agravada con la invasión de Rusia a Ucrania, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Moldova y el tensionamiento extremo de las relaciones entre Occidente y Rusia derivado de la invasión a Ucrania. Se identificaba en el país heterogeneidad respecto a la percepción local hacia Rusia, así como en relación a la preferencia sobre el tipo de relaciones exteriores a seguir. En junio de 2022 la UE concedió a Moldova el estatus de país candidato de entrada a la UE. Encuestas de 2022 y 2023 apuntaban a que entre el 50% y el 63% de la población era favorable a la integración en la UE, y un tercio se oponía a ello.¹⁴ Por otra parte, en 2022 Rusia intensificó sus presiones sobre Moldova en ámbitos estratégicos y de relevancia para la seguridad humana del país como la energía,¹⁵ si bien Moldova dio pasos hacia la diversificación energética.

En quinto lugar, la situación socioeconómica en Moldova se ha visto deteriorada de la mano del alza de precios, incluyendo alimentos, productos no alimentarios y servicios, con impactos severos en la población de un país considerado uno de los más pobres de Europa. El incremento de los precios de la energía afectó a amplios sectores de población. Se añadió además el reto de poder dar acogida digna a la población refugiada ucraniana (726.705 entradas al país entre el 24 de febrero de 2022 y mediados de diciembre y 99.524 personas refugiadas de Ucrania a finales de ese año, según ACNUR). En una visita en mayo a Moldova, el secretario general de la ONU calificó al país como el país vecino de Ucrania más frágil.

Al mismo tiempo, convergen factores que pueden contribuir a prevenir un deterioro de la situación sociopolítica y de seguridad. El haber atravesado el año 2022 frente al cúmulo de desafíos pone de manifiesto cierta resiliencia institucional y social. Se suma también la voluntad expresa de Transnistria y Moldova de resolver su conflicto por vía negociada y el elevado grado de relaciones económicas, comerciales y familiares entre ambos territorios; un tejido social de población activo, como se evidenció en las protestas ciudadanas anticorrupción en años recientes; el establecimiento de una misión civil de la UE en 2023 (EUMP Moldova) en el ámbito de gestión de crisis, desinformación y ciberataques, entre otros; el apoyo financiero al país para afrontar la grave crisis socioeconómica –si bien supeditado a condicionalidad de la UE y el FMI–, entre otros.

En resumen, Moldova afronta a corto y medio plazo riesgos de incremento o cronificación de tensiones entrecruzadas que requieren del fortalecimiento del apoyo internacional en ámbitos que contribuyan a la prevención de una extensión del conflicto en Ucrania, a la cohesión y fortalecimiento democrático y a la seguridad humana. A su vez, la intensificación de esfuerzos dirigidos a promover la resolución negociada de la guerra en Ucrania aceptable para Kiev y la construcción a futuro de una arquitectura de seguridad compartida continental podrían contribuir también a medio y largo plazo a una seguridad más holística de Moldova.

13. Keith Harrington, "Gagauzia's Election Could Help Russia Destabilize Moldova", *Carnegie Europe*, 27 de abril de 2023.

14. Radio Moldova, "CBS Research poll: 40% of Moldovans believe Russian Federation is to blame for provoking war in Ukraine", *Radio Moldova*, 3 de febrero de 2023; International Republican Institute, "IRI Moldova Poll Shows Strong Support for EU Membership, Trust in Leadership Despite Economic Challenges", IRI, 9 de diciembre de 2022.

15. Véase el resumen sobre Moldova en el capítulo 2 (Tensiones) de este informe.

5.5. Derechos de las mujeres bajo amenaza: apartheid de género en Irán y Afganistán

Los derechos de las mujeres de Irán y Afganistán han sido objeto de especial atención en el periodo reciente. El agravamiento de las políticas discriminatorias contra las mujeres y la intensificación de los intentos por controlar sus vidas y sus cuerpos en ambos países han estado en el foco mediático, en parte por las manifestaciones de protesta y resistencia lideradas por las propias mujeres afganas e iraníes frente a la misoginia y las vulneraciones sistemáticas de sus derechos y libertades. Las iniciativas de denuncia de la discriminación extrema, sistemática y estructural contra las mujeres en ambos países han llevado incluso a articular una propuesta de reconocimiento de la situación como un crimen de apartheid de género. Múltiples actores –incluyendo organizaciones, Estados y grupos de la sociedad civil– han denunciado la deriva contra las mujeres en ambos países y se han solidarizado y expresado su alarma ante la respuesta represiva de estos regímenes. Pese a la sonora reacción internacional, existe el riesgo de que tanto Teherán como Kabul persistan en sus políticas y que la situación de las mujeres en ambos países se agrave o perpetúe. A esto se suma la probabilidad de que con el transcurso del tiempo la atención mediática y política sobre los derechos de las mujeres en Irán y Afganistán vaya menguando. No solo eso. También es posible, sobre todo teniendo en cuenta experiencias previas, que en algunos actores de la comunidad internacional se imponga una aproximación utilitarista a los derechos de las mujeres, que los impulse o ignore en función de intereses geopolíticos y militares coyunturales.

En el caso de Afganistán, la situación de las mujeres se ha deteriorado especialmente desde mediados de 2021, tras la reinstauración del régimen de los talibanes.¹⁶ Su retorno al poder ha supuesto la imposición de un severo recorte de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales además de una fuerte exclusión del ámbito público, en línea con lo que ocurrió durante el primer régimen de los talibanes (1996-2001). Entre las primeras medidas adoptadas, cabe destacar el desmantelamiento del Ministerio de Asuntos de las Mujeres en septiembre de 2021. La reinstauración del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio implicaron la desaparición de las estructuras institucionales de

promoción de los derechos de las mujeres, en un Ejecutivo íntegramente conformado por hombres. También se abolió la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, dando por finalizado cualquier sistema institucional de supervisión y garantía de derechos de las mujeres o de los derechos humanos en general. Otras medidas con graves impactos han sido las relativas a la restricción a la libre movilidad de las mujeres y a su presencia en el espacio público. También se han aprobado severas restricciones a la educación, impidiendo a niñas y jóvenes el acceso a la educación secundaria y universitaria. Además, se han desmantelado por completo los servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, se han disuelto las cortes especializadas en mujeres y se impide a las mujeres juezas ejercer su labor. Así pues, se ha instaurado un contexto de completa desprotección para las mujeres y grave violación a sus derechos fundamentales.

En el caso de Irán –y pese a las diferencias con Afganistán, por ejemplo en materia de acceso de las mujeres a la educación y al espacio público–, los derechos de las mujeres han estado en el centro de la atención desde septiembre de 2022.¹⁷ La muerte de una joven tras ser detenida por la policía moral por portar el velo de manera inadecuada según los estándares del régimen activó entonces multitudinarias movilizaciones en el país. Las protestas, consideradas como uno de los mayores desafíos al régimen desde 1979, hicieron

suyo el lema de las mujeres kurdas “Mujer, Vida, Libertad” y expusieron las interconexiones entre diferentes formas de opresión y discriminaciones en el seno de la república islámica y, en particular, los intentos por controlar los cuerpos de las mujeres. El desafío a la imposición de determinados códigos de vestuario por parte de las autoridades –la obligatoriedad del hiyab– ha sido interpretado como el cuestionamiento a una de las formas más evidentes y visibles de las políticas opresivas y discriminatorias del régimen –el no reconocimiento a la libre autodeterminación de las mujeres–, pero no la única. Las mujeres iraníes afrontan múltiples discriminaciones de género que se materializan en su marginación de los ámbitos de poder y decisión; enormes brechas de género en términos de desempleo y salarios; prohibición de desempeñar determinados trabajos; necesidad de

16. Para más información, véase María Vilellas, “La situación de las mujeres en Afganistán. Entre la opresión y la resistencia”, *Apunts ECP de Conflictes i Pau*, Núm.20, noviembre de 2022.

17. Para más información, véase Pamela Urrutia, *La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista*, *Apunts ECP de Conflictes i Pau*, Núm.27, marzo de 2023.

contar con una autorización masculina para trabajar, obtener un pasaporte o viajar; limitaciones en el acceso a derechos sexuales y reproductivos y disposiciones discriminatorias en temas como divorcio, custodia de hijos e incluso en el acceso a eventos deportivos. Tras la llegada a la presidencia de Ebrahim Raisi, en junio de 2021, la policía moral había intensificado sus actividades y se habían aprobado una serie de medidas consideradas como especialmente hostiles para las mujeres, como el incremento en los sistemas de control de los códigos de vestuario de las mujeres a través de sistemas de vigilancia digital y en redes sociales.

A pesar de las muestras de resistencia de las mujeres en ambos contextos y de las numerosas críticas a nivel internacional, ambos regímenes han persistido en sus políticas y han optado por una respuesta represiva. En el caso de Irán, esta reacción ha significado el despliegue de múltiples tácticas para intentar sofocar la contestación, que han incluido la persecución y muerte de manifestantes –entre ellas un centenar de mujeres hasta finales de 2022–, el uso de la violencia con intencionalidad de género –disparando deliberadamente a mujeres en rostro y genitales–, y masivas detenciones, entre otras prácticas. Igualmente, en Afganistán las protestas han sido duramente reprimidas, con detenciones y maltrato físico hacia las mujeres que las han protagonizado y que, no obstante, han persistido en sus acciones. Naciones Unidas ha señalado un uso excesivo de la fuerza en la respuesta de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones de mujeres.

Cabe destacar que un denominador común en ambos casos ha sido la situación de especial vulnerabilidad de las niñas. En Irán, la represión de las manifestaciones ha afectado a un gran número de menores, algunos arrestados incluso en redadas en centros escolares. Según grupos de derechos humanos, hasta finales de 2022 al menos 12 niñas y 46 niños habían muerto en acciones de las fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas. Desde principios de 2023 también se multiplicaron las denuncias de envenenamientos de miles de estudiantes en más de un centenar de escuelas de todo el país. Aunque sin resultado de muerte, estas acciones –no reivindicadas y atribuidas a sectores extremistas– fueron interpretadas como intentos de amedrentar a las menores por su implicación en las movilizaciones y de generar temor en las familias, buscando comprometer el derecho a la educación de las niñas. En Afganistán, en tanto, se han multiplicado los matrimonios infantiles como consecuencia de la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y el aumento de la pobreza. Las severas restricciones a la educación están afectando especialmente a las adolescentes que

están siendo privadas de una formación esencial y centros educativos de niñas y jóvenes han sido objeto de ataques violentos. En ambos países se ha observado también una creciente derivación al ámbito familiar y comunitario de la vigilancia y represión de las mujeres. En Afganistán, a través de la responsabilización del control a los parientes masculinos –que son los que deben responder ante las autoridades en caso de que las mujeres de sus familias transgredan normas impuestas–, y en Irán por medio de un sistema de multas que sanciona a tiendas, restaurantes y negocios que permitan la entrada a mujeres sin el velo.

Ante esta deriva de acontecimientos, una coalición liderada por mujeres afganas e iraníes se han unido en torno a una campaña que busca promover el reconocimiento del apartheid de género como un crimen en el derecho internacional.¹⁸ Activistas y expertas en derechos humanos demandan que el crimen de apartheid que hasta ahora se aplica a las jerarquías raciales se articule también para reconocer las discriminaciones sistemáticas y estructurales basadas en jerarquías de género. Se trata, por tanto, de una forma de apartheid diferente a la que se vivió en Sudáfrica, pero con componentes de subyugación y segregación sistemática como los que se observan en Afganistán e Irán en la actualidad. En ambos países, subrayan, las restricciones, prohibiciones y disposiciones legales buscan someter a las mujeres a los hombres y al Estado bajo el riesgo de ser víctimas de violencia, arrestos e incluso la muerte. Las promotoras de la iniciativa aseguran que no pretenden imponer valores occidentales en sociedades musulmanas, sino hacer frente a los intentos sistemáticos por subyugar a las mujeres y convertirlas en ciudadanas de segunda clase que no deberían tener lugar en ninguna sociedad, independientemente de la religión. Su propósito es favorecer una respuesta internacional y por ello apelan a los gobiernos a amplificar las experiencias de las mujeres en Irán y Afganistán, adoptar medidas de condena al régimen de apartheid en ambos países y a contribuir en la expansión del crimen de apartheid para incluir las formas institucionalizadas de discriminación de género.

Pese a iniciativas como esta, existe el riesgo, no obstante, de que el tema decaiga en términos de atención mediática y/o que se instrumentalicen los señalamientos relacionados con los derechos de las mujeres. La experiencia de Afganistán ofrece ejemplos ilustrativos sobre esta experiencia. Los derechos de las mujeres han sido instrumentalizados repetidamente por parte de actores internacionales que han intervenido en el país. De esta manera, en el marco de la intervención militar estadounidense en el país en 2001 se estableció

La discriminación extrema, sistemática y estructural contra las mujeres en Irán y Afganistán ha llevado a promover una iniciativa que reconozca la situación como un crimen de apartheid de género

18. Campaña End Gender Apartheid.

un binarismo entre la opresión causada por el régimen talibán y la supuesta “salvación” proporcionada por EEUU, restando protagonismo y agencia a las mujeres afganas y sus propias estrategias de resistencia y afrontamiento. En los años posteriores se obvió la responsabilidad de EEUU y otros gobiernos en la perpetuación de una situación de conflicto armado con graves efectos en las vidas de las mujeres. Más recientemente, en el caso de Irán, algunas voces también han alertado sobre los peligros de instrumentalización de la defensa de los derechos de las mujeres y las políticas de doble estándar. Así, por ejemplo, en diciembre de 2022 Irán fue expulsado de la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer en una iniciativa promovida por EEUU bajo el argumento de que su presencia minaba la credibilidad del organismo. Esta decisión de Washington, enmarcada en su pugna con Irán,

contrasta con las políticas (o con la inacción) ante otros Estados con credenciales similares de vulneraciones de derechos de las mujeres, pero que son aliados de EEUU, como Arabia Saudita. EEUU también se encuentra en una posición compleja en este ámbito considerando los recientes retrocesos en el ámbito de los derechos reproductivos por decisión de la Corte Suprema.

Las mujeres de Irán y Afganistán atraviesan una situación que diferentes organismos, expertas y activistas han calificado de “apartheid de género” dada la gravedad de los impactos sobre sus vidas. Esta situación pone de manifiesto también el riesgo de deterioro de las crisis y conflictos que atraviesan estos países. No hay que olvidar que los derechos de las mujeres y la igualdad de género son indicadores y precondiciones para el desarrollo de sociedades pacíficas.

Glosario

- 11S:** 11 de septiembre
- 3R:** Retour, Réclamation et Réhabilitation
- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- AAPP:** Asociación de Asistencia a los Presos Políticos
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACLED:** Armed Conflict Location and Event Data Project
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ACSS:** Africa Center for Strategic Studies
- ACT:** Ambazonia Coalition Team
- ADF:** Allied Democratic Forces (Fuerzas Democráticas Aliadas)
- ADF:** Ambazonia Defence Forces
- ADF-NALU:** Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda
- AFF:** Afghanistan Freedom Front
- AFL:** Afghanistan Liberation Movement
- AGC:** Autodefensas Gaitanistas de Colombia
- AGovC:** Ambazonia Governing Council
- AI:** Amnistía Internacional
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- ALAF:** Fuerzas Armadas Árabes de Libia
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALDEA:** Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- ANP:** Autoridad Nacional Palestina (También Autoridad Palestina -AP-)
- ANRHI:** Arab Network for Human Rights Information
- AOD:** Ayuda Oficial al Desarrollo
- APCLS:** Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain (Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ARSA:** Arakan Rohingya Salvation Army (Ejército de Salvación Arakan Rohingya)
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ATMIS:** Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia
- AUBP:** Programa de Fronteras de la Unión Africana
- BDB:** Brigadas de Defensa de Bengasi
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (Luchadores por la libertad islámica de Bangsamoro)
- BINUH:** Oficina Integrada de la ONU en Haití
- BJP:** Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio)
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BLT:** Baluch Liberation Tigers (Tigres de Liberación Baluchi)
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRN:** Barisan Revolusi Nasional
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CCMSR:** Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (Consejo de Comando Militar para la Salvación de la República)
- CEDEAO:** Comunidad Económica de Estados de África Occidental
- CEEAC:** Comunidad Económica de Estados de África Central
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congoleña
- CERAC:** Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CIDE:** Centro de Investigación y Docencia Económicas
- CJNC:** Cártel Jalisco Nueva Generación
- CJTF:** Fuerza de Tarea Conjunta Civil
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMC:** Coalition of Movements for Change
- CMDPH:** Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
- CMPFPR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CMT:** Consejo Militar de Transición
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CNL:** Congrès National pour la Liberté (Congreso Nacional por la Libertad)
- CNRD-Ubwiyunge:** Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie
- CODECO:** Coopérative pour le développement du Congo
- CODNI:** Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo
- CONAIE:** Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
- COP 27:** 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPC:** Coalición de Patriotas por el Cambio
- CPCR:** Cade permanent de concertation et de réflexion
- CPI:** Corte Penal Internacional

CPI-M: Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)

CSFA: Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas

DAG: Dyck Advisory Group

DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración

DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar

DIH: Derecho Internacional Humanitario

DKBA: Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)

DMLEK: Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)

DNIS: Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano

DPA: Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)

EAC: East African Community (Comunidad de África del Este)

EAU: Emiratos Árabes Unidos

EDA: Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)

EEUU: Estados Unidos de América

EFDM: Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)

EHRC: Ethiopian Human Rights Commission

EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)

EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)

ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)

ELK: Ejército de Liberación de Kosovo

ELN: Ejército de Liberación Nacional

ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)

EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)

EPL: Ejército Popular de Liberación

EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)

EPR: Ejército Popular Revolucionario

EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope)

ERPI: Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

ESL: Ejército Sirio Libre

ESN: Red de Seguridad del Este

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)

ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)

ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)

EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Malí (Sahel)

EUCAP SAHEL Niger: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Níger (Sahel)

EUFOR: Fuerza de la Unión Europea

EULEX: Misión Civil de la Unión Europea en Kosovo

EUNAVFOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUTM Mali: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí

EUTM Mozambique: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Mozambique

EUTM Somalia: Misión Militar de la Unión Europea para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FACT: Frente para el Cambio y la Concordia en Chad

FADM: Fuerzas Armadas Mozambiqueñas

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FDS: Fuerzas Democráticas Sirias

FFC: Forces for Freedom and Change (Fuerzas para la Libertad y el Cambio de Sudán)

FFC-CC: Forces for Freedom and Change-Central Command (Fuerzas para la Libertad y el Cambio -Comando Central de Sudán)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FMI: Fondo Monetario Internacional

FML: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FPB: Forces Populaires du Burundi (Fuerzas Populares de Burundi)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPR: Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (Frente Patriótico por el Renacimiento de la República Centrafricana)

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FRELIMO: Frente de Liberación de Mozambique

FRUD-armé: Front uni pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie-Armé

G20: Grupo de los Veinte

G5 SAHEL: Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel

G7: Grupo de los Siete

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GBAO: Región Autónoma de Gorno-Badakhshan

GERD: Gran Presa del Renacimiento Etíope

GFT: Gobierno Federal de Transición
GNA: Gobierno de Acuerdo Nacional
GSIM: Group to Support Islam and Muslims (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes)
GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad
HIMARS: Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad
HM: Hermanos Musulmanes
HRMMU: Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania
HRW: Human Rights Watch
HTS: Hay'at Tahrir al-Sham
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
IDG: Índice de Desarrollo de Género
IDH: Índice de Desarrollo Humano
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IG SAKO: Interim Government - Sako
IG SISIKU: Interim Government - Sisiku
IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
IISS: International Institute for Strategic Studies
ILGA: Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
IMN: Islamic Movement of Nigeria (Movimiento Islámico de Nigeria)
INEC: Comisión Electoral Nacional Independiente
IPAC: Institute for Policy Analysis of Conflict
IPI: International Press Institute
IPOB: Pueblo Indígena de Biafra
IRGC: Guardia Revolucionaria Iraní
ISCAP: Estado Islámico Provincia de África Central
ISGS: Estado Islámico en el Gran Sáhara
ISIS: Estado Islámico
ISIS-KP: Estado Islámico de la Provincia de Jorasán
ISMP: Estado Islámico Provincia de Mozambique
ISWAP: Estado Islámico en la Provincia de África Occidental
IWF: Iduwini Volunteers Force (Fuerzas Voluntarias de Iduwini)
JAS: Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad
JAS-Abubakar Shekau: Jama'atu Ahlus-Sunna facción Abubakar Shekau
JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action (Plan de Acción Integral Conjunto)
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JNIM: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistan
KDPI: Partido Democrático Kurdo de Irán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNDF: Karenni Nationalities Defence Force
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistan
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LAAF: Fuerzas Armadas Árabes de Libia (también conocido como LNA)
LDU: Lahu Democratic Union
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LGTBIQ+: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersex, Queer y más
LNA: Ejército Nacional de Libia ((también conocido como LAAF)
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M-19: Movimiento 19 de Abril (Colombia)
M23: Movimiento 23 de Marzo (RDCongo-Rwanda)
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MARA Patani: Majlis Amanah Rakyat Patani (Consejo Amanah para el Pueblo Patani)
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDM: Movimiento Democrático de Mozambique
MENA: Medio Oriente y Norte de África
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINUJUSTH: Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MIT: Mujahidin Indonesia Timur (Muyahidines de Indonesia Oriental)

MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)

MLCJ: Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (Movimiento de Libertadores Centrafricanos para la Justicia)

MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

MLRS: Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple

MNDAA: Myanmar National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar)

MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)

MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad

MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique (Movimiento Patriótico por la República Centrafricana)

MPSR: Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MS13: Mara Salvatrucha

MSF: Médicos Sin Fronteras

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

NAS: Frente de Salvación Nacional

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDAA: National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Nacional Democrática)

NDC-R: Nduma défense du Congo-Rénové

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDFB (IKS): National Democratic Front of Boroland (IK Songbijit)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate (Mandato de Justicia de Greenland del Delta del Níger)

NDM-PF: National Democratic Movement-Patriotic Front (Movimiento Nacional Democrático-Frente Patriótico)

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NLAW: Arma Antitanque Ligera de Próxima Generación

NLL: Línea Límite Norte

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NGO WGWPS: NGO Working Group on Women, Peace and Security (ONG Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Paz y Seguridad)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NRF: Frente Nacional de Resistencia

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Khaplang)

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

NSF: Fuerzas de Seguridad de Nigeria

NSSOG: Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios

NST: Nigeria Security Tracker

NTF-ELCAC: Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con el Conflicto Armado Comunista Local

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OLP: Organización para la Liberación de Palestina

OMC: Organización Mundial de Comercio

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OPC: Oromo People's Congress (Congreso Nacional Oromo)

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OTAN KFOR: Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo liderada por OTAN

OTSC: Organización del Trabajo de Seguridad Colectiva

OVCS: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

OVV: Observatorio Venezolano de Violencia

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PANDEF: Pan Niger Delta Forum

PCF: Partido Comunista de Filipinas

PDF: Popular Defence Forces (milicias sudanesas)

PDKI: Partido Democrático Kurdo

PIJ: Jihad Islámica Palestina

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PML-N: Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz

PNLO: Pa-O National Liberation Organisation

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PP: Partido de la Prosperidad (Prosperity Party)

PPP: Pakistan People's Party

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PROVEA: Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos

PS: Provincia de Sinaí

PULO: Patani United Liberation Organisation (Organización Unida de Liberación de Patani)

PYD: Democratic Union Party (Partido Unión Democrática)

R-ARCC: Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centroafricana

RCSS: Restoration Council of Shan State

RDC: República Democrática del Congo

RED-Tabara: Résistance pour un État de Droit au Burundi (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi)

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

REWL: Red Egbesu Water Lions

RFI: Radio Francia Internacional

RNLF: Rabha National Liberation Front

RPD Corea: República Democrática Popular de Corea

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RSF: Rapid Support Forces (Fuerzas de Apoyo Rápido)

RUD-Urunana: Ralliement pour l'unité et la démocratie (RUD)-Urunana

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SAMIM: Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral

SCACUF: Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (Frente Unido del Consorcio de Ambazonia del Sur de Camerún)

SCDF: Southern Cameroons Restoration Forces (Fuerzas de Restauración del Sur de Camerún)

SCF: Shiite Coordination Framework

SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional

SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército de Liberación de Sudán)

SLA-AW: Sudan Liberation Army-Abdul Wahid (Ejército de Liberación de Sudán – Abdul Wahid)

SLA-MM: Sudan Liberation Army- Minni Minnawi (Ejército de Liberación de Sudán – Minni Minnawi)

SLDF: Saboot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Saboot)

SNNRPS: Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS (Naciones, Nacionalidades y Estado Popular del Sur, SNNPS)

SOCADEF: Southern Cameroons Defence Forces (Fuerzas de Defensa del sur de Camerún)

SOHR: Observatorio Sirio de Derechos Humanos

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLA-IO: Sudan People's Liberation Army in Opposition (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en Oposición)

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM/A: Sudan People's Liberation Movement/Army (Movimiento-Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-FD: Sudan People's Liberation Movement-Freed Detainees (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Detenidos liberados)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SRF: Sudan Revolutionary Forces (Fuerzas revolucionarias de Sudán)

SSA: Shan State Army (Ejército del Estado de Shan)

SSA-N: Shan State Army – North (Ejército del Estado de Shan - Norte)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSOMA: South Sudan Opposition Movements Alliance (Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur)

SSPDF: Ejército de Sudán del Sur

SSPP/SSA: Shan State Progress Party/ Shan State Army

SSPP: Shan State Progress Party (Partido del Progreso del Estado Shan)

SSUF: South Sudan United Front (Frente Unido de Sudán del Sur)

STC: Southern Transitional Council

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistan

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigré)

TRF: The Resistance Front

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UDA: United Democratic Alliance

UDRM/A: United Democratic Revolutionary Movement/ Army (Movimiento/Ejército Revolucionario Democrático Unido de Sudán del Sur)

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

UFR: Unión de Fuerzas de Resistencia

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UMP: Unidades de Movilización Popular

UNAMA: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (o FPNUL)

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNITAMS: Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán

UNJHRO: Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (RDCongo)

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOWAS: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique (Unión por la Paz en la República Centroafricana)

UPDF: Fuerzas Armadas Ugandesas

UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

UTI: Unión de Tribunales Islámicos

UTS: Unión Tribal del Sinaí

UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VRAEM: Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)

YBS: Unidades de Resistencia de Sinjar

YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)

YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)

YPS: Civil Protection Units (Unidades Civiles de Protección)

ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- **Investigación.** Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- **Educación y formación.** El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- **Diplomacia paralela.** La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- **Servicios de consultoría.** La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- **Sensibilización.** Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13, Carrer de la Vila Puig, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra (España)

Tel: +34 93 581 14 14

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat / Web: <http://escolapau.uab.cat>

